

NUMERO 43

43ª reunión - 31ª sesión ordinaria - Septiembre 23 de 1920

PRESIDENCIA DEL Dr. D. BENITO VILLANUEVA

Senadores presentes: Caballero Ricardo, Castañeda Vega Francisco, del Valle Iebriucea Enrique, Estoves Manuel I., Gallo Vicente C., García Luis, Garro Pedro A., Iturbe Octavio, Larlés Pedro, Llanes Luis, Llanos Pedro, Luna David, Melo Leopoldo, Sagüer Fernando, Soto Pedro Numa, Vidal Juan R., Villanueva Benito, Zabala Carlos.

Senadores ausentes: Con aviso: Albarracín Martín, González Joaquín V., Iturraspe Ignacio de, Patrón Costas Robustiano, Roca Julio A., Torino Martín M.

SUMARIO

1

ASUNTOS ENTRADOS

Peticiones particulares.—

Justina Spangenberg Calderón solicita un subsidio para perfeccionar sus estudios de canto en Europa.

—A la Comisión de Peticiones.

Varios empleados de las empresas telefónicas de la capital solicitan modificaciones del artículo 70, inciso 10., del proyecto de ley sobre jubilación de empleados particulares.

—A sus antecedentes.

La Asociación Pro-mejoramiento de la vida solicita la sanción favorable del proyecto de ley sobre alquileres.

—A sus antecedentes.

El Centro de Fomento Departamental de Colón (Entre Ríos), solicita la sanción del proyecto por el que se dispone la reanudación del servicio de transportes fluviales.

Sr. Melo. — Hago indicación de que esta solicitud se inserte en el "Diario de Sesiones".

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Villanueva). — Habiendo asentimiento, así se hará, y se pasará a sus antecedentes.

—Se lee:

1.—Asuntos entrados.

2.—Proyecto de ley acordando 50.000 pesos para conmemorar el aniversario de la unidad nacional.

3.—Jubilación de empleados y obreros de empresas particulares. Se posterga su consideración.

4.—Moción para que el Honorable Senado celebre sesiones diarias.

5.—Se da entrada a un despacho de comisión acordando permiso al general Ruiz para aceptar un grado militar en el ejército del Perú.

6.—Pago de salarios.

7.—Se fija la sesión del día 29 para considerar la elección de un senador por Tucumán.

8.—Integración de la Comisión de Negocios Constitucionales.

9.—Reformas al Código Penal y Proyecto de Ley sobre emancipación civil de la mujer. Se posterga la consideración de ambos asuntos para la sesión del día 27 del corriente.

10.—Campo de deportes del Club de Gimnasia y Esgrima.

—En Buenos Aires, a 22 de septiembre de 1920, siendo las 17.15, dice el

Sr. Presidente (Villanueva). — Queda abierta la sesión. Como la anterior no se levantó, sino que se pasó a cuarto intermedio, no se ha labrado acta.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

—Se lee:

Septiembre 23 de 1920.

Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires.

El Centro Fomento Departamental que presido ejercitando la facultad constitucional de peticionar ha resuelto en asamblea de esta fecha, dirigirse a Vuestra Honorabilidad pidiendo quiera con preferente atención sancionar el proyecto aprobado en diputados en el cual se dispone la reanudación del servicio de transportes fluviales bajo la administración directa del Estado. Si grandes son los perjuicios ocasionados y que ocasiona la interrupción del tráfico fluvial con el paro prolongado de los vapores que efectuáronlo, son incalculables los que directamente tócanle a Colón y que sabido es que es este el único puerto entrerriano en la ribera uruguaya que no dispone de las ventajas del riel con las cuales en las presentes circunstancias hubiéranse atenuado los efectos de la completa paralización de los transportes fluviales. El Centro de mi presidencia considera que la sanción de la ley de referencia con su inmediato cumplimiento daría término a una situación harto angustiosa para los puertos ribereños que se traduce actualmente con un languidecimiento general del comercio y de las industrias y con graves perjuicios para las poblaciones.

Saluda a Vuestra Honorabilidad.

Eduardo Torriero, Presidente. — Luis de Donatis, Secretario.

El Comité Nacional del Comercio solicita la rebaja de derechos para automóviles y camiones.

—A la Comisión de Presupuesto.

Obreros y empleados de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad formulan observaciones al proyecto de ley sobre salarios.

—A sus antecedentes.

El Partido Socialista de Santa Rosa (La Pampa) solicita la sanción del proyecto de ley sobre alquileres.

—A sus antecedentes.

La Unión Popular Católica Argentina solicita que se fije en la ley de jubilaciones que se proyecta para telefonistas, el minimum de cincuenta años de edad como condición esencial para obtener la concesión de los beneficios consiguientes.

—A la Comisión de Legislación.

Solicitan pensión militar.—

Dolores F. de Morales, Felipa Argentina Rojo y Calibar, Celestina L. de Usandivaras; Rosario Reyes de Tezanos.

—A la Comisión de Guerra.

Solicitan pensión civil.—

Bárbara M. de Imaz, María Victorica, Ana María

y María Rita Costa de Arguibel, María A. S. y Matilde Conde.

—A la Comisión de Peticiones.

Invitación.—

El Intendente Municipal invita la Honorable Senado al acto de la colocación de una placa en homenaje al patriota cubano don José Martí.

Sr. Presidente (Villanueva). — Quedan invitados los señores senadores.

Proyectos de ley en revisión.—

La Honorable Cámara de Diputados remite en revisión el proyecto de ley sobre liberación de derechos a la exportación de lanas e importación de tejidos.

—A la Comisión de Presupuesto.

La misma, remite en revisión el proyecto de ley por el que se amplía en 350.000 pesos el ítem 9, inciso 2o., anexo A. del Presupuesto vigente.

—A la Comisión de Presupuesto.

Despachos de Comisiones.—

La de Legislación en el proyecto de ley en revisión por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley 4144.

—A la Orden del día.

La de Negocios Constitucionales en la solicitud presentada por el general don Eduardo H. Ruiz, para aceptar el grado de general de brigada del ejército del Perú.

—A la Orden del día.

La de Peticiones y Poderes en las solicitudes de pensión de Lucía H. de Díaz Valdez, Guillerma A. de Martínez y Matilde F. de Cabral.

2

SUBVENCION DE 50.000 PESOS PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA UNIDAD NACIONAL.

—Se lee:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etcétera.

Artículo 1o. — Acuérdase la suma de 50.000 pesos moneda nacional a la comisión organizada para conmemorar el aniversario de la Unidad Nacional el próximo 11 de noviembre y tributar un homenaje popular al capitán general don Justo José de Urquiza.

Los fondos que se destinan en uno de sus artículos, son los provenientes de premios de Lotería Nacional, no percibidos, y que en los últimos años pasaban a fondos generales de la Nación, y últimamente al renglón subsidios.

Los cálculos hechos, y los tomados por las oficinas respectivas hacen ascender esta suma alrededor de \$ 250.000 pesos al año.

Por este proyecto, se ceden también tres hectáreas más o menos de propiedad municipal que quedan inmediatas al actual local, dividido por el arroyo Maldonado, donde se hará una construcción de cemento armado para darle mayor amplitud y poderlo destinar a juegos higiénicos.

Antes se tropezó con algunos reparos que pusieron los intendentes municipales; pero, felizmente, han sido subsanados porque el Congreso creía que podría dentro de sus atribuciones, destinar los terrenos municipales, como hace con todos los terrenos que posee la Nación, ya sea en la capital o en las provincias, para establecimientos de utilidad pública, arsenales, fortalezas, etc., de acuerdo con lo que autoriza el artículo 67 de la Constitución, inciso 27.

Las construcciones que se van hacer serán de cemento armado, incombustible, para evitar accidentes como el ocurrido.

También piensa construirse, de acuerdo con planos hechos por el arquitecto Bouvard y otro compañero, a quienes aprovechó la competencia del presidente actual, que es casi permanente en ese Club, el doctor Aldao, tan diligente, por que es el que le da vida y entusiasmo.

En Europa y aún en Norte América, los establecimientos similares a éste, podrán ser iguales, pero no superiores! según él nos ha manifestado.

Se cede también una pequeña manzana de terreno frente a la plaza Belgrano, entre las calles Moreno, Aroma y Lima, cuya expropiación se hizo para poder construir en ese local el instituto nacional de estudios secundarios y el colegio nacional anexo.

Y como existe con carácter imperativo, en el artículo 80. de la ley 6268, que debe construirse y tener bajo la dirección y manejo del Club de Gimnasia y Esgrima la casa modelo para ejercicios físicos, ésta se hace de acuerdo con planos que han sido aprobados por el Ministerio de Instrucción Pública.

Se subsanan en la misma concesión, las dificultades que pueda tener para la ley de apertura de una avenida de norte a sud, que tomará parte de esa manzana. En lugar de los tres mil y tantos metros cuadrados, quedará ésta redu-

cida a dos mil, más o menos, que es lo suficiente para levantar ese establecimiento, pues el actual es inadecuado, estrecho y falto de comodidad. Y como dato ilustrativo, que nos daba el señor presidente de dicho club, en ese plano hay tres canchas de pelota con todas las comodidades necesarias, tanto de amplitud como de seguridad, fuera de los demás salones anexos para las distintas clases de juegos y ejercicios.

Las pequeñas modificaciones que ha experimentado el viejo proyecto, es la que se refiere a que de los fondos que recibe para este fin se destinarán treinta mil pesos, por entregas anuales de diez mil, para terminar el campo de deportes del Club Sportivo de Barracas al Norte, y una vez terminado aquél se destinarán iguales sumas anualmente para construir otros establecimientos de la misma índole y naturaleza en las distintas capitales y ciudades de importancia del resto de la república.

En el articulado de este proyecto se indican las otras fuentes y recursos, como los fondos depositados con motivo de las expropiaciones judiciales ordenadas cuando los festejos del Centenario, y creo son alrededor de treinta mil pesos, más o menos. A su vez, el Club de Gimnasia y Esgrima, se compromete a prestar todo su concurso y facilitar sus locales a la concurrencia de colegios, de miembros del ejército y de toda clase de personas que lo soliciten, como ser maestros de esgrima, de natación, de box, etc., etc.

La comisión no ha tenido dificultad en aceptar la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados, dándole su voto favorable, y pidiendo que a su vez el Honorable Senado, le preste su aprobación.

Nada más.

Sr. Presidente (Villanueva). — Creo que no hay número en la casa, por haberse retirado dos señores senadores.

Sr. Esteves. — Es una lástima.

Sr. Presidente (Villanueva). — Sobre todo, después de un informe tan interesante.

Sr. Caballero. — En antecala creo que hay número.

Sr. Presidente (Villanueva). — No hay más que quince señores senadores en la casa.

Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio hasta el sábado.

—Era la hora 18.10.

CARLOS A. CARRANZA.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

SENADO

REFORMA DEL CODIGO PENAL

INFORME DE LA COMISION DE CODIGOS DEL SENADO DE LA NACION

Honorable Senado:

La Comisión de Códigos ha estudiado el proyecto de Código Penal enviado por el P. E. con el sajo del 1.º de septiembre de 1906 y el venido en revisión de la H. Cámara de Diputados el 23 de agosto de 1917, y os aconseja la sanción de este último, con las modificaciones que se indican en el despacho, por las razones dadas en el presente informe.

La reforma del Código Penal

La reforma de nuestra legislación penal no puede postergarse un instante más. Las causas que motivaron su iniciación hace ya treinta años la justifican ahora más que entonces, pues se han hecho más graves con el transcurso del tiempo. Las leyes penales en vigor no responden ni al espíritu de estos tiempos ni a las necesidades del país. La criminalidad continúa en progresivo aumento y el sistema penal actual, basado en el antiguo principio de la represión severa, se ha sentido impotente para evitar los males y peligros que amenazan a la sociedad.

La Comisión ha creído indispensable por esa razón fundamental despachar este año mismo el proyecto de nuevo Código Penal enviado en revisión por la H. Cámara de Diputados. Lo ha estudiado detenidamente comparándolo con el proyecto enviado por el P. E. hace ya trece años, y ha aprovechado los estudios que de uno y otro proyecto hicieron las anteriores comisiones de Códigos del H. Senado. Ha tenido muy especialmente en cuenta el informe redactado en el período anterior por el ex senador doctor Angel Rojas, cuyo fallecimiento produjo tan hondo pesar en todos los miembros de este cuerpo.

La reforma penal se inició en 1890, cuatro años después de sancionada el proyecto que tuvo por base el del doctor Tejedor. En 1890 el P. E. nombró una comisión compuesta por los doctores Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo, para que proyectaran las reformas que reputaron necesario introducir en el Código Penal. En uno de los considerandos del decreto nombrando dicha comisión, el P. E. afirmaba que: "según lo ha comprobado el estudio y la jurisprudencia de los tribunales, el Código Penal vigente adolece de defectos que es indispensable hacer desaparecer, por los peligros que entrañan para la sociedad y para los que sufren especialmente su aplicación".

Además — decía en otro — "la ciencia penal se ha enriquecido con nuevas doctrinas que, si bien son objeto de discusión y no se imponen desde ya como verdades inconcusas, deben tomarse en consideración para aceptar de ellas lo que pudiera importar un progreso para nuestra legislación".

El proyecto de 1891, redactado por los juriscónsultos nombrados no llegó completamente a la discusión legislativa, pero mereció el aplauso de quienes seguían con atención el desenvolvimiento del Derecho penal porque señalaba un notable progreso y respondía a las exigencias y modalidades de la sociedad argentina. Entre otros méritos, dicho proyecto tuvo el de haber admitido la condena condicional, tan reclamada hoy por la opinión pública y los criminalistas más distinguidos de nuestro país.

En 1903 fué sancionada la ley 4189, o ley de reformas al Código Penal, que tomó algunas disposiciones del proyecto de 1891, pero sin método ni espíritu científico. Alguien la ha calificado de ley anacrónica, porque no respondía en realidad a las nuevas orientaciones del Derecho penal. Empeoró el Código y no obstante su rigor para la represión de ciertos delitos, no impidió el aumento de la delincuencia. Al poco tiempo de promulgada dió lugar a críticas bien fundadas, sobre todo por su pensamiento simplista — como se ha dicho con razón — de aumentar las penas, en la creencia errónea de que "el crimen se atenta con la mayor severidad en el régimen represivo".

Por eso mismo se reclamó con insistencia su reforma y al año siguiente de sancionada, el P. E., siendo Ministro de Justicia e Instrucción Pública el Presidente de esta Comisión, designó a cinco juriscónsultos y a un médico, los doctores Francisco Beazley, Rodolfo Rivarola, Diego Saavedra, Cornelio Moyano Gacitúa, Norberto Piñero y José M. Ramos Mejía, para que constituidos en comisión se encargaran de revisar el Código Penal. "Existe conveniencia indudable — decía uno de los considerandos del decreto de diciembre 19 de 1904 — en revisar e imprimir carácter permanente, o por lo menos, durante un largo período de tiempo, al Código Penal de la Nación, el que después de frecuentes reformas generales o parciales, no ha logrado satisfacer los unánimes anhelos de una justicia equitativa, equilibrada y concorde con el estado social de la población en las varias regiones de la república, y menos en la Capital Federal".

El proyecto redactado por la citada comisión fué remitido al H. Senado por el P. E. en 1906. Ha sido estudiado en diversas oportunidades por las comisiones respectivas de esta Cámara. La Comisión de Códigos lo estudió detenidamente en 1914 y llamó a su seno a los miembros sobrevivientes de la Comisión redactora del proyecto a fin de conocer

su opinión sobre la necesidad de introducir algunas modificaciones, dado que había transcurrido tanto tiempo desde su redacción y que con posterioridad a ésta habían sido promulgadas algunas leyes penales de carácter especial. Empero la Comisión de entonces, de la cual formaban parte dos miembros de ésta, no pudo despachar el proyecto por razones ajenas a su voluntad.

En 1916 el diputado Dr. Rodolfo Moreno (hijo), presentó a la Cámara de que forma parte, un proyecto de ley disponiendo que desde el 1.º de enero de 1917 regiría como ley de la Nación, el proyecto de Código Penal de 1906, al cual introducía algunas pequeñas modificaciones. Estudiado por una comisión especial de legislación Penal y Carcelaria, que le introdujo algunas reformas, fué sancionado por la H. Cámara de Diputados el año 1917.

El proyecto fué estudiado conjuntamente el año último por dos comisiones del H. Senado: la comisión de Códigos y la especial que tenía a estudio el proyecto de Código de Justicia militar, presididas ambas por el senador doctor Angel Rojas. Esas dos comisiones aconsejaban la aprobación del proyecto en revisión con las modificaciones indicadas por su Presidente; pero el despacho no pudo ser firmado por haber sobrevenido inesperadamente la muerte del doctor Rojas, antes de que pudiera revisar su informe y la planilla de modificaciones. Esta Comisión ha aprovechado buena parte de la meritoria obra de las susodichas comisiones y ha creído necesario agregar a este informe, como valiosa contribución al estudio de la reforma penal, el trabajo preparado por el ilustre exsenador por San Juan.

El proyecto de 1906, que constituye la base fundamental del proyecto sancionado por la H. Cámara de Diputados, ha merecido los más calurosos aplausos tanto en el país como en el extranjero. En una acreditada revista de derecho decía un jurista húngaro, el conocido profesor de legislación penal comparada, doctor L. Thot: "En general, podemos decir que el proyecto argentino es una de las obras de codificación más dignas de atención, y que si se tradujera al alemán y al francés, sería un tesoro común para los criminalistas de todas las naciones".

En su interesante libro sobre "La política criminal en las legislaciones europeas y norteamericanas", publicado recientemente, el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Madrid señor Luis Jiménez de Asúa, se refiere a los proyectos argentinos de Código Penal y dice: "Tanto el Proyecto de 1906, como el de 1917 tienen algunos preceptos esporádicos que se inspiran en los principios de la Política criminal europea y norteamericana" tales son, principalmente, la libertad condicional y la condena condicional. Ni uno ni otro establecen un capítulo propio para las medidas de seguridad; pero al tratarse de los irresponsables por enajenación mental, establecen la hospitalización en un manicomio por tiempo indeterminado, y al ocuparse en la reincidencia imponen la relegación o deportación indeterminada para los delincuentes habituales. Pocas son, agrega, las modificaciones que el proyecto nuevo establece en el de 1906. Descuellan por su importancia: la simplificación del número de penas, la supresión de la de muerte y la mayor amplitud dada al tratamiento de los menores, inspirado en los preceptos del ante-proyecto de Código penal suizo. Como retroceso, debe citarse el cambio de la prisión por tiempo indeterminado en pena a perpetuidad".

El "Congreso Penitenciario Nacional" celebrado en Buenos Aires del 11 al 14 de mayo de 1914 emitió el voto de que debía aconsejarse y gestionarse la sanción del proyecto de 1906, con las pequeñas modificaciones aconsejadas por su relator Dr. O. González Roura, miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal y distinguido catedrático de Derecho Penal en la Universidad de La Plata. En su notable informe, como en un profundo estudio publicado en la "Revista argentina de ciencias políticas" (mayo 12 de 1913), señala las ventajas del proyecto cuya sanción aconseja esta Comisión. "Se advierte, desde luego, dice, que distribuye mejor y más adecuada y metódicamente la materia". "En el libro I, agrega, mejora la materia de la tentativa, de la retroactividad de la ley, de la reincidencia y de la reiteración, así como la relativa a la extincción de la acción y de la pena, y muy principalmente la referente a la responsabilidad, no solamente en cuanto a las eximentes, sino en lo tocante a las atenuantes y agravantes, pues abandona el raro e inconveniente sistema vigente de la enumeración taxativa tomada del proyecto de Villegas, para adoptar el más científico y autorizado de las normas generales, que importa dar a los jueces más amplitud de facultades en la individualización de las penas, sistema que adoptara el proyecto de Tejedor". Señala luego las ventajas que el proyecto ofrece en cuanto a la simplificación del sistema penal y a la desaparición de las reglas sobre la culpa, "cuya legislación pasa a la parte especial en cada delito susceptible de ser cometido en esa forma, de tal manera, que desaparecen las dudas que ocasionaba el sistema actual". "Desaparecen también el complot y la banda como formas específicas de codefincuencia, para pasar a constituir el delito de asociación para delinquir en la parte especial, así como igualmente en análogas condiciones la materia del encubrimiento, todo según los métodos más autorizados".

En el libro II se mejora notablemente la distribución y calificación de la materia, siendo la penalidad más racional y apropiada en general. "Pero sobre todas estas excelencias se destacan dos, que coronan la obra. Es una de ellas la unidad de legislación, que viene a corregir ese serio inconveniente de la dispersión de la legislación actual existente, a despecho del régimen de la codificación y del sistema unitario en materia de legislación de fondo, implantado por la Constitución... Es la otra la que tiende a realizar el propósito de implantar una mejor adaptación de la pena al delincuente, abandonando el vetusto armazón del régimen vigente, que no había logrado apartarse lo suficiente del falso concepto de relacionar la pena con el delito sin tener en cuenta sino muy secundariamente la personalidad del delincuente".

El Dr. González Roura sostiene que el proyecto concurre a realizar lo que se llama la individualización de la pena, "al menos en términos generales, pues hace una acertada clasificación de los delitos según su naturaleza y una conveniente graduación de la penalidad según su gravedad, estableciendo mínimos menores y adoptando el sistema científico de considerar más que al delito al delincuente, mediante normas generales de atenuación o agravantes que proporcionan a los jueces una prudente amplitud en la determinación de la pena, e instituye la pena condicional, mejorando el sistema de liberación condicional existente rudimentariamente en la ley vigente".

El proyecto de 1906 ha sido criticado, sin embargo, por algunos criminalistas y profesores de Derecho Penal. Podemos citar entre ellos a los doctores contrarios a sus principios fundamentales, repugnan al común sentir o son de observación imposible".

El doctor Rodolfo Moreno (hijo) señaló también los defectos de la ley de seguridad social en los fundamentos del proyecto que presentó a la H. Cámara de Diputados poniendo en vigor el proyecto de Código Penal de 1906. En esa oportunidad insistió en los puntos de vista sobre la misma que había señalado en estudios publicados el año 1911 en la revista "Humanidad Nueva" y en la "Revista Argentina de Ciencias Políticas".

De acuerdo con las observaciones y críticas de los doctores Moreno, González Roura y otros distinguidos abogados y juristas, la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados derogó la ley 7029, considerando, por una parte, que los hechos que constituyen verdaderos delitos y que ella castiga están comprendidos en el proyecto de Código Penal, donde deben necesaria y lógicamente figurar, y por otra, que es contraria a la Constitución y al sistema admitido por el mismo proyecto.

La Suprema Corte de la Nación—dice en su "Exposición de motivos"—en diferentes casos que son del dominio público, ha resuelto que tal ley es contraria a la Constitución en cuanto se refiere a jurisdicción, y los tribunales federales, ordinarios y de provincia no han dado ni han podido dar cumplimiento a lo que la misma ley dispuso, sobre el procedimiento y el término de diez días para la duración de los procesos. Eso sólo demuestra que la ley ha sido en la práctica un fracaso.

Además esa ley es contraria, a pesar de ser una ley penal, a los criterios del Código y de su reforma, en todo lo que se refiere a tentativa y participación criminal. Repite en algunos casos los preceptos vigentes y señala para otros, penas que contradicen a las que se encuentran en vigor. Por eso decíamos que se ha empeorado con ese articulado la situación inconveniente de nuestro derecho repressivo.

II

La crisis del Derecho Penal dogmático

El fracaso de nuestra legislación criminal y la crisis del sistema penal fundado sobre una represión excesiva hacen necesaria y urgente la sanción del nuevo Código. La comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados ha puesto en evidencia, en la "Exposición de motivos" del proyecto en revisión, el fracaso de nuestro sistema represivo, en términos claros y elocuentes, que nos permitiremos transcribir en este informe.

Refiriéndose al criterio simplista de la severidad de la represión para atenuar la criminalidad, que inspiró la reforma de 1903, la "Exposición de motivos" dice: "Si ese factor tuviera el valor que se pensó cuando la ley 4189 fué promulgada, el problema de la criminalidad sería muy sencillo, pues bastaría volver a las leyes de Dracón o a las más semejantes a las mismas, para tenerlo resuelto".

La ciencia penal ha comprobado por medio de la experiencia, la estadística y la observación que

ese postulado primitivo no es acertado y que el crimen dependiente de factores sociales e individuales no se suprime ni disminuye aumentando los castigos.

"Pero en nuestro medio y con parte de la ley de reformas ha ocurrido un fenómeno que es corriente en los casos semejantes: cuando una ley res Julio Herrera y Juan P. Ramos; el primero es autor de una obra titulada "La reforma penal", publicada en 1911, en la cual hace críticas fundamentales a dicho proyecto, desenvolviendo los principios de política criminal que desarrolló brillantemente en esta Cámara al combatir la ley 4189; el segundo, catedrático de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ha señalado su disidencia con el proyecto en nota dirigida a la Comisión especial de Legislación penal y carcelaria de la H. Cámara de Diputados, afirmando que él no responde, "por su sistema, al estado de la ciencia criminal contemporánea". Pero como el proyecto en revisión ha incorporado algunas de las reformas indicadas por los críticos del proyecto de 1906, puede decirse que no existe razón alguna para demorar su sanción. El Dr. Herrera ha llegado a afirmar por eso mismo, que "si el Senado le presta su sanción será uno de los mejores códigos que existan en el mundo".

El diputado Rodolfo Moreno señaló, al fundar su proyecto de reforma del Código Penal, las principales diferencias entre éste y el proyecto de 1906. Suprimió el libro sobre faltas, estableció la abolición de la pena de muerte, disminuyó el mínimum en la penalidad del homicidio, para dar mayor margen a los jueces; derogó la ley Núm. 9143, que reprime la trata de blancas, incorporando al código los preceptos que encierran previsiones no contenidas en dicho proyecto a los efectos de la unificación y la concordancia; derogó también la ley Núm. 7029, llamada de seguridad social, incorporando al Código los hechos que incrimina y omite el mismo proyecto; y finalmente, derogó las leyes anteriores, tanto federales como ordinarias, sobre materia represiva. El proyecto en revisión introdujo la importante reforma relativa a las penas paralelas, que lo caracteriza notablemente y lo diferencia en la parte esencial del proyecto de 1906.

Al informar al Congreso Penitenciario nacional sobre el proyecto de 1906, el doctor González Roura sostuvo que era necesario retocarlo en vista de que con posterioridad a su redacción se habían dictado leyes represivas de carácter especial, las de seguridad social, elecciones y trata de blancas, con las cuales era necesario relacionar las disposiciones del Código Penal. "Pienso—dijo—que deben mantenerse las disposiciones de las leyes de elecciones y de trata de blancas. Estas leyes son más explícitas que las partes del Proyecto que tratan esas materias, y han sido dictadas recientemente, sin que presenten flancos abiertos a la crítica de impugnación. Deben, pues, ser mantenidas con la supresión de las disposiciones relativas del Proyecto, incluyéndolas en éste.

"En cuanto a la ley 7029—agregó el distinguido magistrado—, habría que derogar los artículos 12 a 32. En tal caso el artículo 12 y 20 que prevén la incitación indirecta y directa al delito, serán substituidos por el 226 del Proyecto; el 13, 18 y 19 pasarían a formar parte del título VII, Capítulo I, sobre incendios y otros estragos; el 14 del 230; el 15 del 203; el 16 del 83 y 84; el 17 del 223; el 21 del Capítulo VIII, título VI, sobre los daños; el 22 y el 24 del 54; el 23 del 43; el 25 del 165, casi todos reformados; el 26 del 244; el 27 del 57 y el 28 del

título I, Capítulo II, sobre las penas, y quedarían simplemente derogados el 29 al 32; ya por innecesarios o por contrarios a principios universalmente admitidos como el 29, o a los sentimientos de la opinión, como el 30 y el 31, o por impracticable e inconstitucional, como el 32.

"Fue esta una ley de ocasión, dictada con precipitación inusitada y que contiene muchísimos defectos. Hay en ella disposiciones que están previstas en el proyecto, especialmente de un modo general, otras que pueden incluirse en el mismo, y otras que, contraria un modo de ser social, todos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente la violan y contribuyen a que no se aplique.

"La ley referida prodiga la pena de muerte en el título del homicidio, y a pesar de regir desde hace catorce años, solamente dos ejecuciones han tenido lugar en la Capital de la República y ninguna en las provincias y territorios.

"Los jueces, como si se hubieran puesto de acuerdo, han evitado la aplicación de la pena capital, y en los contados casos en que se ha pronunciado, los poderes ejecutivos de la Nación o de las provincias han concurrido con la salvadora conmutación.

"Lo que demuestra una vez más, que no basta sancionar una ley para resolver el problema, requiriéndose como elemento esencial que ella se adapte a las necesidades y al pensamiento dominante en el medio al cual ha de aplicarse.

"Los ataques más violentos y más generalizados que se han hecho al sistema penal vigente, se relacionan con las penas pronunciadas para los atentados a la propiedad.

"La deficiencia en esa materia es tan notoria, que ha salido ya del dominio de los jurisconsultos y aun de los curules, para que sea comentada por la generalidad. Es frecuente observar que a un doméstico, muchas veces de quince o diez y seis años, se le mande a penitenciaría por dos, tres y cuatro años, por haber hurtado un objeto cuyo valor no pasa de unos centavos. La ley, en esa materia, es inexorable y contraria a todo criterio científico y social. Es tan absurda que se ha repetido el caso de jueces que, después de haber condenado se han dirigido al Poder Ejecutivo correspondiente requiriendo el uso de la facultad de perdonar. Así entendían que se cumplía la ley y que se evitaban las consecuencias de sanciones monstruosas.

"La crítica acertada se repite continuamente, haciéndola sentir, más que las víctimas generalmente desamparadas, los defensores, los mismos fiscales o jueces y la prensa diaria, cada vez que se ocupa del asunto. Sin embargo, la ley se mantiene hace catorce años, y los tribunales siguen mandando a penitenciaría a pobres criaturas que hurtan, como sirvientes, objetos de escaso valor.

"Todo eso debe ser modificado y con urgencia, por nuestro propio prestigio de país civilizado."

La bancarrota de la actual administración de la justicia penal la confiesan todos los penalistas, sin distinción de escuelas. Muchos señalan la conveniencia de variar el rumbo de la justicia penal, introduciendo substanciales y radicales reformas en el sistema vigente. Consideran que debe modificarse el concepto mismo de la pena, procurando que la reacción social contra el delincuente sea una medida de interés o de utilidad para la organización. Se ha observado con razón, que la pena es un remedio casi del todo ineficaz para im-

pedir el desarrollo de la criminalidad, que es en sí todo el problema penal.

Y el sistema ha fracasado en todas partes, como lo observa el ilustre autor de "El derecho protector de los criminales". La traducción de ese fracaso se encuentra en las estadísticas de todos los países. "Sólo en Inglaterra — dice Pedro Dorado — y de pocos años a esta parte, también en Francia, es donde se advierte descenso. Mas el descenso no obedece por cierto a haberse acentuado el rigor penal", cosa que no ha ocurrido en esos pueblos ni en ningún otro, sino a la implantación y difusión de las instituciones preventivas y de patronato, que son justamente la antítesis de la pena represiva y las que han de durar con ella en tierra".

Nos llevaría demasiado lejos el estudio de las causas y factores determinantes del fracaso del sistema clásico como defensa de la sociedad frente a los ataques de la delincuencia. Por otra parte, han sido señalados por los criminalistas más insignes, por clásicos, positivistas y eclécticos. Entre los primeros bastaría recordar a Holtzendorff, quien confesó francamente que los sistemas penitenciarios estaban en quiebra. La escuela positiva señaló con aguda crítica los defectos de la organización penal inspirada en los principios clásicos, que uno de sus jefes resumía así en la mejor de sus obras: "dosificación química de la responsabilidad penal, ignorancia y negligencia absoluta de los caracteres fisis-psicológicos del hombre criminal, separación entre la ley y la sentencia de una parte y entre la sentencia y su ejecución de la otra, con el abuso consiguiente de la gracia; efectos prácticos desastrosos, tales como la corrupción y las asociaciones criminales en las prisiones; milares de individuos condenados a penas de detención cortas, estúpidas y risibles; aumento continuo e inexorable de la reincidencia." Y la misma escuela indicó, como reacción contra el sistema tradicional de tan funestas consecuencias, los criterios fundamentales que deben inspirar la defensa social contra el crimen: 1o. — tiempo indeterminado de la segregación del criminal; 2o. — carácter social y público de la reparación de daños; y 3o. — adopción de las medidas defensivas a las diferentes categorías de criminales (clasificación de delinquentes). Más que César Lombroso, su ilustre maestro, Ferri y Garófalo señalaron con precisión el sistema defensivo contra el crimen de la escuela positiva. (Garófalo, "La Criminología", pág. 338 y siguientes; Ferri, "La sociologie criminelle", pág. 493 y siguientes).

(1) Pero más que la escuela positiva ha influido en la legislación penal contemporánea la Unión Internacional de Derecho Penal, cuyos miembros más insignes, como von Liszt, van Hammel, Prins y Garraud, prestigian lo que ha dado en llamarse "la política criminal". El primero define ésta en su "Tratado de Derecho Penal" como "el contenido sistemático de principios—garantidos por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena—según los cuales el Estado dirige la lucha contra el crimen, por medio de la pena y de sus medidas afines".

Los defensores de la moderna "política criminal" parten del punto esencial de tomar como objetivo de la lucha contra la criminalidad al delincuente en lugar del delito. No tienen la preocupación absoluta y exclusivista de los juristas de la

escuela clásica, la preocupación de estudiar el "delito", en sí. Esos juristas hicieron de éste una abstracción, discutieron con rachos y siglos su definición y de éste hicieron uno de los grandes dogmas del Derecho Penal. El delito, al decir de Franck, era la violación de un deber social, consistía, según Pessina, en la negación del derecho; y Carrara, el insigne autor del "Programma del corso di diritto criminale", sostenía que no era otra cosa sino la violación de la ley promulgada. Apegados a la ley escrita, a sus fórmulas, a sus casuismos, dejaron a un lado el "delincuente", que es la realidad. No investigaron las causas que originan el delito; no buscaron los medios de prevenirlo—Homagnosi es la excepción entre los criminalistas clásicos—y prescindieron por completo de buscar los remedios para la criminalidad. Los códigos, infalibles, intangibles, libros sagrados casi, contienen, según ellos, la panacea que ha de terminar con el crimen: — la represión, tal debe ser la misión única del Estado para extirpar la plaga de la delincuencia.

Los legistas tradicionales olvidaron deliberadamente las distintas modalidades del fenómeno criminal. El "delito" es, según ellos, único y absoluto. Habrá diferentes categorías; pero las clasificaciones tendrán por base no la naturaleza antropológica del autor del delito, no los caracteres psicológicos de su personalidad, sino la característica, la naturaleza del hecho punible. Según el Derecho Penal dogmático, la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito, y la ley no ha de considerar la modalidad, el carácter, el temperamento del criminal, el medio social donde vivió, su educación, su condición económica, sus antecedentes hereditarios y los móviles de su acción. El viejo derecho penal admite como punto de partida un principio absoluto: la libertad moral del hombre. Este delinque porque así lo quiere su voluntad. La ley positiva fija con un criterio arbitrario, antojadizo, las causas eximentes, atenuantes o agravantes de la pena; éstas, en gran parte, obedecerán a determinadas relaciones del "libre albedrío"; no estarán relacionadas con aquellas condiciones que, realmente, determinan la génesis del delito.

No hay que estudiar, según el criterio clásico, las diferentes fases de la criminalidad. Medir el delito, aplicándole la pena que le corresponde, es la tarea del legista; como el comerciante, tiene él su vara de medir. Le interesa muy poco el estudio de la delincuencia según las profesiones, las edades, las regiones, las épocas, los sexos. Nada más conveniente, justo y necesario. Sin embargo, el conocimiento de los diversos aspectos de la criminalidad. A ello debe dedicar con empeño sus esfuerzos el criminalista-sociólogo. Son los hechos del delito, sus causas, sus direcciones, sus consecuencias, lo que interesa. Es decir lo que existe, la realidad, lo que debe estudiarse, y no la entidad abstracta, resultante de un proceso ideológico, el "delito", que es la criminología lo que la "vida" para el fisiólogo, un principio sin mayor importancia para el criminalista, el combate contra el crimen o para el desarrollo de organismo individual.

La política penal tiene que complejizar el estudio del delito con el conocimiento del "criminal". El uno y el otro son complementarios. Lo mismo que el médico y el paciente. Por otra parte, no es lógico considerar el delito como un hecho "civil", según hace Carrara, porque es un fenómeno na-

tural, como lo demuestra Garófalo en su "Criminología". Si nos llegamos a convencer de esta verdad, nos decidiremos a investigar los hechos criminosos, vinculándolos unos con otros, relacionándolos con sus motivos determinantes, a fin de encontrar los elementos componentes, por así decirlo, del "crimen". Es preciso conocer la vida del delincuente, si se quiere fijar la modalidad del delito.

III

La "Política Criminal" y la reforma penal

Encarando el problema de la delincuencia desde un punto de vista positivo y práctico para dar a la lucha contra el crimen la mayor eficacia, los sostenedores de la "política criminal" reclaman una serie de medidas fundamentales, la mayor parte de las cuales están en abierta oposición con los principios del viejo derecho penal. Sostienen al echar las bases del nuevo derecho penal, que la legislación debe individualizar la pena, como lo quiere Saleilles en su notable libro, dándose muchísima más importancia al elemento interno del delito, a la naturaleza del móvil que ha guiado al delincuente, que al daño material causado por el delito, para la determinación de la pena. Como consecuencia de este principio, es necesario establecer el sistema de las penas paralelas.

Por otra parte, el principio de la individualización de la pena exige la clasificación de los delinquentes. Como dice muy bien Jiménez de Asúa en la obra ya citada, la nueva política criminal "reclama, ante todo, un examen científico de las causas de la criminalidad, a fin de que la pena pueda ser adecuada en la lucha contra el delito. Resultando de la observación que dentro de los criminales podrían distinguirse tres grupos — delinquentes de ocasión; delinquentes por estado, corregibles; y delinquentes por estado, incorregibles, — se llegó a establecer un sistema perfectamente organizado de exigencias político-criminales. Al lado de la pena se ha establecido un doble sistema de medidas, que persiguen como fin, o la educación correccional del delincuente, o la protección de la sociedad contra el criminal". (Ob. cit., p. 173).

Los expositores de la "política criminal" señalan otras consecuencias necesarias de la individualización de la pena. Como condición indispensable para conseguirla, especialmente para la individualización por parte del juzgador, se requiere en éste, escribe Dorado, una amplia libertad para el ejercicio de sus funciones. De ahí también la necesidad de una gran simplificación en los códigos penales, "proscribiendo de ellos las disposiciones que tienden a impedir el arbitrio, y reduciendo su contenido a un conjunto de reglas sumamente generales, que permitan al tribunal el ejercicio de facultades discrecionales amplísimas.

"De igual manera, la individualización administrativa de la pena ha traído y está trayendo consigo, cada día con intensidad mayor, otras consecuencias en la mente de los defensores de la política criminal, y tras de ello, en las leyes"... Si antes con la pena-castigo, la aplicación de éste podía ser y era una función administrativa, ejecutiva y mecánica, hoy, en cambio, cuantos profesan la doctrina del tratamiento penal protector, exigen, como condición ineludible para el mismo, la unión íntima entre la sen-

tencia o providencia penal (equivalente al diagnóstico y plan médico) y su ejecución (equivalente al tratamiento terapéutico). Este propósito constituyó una de las bases del programa o estatutos, con arreglo a los cuales se fundó la ya mencionada "Unión Internacional de derecho penal".

"Por otro lado, si para hacer ejecutar las penas con el antiguo sentido, no era preciso poseer competencia especial de ningún género, bastando con tener fuerza material suficiente y "entrañas" a propósito para golpear y hacer padecer a los condenados por sentencia judicial (y por eso el régimen carcelario era un régimen militar, puramente de fuerza, dirigido por comandantes, cabos y demás, con brigadas, pelotones, números...), al revés, para poner en práctica el sistema moderno del tratamiento penal individualizado, se hace imprescindible que el personal a quien se confía la práctica de este tratamiento individual, reúna condiciones a propósito, de aptitud científica y moralidad. Y, por último, "la necesidad de individualizar la pena ha obligado a los partidarios de la política criminal a pedir que se haga un examen caso por caso, de los delinquentes que van a ser sometidos a aquella". El Congreso de antropología criminal celebrado en Amsterdam en 1901, acordó unánimemente, a propuesta del doctor Martín de la Escuela de Lyon, "la necesidad de que los médicos intervengan de un modo constante y permanente en la administración de la justicia criminal, a fin de que en todo proceso de esta clase verifiquen un examen biológico del reo". (Dorado, "Bases para un nuevo Derecho Penal", "El Derecho protector de los criminales").

La moderna política criminal se inicia en la legislación europea con el Código Penal Holandés (1831), que deja al juez la facultad de escoger la pena adecuada al delincuente entre un minimum de un día y un maximum especial determinado en la ley. Los autores del Proyecto de 1891 bebieron en esta fuente, como el proyecto Tejedor, en el Código de Baviera. Más tarde el Código Penal noruego acogió las exigencias de la misma política (1902); de él tomaron muchas disposiciones los redactores del proyecto de 1906. Luego, los Códigos penales del Japón (1907) y de Siam (1908) otorgan al juez un libre arbitrio tan grande como el holandés. Inglaterra admite en su legislación el programa de la nueva ciencia, con sus leyes de condena condicional (1907); de tratamiento de los jóvenes delinquentes (1908) y sobre los defectuosos mentales (1913).

Donde se reflejan mejor los principios de la moderna política criminal es en los anteproyectos suizo, alemán, austríaco, serbio, danés y sueco. El proyecto en revisión toma muchas de sus disposiciones de los dos primeros; esta Comisión ha tomado de los mismos algunas de las modificaciones introducidas en aquel proyecto y otras del anteproyecto sueco, que es la última palabra en materia de codificación penal. Su autor es el notable criminalista Thyrén, profesor de la Universidad de Lund, quien publicó en 1916 la parte general. "El anteproyecto, dice Jiménez de Asúa, se inspira en la doctrina de prevención y de defensa, y procura dar cumplimiento a las exigencias político-criminales; pero, en ciertos casos, el criterio clásico, represivo, reaparece de manera indudable; las medidas de seguridad son escasas; la tentativa se regula de un modo extraño; la penalidad de los cómplices es siempre atenuada. A principio de 1917 el gobierno sueco ha nombrado una gran comisión parlamentaria—entre cuyos miembros está Branting, jefe del partido socialista—que funcionará bajo la dirección del Ministro de Justicia, y que está encargada de informar sobre la parte general del Ante-

proyecto (Jiménez de Asúa, "El anteproyecto de Código Penal sueco").

La "política criminal" ha tomado gran incremento en los Estados Unidos. Pero su tendencia es en cierto sentido distinta de la de las naciones europeas; mientras la primera es defensiva, proponiéndose sobre todo la defensa de la sociedad amenazada por la criminalidad, la segunda es principalmente reformadora, persiguiendo el tratamiento de los delinquentes. La característica de la "política criminal" norteamericana la dan, según Jiménez de Asúa, los reformatorios y el sistema que en ellos se emplea para corregir al culpable.

"El sistema de los reformatorios americanos — según Brookway — se basa en el principio de protección, en lugar de en el de punición; en el principio de la sentencia indeterminada, en vez de en el usual de sentencia definida; y en el propósito de rehabilitar a los delinquentes, más bien que en el de refrenarlos por intimidación."

En cuanto a la sentencia indeterminada, consiste, según el mismo autor, en el sistema por el cual se somete a una persona al régimen penal, exactamente como se envía al hospital a un enfermo, hasta que su curación sea absolutamente completa". No debe confundirse, pues, con las penas privativas de libertad por tiempo indeterminado, cuyo fin exclusivo es la represión del delito por el castigo del delincuente. Según Eugene Smith, la sentencia indeterminada es una institución en cuya virtud "la persona responsable de un delito es condenada a encarceramiento sin término especificado, permaneciendo en prisión y sometida a un tratamiento reformador, hasta que parezca estar preparada para recibir la libertad". ("Criminal law in the United States, Correction and Prevention," vol. I, tom. 2, pág. 67).

Como lo ha demostrado Jiménez de Asúa en su notable libro, la sentencia indeterminada, — ya absoluta, cuando ni la ley ni el juez establecen términos de duración, ya relativa, estableciéndose un minimum, con el fin de dejar satisfacer la idea de sanción, o un maximum como garantía contra las retenciones arbitrarias — triunfa en la doctrina, en los debates de los Congresos científicos y en las legislaciones. Pero en las Europas, al contrario de lo perseguido por las norteamericanas, la indeterminación sólo se propone para las medidas de seguridad: no pretenden corregir al culpable, "sino procurar la inocuización, cuando se trata del internado de los delinquentes habituales; o la curación, respecto de los delinquentes patológicos o bebedores; y solo se tiende a corregir y educar, cuando las medidas de seguridad hacen referencia a los que caen en el delito por vagancia, o a los menores delinquentes". (Ob. cit. pág. 176. "La sentencia indeterminada," pág. 75 y sigts.).

Los principios de la moderna política criminal han inspirado en parte a los autores del proyecto en revisión, al aceptar ciertas medidas tendientes a combatir la delincuencia con mayor intensidad. Sin duda, podría haberse ido más lejos en la reforma, de acuerdo con las nuevas orientaciones del derecho penal y siguiendo el ejemplo de algunas legislaciones; pero se ha creído que no era prudente convertir un Código Penal en un campo de ensayo de doctrinas no consagradas todavía por la experimentación social. En verdad, un código ultramoderno podría consignar todas las medidas educativas, aseguradoras y correccionales aconsejadas por las dos tendencias de la "política criminal," la europea y la norteamericana, conciliándolas en vista del tratamiento o la protección de los criminales y de la defensa de la sociedad expuesta a sus ataques; pero mientras eso no sea posible por razones y circunstancias diversas, habrá que procurar la incorporación a la legislación positiva de un minimum

de reformas reclamadas desde hace tiempo por la opinión científica de todas las naciones.

"Un delito demuestra — dice la "Exposición de motivos" de la Comisión especial de Legislación Penal — y esta y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados, y esta comisión hace suyas tan elocuentes y precisas palabras, que reflejan el espíritu de la reforma — la existencia de un individuo peligroso o inadaptable al medio en que vive; luego, "los esfuerzos sociales deben dirigirse no a la imposición de sufrimiento, no a expiaciones ni a tomar las medidas necesarias para que el individuo peligroso no repita el acto antisocial". Todo esto no depende sólo del Código penal, sino de un sistema legislativo que promueva en todos los aspectos de las actividades sociales."

IV

Aplicación de la ley penal

En el estudio en particular de la reforma penal, la Comisión se ha limitado a introducir algunas modificaciones al proyecto en revisión por considerarlas indispensables. Aceptando las bases y los puntos fundamentales de la reforma sancionada por la H. Cámara de Diputados, ha creído inconveniente tocar la estructura del proyecto y alterar su sistema con otras modificaciones. Su propósito más decidido era el de aconsejar lisa y llanamente la sanción a libro cerrado del proyecto, puesto que la reforma de nuestro Código Penal es de toda urgencia y de necesidad inmediata. Sin embargo, no ha podido realizarlo en razón de que procedía la corrección de algunas disposiciones del proyecto a su juicio erróneas.

En el libro I, título I, la Comisión aconseja la supresión de las siguientes palabras del artículo primero, inciso 1.º: "en sus buques de guerra, en los mercantes que llevan su bandera cuando naveguen en alta mar o se encuentren en aguas jurisdiccionales de un estado que no los reprímiese o en los buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en sus aguas jurisdiccionales".

Aconseja también la supresión de los incisos 3.º y 4.º del mismo artículo. De manera que éste quedaría redactado así: "Art. 1.º — Este Código se aplicará:

1.º — Por delitos cometidos o cuyos efectos deben producirse en el territorio de la Nación Argentina.

2.º — Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo".

Las supresiones aconsejadas en este artículo lo fueron también por las Comisiones del H. Senado que estudiaron el año pasado el proyecto de Código Penal, y las razones que las motivan están dadas detalladamente en el informe redactado por el doctor Rojas, que esta Comisión hace suyas.

En el mismo título, la Comisión aconseja que se agreguen al art. 3.º las palabras: "en cuanto estas no dispusiesen lo contrario". Este artículo quedaría redactado así: "Las disposiciones generales del presente Código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto estas no dispusiesen lo contrario".

Esta modificación también era aconsejada en el despacho que debieron producir las nombradas comisiones. Se explica fácilmente, pues es de simple

buen sentido, pero era menester consignar la excepción de modo expreso en el Código.

V

De las penas

La Comisión ha estudiado muy especialmente el título relativo a las penas, porque es una de las cuestiones fundamentales de la reforma penal. Coincidiendo con la Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados, mantiene el sistema penal incorporado al proyecto y sólo introduce algunas modificaciones que no alteran su estructura.

El proyecto en revisión simplifica el sistema represivo de acuerdo con las orientaciones de la ciencia penal moderna. La simplificación de las penas fue una de las bases fundamentales del proyecto de 1906. Conviene, entonces recordar lo que sobre este punto dijo la comisión redactora.

"El Código vigente — dice el informe elevado por la Comisión al señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, con fecha 10 de marzo de 1906 — establece, entre las penas privativas de la libertad, el presidio, la penitenciaría, la prisión y el arresto."

"Por causas que todos conocen, y que en realidad provienen de que en un país nuevo, no es posible, por falta de elementos, hacer en un día, lo que es obra del tiempo, dichas penas, hasta hace muy poco estaban reducidas en el hecho, a sólo una — la de penitenciaría. En el establecimiento destinado al cumplimiento de esta pena, estaban aglomerados, desde los condenados a presidio hasta los que sólo debían sufrir arresto."

"Esta situación, se ha modificado en algo, es verdad, en los últimos tiempos, en cuanto a los establecimientos penales de la Nación, pero todavía estamos muy distantes, de tener todos los que son necesarios para que cada una de las penas que establece la ley, se cumpla en los lugares y en las condiciones que ella quiere."

"Si esto ocurre en la Nación, fácil es comprender las dificultades con que tropiezan las provincias, especialmente algunas, para hacer efectivas las distintas clases de penas que se acaban de enumerar."

El informe agrega que la Comisión se planteó como primera cuestión la de saber si era conveniente mantener penas que no se cumplen en la práctica, resolviéndola negativamente. Examinó después la cuestión si existían razones de orden científico o simplemente de conveniencia para mantener la diversidad de penas y también fue resuelta por la negativa. "Juzgándose que los efectos y fines de las penas privativas de la libertad, se consiguen ampliamente, sin necesidad de subdivisiones que no hacen sino complicar el sistema, sin provecho alguno para nadie."

"El Código Penal de Holanda, que es la expresión más avanzada de la Ciencia del Derecho Criminal, según la frase de Garraud, y el proyecto de Código Penal francés, todavía en preparación, no establecen sino dos penas de esta clase: la prisión y la detención."

"La tendencia moderna, revelada por estos dos recientes obras, que son el fruto de la ciencia y de la experiencia de juristas eminentes, es pues, hacia la unificación de las penas privativas de la libertad."

"El por qué de esta tendencia, es muy difícil de

comprender La ciencia no respeta lo artificioso o lo que no descansa sobre base estable, y si hay algo que pueda reputarse mero artificioso esta múltiple división de la misma pena, fundada en detalles sin importancia de la ejecución.

La ciencia no ve en el régimen de esta clase de penas, sino lo que es esencial del régimen mismo, esto es, la privación de la libertad y la obligación de trabajo; ella no toma en cuenta lo que es puramente arbitrario, lo que no obedece a principio fijo alguno, lo que sólo importa un simple accesorio en lo fundamental del sistema.

"Y este procedimiento, tan propio de la ciencia en todas sus manifestaciones, conduce lógicamente a la conclusión de que la pena que descansa sobre la doble base de la privación de la libertad y de la obligación del trabajo, y cuya acción y eficacia estriban solamente en esas condiciones, debe necesariamente ser una, porque en cualquier forma que se aplique, siempre resulta idéntica en su esencia: priva de la libertad y obliga al trabajo".

El proyecto de la H. Cámara de Diputados ha seguido de manera más absoluta que el proyecto de 1906 la moderna y científica tendencia de la unificación y simplificación de las penas. Mientras éste establecía la pena privativa de la vida y las de presidio, prisión, detención y deportación como restrictivas de la libertad, aquel suprime la primera y reduce las otras cuatro solamente a dos: reclusión y prisión. Esta Comisión ha encontrado más lógico el sistema represivo incorporado al proyecto en revisión, al mismo tiempo que considera ser el más justo y de mayor conveniencia y utilidad social, y sin vacilaciones de ningún género os aconseja que le prestéis vuestra aprobación.

Entiende esta Comisión, al contrario de lo que pensaba la mayoría de las Comisiones de Códigos y Especial de Justicia Militar del H. Senado que el año último estudiaron el proyecto de Código Penal, que no existe razón alguna para incorporar al proyecto la pena de muerte abolida por la H. Cámara de Diputados.

Desde el punto de vista de la "política criminal", la pena de muerte debe rechazarse en absoluto, pues no responde a sus fines y tendencias. Por eso, la eliminan del sistema represivo los últimos y más adelantados proyectos europeos, como los de Suiza y Suecia. Y respondiendo a la tendencia moderna de la dulcificación de las penas iniciada con Beccaria, la han eliminado de los códigos penales Grecia, Rumania, Portugal, Holanda, Italia, los cantones suizos de Friburgo, Neuchâtel, Ginebra, Zurich, Tur-Balle Ville, Balle Campagne, Tessino, Berna, Tur-govia, Soleura, Vaud, Schaffhouse, Appenzell, Grigovias, Argovia y Glaris, Brasil, Uruguay, Venezue-las, y varios de los Estados Unidos de Norte Amé-rica. Thyrén, el ilustre autor del proyecto de Có-digo Penal sueco, la rechaza por bárbara e innecesario, creyendo que no protege a la sociedad contra el delito y que puede substituirse con ventaja por la reclusión perpetua y por la custodia en estableci-mientos especiales.

...mantener su abolición, se

En los países que no decretaron su abolición, se suprimió de hecho o se pusieron grandes restricciones para su aplicación. En Francia se produjo en los últimos años este fenómeno — según lo hacía notar el Ministro de Justicia Guyot—Dessaigne — 1o. Una progresión creciente siempre de declaraciones del jurado que admiten circunstancias atenuantes con objeto de evitar la aplicación de la pena capital; 2o. Una disminución del número de las ejecuciones por consecuencia del ejercicio de gracia

que corresponde al jefe del estado. La medida anual de las ejecuciones, que era de 7.15 desde 1881 hasta 1900, ha descendido a 1.8 desde 1901 hasta 1905.

En nuestra república la pena capital estaba abolida de hecho hasta hace poco. Si bien los tribunales solían aplicarla algunas veces, el Presidente de la Nación o los gobernadores de provincia constituían la pena, haciendo uso de la facultad constitucional y respondiendo a nobles sentimientos de piedad y clemencia. La ley positiva no debe, por lo tanto, consignar una pena en pugna con la conciencia colectiva y rechazada por las costumbres y los sentimientos del pueblo argentino.

La Comisión juzga inútil entrar a fundar extensamente la necesidad y la justicia de la abolición de la pena de muerte. El debate sobre esta cuestión está agotado y la bibliografía es abundante. Pero debe afirmar que la pena capital no responde a la necesidad de la defensa de la sociedad amenazada por el crimen y que, en verdad no llena ninguno de los fines atribuidos a la represión de los delitos por las distintas escuelas. No es ejemplar, porque no intimida a los criminales perversos, pudiendo decirse de ella lo que afirma el doctor González Roucir: la pena de muerte no puede servir sino "para espantajo de supuestos timoratos". No es útil, porque segrega de la sociedad a ciudadanos que por malvados que sean pueden ser utilizados en el trabajo; es innecesaria, por cuanto la sociedad dispone de medios adecuados para evitar que los delincuentes más feroces puedan amenazarla de nuevo; es innecesaria, pues la estadística demuestra que en los países donde ha sido suprimida, no ha aumentado la criminalidad; es injusta porque traspasa los límites de la defensa social; y es, por último, irreparable en los casos, no tan raros por desgracia, de un error judicial.

judicial.

"La ley de seguridad de las gentes honradas—ha escrito en su Derecho Penal Argentino el doctor Rodolfo Rivarola, quien durante más de un cuarto de siglo ha trabajado tenaz e inteligentemente por la supresión de la pena de muerte de nuestra legislación represiva—no debe estar en contradicción con los sentimientos de las mismas, y es una violencia inútil y estéril contra la conciencia individual, la que me obliga a mí, que puedo decirme, como la mayor parte de mi pueblo, ciudadano moral, honrado y justo, a costear con la parte de mi peculio que corresponde a la administración del estado, un centésimo para pagar los instrumentos con que él mismo suprimirá una vida, así sea del más perverso de los delincuentes. No ocurren esos sentimientos si se trata de buscar la seguridad social e individual, sea por todos los medios de prevención del delito, sea por perfeccionamiento de las instituciones policíacas y judiciales, sea por la seguridad y mejor ordenación de las cárceles".

La Comisión ha considerado, en cuanto a las penas restrictivas de la libertad, que deben mantenerse en la forma como están en el proyecto en revisión, sin admitir las modificaciones a que se refiere en su informe el doctor Rojas.

En este punto, como en el relativo a la pena capital, el proyecto de la H. Cámara de Diputados es superior al de 1906. En primer lugar, porque reduce de cuatro a dos las penas privativas de la libertad, y en segundo lugar, porque precisa más científicamente su naturaleza con los términos de prisión y reclusión.

"La prisión—decían los autores del proyecto de 1906, en su informe—tal como está organizada después de la ley de reformas, es decir, con la obliga-

ción del trabajo, no difiere de la de penitenciaría, que establece el Código vigente, sino en cuanto a su duración y otros detalles de menor importancia, y en el hecho, hasta se sufre en los mismos establecimientos penales.

"Teniendo en cuenta estas circunstancias y que en realidad son penas completamente equivalentes, por cuya razón no hay objeto alguno en mantener las dos, hemos optado por la de prisión dándole la extensión de la actual penitenciaria, y pensando que ella es preferible por dos razones: 1o. porque el término es más propio, desde que la penitenciaría no es una pena, sino un régimen penal, o el establecimiento donde ésta se cumple; y 2o. por la preocupación vulgar de atribuir a la pena de penitenciaría un carácter infamante, que se avenía mal con la aplicación de esa pena, así entendida, a delitos de poca monta".

La misma razón que tuvieron los autores del proyecto de 1906 para substituir la pena de penitencia-ria por la de prisión, existe para reemplazar la de presidio por reclusión, como lo hizo la comisión es-pecial de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados. El anteproyecto suceso va todavía más allá en la simplificación de las penas res-tringidas de la libertad. Establece la pena de prisión solamente, que varía según la gravedad de los delitos. En la delincuencia típica, aplica la prisión celular de seis meses a tres años, para los delitos de gravedad media, y para los graves, de tres a veinticinco años de prisión, debiendo comenzar a los dos años la prisión en común. En cuanto a la delincuencia atípica, fija más bien que penas pro-piamente dichas, medidas especiales, de acuerdo con las doctrinas más avanzadas de la política criminal, como ser la medida de seguridad por tiempo inde-terminado para la criminalidad crónica.

La comisión redactora del proyecto de 1906 no quiso establecer, deliberadamente, para el presidio y la prisión, más reglas que los trabajos forzados para el primero y el trabajo obligatorio y la reclusión celular para la segunda, entendiendo que es "de positivas conveniencias, que, salvo aquellas reglas fundamentales, la organización y régimen de los presidios y prisiones, sea obra de leyes o reglamentos especiales".

Este ha sido también el criterio de la Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados. No ha establecido en el proyecto en revisión más diferencias entre la reclusión y la prisión, que la clase del trabajo y la disciplina carcelaria. "Los condenados a reclusión podrán ser empleados en toda clase de trabajos públicos, mientras que los condenados a prisión sólo podrán ser empleados en labores dentro del establecimiento.

"Lo esencial en materia carcelaria, es que los penados trabajen y que aquél se imponga de manera obligatoria.

"Es indispensable reglamentar por medio de una ley especial, complementaria del Código Penal, el cumplimiento de las penas, preservando el régimen carcelario.

"No hay objeto en incorporar esos preceptos al código, porque la penalidad y el sistema para el cumplimiento de la misma son cosas diferentes. El código prevé los delitos y fija las repesiones, debiendo ser aplicado por los jueces que absuelven o condenan.

"El régimen penal depende de la autoridad administrativa y se hace efectivo sobre los condena-

dos, que es a quienes se aplica. Es así extraño a los magistrados y al poder judicial."

"Es indudable, sin embargo, que los fines perseguidos al imponer penas para los delitos, pierden eficacia si el régimen carcelario, no se aplica de acuerdo con los propósitos que se tuvieron en vista al fijar las represiones. Por eso conviene establecerlo en una ley especial, como lo dejamos manifestado" ("Exposición de motivos", pag. 37).

De acuerdo con este criterio, que nosotros compartimos, la Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria redactó un proyecto sobre régimen carcelario en toda la república, el cual figura en una de las órdenes del día de la H. Cámara de Diputados. El doctor Rojas tomó de ese proyecto algunas disposiciones sobre el régimen de las penas para incorporarlas al Código Penal; pero consideramos que por los fundamentos transcritos, no corresponde aprobar las modificaciones indicadas en su informe.

La comisión ha creído conveniente, en cambio, aceptar las indicaciones señaladas en el mismo informe, en el sentido de determinar en la parte general del Código la duración de las penas temporarias privativas de la libertad. En este punto no comparte las opiniones de la Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados, según la que en la parte general no debe consignarse sino la calidad de las penas, debiendo quedar la determinación de la cantidad para la parte especial.

Los proyectos más modernos, como el sueco y el suizo, fijan en la parte general la calidad y la cantidad de las penas. Así, el anteproyecto de Código Penal para Suecia, preparado por Thyrén, dispone en el capítulo II, "De las clases de penas," "La reclusión durará perpetuamente o bien un tiempo determinado, que no sea inferior a seis años, ni superior a veinte, fuera de los casos mencionados en el capítulo X." (art. 3). "La prisión que se impone directamente, no debe ser inferior a tres meses, ni superior a tres años, fuera de los casos mencionados en el capítulo X." (art. 50.)

El anteproyecto suizo, en cuya redacción tanta parte ha tenido el insigne criminalista Stöös, dispone en la parte general, Capítulo III, "Penas, medidas de seguridad y otras medidas": "1o. La reclusión es la más grave de las penas privativas de la libertad. La duración de la reclusión es de un minimum de un año y de un maximum de quince años; en los casos especialmente previstos por la ley, la reclusión es perpetua" (art. 36). "La duración de la prisión es de ocho días, como minimum y de un maximum de dos años, salvo disposición en contrario y expresa de la ley". (Art. 37).

En vista de estas consideraciones y antecedentes, la Comisión aconseja un agregado a los artículos 6o. y 9o. del proyecto en revisión, los cuales quedarían redactados en la siguiente forma:

Art. 60. La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase, con tal que no fuesen contratadas por particulares. La reclusión temporal no será inferior a un año ni superior a veinticinco años.

Art. 90. La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos. La prisión temporal no será inferior a cuatro días ni superior a veinticinco años.

VI

Libertad condicional

El art. 13 del proyecto en revisión instituye la libertad condicional, como lo hacía también el de 1906. "Otra institución adoptada hoy, casi universalmente y que también proponemos — decían en su informe los autores de este último — es la libertad condicional de los penados que hayan dado prueba de positiva reforma. Nada más justo, en efecto, si el objeto principal de la pena, es la reforma, que suspender sus efectos, cuando ella ha dado los resultados buscados. Esto en cuanto a la justicia de la institución, que por lo que respecta a sus beneficios, a sus ventajas prácticas, las siguientes palabras del informe presentado a la Cámara de Representantes de Bélgica en 1883, las demuestran de una manera concluyente: "Durante la exarcelación del condenado, ella es un estímulo de buena conducta, un germen de enmienda, una prima ofrecida al detenido arrepentido. Después de obtenida la libertad, ella contribuye eficazmente a mantener al favorecido en la vía del bien, a prevenir su caída."

Como se recuerda en el informe y en la exposición de motivos del proyecto en revisión, la libertad condicional se diferencia fundamentalmente del derecho de pedir gracia que reconocen a los penados los artículos 73 y 74 del Código vigente. Este derecho no significa nada preciso ni positivo, porque está garantido, desde luego, por la Constitución y además, la facultad de acordar gracia corresponde siempre al Presidente de la República o a los Gobernadores de provincia, independientemente de lo que disponga el Código Penal.

"Por otra parte — agregaba el informe, — la gracia extingue completamente la pena y el penado queda librado al freno único de su conciencia y de sus sentimientos. En el sistema de la libertad condicional, el condenado está obligado a observar buena conducta durante el tiempo de la condena, so pena de que no se le cuente en la computación de aquella, el término que ha durado su libertad; constituye, pues, un resorte poderoso para mantenerlo en el camino del bien. La reforma queda, asimismo, mejor comprobada, después de esta doble prueba: la de la cárcel y la de la libertad."

La libertad condicional es uno de los puntos fundamentales de la reforma penal. Es de lamentar que ella no exista todavía en nuestra legislación positiva, siendo que data de hace más de setenta años en Inglaterra. En 1847 se concedió como privilegio a los deportados de Australia, y en 1853 se hizo extensiva a los penados de la Gran Bretaña. En 1871 se hizo general en Alemania, y desde hace mucho tiempo existe en Suiza, Dinamarca, Francia, el Japón y otros países.

Si bien ofrece caracteres distintos, la liberación de los condenados antes de cumplir la sentencia, se aplica también en los Estados Unidos. La libertad bajo palabra ("release on parole"), es uno de los principios fundamentales del sistema de los reformativos. Se diferencia de la libertad condicional en que para conseguirla no se atiende tanto al tiempo extinguido de la pena, como a la conducta del penado y en que el liberado sobre palabra, continúa bajo la tutela de la autoridad peniten-

ciaria. En el caso de la libertad condicional, aparece más marcada en el individuo la condición de penado; en el caso de la libertad "on parole", la de obrero. La sentencia indeterminada y esta forma de libertad, que es su corolario, han conseguido en Norte América el ochenta por ciento de correcciones. "Las instituciones penitenciarias en los Estados Unidos", por Fernando Cadalso, pág. 67 y siguientes, 193 y siguientes; Luis Jiménez de Asúa, "La política criminal en las legislaciones europeas y norteamericanas", (págs. 180 y siguientes).

El H. Senado encontrará en el informe redactado por el doctor Rojas, algunas observaciones al artículo 13 del proyecto en revisión, que, en parte, ha recogido esta Comisión. Proponemos varias modificaciones a ese artículo, las cuales no desvirtúan la libertad condicional, sino que, por el contrario, tienden, a nuestro juicio, a completarla y a mejorarla.

En primer lugar, consideramos que es de toda justicia extender el beneficio de la libertad condicional a los condenados a prisión o reclusión por menos de tres años. El art. 13 del proyecto lo acuerda únicamente a los condenados a más de tres años. Aconsejamos, pues, una modificación a ese artículo, para que la libertad condicional se extienda al condenado a reclusión o prisión menor de tres años, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión.

Aparte de la razón de justicia ya invocada, hemos tenido en cuenta para aconsejar esta modificación lo dispuesto en los proyectos europeos más recientes y mejor inspirados. El proyecto de código alemán acuerda la libertad condicional a los condenados a penas privativas de libertad de larga duración, cuando hayan cumplido las dos terceras partes, pero por lo menos un año de la pena impuesta. (Art. 26).

El anteproyecto suizo de 1916, contiene esta disposición: "Art. 38. — 1. Cuando un delincuente no reincidente haya sufrido los dos tercios de su pena, y por lo menos un año de reclusión u ocho meses de prisión, la autoridad competente podrá ponerlo en libertad condicionalmente por el tiempo de la pena que le reste, si se ha conducido bien en el establecimiento, si es de preverse que se conducirá bien en la libertad y si en cuanto de él dependía ha reparado el daño constatado por el juez."

La comisión aconseja, también, que se modifique el art. 13 en el sentido de que antes de ordenar la libertad condicional, los jueces recaben un informe sobre el penado de la dirección del establecimiento carcelario. Cree, igualmente, que debe imponerse al liberado la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas y someterlo al cuidado de un Patronato.

Estas modificaciones responden a los fines perseguidos por la institución de la libertad condicional y las hemos tomado del anteproyecto suizo. ("Code penal suisse", Avant Projet, texte adopté par la deuxième commission d'experts, octobre 1916, Zurich, art. 38, p. 25).

Por último, de acuerdo con lo expuesto en el informe redactado por el doctor Rojas, consideramos necesario agregar al artículo 13 una cláusula determinando que las condiciones indicadas en el mismo regirán en los casos de penas perpetuas hasta cinco años, a contar desde el día de la libertad condicional.

Septiembre 23 de 1920

En consecuencia, el art. 13 quedaría así: "El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiese cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o prisión por más de tres años, que hubiese cumplido los dos tercios de su condena, y el condenado a reclusión o prisión por menos de tres años, que, por lo menos, hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión observando con regularidad los reglamentos carcelarios, obtendrán la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento, bajo las siguientes condiciones:

10. Residir en el lugar que determine el auto de soltura.
20. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas.
30. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
40. No cometer nuevos delitos.
50. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por la autoridad competente.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta cinco años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

Admitida la aclaración indicada en el último párrafo de este artículo, es necesario modificar el art. 16, que debe quedar en esta forma: Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años, señalado en el artículo 13, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

VII

La pena de multa

En el mismo título "De las penas", la comisión aconseja otra modificación. Se refiere a la pena de multa. Creemos que cuando ésta se aplicara y el condenado no tuviese bienes para hacerla efectiva, se le podrá autorizar a amortizarla mediante el trabajo libre, pagándola por cuotas.

Esta modificación tiende especialmente a "proteger" a los delincuentes de la clase pobre, evitando así el reproche dirigido con frecuencia a la pena de multa. Se ha dicho con cierta razón, que esta pena produce mayor sufrimiento al pobre que al rico. Introducimos dicha modificación, inspirándonos en el sentido "social" con que la multa se ha reglamentado en los proyectos suizo y sueco, de conformidad con las exigencias de la política criminal.

El art. 48 del anteproyecto suizo establece: "La autoridad competente podrá autorizar al condenado sin recursos a pagar la multa por plazos, siendo fijados por la misma el monto y la fecha de los pagos, según la situación del condenado. Podrá, también, autorizarle para extinguir la multa por medio de una prestación en trabajo, especialmente por cuenta del estado o de un municipio". Según recuerda Jiménez de Asúa, una ley del cantón de Vaud de 1875, autorizaba ya esta forma de extinguir la multa en determinados casos. ("La unificación del derecho penal en Suiza", pág. 269).

El anteproyecto sueco de 1916, contiene en el capítulo

II las siguientes disposiciones sobre la pena de multa: "Art. 20. Cuando alguno fuera condenado a multa: el tribunal, atendiendo a la fortuna de la pena de multa, la cantidad, y de multa del condenado, renta, cargas domésticas y demás circunstancias que influyen en la posibilidad de hacer efectivo el pago, fijará una cierta cantidad, que se considerará como constitutiva de la exacción que el multado puede sufrir por día; la pena de multa condenará a una de estas exacciones como máximo y a doscientas como máximo, cuando en la ley no se determine otra cosa."

"Art. 21. — Cuando el importe de la multa impuesta exceda de cinco de dichas exacciones, podrá pagarse en plazos de una o varias exacciones cada vez; pero no podrá hacerse efectiva en fracciones del tipo de exacción. Cuando después de cuatro plazos, no se ha pagado enteramente la multa, se satisfará de una vez el resto."

El traductor español del anteproyecto sueco, comentando la parte relativa a la multa, dice: "La pena de multa se regula en el anteproyecto sueco de un modo original y admirable. La exigencia científica que la pena pecuniaria se adapte a las condiciones penales del penado, se concilia en la necesidad de fijar el cuantía de la multa en relación con la gravedad del delito. Luego explica el término científico de "exacción" empleado en el proyecto. "En sueco se designa este tipo de exacción con una sola palabra, muy expresiva y es imposible traducirla sintéticamente a nuestro idioma: "dagsbot". De este modo se concilian la individualización de la multa y el criterio de igualdad de la pena para delitos análogos. Supongamos que el Código castiga una infracción determinada con una pena pecuniaria de 10 a 50 "dagsbotes". La misma infracción será penada siempre con la misma cantidad abstracta, pero para unos significará, por ejemplo, de 10 a 20 coronas y para otros de 1.000 a 5.000". (Jiménez de Asúa, "El anteproyecto de Código Penal sueco de 1916", pág. 20).

En fin, el anteproyecto de Código alemán consigna también características disposiciones sobre el cumplimiento de la pena de multa. Entre otras, merecen citarse las siguientes: "La cuantía de la pena pecuniaria se calculará atendiendo al caudal del condenado". "El tribunal podrá acordar en la sentencia (Art. 30). "El tribunal podrá acordar en la sentencia un plazo máximo de tres meses para el pago de la multa; también podrá permitirse al condenado la satisfacción de su importe mediante pagos parciales, efectuados en el plazo máximo de un año". (Art. 31). "Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria mediante su trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello. Los detalles relativos a la clase de trabajo y su computación respecto de la multa, serán determinados por las disposiciones administrativas del Consejo federal y por las disposiciones administrativas de cada uno de los estados federados". (Art. 32).

El artículo 21 del proyecto quedaría redactado en esta forma: "La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinará la sentencia, dentro del máximo y mínimo establecido para el delito, teniendo en cuenta, además de las causas legales del art. 40, la situación económica del penado."

Si el reo no pagase la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión, que no excederá de un año y medio.

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, su-

dios u otras entradas del condenado. En todos los casos, cuando la multa no se hubiese satisfecho seis meses después de la condena, corresponde la prisión del condenado.

Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello.

También se podrá autorizar al condenado sin recursos a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado".

VIII

Condenación condicional

En el título III la Comisión sólo introduce una modificación. Consiste en la supresión del inciso 2o. del artículo 28, cuya redacción quedará en la forma siguiente: "La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio."

En el informe del doctor Rojas se indican las razones de la supresión de dicho inciso, a las cuales se remite esta comisión.

En cuanto a la institución de la condena condicional, la Comisión entiende que será una de las grandes reformas de nuestra legislación penal. La aceptaron los autores del proyecto de 1906, considerando que es una verdadera conquista del derecho penal moderno.

Como lo hizo con la libertad condicional, Inglaterra fué la primera nación europea que incorporó la remisión condicional a su legislación positiva. Lo hizo por la "Summary jurisdiction act de 1879," extendiendo después sus efectos por la ley de 8 de agosto de 1887, y codificando últimamente las disposiciones relativas a esta materia por una ley dictada en 1907.

Pero antes que Inglaterra, la remisión condicional se estableció en los Estados Unidos, designándose con el nombre de "Probation system." Se considera a Massachusetts como la tierra de origen de esta institución, reglamentada como sistema, porque al principio no fué sino una gracia por la ley de 1869.

Aunque en otra forma que en Inglaterra y los Estados Unidos, la condena condicional existe en Bélgica desde 1888; en Francia (ley Bérenger), desde 1891; en el ducado de Luxemburgo desde 1892; en el cantón de Ginebra desde el mismo año; en Portugal desde 1893; en Noruega desde 1894; en Sajonia y Rusia desde 1895; en Baviera desde 1896; en Hamburgo desde el mismo año; en el cantón de Valois desde 1899; en el cantón del Tessino desde 1900; en el ducado de Brunswick, cantón de Friburgo y gran ducado de Hesse desde 1903; en Bulgaria e Italia desde 1904, y en España desde 1908. En Australia existe desde hace muchísimo tiempo.

Además, "los proyectos de Código Penal más recientes, como el francés, el federal suizo, el austriaco, el húngaro, admiten la condena condicional; en Alemania y en otros lugares se han hecho tentativas para introducirla, habiéndose llegado ya a discutir en el Reichstag sobre el asunto, del propio modo que también en las dietas territoriales", (Dorado, "Sobre la facultad de indultar las penas, concedida a los tribunales," en la "Revista Política y Parlamentaria," Madrid, febrero 15 de 1900).

Los anteproyectos suizo y sueco de 1916 la reglamentan de un modo especial, estableciendo el primero que pueden remitirse las penas de privación de libertad que duran de un año, cuando el delincuente no ha-

ya sido condenado ni en el país, ni en el extranjero, y sus antecedentes permitan suponer que esta medida bastará para impedirle cometer nuevo delito, y aplicándola el segundo en las mismas o parecidas condiciones a los condenados a penas privativas de libertad y a la prisión impuesta subsidiariamente por la multa no satisfecha.

El sistema continental europeo difiere del sistema angloamericano. Mientras éste suspende condicionalmente la sentencia, quedando el delincuente así perdonado bajo la vigilancia y el amparo de los "probation officers", aquel remite la pena misma que taxativamente impuso el juez en la sentencia.

El proyecto en revisión, como el de 1906, acepta el sistema continental europeo. El informe de los autores del segundo considera como autor del sistema a Bérenger, quien lo sostuvo en el Senado de Francia en 1890, cuyas palabras elocuentes en defensa del sistema recoge, y las cuales nos permitimos reproducir en parte.

"Hay una idea general que en todas partes se reconoce y es que indispensablemente debe haber una distinción marcada en la represión del hombre que por primera vez comparece ante la justicia y en cuya vida el hecho imputado es como un accidente, y el malhechor de hábito contra el cual la justicia ha agotado las advertencias y para quien es un juguete desafiarse sus decisiones. Para la conciencia que ha conservado intacto el sentimiento del honor y el saludable temor de la prisión, la amenaza de la pena puede producir efectos tan serios, tan eficaces como la pena misma. Puede aun suceder que sea más saludable que la pena. Sin hablar de los efectos detestables causados por los contactos de la prisión, cuántos desfallecimientos, cuántas rebeliones contra la sociedad, no han nacido de una represión inútil? Para el reincidente, al contrario, en quien el sentimiento moral está profundamente alterado ¿quién podría negar que el solo recuerdo está en el sufrimiento físico? Es necesario, pues, en tanto que posible, evitar al uno la prisión y hacerla más rigurosa para el otro."

Por su parte, el más distinguido de nuestros criminalistas ha expuesto en un estudio sintético los motivos particulares que pueden alegarse para el establecimiento de la condena condicional en el país. "Es el primero, dice el doctor Rodolfo Rivarola, el desenvolvimiento económico en que el mismo se encuentra y en que continuará por larguísimo tiempo. Las facilidades para hallar trabajo y someterse a la disciplina moralizadora de la obligación diaria, son un motivo que, en términos generales, la ley no puede descuidar, y que en particular deberá proporcionar un criterio a los jueces facultados para acordar la pena condicional.

"La ley que establezca la condena condicional — escribe al final de su estudio, — vendrá en parte a resolver el problema de la insuficiencia de las cárceles y permitirá destinar algunos recursos al mejoramiento de las existentes", (Rodolfo Rivarola, "La condena condicional," 1911, páginas 14 y 19).

El proyecto en revisión ha introducido en esta materia importantes modificaciones al proyecto de 1906. Así, ha incorporado la multa, concorde con los proyectos más recientes, al sistema de la suspensión condicional de la pena. En vez de dos, fija en tres años el tiempo de la pena a los efectos de obtener la remisión condicional. En lugar de dejar librada, esta en definitiva a la autoridad policial de la Capital, provincia o territorio, según el caso, por los informes que produjera sobre su procedencia o improcedencia, la deja en manos del juez, obligándolo a formarse un criterio propio sobre la personalidad moral del condenado. Por eso mismo, la Comisión no ha tocado las disposiciones fundamentales sobre esta institución consignadas en el proyecto de la H. Cámara de Diputados.

IX

Reparación de perjuicios

El título IV es de gran trascendencia y de suma importancia, por lo cual la Comisión después de una larga deliberación resolvió mantenerlo, no obstante las observaciones formuladas en el informe del doctor Rojas, pero aconsejando una modificación que, a su juicio, aparta las críticas dirigidas a esta parte del proyecto.

Si bien el Código vigente reconoce en diversos artículos, la obligación de reparar por parte de su autor el daño causado por un delito, como asimismo el Código Civil, las dificultades que se han presentado en la práctica a causa de las distintas jurisdicciones en que deben ejercitarse las acciones civiles y criminales y de la existencia de las cuestiones prejudiciales, hace necesario que el juez del proceso tener la más pronta reparación del daño sufrido; 3o. por los perjuicios causados a la víctima, a su familia o a un tercero, a consecuencia del delito.

La escuela positiva ha insistido desde sus comienzos en la justicia y conveniencia de señalar en la sentencia condenatoria la indemnización del daño a las víctimas del delito.

En su conocida obra "Des principes sociologiques de la criminologie", prologada por el ilustre fundador de dicha escuela, Raoul de la Grasserie expone sintéticamente las razones fundamentales que determinan la solidaridad de la acción civil y de la acción penal. Crítica el sistema de la confusión de las dos acciones, el más antiguo de todos, propio de las sociedades primitivas, en las cuales el individuo ofendido se ocupa a la vez de indemnizarse, de vengarse y de defenderse.

El sistema de la separación absoluta de las dos acciones, que se intentan ante jurisdicciones diferentes, está en vigor en los países de derecho inglés, en Holanda, en Alemania. El Código Penal holandés determina en su artículo primero que la acción civil es independiente de la acción penal y sólo por excepción la parte que limita su demanda a ciento cincuenta florines puede intervenir en la instancia criminal. En Alemania no se puede unir ambas acciones sino en casos determinados.

El sistema de la interdependencia de las dos acciones es el sistema adoptado por la mayor parte de las legislaciones. Es un sistema muy complicado en sus detalles y da lugar a numerosas dificultades en la doctrina y la jurisprudencia.

El sistema de la solidaridad de las dos acciones, preconizado por Bentham y sostenido por Ferri, se funda en que la reparación del daño ante la jurisdicción criminal es de interés público. Es el más justo y el más práctico. Lo admite en parte el Código Penal de Austria. En España la solidaridad es mayor, pues la acción civil es ejercida con la acción penal por el ministerio público, haya o no acusador particular: los daños y perjuicios son, pues, determinados de oficio.

La reparación del daño había sido establecida en el proyecto del doctor Tejedor, que éste tomó del Código español. El Código Penal vigente eliminó del proyecto los capítulos relativos a la responsabilidad civil, pero dejando algunas disposiciones aisladas, como las de los artículos 139, 176 y 225 que admiten el principio de la reparación del daño.

Los autores del proyecto de 1891 lo reconocieron expresamente y en su "Exposición de motivos" dijeron: "Si el delito es un quebrantamiento del or-

den jurídico que debe hacerse cesar y repararse del modo más perfecto posible, es evidente que el poder social debe procurar el restablecimiento del orden alterado obligando al delincuente a resarcir todos los daños causados por la alteración. Una pena que sólo tiende a reparar el daño moral causado a la sociedad, descuidando el resarcimiento del perjuicio real inferido a la víctima del delito, no llena los objetos racionales de la penalidad, ni justifica suficientemente el ejercicio del derecho de represión por el Estado... "No tiene explicación satisfactoria el sistema del Código vigente que excluye de la pena la reparación debida por el delincuente a su víctima, dejando que ésta ventile ese asunto, como meramente privado ante la jurisdicción y conforme a las leyes propias del derecho civil. Esa pena incompleta no llena sino a medias su objeto.

"Por otra parte, parece más conforme con la naturaleza de la administración de justicia, que un hecho punible dé lugar a un solo proceso, evitándose de ese modo: 1o. La posibilidad de que la sentencia recaída en el juicio criminal sea contradictoria con la pronunciada en el juicio civil; 2o. La pérdida de tiempo por el damnificado que desea, naturalmente, obtener la más pronta reparación. Los gastos provenientes de la multiplicación de los procesos.

"Finalmente, la unidad y la lógica de la legislación exigen que el derecho penal rija todos los efectos del delito, con sujeción a sus principios y para el mejor éxito de sus fines como el derecho civil rige todos los efectos de los hechos civiles". ("Proyecto de Código Penal para la República Argentina", redactado por los doctores Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo, 2a. edición, pág. 42).

Los autores del proyecto de 1906 admitieron también el sistema de la solidaridad de las acciones civil y penal. En su informe levantaron la objeción de que, según el Código Civil, la indemnización del daño causado por el delito, sólo puede ser demandada por acción independiente de la acción criminal, diciendo que ella "no tiene ya fundamento, por una de esas anomalías de nuestra legislación, en el derecho positivo que rige en la capital y territorios federales. El Código de Procedimientos en lo Criminal, ha derogado, en efecto, ese precepto del Código Civil, disponiendo que la sentencia, en el juicio penal, debe resolver todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hubieren sido objeto del juicio".

En cuanto a la objeción hecha al proyecto en revisión sobre inaplicabilidad del título IV en las provincias, por razones de orden constitucional, esta Comisión no la cree admisible. En efecto, la reparación del daño va unida a la pena, necesariamente, y, de consiguiente, puede y debe formar parte del sistema represivo que, según la Constitución, es de carácter federal.

Se ha observado, también, que la obligación impuesta a los jueces del crimen para ordenar de oficio el monto del daño material causado a la víctima, a su familia o a un tercero por el autor del delito, podría dificultar la tramitación de las causas criminales, debido al recargo de trabajo de los magistrados.

La Comisión ha recogido esta observación, y de acuerdo con el parecer de un distinguido miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, el doctor González Roura, cree conveniente substituir en el art. 29 la palabra "ordenará" por las palabras "podrá ordenar". En esta forma, los jueces tendrían la facultad de poder fijar de oficio,

en la sentencia condenatoria, la indemnización del daño, sin perjuicio de estar obligados a hacerlo a requerimiento de parte.

X

La imputabilidad y las causas sociales del delito

La Comisión ha admitido el criterio de la H. Cámara de Diputados, respecto de la imputabilidad, y por eso no ha tocado fundamentalmente el Título V del proyecto en revisión, limitándose a aconsejar un agregado a uno de sus artículos.

La Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la otra Cámara ha tratado extensamente en la "Exposición de motivos" del proyecto los puntos relativos a la responsabilidad y la imputabilidad, tan discutidos por la ciencia penal.

"El proyecto que presentamos a la consideración de la H. Cámara — dice dicha Comisión — resuelve la cuestión responsabilidad, con criterio moderno y humano; prescinde de resabios expiatorios y aparta problemas trascendentales de psicología. Se limita a indicar los delitos y a fijar sus penas, teniendo en cuenta que sólo los previstos en el Código pueden ser los castigados, de acuerdo con un artículo de la Constitución, y a establecer en qué casos la pena no concurre, a pesar de hallarse realizado un hecho, al cual la ley califica de delito. Los jueces, por lo demás, graduarán la pena en cada caso, de acuerdo con los límites elásticos que el Código señala y de conformidad a los atenuantes y agravantes que no se enumeran, fijándose únicamente los criterios.

"De esta manera se abren márgenes que permitirán la individualización de la pena reclamada por los criminalistas más notables, cuando afirman que la pena para ser eficaz no debe ser adecuada al delito, sino a la índole del delincuente que ha de sufrirla. El propósito del sujeto debe tenerse en cuenta, para apreciar el grado de peligro que representa el mismo a los derechos sociales".

De esta manera el proyecto se aparta, con razón, del criterio de la escuela clásica, cuyo error está, como dice el célebre criminalista Prins, "en haber confundido cosas tan desiguales como la absolución y la condena de una parte, el mérito y demérito de otra, y de haber, en suma, considerado los hombres como si fuesen siempre los árbitros de su suerte".

En cambio se inspira en las teorías más modernas y científicas que toman en cuenta a los efectos de la imputabilidad la "imprudencia" o la "peligrosidad" de los delinquentes. En este sentido, trata de conciliar de acuerdo con las doctrinas defensionistas, el máximo posible de responsabilidad social con el mínimo posible de vejación individual.

Y por lo mismo, al pretender emplear el término "imputabilidad" en vez de la palabra "responsabilidad", sin significado alguno para la criminalología y el nuevo derecho penal, la "immutabilidad" debe entenderse en el sentido que le da Liszt: "es la capacidad de conducir socialmente. Bajo en cuanto esta capacidad existe, se impone, puede ser imputada, como culpable la conducta antisocial. Allí donde la facultad de adaptación social" falta completa y permanentemente, no tiene ningún sentido que se encuentre imputable la conducta social, en las motivaciones contenidas en la amenaza y ejecución de la pena" (Tratado de derecho penal, tomo 2, pág. 284).

Como lo ha demostrado brillantemente el jurista polaco Mieczyslaw Szever, admitiendo este criterio fundamental, la pena, — que no es el postulado del bien general sino un correctivo de la organización, — responde en el estado actual de la sociedad, al fin de hacer de un ciudadano antisocial un ser social, en el sentido de que debe resignarse "a vivir según las reglas de la formación social existente".

Es claro que la imputabilidad y la pena siguen la evolución social y varían con las transformaciones de la organización. Cuanto más se fije la cooperación, dice el autor antes nombrado, en los cuadros trazados por el ideal realizable de la justicia, la pena servirá exclusivamente los intereses extendidos por todas partes en el grupo social, en lugar de servir principalmente los intereses de las clases dominantes. Luego, pues, toda democratización, es decir, toda extensión de protección, que asegure la organización sobre los intereses de los miembros del grupo hasta ahora olvidados, importará un perfeccionamiento en la organización penal.

Esto sucederá plenamente el día en que toda la cooperación se hará por derechos iguales, donde a consecuencia de la organización no habrá que fortificar la situación dominante de una minoría privilegiada; pero se hará porque las fuerzas que nacen en la sociedad se distribuyen igualmente en provecho de todos. Entonces solamente la manera normal de cooperar, cuya realización persigue la represión social, será igualmente útil para la totalidad de los miembros del grupo y será por ella igualmente deseada. (Mieczyslaw Szever, "La conception sociologique de la peine". París, 1914, págs. 49 y 57 y sgts).

Al estudiar con un criterio amplio y moderno la cuestión de la imputabilidad, la Comisión creyó necesario y justo, inspirándose en la expresada concepción sociológica de la pena, establecer entre los motivos que determinaron a un hombre a delinquir, la miseria, o la dificultad de ganarse el sustento necesario para sí y los suyos.

No es posible al determinar las causas del delito dejar de tomar en consideración la condición económica del delincuente. "El delito está relacionado, como dice Alimena en las "Notas filosóficas de un criminalista", con las condiciones económicas; el aumento en el precio del trigo, tiene una notable repercusión en el producirse del delito, repercusión tanto más segura y patente, cuanto que ella se combina con la falta de trabajo, o con la disminución de los salarios. El delito es mucho más frecuente en los países más míseros, en los países en que la población está mucho más difundida o es más densa, en los países en que abundan más los pleitos civiles y las expropiaciones, en los países en que la cosa controvertida y expropiada, tienen un valor más bajo. El delito es más frecuente, cuanto más inestables son las condiciones económicas, o cuanto más se acumulen las riquezas en pocas manos, mientras en derredor es la miseria más triste".

A las mismas conclusiones llega Turati en su interesante estudio sobre "Il delitto e la questione sociale". Los factores físicos y antropológicos de la criminalidad, dice, reciben sus fuerzas criminógenas efectual sólo del concurso de las modalidades particulares del "asletto" social.

En vano el autor de "La Criminalología" pretendió demostrar que la manera como la riqueza está distribuida no es una de las causas de la delincuencia y que sobre ella no ejerce ninguna acción la situa-

ción económica del proletariado, pues Ferri, su compañero de escuela, demostró la tesis contraria. Y Colajanni evidenció en su "Sociología Criminal" que todas las causas energéticas de la delincuencia de origen o de carácter social están relacionadas y más o menos netamente determinadas por el factor económico, en lo cual coinciden los pensadores de las más opuestas escuelas, de Morgan a Lacombe, de Marx a Molinari, de Engels a Thulié, de Spencer a Schafle, a Gumplowicz, a Loria, a Vaccaro.

Cuando la sociedad no asegura a todos sus miembros el derecho a la vida por el trabajo o la asistencia social, no puede en justicia imputar un delito al individuo que procedió impulsado por la miseria. El doctor Wylm escribe sobre este particular: "Ya te he dicho que primero había que vivir y que no aseguramos la vida a los ciudadanos. Oye una voz lejana: no es la de un reformador temerario; resume todo lo que yo te decía de la caridad comparada con el deber social: "Algunas limosnas que se hacen a un hombre desnudo, en la calle, no reemplazan las obligaciones del Estado, que debe a todos los ciudadanos una subsistencia asegurada, el alimento, un vestido a propósito y un género de vida que no sea contrario a la salud". No es Mr. Jaurés ni Mr. Jules Guesde quien ha escrito eso, sino Montesquieu, libro XXIII, Capítulo XIX de "El espíritu de las leyes".

La jurisprudencia noblemente inspirada, ha abierto el camino para llegar al reconocimiento de la no imputabilidad de los delitos cometidos al impulso de la miseria. Justo será recordar al Juez Magnaud, para quien "la miseria y el hambre hacen desaparecer el libre arbitrio y debilitan la noción del bien y del mal". "Una madre de familia — dijo en una de sus célebres sentencias — que coge un pan de una panadería, bajo la presión de la miseria y el hambre, no comete delito, porque no ha habido intención fraudulenta".

Y el sustituto del Procurador General ante la Corte de Apelaciones de París, doctor Maxwell, ha escrito en su libro "Le crime et la société": "Para el que examina sin prevención los elementos de que se compone nuestra sociedad, es evidente que los derechos y los deberes de los individuos y de la colectividad son recíprocos, y que no puede haber derechos sin obligaciones correspondientes. ¿Cómo exigir a todos los ciudadanos el respeto de las leyes y el impuesto de sangre, cuando la vida material no está asegurada a todos los ciudadanos? Los que se hallan en esta imposibilidad de procurar las cosas necesarias para la existencia, de que hemos hecho el rasgo distintivo de la miseria, pueden con una apariencia de razón, negarse a cumplir deberes que les son impuestos sin compensación equitativa. Pueden decir que la ruptura del lazo social no procede de ellos, sino del grupo que los deja morir de miseria". (Ob. cit., pág. 173).

La legislación incorpora ya la miseria como causa eximente o atenuante en la ejecución de los hechos calificados por la ley como delitos. Los códigos de los cantones de Friburgo y Neuchâtel declaran que aquel que en extrema necesidad y para poder subsistir, comete un robo de comestibles, no puede ser objeto de ninguna persecución ("estado de necesidad").

El anteproyecto de Código penal para Suiza, ha recogido este antecedente legislativo, comprendiendo entre las circunstancias atenuantes la miseria extremada (Art. 63).

Lo mismo ha hecho el anteproyecto sueco. Con-

sidera como atenuante la circunstancia de que el culpable "sea impulsado al delito por la dificultad de ganarse sustento necesario y el de los suyos". (Art. 13, 3.º).

Por estas razones la comisión aconseja la siguiente redacción del artículo 41: "A los efectos del artículo anterior, se tendrán en cuenta:

- 1.º — La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y la extensión del daño y del peligro causados.
- 2.º — La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria, o la dificultad de ganarse el sustento necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiese incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales que demuestren su mayor o menor perversidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

Cuando el reo esté acusado de haber cometido un delito castigado con prisión o reclusión mayor de diez años, no podrá pronunciarse la condena antes de que su estado mental sea examinado por un médico especialista".

La última parte del artículo ha sido tomada del anteproyecto sueco, cuya disposición al respecto es ésta: "Cuando alguno ha cometido un delito que está castigado en la ley con pena de reclusión perpetua, no podrá pronunciarse la condena antes de que su estado mental sea examinado por un médico. La misma regla es aplicable cuando alguno que ha sufrido una pena privativa de libertad de diez a doce años, comete un delito que está castigado en la ley con pena de reclusión". (Art. 3, Cap. IV).

La Comisión considera que de no admitirse de una manera general el examen médico de los encausados, de acuerdo con las últimas conquistas de la psiquiatría y del derecho penal, el Código debe imponerlo, por lo menos, en los casos en que pudiera corresponder prisión o reclusión mayor de diez años.

Ya en la Capital Federal existe desde hace años la oficina de estudios médico-legales, creada por decreto del P. E. el 20 de mayo de 1905. Tiene por objeto: a) Expedir los informes sobre los menores de quince años, a los efectos de lo dispuesto en el Art. 81, inciso 3.º del Código Penal; b) Examinar a los encausados de toda edad, para dictaminar sobre su grado de responsabilidad, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 81 y 83, inciso 1.º del mismo Código.

El ex director de la Cárcel de Encausados de Buenos Aires señor Duffy, presentó en aquella época al P. E., por encargo del Ministerio de Justicia, desempeñado por el presidente de esta Comisión, un proyecto estableciendo que ningún encausado podría ser condenado sin previo informe médico sobre su estado mental y capacidad para delinquir.

Por su parte, en el Congreso Penitenciario argentino de 1914, los doctores Brandam y Jofré presentaron un informe acerca de la procedencia del examen psiquiátrico de los encausados durante la

instrucción. Sostenían en él que esta medida satisficiera los ideales de la criminalología, aportando al magistrado todos los factores necesarios al exacto conocimiento del delincuente, del delito y sus auxiliares. El Congreso votó por indicación de los citados relatores esta conclusión: "Incluir en el Código de Procedimientos en lo Criminal como norma, el examen psiquiátrico de todos los encausados en el período de instrucción, constituye un progreso en ciencia penal".

Sin perjuicio de las disposiciones que en este sentido contengan o se incluyan en los Códigos de Procedimientos de la Capital y de las Provincias, la Comisión entiende que el Código Penal debe contener una norma general sobre el examen clínico de determinados encausados antes de la sentencia, aplicable en todo el territorio de la república.

En cuanto a las reformas fundamentales introducidas por el proyecto en revisión respecto de la imputabilidad, nos remitimos a la "Exposición de motivos" de la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados.

Esta Comisión hace suyas todas las consideraciones allí formuladas, en general, acerca de las perturbaciones del autor de un delito que deben considerarse como eximentes, de la fuerza física o amenazas y de la defensa legítima, y especialmente las relativas a los menores, que justifican la necesidad y la justicia de las nuevas disposiciones sobre su tratamiento por la ley penal. Es este uno de los puntos en los que podemos haberlo dicho ya, del proyecto en revisión, que el relativo a la internación de los delincuentes alienados, resuelto de acuerdo con los principios de la política criminal. (Véase la "Exposición de motivos", págs. 64-65).

II

Tentativas

En el título VI, la Comisión aconseja una reforma fundamental en virtud de las justas críticas dirigidas en esta parte al proyecto de la H. Cámara de Diputados.

La Comisión que lo redactó, quiso apartarse del proyecto de 1906 en lo relativo a la definición de la tentativa. Este último, siguiendo al proyecto de 1891 y a casi todos los códigos penales vigentes, definió la tentativa, si bien determinó que para apreciar los actos exteriores que tuvieran relación directa con el delito que se tenía la intención de cometer, se tendrían en cuenta los antecedentes del agente (art. 41).

En cambio, la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados, siguiendo la opinión expuesta por el doctor Julio Herrera en la "Reforma Penal y el Código Italiano, no ha querido definir la tentativa, entendiendo, con el primero, que si la ley no define el homicidio o el robo, sino que fija los elementos de esos delitos y determina la pena que tendrán los que los cometieran, al tratar de la tentativa, debe adoptar idéntica orientación y decir: "el que comienza la ejecución de un delito y no la consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá tal pena".

Alguno de los proyectos de Código Penal más modernos, como el suizo y el alemán, tampoco definen la tentativa. Así, el segundo dispone en su artículo 75: "El que ha comenzado la ejecución de un crimen o de un delito intencional, si éste no ha sido consumado, será punible a consecuencia de la tentativa."

El anteproyecto suizo de 1916 dispone en su artículo 22: "La pena será atenuada para aquel que hubiera intentado cometer un delito y hubiera comenzado su ejecución; podrá serlo, para el que hubiera proseguido hasta su término, pero sin resultado, su actividad criminal."

El anteproyecto sueco trata de la tentativa en el Capítulo VII de la parte general. "En ciertos casos—dice el art. 1— que en la ley se encuentran especialmente detallados, se castigará la tentativa de delito. La tentativa tiene lugar cuando el culpable, sin haber consumado el delito, comenzó el acto, con el cual tendía a que aquél se realizase."

El distinguido profesor de la Universidad de Lund ha rechazado así el criterio aceptado por casi todos los tratadistas y legisladores, de establecer como regla general, el castigo de la tentativa. En la parte especial del Código es donde encuentra un lugar apropiado, según Thyrén, la definición del hecho delictivo y, por tanto, si la tentativa es o no punible.

Esto ha hecho decir a un comentarista, que el problema de la "penalidad" de la tentativa se regula en el anteproyecto sueco de modo extraño y no muy conforme con los principios de prevención y defensa. Refiriéndose a las reglas de la tentativa establecidas en el Capítulo VII, dice: "Este es el antiguo y desacreditado sistema de la escuela clásica, criticado por correccionalistas, positivistas y partidarios de la defensa social. El correccionalismo — desde su ángulo visual espiritualista — pedía ya que no se castigase más levemente la tentativa, sino cuando fuese indicio de una culpa menor. (Raoder, Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena en un sistema contradictorio). El positivismo mantiene también, en esta materia, un criterio subjetivo, equiparando la tentativa al delito consumado, cuando el peligro que dimana de una y otra sea idéntico. (Ferri, "Sociología Criminal"; Garófalo, "La Criminología"). Para la escuela de la defensa social, la noción del peligro que el delincuente representa se da con igual intensidad en la tentativa que en la consumación del acto, pues la no perfección del mismo, se debe a causas independientes de la voluntad del agente. La sociedad debe defenderse contra un fenómeno social: la voluntad rebelde de los criminales y los impulsos de las clases delincuentes". (Prins, "Science pénale et droit positif. El anteproyecto de código penal, sueco" de 1916 por Luis Jiménez de Asúa, pág. 38).

La Comisión de Códigos entiende, como los autores del proyecto en revisión, que el Código debe prescindir de la definición de la tentativa, fijándose la pena para el que empieza la ejecución y no consuma un acto delictivo. Pero considera peligrosa la redacción del artículo 42, porque exige para considerar punible al que comienza la ejecución de un delito, que lo haya "premeditado de antemano", puede afirmarse que en la mayoría de los casos la tentativa quedaría impune.

Por eso ha dicho, con toda razón, el doctor González Roura, refiriéndose a esa reforma introducida por la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados al proyecto de 1906: "Esta enmienda, sin precedentes en la legislación comparada, es un grave error jurídico, de no menos graves consecuencias prácticas, puesto que se sanciona casi la impunidad de la tentativa. Las razones invocadas por la comisión en la página 85, ni responden a la realidad de los hechos, ni son jurídicas, ni son lógicas, ni remueven el inconveniente, dado que la premeditación se probaría con más razón por medio de la confesión, lo mismo que se prueba muchos delitos consumados. Ni es posible admitir que se exija más para los menos, ni que el supuesto inconveniente de una clase determinada de prueba justifique una

alteración en los elementos de la infracción". (O. González Roura, "El nuevo proyecto de Código Penal Argentino", en la "Revista Argentina de Ciencias Políticas", 1918, Núm. 92, pág. 162).

Recogiendo esta crítica y las observaciones hechas en su informe por el doctor Rojas, la Comisión ha redactado el artículo 42 en esta forma: "El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44."

XII

Participación criminal

En el título VII, la Comisión no introduce ninguna reforma.

El proyecto en revisión legisla con gran acierto la delicada cuestión relativa a los autores y cómplices, separándose del proyecto de 1906, cuyas definiciones suprime, por análogas razones a las que determinan la eliminación de la definición de la tentativa.

"El proyecto de 1906 — dice la "Exposición de motivos" de la Comisión de la H. Cámara de Diputados — en esta parte considera autores a los que determinen a otro a cometer el delito, sin fijarse que quien determina a otro para que realice el hecho, es un instigador y no un autor. Pero, prescindiendo de palabras, lo que pretende la Comisión es fijar los conceptos de una manera precisa y en ese sentido empieza por establecer que tendrán la pena establecida para el delito los que tomen parte en la ejecución del hecho, los que presten un auxilio o cooperación sin los cuales no habrían podido cometerse, y los que hubieren determinado directamente a otro para cometerlo."

Dicha Comisión se ha apartado también del proyecto de 1906, al suprimir la definición de la complicidad, y en el artículo 46 fija el significado de esa participación. Aquel proyecto — dice — "es incompleto en su misma definición, porque no comprende los casos de ayuda posterior al hecho, prometida antes de la ejecución."

Teniendo en cuenta los antecedentes que se invocan en la "Exposición de motivos", el proyecto en revisión establece la penalidad para el cómplice relacionándola con la de los autores e instigadores, pero reduciendo aquella de un tercio a la mitad.

La H. Cámara de Diputados ha suprimido del proyecto de 1906 el precepto relativo a la tentativa de complicidad, porque los actos constitutivos de participación no son punibles sino porque, según la opinión de Haus, se refieren a un hecho principal que la ley califica de delito y que les imprime un carácter delictuoso.

En fin, el proyecto en revisión reproduce el artículo 54 del proyecto de 1906 — suprimiendo algunas palabras — que figura también en el de 1891, por las razones dadas en la "Exposición de motivos" de este último. "Hemos copiado — se dice en ella — la legislación sobre la delincuencia con un precepto que declara exentos de responsabilidad por los hechos punibles cometidos por la prensa, a los editores, impresores y demás personas que prestan al autor del escrito o grabado, la cooperación necesaria para su publicación. Este artículo deroga aparentemente el principio común en materia de codelincuencia, según el cual se presume responsables a todos los que han cooperado a la realización de un delito, y se presume, porque se supone que todos han concurrido con intención de delinquir. A pesar de la apariencia, el artículo puede no ser, y no será a menudo una derogación del principio. El editor, los cajistas, etc., co-

XIII

Reincidencia

En el título VIII, introducimos algunas modificaciones de importancia, de acuerdo con los últimos proyectos de codificación penal de las naciones europeas.

En general aceptamos el criterio fijado para la calificación de la reincidencia por los proyectos estudiados por la Comisión. Estos introducen una innovación al Código vigente al determinar que existirá, "siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito".

"La reincidencia hasta hoy — dice el informe de los autores del proyecto de 1906 — ha sido considerada, como si la Capital, los Territorios Nacionales y las provincias, fueran Estados independientes, con relación a la ley penal: sólo se tomaban en cuenta los delitos anteriores cometidos en la localidad donde el reo era juzgado.

"Esta situación, completamente irregular, porque es contraria a la ley fundamental del país, debe desaparecer cuanto antes. La Nación es una para el Código Penal, y en consecuencia, es reincidente todo el que ha cometido un delito en cualquier punto del territorio nacional, y cualquiera que haya sido el tribunal que impusiere la pena. Desde que la ley es una, y desde que el territorio, para esa ley, es también uno, no caben diferencias provenientes de las distintas localidades.

"Por lo tanto, si para el Código Penal no hay Provincias, ni Capital, ni Territorios Nacionales, sino la Nación, queda justificada esta reforma que, partiendo de esa base, no tiene para nada en cuenta, al efecto de que se trata, el lugar donde se ha cometido el delito".

Pero esta Comisión considera, de acuerdo con las ideas de Stoops, que es conveniente y justo para calificar la reincidencia tener en cuenta la condena sufrida en el extranjero. Como dijo el insigne criminalista suizo, "el criminal no conoce fronteras". Y si ha de tomarse en cuenta en la lucha contra la criminalidad, la mayor temibilidad del delincuente, revelada por su reincidencia, debe considerarse únicamente a los efectos de la agravación de la pena, la ejecución de un delito anterior con independencia de la jurisdicción territorial.

Esta es la tendencia moderna y seguida por buen número de criminalistas. En el Congreso Penitenciario celebrado en Washington en 1910, se recomendó la celebración de tratados internacionales para calificar la reincidencia. Al ocuparse de los efectos de las sentencias penales pronunciadas por tribunales extranjeros, el Congreso votó estas declaraciones: 1a., "El tribunal ante el cual se instancia un proceso por crimen o delito, puede declarar reincidente al individuo precedentemente condenado por un delito

jurisdicción extranjera, por crimen o delito de derecho común, y puede reconocer esta condena como si hubiera sido pronunciada por un juez del mismo Estado.

2a. "Debería acordarse por tratados entre todos los estados civilizados:

- a) Que todo país reciba de los otros, notificación de las condenas pronunciadas por sus jurisdicciones contra sus nacionales.
- b) Que todo país comunique a los otros los boletines de condena de sus nacionales, por delitos de derecho común, a requisición de las respectivas autoridades judiciales.

3o. Debería estudiarse la organización de una Oficina Internacional de Informaciones sobre procesos judiciales e identificación de los criminales.

"Las resoluciones procedentes no se aplican a los crímenes o delitos políticos". (Armando Claros, "Nuevas tendencias penales en el Congreso Penitenciario de Washington", pág. 50).

Además de aconsejar un agregado al Art. 50 en el sentido indicado, la Comisión juzga necesario precisar en el mismo que la reincidencia no existirá sino cuando la condena anterior haya sido determinada por un delito que mereciera la pena de prisión o reclusión. En este punto ha seguido a los anteproyectos suizo y sueco.

En el mismo artículo debe establecerse, como lo hace el proyecto de 1906, que no se tomarán en cuenta a los efectos de la reincidencia los delitos militares o políticos, ni los amnistiados. En este punto, como en otros relativos a la reincidencia, concordamos con las observaciones hechas en el Informe del doctor Rojas.

De manera que el artículo 50 quedaría en la siguiente forma: "Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme a una pena privativa de libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiera un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o commutación.

"La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda según la ley argentina dar lugar a extradición.

"A los efectos de la reincidencia no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados".

El artículo 51 del proyecto en revisión dispone que los reincidentes por segunda vez, condenados a pena restrictiva de la libertad que excediera de dos años, cumplirán su condena con reclusión en un paraje de los territorios del Sud. Concuera con el artículo 56 del proyecto de 1906 con algunas variantes.

En el informe del ex senador Rojas se aconseja un aumento de pena al reincidente por primera vez, apartándose así del criterio fundamental seguido en materia de reincidencia por los proyectos de 1906 y de la H. Cámara de Diputados.

La Comisión considera que debe mantenerse en toda su integridad el texto de este último. No es necesario ni conveniente modificar el artículo en el sentido indicado por el doctor Rojas porque esto importaría alterar en cierto sentido, el sistema lógico del proyecto en lo relativo al arbitrio judicial para apreciar la mayor o menor perversidad de los delinquentes. Conviene dejar margen al criterio de los jueces para apreciar las circunstancias del primer delito y los antecedentes y carácter del reo, recorriendo toda la escala penal, sin sujetarse en el caso de la reincidencia por primera vez a una norma fija

de agravación de la pena. Aceptar el criterio señalado en el informe de referencia, importaría volver al sistema tradicional, rechazado hoy por la ciencia penal y en abierta oposición con las orientaciones del proyecto de la H. Cámara de Diputados.

De conformidad con el anteproyecto sueco (Capítulo V, art. 3o.) y con el sistema adoptado por el proyecto en revisión sobre la penalidad de los menores (arts. 36-39), proponemos un agregado al artículo 51. Responde al propósito de no computar al procesado, a los efectos de la agravación de la pena, la de privación de libertad que cumplió antes de haber cumplido veintidós años.

El artículo 38 del proyecto en revisión dispone que no puede ser declarado reincidente el menor que no ha cumplido diez y ocho años. Lo podrá ser el menor de veintidós años, cuando haya reincidentido por segunda vez, — como el mayor de esa edad, — en las condiciones determinadas por el artículo 51; pero de acuerdo con la modificación aconsejada por nosotros, inspirándonos en las normas de la política criminal respecto de los menores, en el caso de ser reincidente por primera vez, el juez no deberá tomarlo en cuenta para agravar la pena.

El Código se apartaría así de la norma general establecida para casos idénticos respecto de los mayores de veintidós años, en virtud de la cual los jueces podrían, según las circunstancias, tomar en cuenta el delito anterior a los efectos de agravar la pena en el segundo proceso.

El artículo 51 ha sido redactado por esta Comisión en la siguiente forma: "El reincidente por segunda vez, condenado a pena privativa de la libertad que excediera de dos años, cumplirá su condena con reclusión en un paraje de los territorios del Sud.

"La pena de privación de libertad que el procesado sufrió antes de haber cumplido veintidós años, no podrá computársele para la agravación de la pena".

En el artículo 52 hay que substituir la palabra "relegación" por la de "reclusión", pues se trata de una errata. En efecto, en la "fe de erratas" del proyecto en revisión publicado por la H. Cámara de Diputados, se hace constar que en el artículo anterior debe figurar la segunda palabra en lugar de la primera, pues la relegación no figura en el sistema de penas del proyecto. Por consiguiente, debe hacerse la misma corrección en el artículo 52, y así lo entienden los doctores Rodolfo Moreno (hijo) y Antonio de Tomaso, miembros de la Comisión de la H. Cámara de Diputados que preparó el proyecto, con los cuales ha consultado el punto esta Comisión.

XIV

Concurso de delitos

En el título IX, la Comisión no introduce ninguna reforma. Las disposiciones sobre esta materia del proyecto en revisión han sido tomadas del proyecto de 1906 (Art. 58-60) que hizo con razón objeto de un título especial del concurso de delitos, legislado por el Código vigente en el de la agravación de las penas.

Pero el proyecto en revisión introduce un agregado de importancia al artículo 62, que corresponde al artículo 58, cuya redacción viene a salvar todas las dificultades que pueden presentarse en es-

ta materia en el caso de conflictos jurisdiccionales.

En el artículo 58 del proyecto en revisión se declara que las reglas relativas al concurso de delitos, se aplicarán también cuando después de una condena, pronunciada por sentencia firme, se debe juzgar a la misma persona que esté cumpliendo por un hecho distinto, o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. La ley se pone en el caso de que no pueda unificarse el proceso por razón de las jurisdicciones, como lo dice y lo explica claramente la Comisión de la H. Cámara de Diputados en la "Exposición de motivos" del proyecto.

La misma consultó especialmente este punto con el doctor Tomás Jofré, profesor de Derecho procesal de la Universidad de Buenos Aires y de Derecho Penal de la de La Plata, cuyas opiniones se encuentran en la "Encuesta" sobre la reforma penal, publicada por la H. Cámara de Diputados.

El doctor Rojas ha hecho también en su informe un interesante estudio sobre el concurso de delitos, y al ocuparse del artículo 53 del proyecto en revisión, estudia los diferentes casos que pueden presentarse en su aplicación. Señala las graves dificultades que los distintos casos pueden ofrecer, y llega a la conclusión de que "sólo podrían encontrar remedio mediante una ley especial, que por eso mismo no podría formar parte del Código Penal". (Véase el "Informe" publicado en este volumen, págs. 371-372).

XV

Extinción de acciones y de penas

Tampoco introducimos modificación alguna en el título X, no obstante las razones dadas por el doctor Rojas en su informe para substituir la leyenda por la "De la prescripción, de acuerdo con el Código vigente."

Las disposiciones de este título han sido tomadas del proyecto de 1906.

Los proyectos sueco y suizo contienen también un título sobre la extinción de la pena. El primero se ocupa de la materia en el capítulo XIII de la parte general. Entre las causas de extinción comprende, no la prescripción sino también la muerte del procesado, como lo hace el artículo 53 del proyecto en revisión.

El anteproyecto suizo de 1916 trata especialmente de la prescripción en los artículos 70-75, y se ocupa de la gracia y la amnistía en los artículos 81, 423, 424, 425, 426 y 427.

El Código español dispone también que el indulto y la amnistía extinguen la pena.

El proyecto en revisión modifica los artículos 66 y 69 del de 1906, en cuanto disponían que la pena y la acción penal se prescribían por la buena conducta del imputado, en atención a que la condición de la prescripción debe ser la enmienda del criminal.

La Comisión de la H. Cámara de Diputados recogió las críticas dirigidas contra dichos artículos del proyecto de 1906, por el doctor Julio Herrera, en la obra ya citada, y suprimió dicho requisito.

"La Comisión ha tenido en cuenta — dice en la "Exposición de motivos" — que si el autor del he-

cho hubiera cometido otro delito, la prescripción se interrumpiría y no lo podría amparar. La condición para que ésta se produzca, es que pase el tiempo, sin que el delincuente tenga nada que hacer con la justicia. Si cae en manos de ésta, viene el juicio. El factor buena conducta, puede ser motivo para injusticias, pues pasado el término, el sujeto no podría quedar librado sin que se investigara qué conducta tuvo, y como no es cuestión de apreciaciones, podría atentarse contra la libertad obtenida. Cuando el tiempo pasa, la sociedad olvida y el interés del castigo desaparece."

XVI

Del ejercicio de las acciones

En el título XI aconsejamos, de acuerdo con las observaciones formuladas en su informe por el ex senador Rojas, la supresión de las palabras "difamación y ultraje" del inciso 2o, del artículo 73, y la supresión del inciso 4o, del mismo artículo.

Por lo tanto, dicho artículo debe quedar así: "Son acciones privadas, las que nacen de los siguientes delitos:

- 1.º Adulterio.
- 2.º Calumnias e injurias.
- 3.º Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154.
- 4.º Concurrencia desleal, prevista en el art. 159."

En consecuencia, deben suprimirse también las palabras "difamación o ultraje", en el artículo 75.

En el artículo 74 hemos agregado las siguientes disposiciones: "El cónyuge que ha consentido el adulterio o lo ha perdonado, no tiene el derecho de iniciar la acción.

"La muerte del cónyuge ofendido extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la pena".

Hemos tomado estas disposiciones del artículo 185 del anteproyecto suizo, que castiga por igual al marido o mujer que ha cometido adulterio. Así lo propuso también en el seno de esta Comisión el senador por la capital, doctor del Valle Iberlucea, mientras no se suprimiera la represión del adulterio, como lo propusieran al Congreso penitenciario argentino de 1914, los doctores Jorge E. Coll, Eusebio Gómez y otros. Las disposiciones indicadas son lógicas y concuerdan con lo dispuesto en el artículo 74 del proyecto en revisión.

XVII

Significación de conceptos empleados en el Código

El Título XII, último del Libro primero, no figura en el Código vigente, ha sido tomado del proyecto de 1906 y tiene por objeto, según los autores de éste, fijar el alcance de algunos de los términos empleados en el mismo, siendo evidente su utilidad porque servirá para evitar dudas y controversias en la aplicación de la ley.

El proyecto suizo de 1916 sigue también el sistema de definir algunos términos empleados en el mismo. El artículo 102 contiene todas las definiciones legales.

La Comisión piensa que debe mantenerse este título, pero cree que, a fin de evitar repeticiones, podría suprimirse del artículo 78 la definición de "banda" en razón de que lo está con toda precisión en el artículo 210 del proyecto.

XVIII

Aplicación de las penas paralelas en la parte especial

Como lo hemos dicho incidentalmente en la parte general de este informe, una de las grandes innovaciones y de las mayores ventajas del proyecto en revisión, es la aplicación en el Libro segundo del sistema de las penas paralelas.

Se ha apartado en este punto fundamental del proyecto de 1906, que sólo admitía el criterio de las penas alternativas para los casos en que mantenía la pena capital. En efecto, el artículo 84 impone "presidio por tiempo indeterminado o muerte" al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o bienhechor, sabiendo que lo hacía; al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remunerativa, sevicias graves, impulso de perversidad brutal, o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión, o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos; y al que matare a otro para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados a la impunidad para sí o para sus cooperadores, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.

El proyecto de la H. Cámara de Diputados ha generalizado el paralelismo de las penas, siguiendo el ejemplo de los Códigos más modernos y de los proyectos más recientes. Ha sido aceptado, en verdad, por los códigos italiano, húngaro y holandés y los proyectos o anteproyectos de Austria, Rusia, Japón, Suiza, Francia y Suecia.

La ciencia lo ha acogido con igual favor, y según lo recuerda el doctor Herrera en "La Reforma Penal", lo sostienen los más distinguidos tratadistas: Garçon, Lizt, Vidal, Gaudkier, Alimena, Berner, Prins, de la Grasserie, Proal, y lo sostuvo ya a fines del siglo XVIII Jeremías Bentham.

El sistema de las penas paralelas, dijo el primero de los autores nombrados hace ya más de veinte años, "es más o menos universalmente aceptado hoy día, pudiéndose decir que él forma como una especie de derecho común de las legislaciones represivas modernas". Se ha dicho con razón que la sabia Memoria publicada por Garçon sobre "Les peines non deshonorantes en la Revue Pénitentiaire (1896)", es el documento capital sobre tan importante punto.

Una de las primeras tentativas, dice Saleilles, que han tenido por objeto establecer, desde el punto de vista de la aplicación de la pena, distinciones entre los delinquentes, se hizo al preparar el Código Penal italiano, y fue ésta una de las ideas nuevas más fecundas aceptadas y desenvueltas por el Código de 1889. Este "ha aceptado una especie de sistema mixto, según el cual se clasifican los delitos en tres grupos. Aquellos para los cuales la única pena fijada por la ley es la reclusión, pena común; aquellos para los que la ley sólo admite la detención, pena especial; y aquellos, en fin, respecto de los cuales la ley faculta al juez para elegir entre reclusión y detención. Por lo tanto, el Código penal italiano, en lo que afecta al criterio de diferenciación, adop-

ta paralelamente dos sistemas diferentes, el de la aplicación legal y el de la aplicación judicial. Respecto de los delitos para los que la pena se fija invariablemente por la ley, ésta se reserva la elección y aplica una de las penas paralelas según el carácter del delito.

"Pero en los delitos respecto de los cuales se deja al juez la elección entre dos penas, éste aplica una u otra, según el interés que presenta el individuo. Es un sistema que no está más que dibujado. Otro tanto hay que decir del sistema de las penas paralelas en el Código penal alemán. El artículo 20 revela que en ciertos casos, que deben estar previstos por la ley, el juez tiene dos penas de prisión a su disposición, y para aplicar la más rigurosa hace falta que el sentimiento que inspiró el crimen haya sido vil. Pero la ley no admite, ya que a ella corresponde prever y permitir su aplicación, el paralelismo de estas dos penas alternativas más que en casos que no se extienden más allá del dominio de los delitos políticos y de algunos delitos de funcionarios". (R. Saleilles, "La individualización de la pena", pág. 395).

Pero el proyecto de Código penal para Alemania contiene un sistema de penas de prisión que, dado el moderno punto de vista de atender más al delincuente, a su personalidad, que al hecho realizado, permitirá a la represión adaptarse mejor a los diversos matices de los caracteres criminales.

"Un comentarista del proyecto, el doctor Aschroth, —escribe un catedrático de Derecho Penal en la universidad de Barcelona,—alaba que la apreciación del motivo, del sentimiento que originó el delito, se haya tomado como base para determinar la clase de pena que debe imponerse.

"Para aquellos delinquentes sin honor que han delinquido bajo el impulso de un sentimiento vil, dice, debe existir una pena de privación de libertad distinta de la que debe imponerse a los individuos cuyo sentimiento no está viciado. En aquellos la pena tiene que formar un carácter, en éstos, no tiene más misión que hacerles sentir de un modo perceptible la autoridad de la ley. A aquellos es preciso someterlos durante largo tiempo a una disciplina metódica: para éstos es suficiente una simple privación de libertad.

"La pena impuesta a la primera categoría debe denominarse "reclusión", "con cuya designación la idea popular une todavía entre nosotros, la carencia de honor". La pena de la segunda categoría podría designarse "arresto".

"Existe, además, un tercer grupo de acciones punibles que, sin mostrar un sentimiento desprovisto de honor, son, sin embargo, provenientes de un sentimiento reprensible, y cuando contienen una grave violación del derecho, debe imponerse una privación de libertad. Para estos actos es adecuada una pena de privación de libertad expresada con la denominación de prisión". (Citado por Eugenio Cuello Calón. "La reforma de la legislación penal alemana", pág. 23).

El anteproyecto suizo deja al libre arbitrio judicial la determinación de la pena, bien dándole el derecho de elegir entre dos o más géneros de penas, bien otorgándole poder valorador entre un mínimo y un máximo. Cuando la pena no se designa más que por su género, sus límites, en los que fijan las disposiciones generales que establecen la duración de las penas privativas de la libertad. Por eso ha dicho con razón Jiménez de Asúa, que el libre arbitrio judicial "es el espíritu vivificador del

anteproyecto suizo". ("La unificación del derecho penal en Suiza", pág. 330).

Si quiere aceptarse en toda su amplitud la doctrina de la individualización de la pena, que ha sido una de las bases fundamentales de nuestra reforma penal, será menester, no sólo que el Código autorice al juez para fijar la cantidad sino también la naturaleza de la pena, dentro de los límites necesariamente señalados por la ley.

El juez debe tener dos puntos de vista y dos bases muy diferentes, dice Saleilles: "Debe fijar la duración de la pena, según la criminalidad activa, tal como ha caracterizado el acto. Esto corresponde a la idea de sanción que subsiste. Y debe determinar la naturaleza de la pena, según la criminalidad pasiva del agente, es decir, según el fondo de su naturaleza; y esto corresponde a la idea de fin y de individualización de la pena. Ese grado de criminalidad pasiva se determinará bastante a menudo por la revelación de los motivos y la criminalidad subjetiva del hecho". (Ob. cit. pág. 326).

En virtud de los antecedentes expuestos y de los autorizados juicios preitados, la Comisión no ha considerado oportuno ni conveniente modificar el sistema de las penas alternativas, aplicado en el Libro segundo del proyecto en revisión, creyendo que debe mantenerse y experimentarse, para que pueda apreciarse su eficacia en el combate contra el crimen.

XIX

De los delitos y sus penas

La Comisión ha introducido pocas reformas en la parte especial del proyecto relativo a los delitos y sus penas.

Ha modificado el artículo 81, reduciendo sus cuatro incisos a dos partes. Ha creído lógico dividir el artículo en dos partes: una se refiere al homicidio por pasión y a la muerte de una persona causada por otra que tuvo el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. La otra se refiere al infanticidio.

Los incisos 1o. y 3o. del artículo 81 del proyecto en revisión imponen reclusión o prisión de tres a seis años al que matare a otro, si la víctima misma provocó el acto homicida con ofensas o injurias ilícitas y graves; y al cónyuge, al ascendiente o al hermano, que matare a su cónyuge, descendiente o hermana, o al cómplice o a ambos en el acto de sorprenderles en ilegítimo concubito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las circunstancias particulares del hecho.

Siguiendo al pie de la letra, aunque modificando la duración de la pena, al artículo 105 del anteproyecto suizo de 1916, hemos creído más justo y razonable establecer una regla general para el caso de homicidio por pasión, que puede ser aplicable, cuando las circunstancias lo hicieran excusable, a los que se encontraran en las condiciones preindicadas. El inciso sería así menos casuista y podría abarcar otros casos de muerte dada en estado de "emoción violenta".

No admitimos la exención de pena que establece el inciso 3o. del artículo 81, siguiendo al proyecto de 1906, que suprimió las eximentes consignadas en los incisos 12 y 13 del artículo 81 del Código penal vigente, pero el cual admitió que el juez la pudiera declarar, según las circunstancias particulares del hecho. Y no la admitimos, precisamente, por la misma

razón, —pero aplicando el principio lógico con justa inflexibilidad— invocada por los autores de aquel proyecto para modificar las citadas disposiciones de la ley: por creer que, si bien puede explicarse la ejecución del delito en las circunstancias de referencia por la emoción violenta y debe reducirse, por consiguiente, la pena, dejando al juez el arbitrio de aplicar la de prisión o reclusión, de acuerdo con las circunstancias particulares del hecho y los antecedentes del autor, no debe reconocerse el "derecho de matar." En cambio, hemos dado al juez suficiente margen para que, adaptando la pena al delincuente en cada caso, pueda aplicar un minimum bajo, — hasta de un año de prisión — si lo creyese justo, y en vista de las circunstancias especiales en que se encontraron los autores de la muerte de otras personas indicadas en el inciso 3o. del artículo 81. Pero también podría, según los casos, aplicar el maximum de tres años de prisión, o bien infringir la pena de reclusión de tres a seis años.

En lo relativo al infanticidio, introducimos dos modificaciones. Por la primera, reducimos la pena de reclusión o prisión por tres a seis años, señalada en el artículo 81, a reclusión de uno a tres años o prisión de seis meses a dos años; y por la segunda, establecemos que la aplicación de esa pena será la que corresponda, no solo en el caso de la muerte del hijo por la madre durante el nacimiento o hasta tres días después, sino también "mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal", como es justo y como lo dispone el artículo 108 del anteproyecto suizo de 1916.

La misma pena se aplicará a los padres, hermano, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, matase al hijo de ésta. El inciso 2o. del artículo 81 del proyecto, en revisión les aplica la pena de reclusión o prisión por tres a seis años, pero nosotros la reducimos, exigiendo, en cambio, para que proceda la aplicación de la pena indicada en el apartado 2o. del artículo 81, que los padres, hermanos, marido e hijos se encuentren en las circunstancias indicadas en la letra a) del inciso primero del mismo artículo, es decir, en un estado de emoción violenta que las circunstancias hacían excusable.

El artículo 81 quedaría, pues, redactado en esta forma: "1o. Se impondrá reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres: a) al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hacían excusable; b) al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.

"2o. Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que para ocultar su deshonra matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal, y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a) del inciso 1o. de este artículo."

En el artículo 86 hemos propuesto el siguiente agregado: "El aborto practicado por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible:

1o. Si ha sido hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2o. Si el embarazo proviene de una violación de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota, demente, inconsciente o incapaz de resistencia, o de

un incesto. Si la víctima es idiota o demente, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto."

Hemos tomado estas disposiciones del artículo 112 del anteproyecto suizo de 1916. La primera disposición no necesita explicarse, pues cae de su propio peso que cuando el aborto es indispensable para la salud o la vida de la madre, no constituye delito.

La segunda importa una verdadera innovación en la legislación criminal. Al referirse a este punto dice un distinguido profesor de Derecho penal, citado varias veces en este informe, que es sumamente interesante la última redacción del anteproyecto de Código Penal suizo, que no figuraba en ninguna de las ediciones anteriores, habiendo sido introducido por la segunda Comisión de peritos.

"Es la primera vez — agrega — que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca un ser anormal o degenerado. Gautier, comentando este artículo, apunta ya que en el caso de incesto "se podrían añadir consideraciones de orden étnico", y que cuando "el embarazo sea el resultado de un atentado cometido sin violencia, contra una mujer idiota, enajenada, inconsciente o incapaz de resistencia", podría argüirse, "más justamente aún que en caso de incesto, el interés de la raza. ¿Qué puede resultar de bueno de una mujer demente o cretina?" (Jiménez de Asúa, "La política criminal en las legislaciones europeas y norteamericanas", pág. 206).

El tema es seductor y su desarrollo en este informe podría llevarnos muy lejos, haciéndonos entrar en el dominio de la eugénica, cuyo estudio reviste para algunos miembros de esta Comisión una importancia trascendental y cuyos problemas deben interesar profunda e intensamente a los legisladores, pedagogos, sociólogos y juristas de nuestro país. La misma ciencia penal se preocupa de las aplicaciones de sus principios para combatir con mayor eficacia el aumento de la criminalidad. El VII Congreso de Antropología Criminal celebrado en Colonia el año 1911, se ocupó de la esterilización de los criminales. Y en trece estados de Norte América se han dictado ya leyes esterilizadoras de criminales y enfermos mentales.

Pero no es el momento de hacer en este informe largas consideraciones acerca de la eugenesia en sus relaciones con la criminalidad. Bastará decir, para terminar con este punto, que si bien no se admite hoy en día ni por la ciencia, ni por el derecho penal, ni por el consenso social, la esterilización de los delinquentes, aunque sean incorregibles, con fines eugénicos, sintiéndose por esa medida, según dijera van Hamel, una "repugnancia afectiva", es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza. El problema se ha planteado en Euro durante la última guerra, con motivo de las violaciones de que fueran víctimas numerosas mujeres belgas por soldados ebrios, desenfrenados o criminales.

De acuerdo con indicaciones hechas por el doctor González Roura en notas dirigidas a la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados y publicadas en la "Encuesta" (págs. 283, 289 y 290), introdujimos una modificación en el artículo 168, el cual se refiere a la extorsión.

Convendría "limitar, dijo el profesor y camarista nombrado, en el robo la violencia moral a los casos de su empleo posterior al apoderamiento, con el propósito de asegurar al culpable la impunidad propia

o la de sus copartícipes, o el de evitar el desapoderamiento de lo robado, a fin de que toda otra violencia moral con el fin de apoderarse de la cosa, correspondiera únicamente a la extorsión."

En carta dirigida al senador por la capital doctor del Valle Iberlucea y que éste ha puesto en conocimiento de esta Comisión, el doctor González Roura manifiesta que, de acuerdo con sus indicaciones en las notas de referencia, los artículos 164 y 168 del proyecto en revisión reducen el robo a los casos de violencia física, dejándose los de violencia moral para la extorsión. Pero se ha olvidado suprimir en el artículo 168 las palabras "violencia o", faltando, en cambio, "entregar", antes de "enviar".

Aparentemente, pues, habría extorsión con violencia física, y quedaría siempre el acto de obtener la entrega de la cosa mediante coacción moral.

Por esto la comisión deja el artículo 168 en esta forma: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que con intimidación o simulando orden de autoridad pública, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos."

La comisión ha recogido las observaciones hechas por el doctor Rojas, al artículo 211 del proyecto en revisión, y aconseja el agregado de las palabras: "las colocare con ese fin". Acepta también el agregado de las palabras: "por razón de su empleo o función pública", después de "o toda persona que deba obediencia a la Nación" en el artículo 214, propuesto por el mismo ex senador; y, en fin, de acuerdo con su indicación, acepta igualmente que en el artículo 226, se cambie el orden de la frase colocando las palabras "para cambiar la Constitución", antes que las de "deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional".

En el artículo 303, es necesario suprimir las palabras "desde el 1.º de enero de 1918", y reemplazarlas por otras, para indicar la fecha en que entrará a regir el nuevo Código Penal. La Comisión propone que sea "a los seis meses siguientes de su promulgación."

XX

Disidencia del senador del Valle Iberlucea

Estas son las modificaciones al proyecto de la H. Cámara de Diputados, que la Comisión aconseja y cuyos fundamentos acaba de exponer en este informe. Pero antes de terminarlo, debe manifestar al H. Senado que en su seno se produjo una disidencia, respecto a la represión del duelo. La planteó el senador por la capital, doctor del Valle Iberlucea, sosteniendo que debían suprimirse los artículos 97-103 del Proyecto.

Al fundar su disidencia sostuvo que, "como lo hacen el Código francés y las legislaciones de Inglaterra y los Estados Unidos, el duelo debe ser considerado como un delito común, aplicándosele las penas sobre el homicidio o sobre lesiones, según los casos y las circunstancias."

"El Código francés de 1810, agregó el señor senador por la capital, guardó silencio sobre el duelo, como lo hizo el Código dictado en 1791. Los hombres de la Revolución, que destruyeron los privilegios nacidos en una época de tinieblas, quisieron concluir también con las costumbres feudales, y por eso, como dijo más tarde Treilhard, refiriéndose al silencio guardado acerca del duelo, por el Código de 1810, "no quisieron hacerle

el honor de nombrarlo". El duelo era un residuo del régimen feudal y debía desaparecer de la nueva sociedad. — o por lo menos del texto de la ley, — fundada sobre el principio de la igualdad.

Durante la Restauración se quiso incorporar al Código Penal francés — dijo el senador del Valle Iberlucea, — disposiciones especiales sobre el duelo. La reacción triunfante entonces pretendía restaurar el régimen absolutista en toda su pureza y restablecer las costumbres feudales. Consiguió suprimir el título del divorcio del Código Civil de 1804 y logró que la Corte de Casación se pronunciara en el sentido de no considerar el duelo como delito.

"Pero producida la Revolución de 1830, la Corte de Casación cambió de jurisprudencia en dos sentencias dictadas el año 1837, las cuales fueron pronunciadas de acuerdo con las conclusiones sostenidas por el procurador general Dupin, quien se apartó de la doctrina sostenida por Merlin, en su "Repertoire" y en las "Questions de droit." Afirmó dicho magistrado que el homicidio y las heridas inferidas en duelo, no encontrándose en las excepciones precisadas en el Código sobre exención o atenuación de la imputabilidad, debían reputarse comprendidos en la regla general. Sostuvo que así lo había declarado el legislador en los trabajos preparatorios del Código. La nueva jurisprudencia de la Corte de Casación, fué mantenida constantemente, a pesar de las opiniones contrarias de algunos criminalistas, como Chauveau y Hélie, expresadas en su "Theorie du Code Penal", tomo 1, No. 2460 y siguientes.

"En Inglaterra tampoco existen disposiciones especiales sobre el duelo. Según lo recuerdan Stephen en los "New Commentaries of the Laws of England (tom. IV, pág. 218) y Schuster en su estudio sobre la legislación penal de la Gran Bretaña ("La legislación penal comparada", Von Liszt, pág. 839), la muerte del adversario en duelo se castiga como cualquier otro homicidio ilícito y el desafío como tentativa de homicidio, pudiendo el provocador ser condenado a la pena establecida por las leyes 24 y 25 Vict. C. 160 1.14. Por otra parte, en Inglaterra son rarísimos los duelos, ya que "es sabido — dijo el Ministro Zanardelli en su informe de 1887 sobre el Proyecto de Código Penal de Italia — que en ese grande y noble país, no existe la costumbre de batirse en duelo, como no existe el prejuicio de despreciar a quien recibe un insulto inmerecido."

"En verdad, — agregó el señor senador por la Capital, — el honor, el derecho, la verdad y la justicia no están en la punta de un sable o dentro de una bala. El juicio de Dios, el combate singular, pertenece al pasado. El porvenir lo repudia. El hombre de ideas nuevas reemplaza el "culto del coraje" por el valor moral. Juan Moreira fué un "villence", Viale un estoico. Desafiar a la "opinión pública" — que no es a menudo sino la voz de algunos diarios o de ciertos círculos sociales — rechazando un reto, es un acto de valor moral. La cobardía está en renegar de nuestras ideas filosóficas y de nuestras convicciones morales para someternos a la ley del prejuicio, que en el caso del duelo es una ley bárbara y atávica. El sacrificio de Lucio López, inmolado ante el altar de los prejuicios sociales, enseña que el duelo, siempre bárbaro, es salvaje para rechazar agravios políticos.

"El desprecio de la injuria" — decía con pro-

funda verdad Emilio de Girardin — es tal vez el "progreso más importante que nos queda por realizar". Si eres un hombre de honor, si no tienes manchas que ocultar a costa de una herida, si no tienes que pedir refugio a la intimidación necesaria de una bala, vengate del miserable o del necio que te ha injuriado, obligándolo a redoblar las injurias. ¡Haz que eche espuma! ¡Que se desborde! Cuanto más se arrebate más seguro estarás de tu venganza. Si empezó en tener por suya la opinión, no tardará en tenerla en frente. Entonces tu satisfacción será completa y ciertamente más eficaz que si la sangre hubiera corrido.

"Todo duelo que termina sin herida es ridículo. Todo duelo que termina con la muerte de uno de los combatientes es deplorable. Todo duelo es, por consiguiente, un absurdo, una incorrección de la irreflexión contra la razón, un postrer esfuerzo de la barbarie contra la civilización, un anacronismo."

"Muchas otras reflexiones — siguió diciendo el senador por la Capital doctor del Valle Iberlucea — podría hacer para demostrar la razón y la justicia de no establecer en el Código Penal disposiciones especiales sobre el duelo. Podría citar las opiniones de ilustres pensadores, desde la Bruyère a Voltaire, desde Rousseau hasta Bentham, en apoyo de mi tesis de que la sociedad no debe reconocer a los individuos "el derecho de matar". Podría decir que reconocer la legitimidad del duelo importa admitir que el estado es impotente para cumplir una de sus funciones esenciales, la administración de justicia. Si aconsejamos la abolición de la pena de muerte, ¿cómo podemos tolerar que la aplique un particular, convirtiéndose, en el caso de matar en duelo, a un semejante, en legislador, juez y verdugo?"

"Pero quiero terminar esta breve exposición para justificar mi proposición, citando las palabras de un distinguido jurista y sociólogo argentino, que ha honrado la magistratura y la cátedra universitaria de la república. Me refiero al doctor Juan Agustín García, que ha sido mi maestro en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Sus elocuentes palabras convencerán más que todos mis razonamientos y son, en verdad, un argumento decisivo en favor de mi proposición.

"El duelo es una supervivencia — dijo en un artículo publicado en "La Nación" — hace algunos años — de la civilización de la Edad Media, uno de los ritos de la religión del honor, que como todas las religiones se transforma con el andar de los tiempos. El honor del siglo XX está basado en el culto del trabajo y de la verdad, en todas sus manifestaciones; en desempeñar una función social en la esfera de la actividad de cada uno, modesta o brillante, pública o privada. El hombre de honor es el socialmente útil.

"La función social que se desempeña predomina en la estimación de los valores morales, y establece la escala jerárquica. Una civilización basada en el derecho y en la justicia no puede tolerar que la sangre limpie. Semejante símbolo es una cosa arcaica, que contraría las tendencias modernas de los hombres, que basan su honor en el exacto cumplimiento de los deberes sociales. Sería obra de progreso suprimir el duelo, imitando a los ingleses. Partiendo de la misma base jurídica, "es el asesinato premeditado", al amparo de un conjunto de supervivencias de otras épocas, de supersticiones absurdas."

La mayoría de la Comisión resolvió mantener los artículos observados.—idénticos a las disposiciones sobre el duelo del proyecto de 1906. — por los fundamentos dados en la "Exposición de motivos" del proyecto de la H. Cámara de Diputados.

Después del detenido estudio de que el proyecto en revisión ha sido objeto por parte de la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la otra Cámara y de varias Comisiones del H. Senado, esta Comisión considera que ha llegado el instante de sancionarlo sin largos debates, para que pueda convertirse en ley a la brevedad posible, y entiende que si lo hace así, la Nación Argentina podrá enorgullecerse pronto de contar con un Código Penal excelente, digno de figurar entre los primeros de las naciones modernas.

Sala de la Comisión, setiembre 26 de 1919.

J. V. González. — E. del Valle Iberlucea. — P. A. Garro.

II

PROYECTO DE CODIGO PENAL

Despachado por la Comisión de Códigos del Senado

Buenos Aires, agosto 22 de 1917.

Al señor Presidente del Honorable Senado.

La honorable Cámara que tengo la honra de presidir, ha sancionado, en sesión de la fecha, el adjunto proyecto de ley de Código Penal que paso en revisión al honorable Senado.

Dios guarde al señor presidente.

MARIANO DEMARIA.
Carlos G. Bonorino.

(EN REVISION) (*)

PROYECTO DE CODIGO PENAL

El Senado y Cámara de Diputados, etcétera.

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

Aplicación de la ley penal

Artículo 1o.— Este código se aplicará:

- 1o. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, en sus buques de guerra, en los

(*) Las reformas introducidas por la comisión de códigos del H. Senado, van en tipo menor y a continuación del artículo respectivo.

mercantes que lleven su bandera cuando naveguen en alta mar o se encuentren en aguas jurisdiccionales de un Estado que no los reprimiere o en los buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en sus aguas jurisdiccionales;

- 2o. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo;
- 3o. Por delitos de piratería, cuando los responsables cayeren bajo el poder de la Nación;
- 4o. Por delitos cometidos en el extranjero por argentinos nativos, cuando fueren aprehendidos por las autoridades nacionales y la extradición fuese denegada o no fuese requerida dentro de los tres meses de la detención.

Artículo 1o.— Este código se aplicará:

- 1o. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina.
- 2o. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo.
- 3o. Suprimido.
- 4o. Suprimido.

Artículo 2o.— Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.

En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

Artículo 3o.— Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales.

Art. 3o.— Las disposiciones generales del presente código se aplicarán en todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto estas no dispusieran lo contrario.

Artículo 4o.— La represión de las faltas corresponde a las provincias, las que podrán imponer penas de prisión hasta un año, inhabilitación hasta tres años y multa hasta cuatro mil pesos moneda nacional.

TITULO II

De las penas

Artículo 5o.— Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Artículo 6o.— La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.

Art. 6o.— La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no se contratasen por particulares. La reclusión temporal no será inferior a un año ni superior a veinticinco años.

Artículo 7o.— Los hombres débiles o enfermos y los

mayores de sesenta años que merecieren reclusión, sufrirán la condena en prisión.

Artículo 8o.— Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas que les correspondan en establecimientos especiales.

Artículo 9o.— La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos.

Art. 9o.— La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos. La prisión temporal no será inferior a cuatro días ni superior a veinticinco años.

Artículo 10.— Cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valedudinarias.

Artículo 11.— El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará:

- 1o. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos;
- 2o. A la prestación de alimentos según el Código Civil;
- 3o. A costear los gastos que causare en el establecimiento;
- 4o. A formarle un fondo propio que se le entregará a su salida.

Artículo 12.— La reclusión y la prisión por más de tres años importan la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y de uno a tres años más, según el caso y a juicio del tribunal. Importa también la privación de los derechos civiles con excepción del de testar, reconocer hijos naturales y contraer matrimonio "in extremis". El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces.

La privación de la patria potestad corresponderá en todos los casos cuando el delito se haya cometido sobre los hijos del condenado o en perjuicio de los mismos.

Artículo 13.— El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena y el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, obtendrán la libertad por resolución judicial bajo las siguientes condiciones:

- 1o. Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
- 2o. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto;
- 3o. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión si no tuviere medios propios de subsistencia;
- 4o. No cometer nuevos delitos.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento del término de la pena.

Art. 13.— El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiese cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiese cumplido los dos tercios de su condena, y el condenado a reclusión o prisión por menos de tres años que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, obtendrán la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento, bajo las siguientes condiciones:

- 1o. Residir en el lugar que determine el auto de soltura.

2o. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas.

3o. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.

4o. No cometer nuevos delitos.

5o. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes. Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en los perpetuas hasta cinco años más a contar desde el día de la libertad condicional.

Artículo 14.— La libertad condicional no se concederá a los reincidentes.

Artículo 15.— La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 2o. y 3o. del artículo 13, el tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliera lo dispuesto en dichos incisos.

Artículo 16.— Transcurrido el término de la condena, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

Art. 16.— Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

Artículo 17.— Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.

Artículo 18.— Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias deberán mandarlos siempre que no tuvieran establecimientos adecuados.

Artículo 19.— La inhabilitación absoluta importa:

- 1o. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de elección popular;
- 2o. La privación del derecho electoral;
- 3o. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;
- 4o. La pérdida de toda jubilación, pensión o goce de montepío de que disfrutase. Si el penado tuviese esposa, hijos menores de cualquier clase o padre anciano y desvalido, corresponderá a éstos el importe de la jubilación, pensión o goce de montepío.

Artículo 20.— La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena, aquellos sobre que recayere.

Artículo 21.— La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, dentro del máximo y mínimo establecidos para el delito, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

El tribunal antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfac-

ción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. En todos los casos, cuando la multa no se hubiere satisfecho seis meses después de la condena, corresponde la prisión del condenado.

Art. 21. — La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determine la sentencia, dentro del máximo y mínimo establecido para el delito, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.

Si el reo no pagase la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado.

Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello.

También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos según la condición económica del condenado.

Artículo 22. — En cualquier tiempo que se satisficiera la multa el reo quedará en libertad.

Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

Artículo 23. — Toda condena penal llevará consigo la pérdida de los efectos que provengan del delito y de los instrumentos con que se ejecutó. Los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse, pudiendo aprovechar sus materiales los gobiernos de provincia, o el Arsenal de Guerra de la Nación.

Artículo 24. — La prisión preventiva que hubiere sufrido el condenado se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación; o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre cuatro y diez pesos.

Artículo 25. — Si durante la condena el penado se volviera loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena.

TITULO III

Condenación condicional

Artículo 26. — En los casos de primera condena por delito al que corresponda pena de reclusión o prisión que no exceda de tres años, o de multa, los tribunales podrán ordenar, en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en la personalidad del condenado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir para apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá las informaciones que crea pertinentes para formar criterio.

En los casos de concurso de delitos procederá la condena condicional, si la pena aplicable al reo no excediere de tres años de prisión, o multa.

Artículo 27. — La condena se tendrá como no pronunciada si dentro del término para la prescripción de la pena a contarse desde la fecha de la sentencia, el condenado no cometiere un nuevo delito.

Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena

impuesta en la primera condena y la que le correspondiere por el segundo delito conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas.

Artículo 28. — La suspensión de la pena no comprenderá:

- 1o. La reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio;
- 2o. Las incapacidades anexas a la condena impuestas accesorariamente.

Sin embargo, estas incapacidades cesarán el mismo día en que por haber transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se tuviere la condena como no pronunciada, o en el plazo que la sentencia les hubiese fijado si fuere menor que aquél.

Art. 28. — La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.
(El resto se suprime).

TITULO IV

Reparación de perjuicios

Artículo 29. — La sentencia condenatoria ordenará:

- 1o. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. Las leyes de procedimientos reglamentarán esta acción.
- 2o. La restitución a su dueño de la cosa obtenida por el delito, si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente de la cosa, más el de estimación si lo tuviere;
- 3o. El pago de costas.

Art. 29. — La sentencia condenatoria podrá ordenar:

- 1o.
- 2o.
- 3o.

Artículo 30. — La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito y al pago de la multa.

Si sus bienes no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

- 1o. La indemnización de los daños y perjuicios.
- 2o. El resarcimiento de los gastos del juicio.

Artículo 31. — La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.

El que pague todo el daño no podrá demandar a los otros cuota alguna.

Artículo 32. — El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.

Artículo 33. — La reparación se hará efectiva por la vía de apremio. En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:

- 1o. Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 11;

2o. Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

TITULO V

Imputabilidad

Artículo 34. — No son punibles:

- 1o. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, comprender la naturaleza y el sentido de lo que hacía o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación el tribunal ordenará la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos, que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

En todos los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso;

- 2o. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente;

- 3o. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño;

- 4o. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;

- 5o. El que obrare en virtud de obediencia debida;

- 6o. El que obrare en defensa propia, o de sus derechos, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

- a) Agresión ilegítima;
- b) Necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo;
- c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar; siempre que haya resistencia.

- 7o. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurren las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber procedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

Artículo 35o. — El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.

Artículo 36. — No es punible el menor de catorce años.

Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente, o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores hasta que cumpla diez y ocho años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres o guardadores.

Si la conducta del menor en el establecimiento donde diese lugar a suponer que se trata de un sujeto pervertido o peligroso, el tribunal podrá, después de las comprobaciones necesarias, prolongar su estadía hasta que tuviere veintidós años.

Artículo 37. — Cuando el menor tuviese más de catorce años y menos de diez y ocho, se observarán las siguientes reglas:

- a) Si el delito cometido tuviere pena que pudiese dar lugar a la condena condicional, el tribunal quedará autorizado para disponer la colocación del menor en un establecimiento de corrección si fuese inconveniente o peligroso dejarlo en poder de los padres, tutores o guardadores o de otras personas.

El tribunal podrá disponer esa colocación hasta que el menor cumpla veintidós años, pudiendo anticipar la libertad o retardarla hasta el máximo establecido cuando el término fijado fuese menor, si resultase necesario, dadas las condiciones del sujeto;

- b) Si el delito tuviese pena mayor, el tribunal queda autorizado para reducirla en la forma determinada para la tentativa.

Artículo 38. — El menor que no ha cumplido diez y ocho años no puede ser declarado reincidente.

Artículo 39. — En todos los casos de delito cometido por un menor, el tribunal puede privar a los padres de la patria potestad y a los tutores de la tutela. Podrá también disponer el cambio de guardadores. Para tomar esas medidas se tendrán en cuenta las situaciones respectivas del menor, sus padres, tutores o guardadores y lo que convenga al desenvolvimiento moral y educacional del primero.

Artículo 40. — En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condena de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente.

Artículo 41. — A los efectos del artículo anterior, se tendrán en cuenta:

- 1o. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y la extensión del daño y del peligro causados;
- 2o. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiere incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales que demuestren su mayor o menor perversidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

Artículo 41. — A los efectos del artículo anterior se tendrán en cuenta:

- 1o. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados.
- 2o. La edad, la educación, las costumbres y la conducta

precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria, dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales que demuestren su mayor o menor perversidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. Cuando el reo esté acusado de haber cometido un delito castigado con prisión o reclusión mayor de diez años, no podrá pronunciarse la condena antes de que su estado mental sea examinado por un médico especialista.

TITULO VI

Tentativa

Artículo 42. — El que comienza la ejecución de un delito premeditado de antemano, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.

Art. 42. — El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.

Artículo 43. — El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito.

Artículo 44. — La pena que correspondería al agente si hubiere consumado el delito se disminuirá de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de la tentativa será prisión de diez a quince años.

TITULO VII

Participación criminal

Artículo 45. — Los que toman parte en la ejecución del hecho o prestan al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubieren determinado directamente a otro a cometerlo.

Artículo 46. — Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán castigados con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años, y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años.

Artículo 47. — Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor principal, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.

Artículo 48. — Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor, instigador o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.

Artículo 49. — No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a los editores, impresores y demás personas que prestaron al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

TITULO VIII

Reincidencia

Artículo 50. — Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación.

Art. 50. — Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme a una pena privativa de libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiese mediado indulto o conmutación. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pudiese, según la ley argentina, dar lugar a extradición.

A los efectos de la reincidencia no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados.

Artículo 51. — Los reincidentes por segunda vez condenados a pena restrictiva de la libertad que excediera de dos años, cumplirán su condena con reclusión en un paraje de los territorios del Sud.

Art. 51. — El reincidente por segundo vez condenado a pena privativa de la libertad que excediera de dos años, cumplirá su condena con reclusión en un paraje de los territorios del Sud.

La pena de privación de libertad que el procesado sufrió antes de haber cumplido veintinueve años no podrán computarse para la agravación de la pena.

Artículo 52. — La relegación será impuesta por tiempo indeterminado y como accesoria de la última condena, cuando mediaren:

10. Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años;
20. Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión y dos de prisión de tres años o menos;
30. Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años;
40. Cinco condenas a prisión de tres años o menores.

Se aplicará también como accesoria de la condena en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubiera sido cinco por lo menos y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

Art. 52. — La reclusión en un paraje de los territorios del Sud será impuesta por tiempo indeterminado, y como accesoria de la última condena cuando mediaren:

10. Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión, por más de tres años;
20. Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión y dos de prisión de tres años o menos;
30. Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años;
40. Cinco condenas a prisión de tres años o menores;

Se aplicará también como accesoria de la condena en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubiesen sido cinco por lo menos, y que dos de ellos tuvieran fijada pena mayor de tres años de prisión.

Artículo 53. — La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como

reincidente cuando hubieren transcurrido los términos señalados en el artículo 65.

TITULO IX

Concurso de delitos

Artículo 54. — Cuando un hecho cayere bajo mas de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.

Artículo 55. — Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como mínimo el mínimo de la pena mayor y como máximo, la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Artículo 56. — Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor.

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión perpetua.

La inhabilitación se aplicará siempre sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo 10.

Artículo 57. — A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza se determinará por el orden en que se hallan enumeradas en el artículo 50.

Art. 58. — Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor, dictar a pedido de parte su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras.

Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que conoció de la infracción penal, según sea el caso.

TITULO X

Extinción de acciones y de penas

Artículo 59. — La acción penal se extinguirá:

- 1.º Por la muerte del imputado;
- 2.º Por la amnistía;
- 3.º Por la prescripción;
- 4.º Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.

Artículo 60. — La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.

Artículo 61. — La amnistía extinguirá la acción

penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Artículo 62. — La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

- 1.º A los quince años, cuando se tratase de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;
- 2.º Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratase de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos meses.
- 3.º A los cinco años, cuando se tratase de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;
- 4.º Al año, cuando se tratase de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;
- 5.º A los dos años, cuando se tratase de hechos reprimidos con multa mayor de dos mil pesos;
- 6.º Al año, cuando se tratase de hechos reprimidos con multa de quinientos a dos mil pesos;
- 7.º A los seis meses, cuando se tratase de hechos reprimidos con multa que no excediere de quinientos pesos.

Artículo 63. — La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

Artículo 64. — La acción penal por delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Artículo 65. — Las penas se prescriben en los términos siguientes:

- 1.º La de reclusión perpetua, a los veinte años;
- 2.º La de prisión perpetua, a los quince años;
- 3.º La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena;
- 4.º La de multa mayor de dos mil pesos, a los tres años.
- 5.º La de multa que no excediere de dos mil pesos, el año.

Artículo 66. — La prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Artículo 67. — La prescripción correrá o será interrumpida separadamente para cada uno de los partícipes de un delito...

Artículo 68. — El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Artículo 69. — El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el artículo 73.

Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovechará a los demás.

Artículo 70. — Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aun después de muerto.

TÍTULO XI

Del ejercicio de las acciones

Artículo 71. — Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:

- 1.° Las que dependieren de instancia privada;
- 2.° Las acciones privadas.

Artículo 72. — Son acciones dependientes de instancia privadas, las que nacieren de los delitos de violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, o de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

Artículo 73. — Son acciones privadas, las que nacen de los siguientes delitos:

- 1.° Adulterio;
- 2.° Calumnias, injurias, difamación y ultraje.
- 3.° Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154;
- 4.° Extorsión en el caso del artículo 170;
- 5.° Concurrencia de desleal, prevista en el artículo 159.

Art. 73. — Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:

- 1.° Adulterio.
- 2.° Calumnias e injurias.
- 3.° Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154.
- 4.° Concurrencia de desleal, prevista en el artículo 159.

Artículo 74. — La acción por delito de adulterio corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal.

Art. 74. — La acción por delito de adulterio corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal.

El cónyuge que ha consentido el adulterio o lo ha perdonado no tiene el derecho de iniciar la acción.

La muerte del cónyuge ofendido extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la pena.

Artículo 75. — La acción por calumnia, injuria, difamación o ultraje, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

Art. 75. — La acción por calumnia o injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

Artículo 76. — En los demás casos del artículo 73, se procederá únicamente por querrela o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.

Artículo 77. — Por los delitos contra la libertad política, además de la acción penal, procederá la acción particular de cualquier ciudadano.

Iniciada la acción por un ciudadano, el representante del Ministerio Fiscal deberá intervenir en el proceso, desde el principio hasta la terminación, y no podrá desistirse de la querrela, aunque desistiere el acusador particular.

TÍTULO XII

Significación de conceptos empleados en el Código

Artículo 78. — Para la inteligencia del texto de este Código, se tendrán presentes las siguientes reglas:

Los plazos señalados en este Código se contarán con arreglo a las disposiciones del código civil.

La expresión "reglamentos" u "ordenanzas", comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Se entiende por "banda", la asociación de dos o más individuos para cometer delitos indeterminados.

Con la palabra "mercadería", se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término "capitán", comprende a todo comandante de embarcación o al que le substituye.

El término "tributación", comprende a todos los que se hallan a bordo como oficiales o marineros.

(Se suprime el apartado sobre "banda").

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS

TÍTULO I

Delitos contra las personas

CAPÍTULO I

Delitos contra la vida

Artículo 79. — Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena.

Artículo 80. — Se aplicará reclusión perpetua pudiendo ser relegado:

- 1.° Al que matare a su ascendiente, descendiente cónyuge, sabiendo que lo son;
- 2.° Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, servicios graves, impulso de perversidad brutal, o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión, o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos;
- 3.° Al que matare a otro para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para sus cooperadores, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.

Artículo 81. — Se impondrá reclusión o prisión por tres a seis años:

- 1.° Al que matare a otro, si la víctima mismo provocó el acto homicida con ofensas o injurias ilícitas y graves;
- 2.° A la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o hasta tres días después, y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo delito;
- 3.° Al cónyuge, al ascendiente o al hermano, que matare a su cónyuge, descendiente o hermana, o al cómplice, o a ambos, en el acto de sorprenderles en ilegítimo concubito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las circunstancias particulares del hecho;
- 4.° Al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.

Art. 81. — 1o. Se impondrá reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres años: a) al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hacían excusable; b) al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.

2o. Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal, y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a) del inciso 1o. de este artículo.

Artículo 82. — Cuando en el caso del inc. 1.° del artículo 80, concurriese alguna de las circunstancias de los incisos 1.° y 4.° del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.

Artículo 83. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio tuviere lugar.

Artículo 84. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación especial en su caso, por cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo causare a otro la muerte.

Artículo 85. — El que causare un aborto será reprimido:

- 1.° Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer;
- 2.° Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

Artículo 86. — Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto, o cooperaren a causarlo.

Art. 86. — Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto, o cooperaren a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta no es punible.

1o. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2o. Si el embarazo proviene de una violación, de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota, demente, inconsciente o incapaz de resistencia, o de un incesto. Si la víctima es idiota o demente el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Artículo 87. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

Artículo 88. — Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto, o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.

CAPÍTULO II

Lesiones

Artículo 89. — Se impondrá prisión de un mes a un año al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código.

Artículo 90. — Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Artículo 91. — Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra, o de la capacidad de engendrar o concebir.

Artículo 92. — Si concurriese alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince años.

Artículo 93. — Sin concurriese la circunstancia enunciada en el inciso 1.° del artículo 81, la pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.

Artículo 94. — Sufrirá la pena de doscientos a mil pesos de multa, e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

CAPITULO III

Homicidio o lesiones en riña

Artículo 95. — Cuando en riña o agresión en que toman parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión.

Artículo 96. — Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de cuatro a ciento veinte días de prisión.

CAPITULO IV

Duelo

Artículo 97. — Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

10. Con prisión de uno a seis meses, al que no infiere lesión a su adversario, o sólo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89;
20. Con prisión de uno a cuatro años, al que causare la muerte de su adversario, o le le infiere lesión de las determinadas en los artículos 90 y 91.

Artículo 98. — Los que se batieren sin la intervención de padrinos mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

10. El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicida;
20. El que causare lesiones, con la pena señalada, para el autor de lesiones;
30. El que no causare lesiones con prisión de un mes a un año.

Artículo 99. — El que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo y el que desacreditare públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío, serán reprimidos:

10. Con multa de doscientos a mil pesos, si el duelo no se realizare, o si realizándose, no se produjere muerte ni lesiones, o sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 89;
20. Con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas en los artículos 90 y 91.

Artículo 100. — El que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido:

10. Con prisión de uno a cuatro años, si el duelo no se verificare, o si efectuándose, no resultare muerte ni lesiones;

20. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones;

30. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si se produjere la muerte.

Artículo 101. — El combatiente que faltare en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido:

10. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si causare lesiones a su adversario;
20. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si le causare la muerte.

Artículo 102. — Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren.

Artículo 103. — Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte, o en condiciones tales que de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos a mil pesos.

CAPITULO V

Abuso de armas

Artículo 104. — Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona, sin hierirla.

Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Artículo 105. — Será reprimida con prisión de quince días a seis meses la agresión con toda arma, aunque no se causare herida.

CAPITULO VI

Abandono de personas

Artículo 106. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que abandonare o dejare en desamparo a un menor de diez años u otra persona incapaz por causa de enfermedad, a quien deba mantener o cuidar.

La pena será de reclusión o prisión de dos a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz.

La reclusión o prisión será de tres a diez años, si ocurriere la muerte.

Artículo 107. — El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos, o por el cónyuge. Serán disminuidos a la mitad, cuando el abandono fuere de un menor de tres días, aun no inscripto en el registro civil, para salvar el honor propio o de la esposa, madre, hija o hermana.

TITULO III

Delitos contra la honestidad

CAPITULO I

Adulterio

Artículo 118. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año:

10. La mujer que cometiere adulterio;
20. El codeficiente de la mujer;
30. El marido, cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal;
40. La manceba del marido, dentro de la casa conyugal.

CAPITULO II

Violación y estupro

Artículo 119. — Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviese acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:

10. Cuando la víctima fuere menor de doce años;
20. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistir.

30. Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Artículo 120. — Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

Artículo 121. — Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido y tuviese con ella acceso carnal.

Artículo 122. — La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, cuando en los casos del artículo 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima, o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guarda de aquélla, o con el concurso de dos o más personas.

Artículo 123. — Se impondrá reclusión o prisión de seis a diez años, cuando en el caso del artículo 120, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el anterior.

Artículo 124. — Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años, cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

CAPITULO III

Corrupción y ultraje al pudor

Artículo 125. — El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o faci-

Artículo 108. — Será reprimido con multa de cien a quinientos pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años, o a una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal, o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.

TITULO II

Delitos contra el honor

Artículo 109. — La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.

Artículo 110. — El que desacreditare a otro será reprimido con multa de cien a un mil pesos moneda nacional.

Artículo 111. — El acusado de injuria sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:

10. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual;
20. Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal;
30. Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.

En estos casos si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.

Artículo 112. — El reo de calumnia o injuria equivoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimo a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.

Artículo 113. — El que publicare o reprodujere por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.

Artículo 114. — Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

Artículo 115. — Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

Artículo 116. — Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

Artículo 117. — El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación quedará exento de pena, si se retractare públicamente, antes de contestar la querrela o en el acto de hacerlo.

litare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado:

10. Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera menor de doce años;
20. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si la víctima fuera mayor de doce años o menor de diez y ocho;
30. Con prisión de dos a seis años, si la víctima fuera mayor de diez y ocho años y menor de veintidós.

Cualesquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión desde diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guarda, o que hiciera con ella vida marital.

Artículo 126. — Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviére o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad a cualesquiera otros medios de coerción aunque hubiere consentimiento de la víctima.

Artículo 127. — Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare, deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119 sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en el artículo 122, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

Artículo 128. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y el que los expusiere, distribuyere o hiciere circular.

Artículo 129. — Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos, el que en sitio público ejecutare o hiciere ejecutar por otro exhibiciones obscenas.

La misma pena se aplicará cuando los actos tuvieren lugar en sitio privado, pero expuestos a que sean vistos involuntariamente por terceros.

CAPITULO IV

Rapto

Artículo 130. — Sufrirá prisión de uno a cuatro años, el que con miras deshonestas sustrajere o retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude.

La prisión será de dos a seis años, si la robada fuere una mujer casada.

Artículo 131. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de dos a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los artículos anteriores

Artículo 132. — En los casos de violación, estupro o rapto de una mujer soltera, quedará exento de pena

el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

Artículo 133. — Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualesquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza cooperasen a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

TITULO IV

Delitos contra el estado civil

CAPITULO I

Matrimonios ilegales

Artículo 134. — Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeran matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.

Artículo 135. — Serán reprimidos con prisión de dos a seis años.

10. El que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;
20. El que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.

Artículo 136. — El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá en su caso la pena que en ellos se determina.

Si lo autorizase sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial por seis meses a dos años.

Sufrirá multa de cien a mil pesos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.

Artículo 137. — En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor imputbe que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.

CAPITULO II

Supresión y suposición del estado civil

Artículo 138. — Se aplicará prisión de seis meses a dos años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro, con el propósito de causar perjuicio.

Artículo 139. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años:

10. A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan, y al médico o partera que cooperare a la ejecución del delito.
20. Al que por medio de exposición, de ocultación o de otro acto cualquiera, hiciere

incierto, alterare o suprimiere el estado civil de un menor de diez años.

TITULO V

Delitos contra la libertad

CAPITULO I

Delitos contra la libertad individual

Artículo 140. — Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.

Artículo 141. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.

Artículo 142. — Se aplicará prisión de uno a cuatro años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

10. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas, o con propósitos de lucro, o con fines religiosos o de venganza;
20. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular;
30. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor;
40. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública, u orden de autoridad pública;
50. Si la privación de la libertad durare más de un mes.

Artículo 143. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

10. El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privare a alguno de su libertad personal;
20. El funcionario que retuviere a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar;
30. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente;
40. El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido.
50. El funcionario que impusiere a los presos que guarda, severidades, vejaciones o apremios ilegales, o los colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados para el efecto.
60. El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplaze, que recibiere algún res sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena;

70. El alcalde o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito;

80. El funcionario que desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquiera vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales;

90. El funcionario competente que, teniendo noticia de una detención ilegal, omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar, o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.

Artículo 144. — Cuando en los casos del artículo anterior, concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 142, se aplicará la pena establecida en este último.

Artículo 145. — Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la república, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro, o de alistarla en un ejército extranjero.

Artículo 146. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que sustrajere a un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo recibiere u ocultare.

Artículo 147. — En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren, o no diere razón satisfactoria de su desaparición.

Artículo 148. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que indujere a un mayor de diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.

Artículo 149. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere sustraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.

La pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviere diez años cumplidos.

CAPITULO II

Violación de domicilio

Artículo 150. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias, o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

Artículo 151. — Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley, o fuera de los casos que ella determina.

Artículo 152. — Las disposiciones de los artículos anteriores, no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia.

CAPITULO III

Violación de secretos

Artículo 153. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado, o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida.

Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho.

Artículo 154. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.

Artículo 155. — El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de doscientos a mil pesos, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

Artículo 156. — Será reprimido con multa de doscientos a mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

Artículo 157. — En la misma pena incurrirá el que divulgare actuaciones o procedimientos, que por la ley deban quedar secretos.

CAPITULO IV

Delitos contra la libertad de trabajo y asociación

Artículo 158. — Será reprimido con prisión de un mes a un año el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que por sí o por cuenta de alguien ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.

Artículo 159. — Será reprimido con multa de mil a cuatro mil pesos el que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratase de desviar en su provecho la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

CAPITULO V

Delitos contra la libertad de reunión

Artículo 160. — Será reprimido con prisión de quince días a tres meses el que impidiere material-

mente o turbare una reunión lícita con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.

CAPITULO VI

Delitos contra la libertad de la prensa

Artículo 161. — Sufrirá prisión de uno a seis meses el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.

TITULO VI

Delitos contra la propiedad

CAPITULO I

Hurto

Artículo 162. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.

Artículo 163. — Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:

- 1.º Cuando el hurto fuere de animales en rebaño, o de productos separados del suelo y dejados por necesidad en el campo;
- 2.º Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública, o de un infortunio particular del damnificado;
- 3.º Cuando se hiciere uso de ganza, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la subtracción, o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída o hallada;
- 4.º Cuando se perpetrare con escalamiento.

CAPITULO II

Robo

Artículo 164. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

Artículo 165. — Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.

Artículo 166. — Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años:

- 1.º Si por las violencias ejercidas para consumir el robo, se pusiere en peligro de muerte a una persona, o se alterare permanentemente su salud;
- 2.º Si el robo se cometiere en despoblado y en banda.

Artículo 167. — Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años:

- 1.º Si se cometiere el robo en despoblado y con armas;
- 2.º Si se cometiere en lugares poblados y en banda;
- 3.º Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, puerta o ventana de un lugar habitado, o sus dependencias inmediatas;
- 4.º Si concurren alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163.

CAPITULO III

Extorsión

Artículo 168. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que con violencia o intimidación o simulando orden de autoridad pública, obligue a otro a enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Art. 168. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que con intimidación o simulando orden de autoridad pública, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Artículo 169. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, obligare a otro maliciosamente a la entrega de un valor o de una cosa cualquiera que no sea del culpable, o a contraer una obligación o a extinguir un crédito.

Artículo 170. — Sufrirá prisión de tres a diez años, el que detuviere en rehenes a una persona para sacar rescate.

Artículo 171. — Sufrirá prisión de dos a seis años, el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución.

CAPITULO IV

Estafas y otras defraudaciones

Artículo 172. — Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido o engaño.

Artículo 173. — Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:

- 1.º El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio;
- 2.º El que con perjuicio de otro se negara a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos, o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración, u otro título que produzca obligación de entregar o devolver;

- 3.º El que defraudare, haciendo subscribir con engaño algún documento;
- 4.º El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dió o de tercero;
- 5.º El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero;
- 6.º El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos;
- 7.º El comisionista, capitán de buque o cualquier otro mandatario que cometiere defraudación, alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho;
- 8.º El que cometiere defraudación, substrayendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante;
- 9.º El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios bienes ajenos;
10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos.

Artículo 174. — Sufrirá prisión de dos a seis años:

- 1.º El que para procurarse a sí mismo o procurar en otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de préstamo a a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada, o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa;
- 2.º El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo;
- 3.º El que defraudare usando de pesas o medidas falsas;
- 4.º El empresario o constructor de una obra cualquiera, o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas de los bienes o del Estado;
- 5.º El que cometiere fraude en ejercicio de alguna administración pública.

En los casos de los dos números precedentes, el culpable, si fuere empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.

Artículo 175. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos:

- 1.º El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca, o un tesoro y se apropiare la cosa, o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil;
- 2.º El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito;
- 3.º El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero, o se la apropiare o dispusiere de ella, sin las formalidades legales;
- 4.º El acreedor que a sabiendas exija o acepte

de su deudor a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.

CAPITULO V

Quebrados y otros deudores punibles

Artículo 176.—Será reprimido como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:

- 1.º Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;
- 2.º No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa;
- 3.º Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

Artículo 177.—Será reprimido como quebrado culpable con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial de dos a cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios, o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta.

Artículo 178.— Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o contador o tenedor de libros, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento o culpable, en su caso.

Artículo 179.— Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometido alguno de los actos mencionados en el artículo 176.

Artículo 180.— Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción.

La misma pena sufrirá, en su caso, todo director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa, a de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes que concluyere un convenio de este género.

CAPITULO VI

Usurpación

Artículo 181.— Será reprimido con prisión de un mes a dos años:

- 1o. El que por violencia, engaño o abuso de confianza, despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, o de un derecho real

de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble;

- 2o. El que para apoderarse de todo o parte de un inmueble destruyere o alterare los términos o límites del mismo;
- 3o. El que, con violencias o amenazas, trabare la posesión de un inmueble.

Artículo 182.— Será reprimido con prisión de quince días a un año:

- 1o. El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos, o los sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho.
- 2o. El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.
- 3o. El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviar o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes, o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.

CAPITULO VII

Daños

Artículo 183.— Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

Artículo 184.— La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

- 1o. Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones;
- 2o. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;
- 3o. Emplear substancias venenosas o corrosivas;
- 4o. Cometer el delito en despojado y en banda;
- 5o. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos, o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos.

CAPITULO VIII

Disposiciones generales

Artículo 185.— Están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de lo civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causan:

- 1o. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta;

- 2o. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no haya pasado a poder de otro;
- 3o. Los hermanos y cuñados si viviesen juntos.

La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito.

TITULO VII

Delitos contra la seguridad pública

CAPITULO I

Incendios y otros estragos

Artículo 186.— El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:

- 1o. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes;
- 2o. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería;
- 3o. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona;
- 4o. Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Artículo 187.— Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de inmersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina, o cualquiera otro medio poderoso de destrucción.

Artículo 188.— Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.

La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, substraer, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida.

Artículo 189.— Será reprimido con prisión de un mes a un año el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.

Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona, o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cuatro años.

CAPITULO II

Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación

Artículo 190.— Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública por tierra o por agua, o impidie-

re o estorbare la ejecución de las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas.

El máximo se elevará a seis años, si resultare peligro para las personas. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Artículo 191.— El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren, o para hacerle descarrilar, será reprimido:

- 1o. Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente;
- 2o. Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente;
- 3o. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona;
- 4o. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona.

Artículo 192.— Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior, en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril.

Artículo 193.— Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha.

Artículo 194.— Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante, o a detener o entorpecer la navegación.

Si el hecho produjere naufragio, avería o varamiento, la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión.

Si el accidente causare lesión a alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Artículo 195.— Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario.

Artículo 196.— Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que por imprudencia o negligencia, o por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo.

Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cuatro años.

Artículo 197.— Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

CAPITULO III

Piratería

Artículo 198.— Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años:

10. El que practicare en el mar o en los ríos de la República algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante, o sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida.
20. El que, abusando de una patente de corso legítimamente concedida, practicare algún acto de depredación o cualquier hostilidad contra buques de la República o de otra nación para hostilizar a la cual no estuviera autorizado.
30. El que se apodere de algún buque o de lo que perteneciere a su equipaje, por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante.
40. El que entregare a piratas un buque, su carga, o lo que perteneciere a su tripulación;
50. El que, con amenazas o violencias, se opusiere a que el comandante o la tripulación defendiera el buque atacado por piratas;
60. El que por cuenta propia o ajena, equipare un buque destinado a la piratería;
70. El argentino o extranjero residente en la República que traficase con piratas, o les suministrare auxilios;
80. El comandante de un buque armado, que navegare con dos o más patentes de diversas potencias.

Artículo 199. — Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se contrate en el buque atacado, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

CAPITULO IV

Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas

Artículo 200. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Artículo 201. — Las penas del artículo precedente serán aplicadas, al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

Artículo 202. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Artículo 203. — Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia o negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de quinientos a dos mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de seis meses a dos años si resultare enfermedad o muerte.

Artículo 204. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos, el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a las prescripciones médicas o diversa de la declarada o convenida.

Si del hecho resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de dos a seis años de prisión.

Artículo 205. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Artículo 206. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses, el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.

Artículo 207. — En el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.

Artículo 208. — Será reprimido con prisión de quince días a un año:

10. El que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo, o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito;
20. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiére la curación de enfermedades a término fijo, o por medios secretos o infalibles;
30. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 10. de este capítulo.

TITULO VIII

Delitos contra el orden público

CAPITULO I

Instigación a cometer delitos

Artículo 209. — El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes a cuatro años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.

CAPITULO II

Asociación ilícita

Artículo 210. — Será reprimido con reclusión o prisión de un mes a cinco años, el que tomare parte

en una asociación o banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

CAPITULO III

Intimidación pública

Artículo 211. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que para infundir un temor público, o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, o amenazare con un desastre de peligro común.

Art. 211. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que para infundir un temor público, o suscitar tumultos o desórdenes hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, las colocare con ese fin o amenazare con un desastre de peligro común.

Artículo 212. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

10. El que fabrique, venda, transporte o conserve explosivos susceptibles de causar estragos, sin permiso de la autoridad;
20. El que propague por cualquier medio los procedimientos para causar incendio o estragos y para fabricar los materiales destinados a producirlos;
30. El que propague los medios de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos.

CAPITULO IV

Apología del crimen

Artículo 213. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.

TITULO IX

Delitos contra la seguridad de la nación

CAPITULO I

Traición

Artículo 214. — Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos, o les prestare cualquier ayuda o socorro.

Art. 214. — Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino, o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que

tomase las armas contra ésta, se uniera a sus enemigos, o les prestare cualquiera ayuda o recurso.

Artículo 215. — Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

10. Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad;
20. Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.

Artículo 216. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

Artículo 217. — Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento.

Artículo 218. — Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la república, en guerra contra un enemigo común.

CAPITULO II

Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación

Artículo 219. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos hostiles, no aprobados por el gobierno nacional, diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero.

Si de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Artículo 220. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la república y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra, o los salvoconductos debidamente expedidos.

Artículo 221. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera.

Artículo 222. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa, o a las relaciones exteriores de la Nación.

En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.

Artículo 223. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el art.

título precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.

Artículo 224. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente levantara planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares, o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.

Artículo 225. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.

TITULO X

Delitos contra los poderes públicos y orden constitucional

CAPITULO I

Rebelión

Artículo 226. — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, los que se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, cambiar la Constitución, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Art. 226. — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años los que se alzaren en armas para cambiar la constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Artículo 227. — Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional, y los miembros de las Legislaturas Provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quedan a merced de algún gobierno o de alguna persona. (Artículo 29 de la Constitución Nacional).

Artículo 228. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y preceptos del Papa que, para su cumplimiento, necesitan del pase del gobierno sin haberlo obtenido; y de uno a seis años de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase.

CAPITULO II

Sedición

Artículo 229. — Serán reprimidos con prisión de uno a tres años los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra

otra, se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales, o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley.

Artículo 230. — Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años:

- 1o. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste. (Art. 22 de la Constitución Nacional).
- 2o. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales, o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.

CAPITULO III

Disposiciones comunes a los capítulos precedentes

Artículo 231. — Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retirasen inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.

No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas.

Artículo 232. — En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.

Artículo 233. — El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.

Artículo 234. — El que sedujere tropas, o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia, o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar.

Si llegare a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos.

Artículo 235. — Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena.

Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años.

Artículo 236. — Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.

TITULO XI

Delitos contra la administración pública

CAPITULO I

Atentado y resistencia contra la autoridad

Artículo 237. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Artículo 238. — La prisión será de seis meses a dos años:

- 1o. Si el hecho se cometiere a mano armada;
- 2o. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas;
- 3o. Si el culpable fuere funcionario público;
- 4o. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Artículo 239. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requisición de aquél, o en virtud de una obligación legal.

Artículo 240. — Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratase de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

Artículo 241. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:

- 1o. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones;
- 2o. El que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiera o estorbare a un funcionario público, cumplir un acto propio de sus funciones.

Artículo 242. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescrita en las constituciones o leyes respectivas.

CAPITULO II

Desacato

Artículo 244. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que provocare a duelo, amenazare, injuriare o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o decoro a un funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones y al tiempo de practicarlas.

La prisión será de un mes a un año, si el ofendido fuere el presidente de la Nación, un miembro del Congreso, un gobernador de provincia, un ministro nacional o provincial, un miembro de las legislaturas provinciales o un juez.

Artículo 245. — Al culpable de desacato no se le admitirá la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos o cualidades atribuidas al ofendido.

CAPITULO III

Usurpación de autoridad, títulos u honores

Artículo 246. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

- 1o. El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente;
- 2o. El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público, o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas;
- 3o. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

Artículo 247. — Será reprimido con multa de cincuenta a mil pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere, o se abrogase grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.

CAPITULO VI

Abusos de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

Artículo 248. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Artículo 249. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

Artículo 250. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

Artículo 251. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad, o de sentencias o de mandatos judiciales.

Artículo 252. — Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin haberse admitido la renuncia de su destino, lo abandone con daño del servicio público.

Artículo 253. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurren los requisitos legales.

En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

CAPITULO V

Violación de sellos y documentos

Artículo 254. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación a la identidad de una cosa.

Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de cincuenta a quinientos pesos.

Artículo 255. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos.

CAPITULO VI

Cohecho

Artículo 256. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Artículo 257. — Será reprimido con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, el juez que aceptare promesa o dádiva para dictar una

resolución o fallo en asunto sometido a su competencia.

Artículo 258. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere dádivas a un funcionario público para que haga u omita un acto relativo a sus funciones. Si la dádiva se hiciera u ofreciere a un juez, la pena será de un mes a cuatro años de prisión.

Si el culpable fuere funcionario público sufrirá además inhabilitación, en el primer caso, por seis meses a seis años, y en el segundo, por unos diez años.

Artículo 259. — Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas que le fueren presentadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

CAPITULO VII

Malversación de caudales públicos

Artículo 260. — Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Artículo 261. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

Artículo 262. — Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor sustraído, el funcionario público que por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substitución de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

Artículo 263. — Quedan sujetos a las disposiciones pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o anteriores los que administraren o custodiaren bienes depositados por autoridad competente, aunque pertenecían a particulares.

Artículo 264. — Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses el funcionario público que, teniendo fondos expedidos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente.

En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

CAPITULO VIII

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Artículo 265. — Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por uno a cinco años, el funcionario público que directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación hubieren intervenido, y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarias o concursos.

CAPITULO IX

Exacciones ilegales

Artículo 266. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exigiere una contribución ilegal, o abusando de su cargo, reclamare o recibiere dinero u otros valores.

La inhabilitación será de uno a cuatro años si la exacción se verificase empleando fuerza.

Artículo 267. — Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convierta en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en el artículo anterior.

Artículo 268. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exigiere por sí o por persona interpuesta, derechos o propinas por lo que deba practicar gratuitamente, en virtud de su oficio, o cobrare mayores derechos que los que le correspondan.

Si para efectuar la exacción supusiese orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, sufrirá, además, inhabilitación especial por uno a seis años.

CAPITULO X

Prevaricato

Artículo 269. — Sufrirá multa de mil a cuatro mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua, el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo, o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Lo dispuesto en el párrafo 1.º de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores.

Artículo 270. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil quinientos pesos e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda, o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 30, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

Artículo 271. — Será reprimido con multa de doscientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo, perjudicase deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

Artículo 272. — La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás

funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

CAPITULO XI

Denegación y retardo de justicia

Artículo 273. — Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.

Artículo 274. — El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

CAPITULO XII

Falso testimonio

Artículo 275. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad, o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

Artículo 276. — La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

CAPITULO XIII

Encubrimiento

Artículo 277. — Será reprimido con prisión de quince días a dos años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:

- 1.º Ocultar al delincuente o facilitar su fuga para sustraerlo a la justicia;
- 2.º Procurar la desaparición de los rastros o pruebas del delito;
- 3.º Guardar, esconder, comprar, vender o recibir en prenda o en cambio los efectos sustraídos;
- 4.º Negar a la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de penetrar en el domicilio para tomar la persona del delincuente que se encuentre en él;
- 5.º Guardar habitualmente delincuentes, u ocul-

tar en la misma forma, armas o efectos de los mismos, aunque no tuviere conocimiento determinado de los delitos;

- 6.º Dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo.

Artículo 278. — Estarán exentos de pena por ocultación los consanguíneos y afines en línea ascendente y descendente, los hermanos, los cónyuges y los afines colaterales en segundo grado.

En los casos de delitos contra las personas, quedarán también exentos de pena por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

Artículo 279. — La exención de pena a que se refiere el artículo anterior, se entenderá siempre que la ocultación no se haya hecho por precio o participando de los efectos del delito.

CAPITULO XIV

Evasión

Artículo 280. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.

Artículo 281. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá además, inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de cien a mil pesos.

TITULO XII

Delitos contra la fe pública

CAPÍTULO I

Falsificación de moneda, billetes de bancos, títulos al portador y documentos de crédito

Artículo 282. — Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación.

Artículo 283. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada.

Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a tres años de prisión.

Artículo 284. — Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de cien a dos mil pesos de multa.

Artículo 285. — Para los efectos de los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales o municipales, los títulos, cédulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o compañías autorizados para ello.

Artículo 286. — Si la falsedad, cercenamiento o alteración se cometiere respecto de monedas extranjeras que no tengan curso legal en la República, o respecto de billetes de banco, títulos de deuda pública, títulos al portador y documentos de crédito extranjeros, la pena será de uno a cinco años de prisión en el caso del artículo 282, de seis meses a dos años en el del artículo 283 y de cincuenta a quinientos pesos de multa en el del artículo 284.

Artículo 287. — Serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada.

CAPITULO II

Falsificación de sellos, timbres y marcas

Artículo 288. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años:

- 1o. El que falsificare sellos oficiales;
- 2o. El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrados cuya emisión está reservada a la autoridad, o tenga por objeto el cobro de impuestos.

En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero.

Artículo 289. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

- 1o. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas de que se use en las oficinas públicas o por funcionarios públicos, para contrastar pesos o medidas o identificar cualquier objeto;
- 2o. El que falsificare billetes de empresas, sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, exigidas por la ley en cierta clase de trabajos o de artículos.
- 3o. El que aplicare marcas o contraseñas de las oficinas públicas, o los sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, a que se refiere el número precedente, a objetos, obras o artículos distintos de aquellos a que debían ser aplicados.

Artículo 290. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición.

El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etcétera, inutiliza-

dos, será reprimido con multa de cien a cinco mil pesos.

Artículo 291. — Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPITULO III

Falsificación de documentos en general

Artículo 292. — El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.

Artículo 293. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Artículo 294. — El que suprimiere o destruyere en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.

Artículo 295. — Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.

La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

Artículo 296. — El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Artículo 297. — Para los efectos de este capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 285.

Artículo 298. — Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPITULO IV

Disposiciones comunes a los capítulos precedentes

Artículo 299. — Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introdujere en el país o conservare en su poder, materias o instrumentos convenientemente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título.

CAPITULO V

De los fraudes al comercio y a la industria

Artículo 300. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:

- 1o. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas, o por reunión o coacción entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado;
- 2o. El que ofreciere fondos públicos, o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas, o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas;
- 3o. El fundador, director, administrador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa, o de otro establecimiento mercantil, que publicare o autorizare un balance o cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que hubiese sido el propósito perseguido al verificarlo.

Artículo 301. — Será reprimido con prisión de dos a seis años el director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica de otra índole, que prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a los estatutos, leyes u ordenanzas que los rijan, a consecuencia de los cuales, la persona jurídica o la asociación, quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos o en la necesidad de ser disueltos.

CAPITULO VI

Del pago con cheques sin provisión de fondos

Artículo 302. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses, el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero y siempre que no concurran las circunstancias del artículo 162, un cheque o giro sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto y no abonare el mismo en moneda nacional de curso legal dentro de las 24 horas de haber sido protestado.

Disposiciones complementarias

Artículo 303. — El presente código regirá como ley de la Nación desde el 1o. de enero de 1913.

Art. 303. — El presente código regirá como ley de la nación seis meses después de su promulgación.

Artículo 304. — El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del código conjuntamente con la exposición de motivos que lo acompaña. Los gastos que origine la publicación se imputarán a esta ley.

Artículo 305. — Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 4189, 7029, 9077 y 9143 lo mismo que las demás que se opusieron a la presente. Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por la presente, quedan reemplazadas por la reclusión y las de prisión y arresto, por la de prisión.

Artículo 306. — Comuníquese al P. E.

Dado en la Cámara de Diputados en Buenos Aires a 22 de agosto de 1917.

MARIANO DEMARÍA.
C. González Bonorino.

Sala de la comisión, 25 de septiembre de 1919.

J. V. González. — E. del Valle Iberlucea. — P. A. Garro.

III

Proyecto de Código Penal del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, septiembre 10. de 1906.

Al honorable Congreso de la Nación:

El poder ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad, en un folleto impreso, el proyecto de código penal redactado, en cumplimiento de una parte de su cometido, por la comisión constituida por decreto de fecha 19 de diciembre de 1904.

La larga exposición de motivos que precede al proyecto excusa al poder ejecutivo de la tarea de comentarlo y lo entrega, por consiguiente, al juicio de vuestra honorabilidad remitiéndose al ilustrado comentario de sus autores y a la enunciación de propósitos que con relación a la necesidad de este trabajo contiene el decreto que instituyó la comisión redactora.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

J. FIGUEROA ALCORTA
FEDERICO PINEDO.

Decreto del Poder Ejecutivo nombrando una comisión encargada de proyectar diversas reformas legislativas

Buenos Aires, diciembre 19 de 1904.

Considerando:

1o. Que hay necesidad evidente de dar la mayor estabilidad y unidad posibles a las múltiples leyes que rigen en la república sobre penalidad y su procedimiento, por las graves perturbaciones que de tal multiplicidad resultan para la buena administración de justicia, y en particular por lo que se refiere a la permanencia del extranjero en el territorio de la Nación.

2o. Que además de las leyes penales, existen otras numerosas dictadas ya por el Congreso, ya por las

legislaturas de las provincias, relativas a derechos personales y reales y a la forma de hacer efectivos unos y otros en el territorio de las diferentes provincias y en el de la capital y territorios federales, que hacen cada vez más difícil el ejercicio y goce de la condición civil asegurada por la constitución a todos los habitantes de la república, sobre las bases de igualdad y garantía comunes;

3o. Que existe conveniencia indudable en revisar e imprimir carácter permanente, o por lo menos, durante un largo período de tiempo, al código penal de la Nación, el que después de frecuentes reformas generales o parciales, no ha logrado satisfacer los unánimes anhelos de una justicia equitativa, equilibrada y concorde con el estado social de la población en las varias regiones de la república, y menos en la capital federal.

4o. Que las leyes orgánicas de la justicia, y las de procedimientos, si bien han realizado progresos considerables en el sentido de los principios jurídicos más adelantados en la legislación contemporánea, han producido por su multiplicidad y diversidad, un excesivo y complicado mecanismo que se traduce en retardos y carestía de la justicia misma, inconvenientes agravados por la diferencia de fueros federal, provincial y mixto, y por la posición anormal en que ha venido a colocarse la justicia en el distrito federal de la capital, donde por su población e importancia económica, se condensa la mayor parte de la vida judicial del país, situación que a todas luces es urgente regularizar a los efectos de una mayor simplificación, y de obtener una administración de justicia más activa y menos onerosa;

5o. Que el desarrollo de la legislación parcial dictada desde 1862 hasta 1904, relativa a organización y procedimientos en el fuero federal, presenta un gran conjunto de leyes dispersas que dificultan su conocimiento por el pueblo y su estudio en las aulas, aparte de que, por el tiempo transcurrido y por el espíritu liberal de la jurisprudencia desarrollada en los tribunales, reclama reformas en armonía con los adelantos de la época y el crecimiento general del país bajo todos sus aspectos: razones que imponen ya una codificación o ya una correlación más íntima entre esas numerosas leyes sueltas e incoherentes las más veces;

6o. Que a estas consideraciones debe agregarse la diferencia de formas procesales y de garantías a que se halla sujeta la administración de justicia en las distintas provincias, las cuales, si bien se hallan contenidas en la forma de gobierno federal establecida por la constitución, esta misma tuvo ya en vista la necesidad de uniformar las reglas de procedimiento y las instituciones judiciales, en cuanto y en la medida que fuera posible, como una tendencia hacia la ulterior unificación de todas por consenso de las mismas provincias y del Congreso (C. N. art. 67, inc. 11; art. 107); y con esto manifestaron los autores de la constitución, una vez más, el alto espíritu de previsión que es la característica de sus preceptos, sin que tales elementos parciales de centralización importasen debilitar en lo más mínimo el vínculo federativo interprovincial, desde que, como ha ocurrido en otras naciones de federalismo más absoluto, como en Suiza y en Alemania, se ha ido uniformando diversos ramos de la legislación diferencial, inspirados en los mismos anhelos de progreso público y consolidación nacional del presente decreto: siendo de notar que ya al discutirse la cláusula 11a. del art. 64 de la constitución argentina en 1853 (art. 67 actual), se hizo presente que la diversidad de legislación era un

verdadero "laberinto" que debía oponer graves obstáculos al propósito de afianzar la justicia que la constitución manifestaba en su preámbulo (Actas del Cong. Gen. Const. 1853, Edic. 1898, pág. 342).

7o. Que si una unificación completa no fuera posible, es indudable la conveniencia de realizar esa correlación en numerosas materias que directamente afectan el bienestar de las personas y el desarrollo de la prosperidad pública, ya sea impidiendo el más libre ejercicio de los derechos personales en las diferentes Provincias, ya gravando excesivamente las operaciones de transmisión o disposición de los bienes, ya, en fin, en el sentido de la seguridad de las personas y de la propiedad, tan esenciales para radicar en el país una población culta y laboriosa: cuestiones todas estas que la Constitución ha previsto cuando ha declarado que "las Provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común" (art. 107), siendo evidente que caería bajo esta autorización un convenio que tuviere por objeto adoptar ciertas y determinadas reglas comunes para los fines antes expresados, siempre que concurriese en él la aprobación del Congreso Federal;

8o. Que, del punto de vista de los procedimientos más eficaces para llegar a los resultados que aquí se expresan, de fundar un orden judicial firme y progresivo, se hace ya necesario acudir a los estudios directos de la condición social del país, por medio de investigaciones suficientes a fin de obtener el conocimiento posible de la verdad, sobre que ha de apoyarse la obra del legislador, so pena de vagar indefinidamente en las incertidumbres y pruebas que han caracterizado hasta ahora los códigos comunes y leyes procesales de la República, con algunas notables excepciones; a cuyo efecto se impone la necesidad de autorizar en toda la administración, las indagaciones que concurren a ilustrar más el juicio de los que se encarguen de la delicada misión de preparar los respectivos proyectos de ley;

9o. Que el personal ordinario del Ministerio de Justicia carece del tiempo material requerido para afrontar la tarea antes enunciada en toda su extensión, habiendo sido, por esta causa, usual, según los casos, el nombramiento de comisiones especiales de uno o más jurisconsultos o peritos para redactar, corregir, reformar o editar los códigos, como se hizo (sin referirse a los códigos y leyes de otras jurisdicciones, como los militares rurales, marítimos, etc.) con el Código Civil en 1864 y 1900; con el de Comercio en 1870, 1886 y 1889; con el Penal en 1864, 1886, 1890 y 1903; con el de Minería en 1871, 1876, 1886, 1890 y 1896; con el de Organización del Jurado y procedimiento penal federal en 1875; con el de Procedimientos en lo Civil y Comercial en 1886 y 1894 y el de Procedimientos en lo Criminal y otras leyes en 1884, 1885, 1888 y 1895; y es tanto más aceptable el precedente en las actuales circunstancias, en que el desarrollo de todas las condiciones de la vida en la República y las imprescindibles conclusiones de las ciencias correlativas con la legislación penal, hacen imposible la realización por una sola persona o por los funcionarios oficiales exclusivamente, de una labor preparatoria y definitiva de tanta magnitud, hallándose, por otra parte, aquellos consagrados al estudio y redacción de otros proyectos de igual importancia para completar o perfeccionar la legislación judicial y educativa de la República; Por estas consideraciones,

El Presidente de la República,—

DECRETA:

Art. 1o. Constitúyese una Comisión encargada de la preparación de los siguientes trabajos legislativos:

- Revisión del Código Penal.
- Revisión de las leyes de organización de la Justicia ordinaria en la Capital de la República.
- Revisión del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital.
- Revisión y codificación de las leyes de justicia federal, dictadas hasta 1904, comprendida la Capital y Territorios Nacionales.
- Bases para una Convención en que se establezca la correlación de las leyes de organización y procedimiento judicial de la Nación y de las Provincias en materia civil, comercial y penal.

Art. 2o. La Comisión se compondrá de cinco jurisconsultos, un médico y un secretario, se dará su propia organización interna, consultando el mejor desempeño de las tareas que se le encomiendan, y establecerá la forma de sus procedimientos.

Art. 3o. Esta Comisión, por intermedio de su Presidente, podrá dirigirse a todas las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, y por el del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, a los tribunales y dependencias de los Poderes Judicial y Legislativo y a los Gobiernos de Provincia, para requerir todos los datos, informaciones y demás elementos que considere necesarios para ilustrar su juicio, y todos los funcionarios y oficinas del Poder Ejecutivo quedan obligados a prestar los referidos servicios como inherentes a los deberes de sus respectivos cargos.

Art. 4o. Para realizar los trabajos enumerados en el art. 1o. la Comisión puede darles la ordenación que crea más conveniente, consultando su mayor sencillez y claridad, y podrá presentarlos separadamente o en cuerpos homogéneos, según la unidad o afinidad de las materias que aquellos comprendan así como acompañarlos de memorias, informes o notas explicativas, siempre que las considere necesarias.

Art. 5o. El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, proveerá a la Comisión de todos los útiles y medios que requiera durante su mandato, así como de las impresiones, copias y otros trabajos indispensables.

Art. 6o. Nómbrase para constituir la Comisión de Reformas Legislativas instituidas en el presente Decreto, a los señores: Doctor Francisco Beazley, Doctor Rodolfo Rivarola, Doctor Diego Saavedra, Doctor Cornelio Moyano Gacitúa, Doctor Norberto Piñero y Doctor José María Ramos Mejía, y Secretario al señor José Luis Duffy.

Art. 7o. Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional.

QUINTANA.
J. V. GONZÁLEZ.

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Tenemos el honor de remitir a V. E., el Proyecto de Código Penal que hemos redactado, en cumplimiento de una parte de la tarea que nos encomendó el P. E., por decreto de 19 de diciembre de 1904.

Con este motivo, deseamos hacer presente a V. E.

cuáles son las modificaciones que hemos hecho al Código vigente y cuáles los motivos que las han determinado.

Podemos, desde luego, asegurar a V. E., que todos los miembros de la Comisión, penetrados de que un Código Penal, no es el sitio aparente para ensayos de teorías más o menos seductoras, han renunciado deliberadamente y desde el primer momento, a toda innovación que no esté abonada por una experiencia bien comprobada, y que, cuando han adoptado alguna, en estas condiciones, no se han preocupado de averiguar si ella se debe a la iniciativa y al patrocinio de los clásicos o de los positivistas.

Las preocupaciones de escuela, las discusiones teóricas, las disquisiciones académicas, no han tenido cabida en el seno de la Comisión, y cualesquiera que fueren las opiniones personales de sus miembros sobre tópicos determinados de la ciencia penal, todos han estado de acuerdo en que no era la oportunidad de sostenerlas, porque queríamos que la obra común, resultara libre de todo espíritu sectario y constituyese una zona franca, a cubierto de cualquier reproche de exclusivismo.

Libre, pues, nuestro espíritu de prejuicios de escuela y empeñado solamente en que el proyecto consultase las necesidades del país y las aspiraciones generales, hemos iniciado y terminado este trabajo, tomando como norma las bases fundamentales siguientes: 1o. La unificación, de acuerdo con los términos del decreto de 19 de diciembre de 1904, de las múltiples leyes penales existentes en la República; 2o. La adopción de algunas instituciones modernas, cuya eficiencia para el castigo o la corrección, está abonada por la experiencia de las naciones que las han implantado, y la mejora de otras ya incorporadas a nuestra legislación; 3o. La simplificación del sistema penal, de modo que pueda ser fácilmente aplicado en la República, dados sus elementos actuales; 4o. La inserción de algunas disposiciones tendientes a suplir vacíos y deficiencias que se notan en el Código, tanto en la parte general como en la relativa a los delitos y sus penas; y 5o. La ordenación en forma más lógica de las distintas materias que comprende dicho Código.

Fijadas así, en su conjunto, las bases primordiales de nuestro proyecto, pasamos a indicar el desarrollo que hemos dado a cada una de ellas.

Unificación de las distintas leyes penales

Esta base, que, como queda enunciado, está consignada en el mismo decreto que dispuso la revisión del código penal, ha sido observada, como vuestra excelencia lo notará, en una forma satisfactoria, porque hemos incluido en el proyecto todos los delitos previstos por las leyes especiales del 14 de septiembre de 1863, 19 de noviembre de 1900, de ferrocarriles, correos y telégrafos, patentes y marcas, electoral, etcétera.

Esta unificación de las distintas leyes penales, constituía una necesidad ineludible en nuestra legislación, como lo ha reconocido el poder ejecutivo y como lo indicó con fundamentos incommovibles la última comisión que se ocupó de este asunto. El código penal que tiene que ser único para toda la nación, según el precepto de la constitución, debe abarcar en sus disposiciones todos los delitos, de cualquier naturaleza que sean.

La coexistencia de distintas leyes, con distintas clases de penas y hasta con principios generales diversos, era una verdadera anomalía, tratándose de

materias que deben legislarse uniformemente para todo el país.

Hemos agregado también, con el mismo propósito, de uniformar todas las leyes de carácter penal, un libro sobre faltas, siguiendo en esto a la mayoría de los códigos modernos, incluso el de Alemania, y el proyecto para la Suiza, cuyas instituciones federativas no han sido obstáculo para que la nación se ocupe de ellas, como materia de legislación general.

Sin embargo, si esta parte del proyecto, suscitara escrúpulos de orden constitucional y se pensara que invade el dominio de las autonomías provinciales, su eliminación en nada alteraría la economía del código. La comisión, tiene, no obstante, la creencia de que tales escrúpulos no se han de manifestar, porque piensa que si el Congreso tiene por la constitución la facultad de dictar el código penal de la nación, en dicha facultad está forzosamente comprendida la autoridad necesaria para incluir en ese código todos los actos u omisiones que en cualquier parte del territorio de la nación se consideran ilícitos y merecedores de una pena. Las provincias conservarán siempre el poder de crear y reprimir faltas de carácter local, y como es este poder el único que constitucionalmente les corresponde en esta materia, es evidente que sus autonomías no sufren cercenamiento alguno porque el Congreso legisle sobre faltas de carácter general.

Nuevas instituciones y mejoras de otras

La institución que en realidad ofrece mayor novedad en el proyecto, porque hasta ahora no ha figurado en los códigos anteriores, es la condenación condicional, ya implantada con reconocido éxito en Francia y en Bélgica, propuesta en Austria y Hungría, y recomendada a los legisladores de todos los países por la Unión Internacional de Derecho Penal, reunida en Bruselas el 19 de agosto de 1899.

La comisión considera que es esta una verdadera conquista del derecho penal moderno, y que habría sido imperdonable de su parte, no incorporarla a su proyecto, convencida, como está, de que ella realiza una obra de altísima justicia, y aparta de la carrera del crimen a muchísimos delincuentes ocasionales.

Para fundar esta opinión y a la vez como un homenaje al autor del sistema, nada más conducente que la transcripción de los siguientes párrafos del informe redactado por Mr. Berenger y presentado al senado de Francia el 6 de marzo de 1890. "Hace mucho tiempo que se ha reprochado a nuestra ley penal de recurrir casi exclusivamente a las penas corporales. La idea es justa si se trata de la represión del condenado familiarizado con el crimen y de una perversidad segura: éste no puede ser accesible sino al sufrimiento físico. Ella no lo es, con respecto a aquel cuya falta, no es, por su naturaleza, exclusiva de todo sentimiento de honor. Sobre este último punto, la comisión piensa con el autor de la proposición que la pena, así comprendida, puede tener efectos completamente contrarios al objeto que persigue; que ella puede envilecer, en vez de levantar, abatir el ánimo en lugar de sostenerlo y destruir los resortes morales, única probabilidad de salvación. La proposición substituye una pena de orden puramente moral a la pena material de la ley".

"La advertencia, con la amenaza de una severidad más grande, no es sino un medio moral. ¿No es, sin embargo, en la práctica de la vida, univer-

sal y eficazmente empleada por el padre de familia, el maestro, el patrón? ¿No es en todas partes el preliminar indispensable de toda represión razonada?"

"¿Por qué la sociedad desearía emplear, en su propia preservación, el arma que tanto éxito tiene en la familia, en la escuela, en el taller? Respecto de los culpables, cuyo sentido moral no ha sido alterado, a pesar de la falta cometida—y es necesario decirlo, constituyen el mayor número entre los jóvenes, los domiciliados y los obreros que viven realmente de su trabajo—ella no tendrá menos eficacia que la prisión, tendrá sobre ésta la ventaja de suprimir sus desastrosas consecuencias".

"Hay una idea general que en todas partes se reconoce y es que indispensablemente debe haber una distinción marcada en la represión del hombre que por primera vez comparece ante la justicia y en cuya vida el hecho imputado es como un accidente, y el malhechor habitual contra el cual la justicia ha agotado las advertencias y para quien es un juguete desafiar sus decisiones. Para la conciencia que ha conservado intacto el sentimiento del honor y el saludable temor de la prisión, la amenaza de la pena puede producir efectos tan serios, tan eficaces como la pena misma. Puede aun suceder que sea más saludable que la pena. Sin hablar de los efectos detestables causados por los contactos de la prisión, cuántos desfallecimientos, cuántas rebeliones contra la sociedad, no han nacido de una represión inútil? Para el reincidente, al contrario, en quien el sentimiento moral está profundamente alterado ¿quién podría negar que el solo recurso no está en el sufrimiento físico? Es necesario, pues, en tanto que posible, evitar al uno la prisión y hacerla más rigurosa para el otro".

La comisión no cree necesario agregar nada más a tan elocuente demostración. El hombre honorable que delinque porque la fatalidad, porque una casualidad cualquiera lo ha llevado a ese extremo, pero cuyos sentimientos permiten afirmar que no cometerá jamás una nueva infracción, no debe ser llevado a la cárcel, a la par del pederlario, si se quiere hacer acto de estricta justicia.

Por eso, y porque instituciones análogas—la condenación suspensiva y la amonestación judicial—han dado excelentes resultados en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etcétera, la comisión propone la condenación condicional, que reputa el más perfecto y eficaz de todos estos sistemas que se proponen favorecer la condición del delincuente por primera vez.

Pero para que esta preciosa institución no salga de sus límites precisos y dé todos los frutos que de ella se esperan, se requiere la mayor prudencia en su aplicación; es necesario que ella no se convierta en manos de los jueces, en una arma de arbitrariedad, y por eso, creemos oportuno reproducir las siguientes palabras de Dalloz que fijan con exactitud el alcance de ese favor de la ley: "Ante todo, importa hacer constar que lo que la ley nueva crea en favor de ciertos condenados, no es un derecho sino una mera facultad acordada a los jueces. Corresponde, pues, al juez, examinar si el condenado que se encuentra, por otra parte, en las condiciones legales, merece personalmente este favor, cuestión moral que el juez resolverá en conciencia. De este punto de vista Mr. Berenger, trazaba al juez la regla de sus deberes, cuando decía: "No se trata de considerar el grado de gravedad de la falta, porque esta apreciación ha debido ser hecha pa-

ra la aplicación de la pena, sino medir el estado moral del condenado y el grado de garantía que este estado supone".

Adoptada esta institución, lógicamente debíamos perfeccionar y extender el principio de la individualización de la pena, base de aquella.

Este principio tan justamente sostenido y prestigiado por los más notables publicistas modernos, no es una novedad en nuestra legislación; él está definitivamente incorporado al código penal que nos rige. Las atenuantes y agravantes de carácter personal, la determinación de un *minimum* y un *maximum* en las penas, la menor penalidad de ciertos delitos, ya porque no deshonran como el duelo, ya por los móviles que lo inspiran, como el infanticidio, y por fin, la deportación para los criminales incorregibles, adoptada por la última ley de reformas, son otras tantas adquisiciones fundadas exclusivamente en el principio de la individualización de las penas, principio que con razón decimos, entonces, que ha sido francamente admitido por la legislación que nos rige.

Es, señor ministro, que el referido principio se ha ido abriendo camino, como se lo abre siempre la verdad, y si hay algo cierto en materia penal, es que rara vez se presentan dos criminales iguales. Así como la medicina proclama que no hay enfermedades, sino enfermos, el derecho penal moderno reconoce que no hay crímenes, sino criminales, y cuántas diferencias, en efecto, en la gravedad de un mismo delito según quien lo comete y según los móviles y causas a que ha obedecido. Y bien ¿no constituye esto la mejor prueba de la necesidad de considerar en la misma proporción al menos, al delincuente que al delito, para la determinación de la pena.

Supóngase dos hurtos objetivamente iguales, pero cometido el uno por un padre de familia honorable, que necesitaba llevar a sus hijos el pan que no puede ganar, y ejecutado el otro por un vagabundo que emplea en embriagarse y jugar el producto de su delito. ¿Hay alguna razón de justicia que obligue a condenar a los dos a la misma pena? No, pues, y por eso la Comisión entiende que la individualización de la pena, es el principio que conduce más directamente a la verdadera justicia.

Y aquí conviene, para evitar todo prejuicio, recordar las observaciones de Mr. Saleilles en su obra "L'individualization de la peine". "Lo que es necesario notar es que este movimiento de reformas, que es hoy un movimiento de carácter absolutamente científico, ha comenzado por un movimiento de reacción puramente humana, una inspiración de justicia popular, de justicia de opinión. Es el jurado quien primero ha hecho la individualización y la hace todos los días sin saberlo. Es verdad que la hace con razón, y sin ella, pero es por eso que la ciencia trata hoy de reglamentar lo que no es sino una especie de procedimientos empíricos".

"No se puede ser muy favorable al jurado, pero es preciso hacerle la justicia de reconocer que ha sido él, sin darse cuenta, el promotor del movimiento, y esto, desde la primera aplicación de nuestro Código Penal francés.

"La ley, en efecto, no veía más que el crimen, y brutalmente, matemáticamente, aplicaba una pena abstracta, sin preocuparse del criminal. El jurado tenía a su frente un hombre, un hombre cuya vida y honor tenía en sus manos. ¿Cómo habría quedado indiferente en presencia de este hombre, a lo que pasaba en su conciencia, a lo que eran todos sus antecedentes y toda su vida anterior? Acababa de absorberse de tal modo la visión del individuo que, contrariamente

te a la ley, olvidaba el crimen y todos los días, vemos que lo olvida.

"Se ha concluido por clasificar los crímenes, según que tienen o no las simpatías del jurado; hay toda una categoría para los cuales el jurado olvida siempre el hecho cometido para no ser sino el sentimiento, el instinto apasionado, irresistible, tal vez, de donde ha salido el crimen. Se ha concluido por llamarlos crímenes pasionales.

"La ley les aplica como a los otros la misma pena legal; ella los ignora. El jurado pasa por encima de la ley, y absuelve. Haciendo esto, hace individualización, y algunas veces muy injusta. Poco importa, es la revelación de un instinto de conciencia, al mismo tiempo que de un principio: se trata de hacer predominar la concepción del individuo sobre la del hecho".

Este origen popular del principio, tal admirablemente encontrado por el autor citado, servirá para tranquilizar a todos aquellos espíritus imbuídos de ideas de escuela, y a quienes su absolutismo les hace considerar como malo todo lo que pueda creerse que tiene atinencia con las escuelas opuestas.

La individualización de las penas no es fruto de esta o aquella escuela, ni de este o aquel pensador; es una intuición de la conciencia, es la aplicación de la idea de la justicia tal como la siente y la entiende la humanidad actual.

No hay que olvidar, por otra parte, como lo observa el mismo autor, que en esta cuestión, y en el terreno de los hechos, las escuelas casi se tocan. "Las soluciones prácticas de la una, dice, son aceptadas por la otra; en realidad los principios teóricos quedan a salvo, pero los medios prácticos se hacen comunes y se generalizan, que es lo esencial.

"Recientemente, agrega, en la Revista de Listz, Makarewicz, exponía, en una demostración magistral, que la oposición que se había tratado de establecer entre la escuela clásica y la escuela positiva, sobre el terreno del derecho penal, al menos, se reducía casi a cuestiones de palabras y que, sobre todo los puntos, en el terreno práctico, iban en cierto modo, al encuentro uno de la otra y se hallaban muy próximas a estar de acuerdo".

De conformidad con estas ideas y sin llevarlas a límites que pudieran parecer exagerados, porque no llegamos siquiera al sistema del Código de Holanda que sólo fija el máximo de la pena sin determinar el mínimo, hemos tenido especial cuidado de establecer para la penalidad de los delitos, una escala suficientemente extensa para que quepan en ella todas las diferencias provenientes de la naturaleza de la acción y de las condiciones personales del delincuente. Consideramos indispensable para que pueda hacerse una aplicación justiciera y proporcional de la pena, dejar límites amplios a la apreciación judicial.

Con el mismo fin, hemos abandonado el desprestigiado sistema de la enumeración de las circunstancias atenuantes y agravantes, para volver al régimen del Código Tejedor, adoptado por casi todos los Códigos modernos.

Esa enumeración es un obstáculo invencible para una buena distribución de la justicia penal. La infinita variedad de matices que presenta un delito, ya por sus causas, como por sus móviles y fines, ya por sus efectos, ya, en fin, por las condiciones personales del agente y la infinita cantidad de elementos que entran en juego para la apreciación exacta, de un hecho criminal dado, hacen imposible una enumeración detallada de todas las circunstancias que pueden influir en la mayor o menor criminalidad del acto, en la mayor o menor responsabilidad del delincuente. Esa imposibilidad, perfectamente reconocida por todo el mundo y que ha hecho decir a los autores que las

circunstancias atenuantes y agravantes son indefinibles e ilimitadas, debe ser reconocida también por la ley, porque su empeño en olvidarse de ella, conduce fatalmente a resultados injustos. El delincuente que tiene a su favor circunstancias, que para la conciencia, atenúan su responsabilidad, debe, sin embargo, sufrir la misma pena que el que no se encuentra en esas condiciones, porque tales circunstancias no figuran en la enumeración legal. Tampoco puede agravarse la pena, en el caso contrario, porque la circunstancia indicativa de la mayor perversidad o temibilidad, no ha sido establecida por la ley.

Un sistema, pues, que se propone vencer lo que es invencible, y que comporta resultados tan injustos, debe ser pronto y radicalmente eliminado.

Todavía hay una razón más para esa eliminación. Suponiendo que la enumeración completa fuese posible, ¿a qué hacerlo si con el sistema de no enumerar, los jueces pueden y deben tomar en consideración todos los casos de atenuación o agravación, que en realidad existan?

La Comisión al proponer esta innovación quiere que los jueces tomen en cuenta las razones de cualquier orden que puedan aumentar o disminuir la responsabilidad, ya sea en la preparación, en la ejecución o en las consecuencias del delito, ya provengan de la mayor o menor gravedad del hecho material o de la mayor o menor culpabilidad del agente; quiere, en una palabra, que se aplique al delincuente la pena a que se ha hecho acreedor, tomando en cuenta el hecho y todas sus circunstancias y la persona y todas sus condiciones.

Para la apreciación de las circunstancias atenuantes o agravantes, no tienen, pues, los jueces, según este sistema, otras limitaciones que las que resulten de la exacta determinación de lo que revista uno u otro carácter. No pueden tomar como atenuante o agravante lo que no sea ni una ni otra cosa, pero todo lo que en el concepto social y para la ciencia y la conciencia sea causa de agravación o atenuación, debe dar lugar al recorrido de la escala, en un sentido o en otro.

Otra institución adoptada hoy casi universalmente y que también proponemos, es la libertad condicional de los penados que hayan dado pruebas de positiva reforma. Nada más justo, en efecto, si el objeto principal de la pena, es la reforma, que suspender sus efectos, cuando ella ha dado los resultados buscados. Esto en cuanto a la justicia de la institución, que por lo que respecta a sus beneficios, a sus ventajas prácticas, las siguientes palabras del informe presentado a la Cámara de Representantes de Bélgica en 1888, las demuestran de una manera concluyente: "Durante la excarcelación del condenado, ella es un estímulo de buena conducta, un germen de enmienda, una prima ofrecida al detenido arrepentido. Después de obtenida la libertad, ella contribuye eficazmente a mantener al favorecido en la vía del bien, a prevenir su caída".

La institución que nos ocupa, tiene cierta analogía, por lo menos, en cuanto a sus fines, con lo que establecen los artículos 73 y 74 del Código vigente, pero, en nuestro sentir, la libertad condicional, tal como la proponemos, constituye un sistema más completo y más eficiente.

Derecho a pedir gracia del resto de la pena, que es lo que establece el Código, importa casi una incongruencia, porque derecho y gracia, son términos antinómicos. Pero aparte de esto, consignar que el penado tiene derecho a pedir gracia, no significa la creación de nada preciso ni de nada positivo, porque, en primer lugar, el derecho de petición está garantido por la Constitución, y en segundo lugar, porque la facultad de acordar gracia corresponde siempre

al Presidente de la República, independientemente de lo que disponga el Código Penal.

Por otra parte, la gracia extingue completamente la pena y el penado queda librado al freno único de su conciencia y de sus sentimientos. En el sistema de la libertad condicional, el condenado está obligado a observar buena conducta durante todo el tiempo de la condena, so pena de que no se le cuente en la computación de aquélla, el término que ha durado su libertad; constituye, pues, un resorte poderoso para mantenerlo en el camino del bien. La reforma, queda, asimismo, mejor comprobada, después de esta doble prueba: la de la cárcel y la de la libertad.

La gracia, es, además, un resorte que debe reservarse para los casos excepcionales que le dan su razón de ser; no debe ser un arma ordinaria de gobierno.

Todas estas razones nos han movido, pues, para proyectar esta reforma, respecto de la cual sólo agregaremos que siguiendo el ejemplo de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Hungría, confiamos a los tribunales de justicia, la aplicación del derecho que establecemos. Nos ha parecido que el reconocimiento de ese derecho, en cada caso, es una función del resorte exclusivo del departamento judicial.

Otra innovación al Código vigente es el concepto de la reincidencia, que según el proyecto, existirá, "siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito".

La reincidencia hasta hoy ha sido considerada como si la Capital, los Territorios Nacionales y las Provincias, fueran Estados independientes con relación a la ley penal; sólo se tomaban en cuenta los delitos anteriores cometidos en la localidad donde el reo era juzgado.

Esta situación, completamente irregular, porque es contraria a la ley fundamental del país, debe desaparecer cuanto antes. La Nación es una, para el Código Penal, y en consecuencia, es reincidente todo el que ha cometido un delito en cualquier punto del territorio nacional, y cualquiera que haya sido el tribunal que impusiere la pena. Desde que la ley es una, y desde que el territorio, para esa ley, es también uno, no caben diferencias provenientes de las distintas localidades.

Por lo tanto, si para el Código Penal no hay Provincias, ni Capital, ni Territorios Nacionales, sino la Nación, queda justificada esta reforma que, partiendo de esa base, no tiene para nada en cuenta, al efecto de que se trata, el lugar donde se ha cometido el delito.

Conviene con este motivo hacer presente a V. E. que el complemento indispensable de esta reforma, porque sin ella sería letra muerta, es la creación de una Oficina Central de Reincidencias, donde consten, con todos los datos necesarios para la identificación del delincuente, las sentencias en materia criminal dictadas por todos los tribunales del país.

La Comisión encarece a V. E. la necesidad de esta Oficina, primero para que la ley se cumpla y segundo, porque es indispensable para combatir la reincidencia, que, como es sabido, constituye una de las grandes preocupaciones de los penalistas contemporáneos.

En cuanto al concepto de que la reincidencia debe ser general y no específica, la última ley de reformas lo ha establecido en su artículo 15 y la Comisión propone su mantenimiento, porque piensa "que la perversidad humana no es menos temible cuando se manifiesta bajo formas diferentes, y porque, como se ha observado con toda justicia, hay naturalezas

de una sorprendente movilidad que recorren sucesivamente, en el mal, los caminos más distintos, viéndose a menudo, que grandes culpables, antes de perpetrar el crimen supremo, han sido condenados por la justicia por los delitos más diversos". (Daloz, Suplement V, Recidive-Rélegation No. 12).

Mantenemos también como medio de combatir la reincidencia, la pena accesoria de deportación para los delincuentes, que por el número y clase de condenas sufridas, deben considerarse incorregibles, y a quienes la sociedad en uso de su derecho, debe secuestrar por un tiempo indeterminado.

Hemos incorporado también, con el mismo objeto de impedir el avance de la reincidencia, la disposición de la ley 3335, según la cual los reincidentes por segunda vez, sufrirán la pena en un paraje de los territorios del sud. La eficacia de la ejecución de la pena, en esta forma, es un hecho bien establecido, porque la observación ha comprobado que los delincuentes ven con verdadero temor la aplicación de dicha ley.

Iguamente, y dentro de los propósitos fundamentales de justicia, de reforma del delincuente y de prevención del delito, que han inspirado las anteriores innovaciones, la Comisión ha modificado, en cuanto a la prescripción, el criterio dominante en el Código vigente.

El solo transcurso del tiempo no puede ser suficiente para que la sociedad quede desarmada, respecto de aquel que la ha ofendido en sus más primordiales derechos, como son todos los que se encuentran protegidos por las leyes penales.

¿Qué puede garantizar, en efecto, el tiempo pasado? Cuando más la habilidad del delincuente para substraerse a la acción de la justicia. ¿Y es acaso bastante esto, para olvidar el delito y para que la sociedad se declare satisfecha? La sociedad puede y debe olvidar y perdonar las infracciones antiguas, pero sólo cuando su autor se ha hecho acreedor a esa magnanimidad, y no puede ni debe declararse satisfecha, sino en cuanto el tiempo transcurrido ha servido para la reforma del delincuente y para su propia seguridad.

Nosotros, pues, que no vemos garantías de ninguna clase, en el solo transcurso del tiempo, proponemos en su reemplazo, como base de la prescripción, la buena conducta del perseguido o condenado, que, como lo hemos insinuado, consulta el triple propósito de la justicia, de la reforma del delincuente y de la prevención de los delitos.

De la justicia, porque, si ella aconseja el perdón de quien ha reparado su falta, mediante una vida honesta y laboriosa, exige en cambio, el castigo del que ha vivido burlándose de la sociedad y sus leyes.

De la reforma del delincuente y de la prevención de los delitos, porque la esperanza del perdón, estimula la buena conducta, y evita nuevas caídas.

En resumen, la sociedad no tiene interés en castigar la infracción antigua cuando la conducta posterior del delincuente le ofrece garantías suficientes de que se ha apartado definitivamente del camino del mal; en tal caso, la pena no tendría razón de ser desde que sin ella se habría conseguido lo que forma uno de sus principales objetos, esto es, la reforma del delincuente. Pero tiene interés y grande de evitar nuevos delitos y necesita entonces, por medio de la pena, buscar la reforma que el tiempo no ha logrado. De ahí la necesidad de que sea la buena conducta la base de la prescripción.

Esta innovación no es, por otra parte, sino la ampliación de la regla consignada en el artículo 16 de la última ley de reformas, que declara que la prescripción queda sin efecto si antes de vencido el tér-

mino el reo comete otro delito. Nosotros nos limitamos a extender esta disposición, exigiendo buena conducta, que es algo más que no cometer delitos.

Otra innovación, que por el carácter general que reviste, nos parece conveniente indicar en este capítulo, es el sistema que hemos adoptado para legislar la culpa o imprudencia y el encubrimiento.

Respecto de la primera, en vez de establecer reglas generales, que por su condición de tales, deberán aplicarse a todos los delitos—sistema seguido por el Código vigente,—hemos preferido el de establecer a continuación de todo delito susceptible de ser cometido por imprudencia, la pena que le corresponde, por razón de esa circunstancia.

El motivo principal de esta reforma, en la que seguimos a los modernos códigos de Italia y Holanda, es que consideramos impropio dictar disposiciones de carácter general, y que, sin embargo, no pueden ser aplicadas sino a ciertos y determinados delitos.

Por esto, y porque las dudas e incertidumbres existentes en esta materia, hacen insegura e ineficaz la generalización, creemos que el mejor medio de legislar la culpa es el que acabamos de exponer, debiendo agregar únicamente que nos hemos abstenido de definir y dividir la culpa, porque una y otra cosa son prácticamente imposibles, porque la apreciación exacta de la culpabilidad punible de un hecho, depende de mil circunstancias que la ley no puede prever y porque, en fin, nadie mejor que el juez que conoce todas las modalidades y motivos del acto, puede decir si éste se ha cometido con imprudencia o sin ella.

Sobre los encubridores, pensamos que es un error jurídico manifestar consideramos responsables de un delito en que no han participado y que tal vez, han conocido mucho tiempo después de realizado. Por eso decia con toda razón, la Comisión anterior de reformas, que las personas responsables son exclusivamente los autores y los cómplices, y que los encubridores, no forman una tercera categoría de cooperadores.

Lo que corresponde entonces para no consignar, a sabiendas, falsos conceptos jurídicos, y en vista de la conveniencia de castigar los actos de que se hace depender la calificación de encubridores, es hacer de esos actos un delito especial e imponer a sus autores la pena correspondiente.

Es este el método que seguimos, a cuyo efecto proponemos en la parte especial un capítulo destinado a definir y penar el encubrimiento, como lo hacen muchos Códigos extranjeros.

Simplificación del sistema penal

El Código vigente establece, entre las penas privativas de la libertad, el presidio, la penitenciaría, la prisión y el arresto.

Por causas que todos conocen y que en realidad provienen de que en un país nuevo, no es posible, por falta de elementos, hacer en un día lo que es obra del tiempo, dichas penas, hasta hace muy poco, estaban reducidas, en el hecho, a sólo una: la de penitenciaría. En el establecimiento destinado al cumplimiento de esta pena, estaban aglomerados, desde los condenados a presidio, hasta los que sólo debían sufrir arresto.

Esta situación, se ha modificado en algo, es verdad, en los últimos tiempos, en cuanto a los establecimientos penales de la Nación, pero todavía estamos muy distantes de tener todos los que son necesarios para que cada una de las penas que es-

tablece la Ley, se cumpla en los lugares y en las condiciones que ella requiere.

Si esto ocurre en la Nación, fácil es comprender las dificultades con que tropiezan las Provincias, especialmente algunas, para hacer efectivas las distintas clases de penas que se acaban de enumerar.

Partiendo, pues, de este antecedente de rigurosa exactitud, porque lo comprueban todos los informes y memorias de la Dirección de las Cárceles y de los Tribunales del Crimen, la Comisión se planteó desde el primer momento, estos dos problemas. ¿Vale la pena mantener en la Ley, penas que en la práctica, no se cumplen? ¿Existen razones de orden científico o simplemente de conveniencia para mantener esta diversidad de penas?

La primera cuestión fué resuelta negativamente por motivos de evidencia que se imponen y que es innecesario manifestar. No hay objeto de mantener cosas inútiles.

La segunda, fué también resuelta por la negativa, juzgándose que los efectos y fines de las penas privativas de la libertad, se consiguen ampliamente, sin necesidad de subdivisiones que no hacen sino complicar el sistema, sin provecho alguno para nadie.

El Código Penal de Holanda, que es la expresión más avanzada de la ciencia del Derecho Criminal, según la frase de Garraud, y el proyecto de Código Penal francés, todavía en preparación, no establecen sino dos penas de esta clase: la prisión y la detención.

La tendencia moderna, revelada por estas dos recientes obras, que son el fruto de la ciencia y experiencia de juristas eminentes, es pues, hacia la unificación de las penas privativas de la libertad.

El por qué de esta tendencia, es muy fácil de comprender. La ciencia no respeta lo artificioso, lo que no descansa sobre bases estables, y si hay algo que pueda reputarse mero artificio, es esta múltiple división de la misma pena, fundada en detalles sin importancia de su ejecución.

La ciencia no ve en el régimen de esta clase de penas, sino lo que es esencial del régimen mismo; esto es, la privación de la libertad, y la obligación del trabajo; ella no toma en cuenta lo que es puramente arbitrario, lo que no obedece a principio fijo alguno, lo que sólo importa un simple accesorio en lo fundamental del sistema.

Y este procedimiento, tan propio de la ciencia en todas sus manifestaciones, conduce lógicamente a la conclusión de que la pena que descansa sobre la doble base de la privación de la libertad y de la obligación del trabajo y cuya acción y eficacia estriban solamente en esas condiciones, debe necesariamente ser una, porque en cualquier forma que se aplique, siempre resulta idéntica en su esencia: priva de la libertad y obliga al trabajo.

El tratadista Van Swinderen, en su excelente obra "Exquisite du Droit Penal actuel dans les Pays Bas et à l'étranger", llamado a ocuparse de esta cuestión se pronuncia por la uniformidad de las penas privativas de la libertad en estos términos: "Yo no vacilo en responder afirmativamente, pues todo sistema penitenciario reposa sobre la doble base de la privación de la libertad y de la obligación del trabajo, lo que conduce, naturalmente, a la aplicación de un régimen uniforme, a aquel en que estos dos elementos se encuentren mejor combinados; y aunque el objeto de la pena no sea la mejora, la corrección, ni la regeneración, es reprochable todo sistema penitenciario que pierda de vista que toda pena debe tender al noble objeto de hacer nacer en el corazón del preso el arrepentimiento y la virtud, y que este objeto, que constituye un deber, el Estado-

no lo cumple, aplicando a los unos un sistema más moralizador que a los otros. ¿Por qué clasificar las penas? No se las puede clasificar sino de la siguiente manera: 1o. En más o menos afflictivas, pero la disciplina de toda prisión debe ser de una severidad tal, que no puede llegar a mayor rigor, sin degenerar en crueldad; 2o. En más o menos infamantes, pero ninguna debe tener ese carácter; 3o. En su mayor o menor poder de intimidación, pero ellas deben tenerlo todas en el mismo grado y sin que jamás la intimidación pueda ser obtenida con sacrificio de la justicia; y 4o. En más o menos reformadoras, pero la ciencia penitenciaria debe siempre, sin excepción alguna, usar de todo su poder para corregir un condenado. No se puede, pues, clasificar las penas sino según su duración, única clasificación lógica. Si la pena, en efecto, intimida, es reformadora y afflictiva, su acción será tanto más eficaz cuanto más larga sea su duración. Por este sistema, la opinión pública no rechazará a aquel que haya sufrido una pena privativa de la libertad de carácter más grave, sino que colocará en la misma línea a todos los que hayan sufrido una encarceración, con lo cual ganarán la seguridad y la moral pública. Por consecuencia, la sola pena privativa de la libertad que deben adoptar las legislaciones modernas, es la de prisión con trabajo obligatorio".

Tarde, en su "Philosophie Penale", dice: "No menos que la dulcificación de las penas, su simplificación parece ser una consecuencia de la civilización. Comparad la extravagante colección, el atroz museo de los antiguos instrumentos de barbarie, de suplicios y de tormentos sin número que llenan los anales del Derecho Penal, con la simplicidad con la uniformidad de nuestros medios represivos, que van siempre simplificándose y uniformándose: la muerte pura y simple, sin agravación, la multa, la prisión, el trabajo".

Justificada así la solución negativa de la segunda cuestión que indicamos al principio de este capítulo y teniendo presente, por otra parte, la imposibilidad práctica de aplicar en nuestro país tantas penas diferentes de una misma clase, la Comisión, procediendo siempre prudentemente y colocándose, en todos los casos, en un término medio razonable, propone sólo la disminución de las penas privativas de la libertad, no obstante reconocer que la unificación está más en las tendencias modernas y reúne mayor número de ventajas.

Las penas que el proyecto suprime son las de arresto y penitenciaría, dejando subsistentes el presidio y la prisión,—ésta con un término y consecuencias diferentes de la actual—y agregando la de detención.

La supresión de la pena de arresto es una necesidad imperiosamente sentida, porque es ya un dogma de la ciencia penal, que el encierro sin la obligación del trabajo, produce efectos completamente contrarios a los que se buscan por medio de la pena.

La conglomeración de delinquentes en una cárcel donde se lleva una vida de holgazanería, no hace sino corromper y crear profesionales del delito.

La prisión, tal como está organizada después de la Ley de reformas, es decir, con la obligación del trabajo, no difiere de la de penitenciaría que establece el Código vigente, sino en cuanto a su duración y a otros detalles de menor importancia y en el hecho, hasta se sufre en los mismos establecimientos penales.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, y que en

realidad son penas completamente equivalentes, por cuya razón no hay objeto alguno en mantener las dos, hemos optado por la de prisión, dándole la extensión de la actual de penitenciaría, y pensando que ella es preferible por dos razones: 1o. porque el término es más propio desde que la penitenciaría no es una pena, sino un régimen penal, o el establecimiento donde ésta se cumple; y 2o. por la preocupación vulgar de atribuir a la pena de penitenciaría un carácter infamante, que se averdía mal con la aplicación de esa pena, así entendida, a delitos de poca monta.

Hemos agregado la pena de detención, teniendo especialmente en cuenta ciertos delitos y cierta clase de delinquentes. No hemos creído, por ejemplo, que los delinquentes políticos, que los funcionarios públicos que cometen algunas infracciones sin mayor gravedad en el ejercicio de sus funciones, deban ser tratados como los delinquentes comunes, colocados a la par de ellos, en los mismos establecimientos, y sometidos a la obligación del trabajo.

Los motivos que impone esta diferencia, todos los conocen; se trata de delitos que no deshonran, y de delinquentes que no necesitan ser reformados del punto de vista moral. La pena no debe, pues, ser igual a la de los demás delinquentes, como no es igual el concepto social que unos y otros inspiran.

En resumen, el proyecto establece como penas privativas de la libertad, el presidio con trabajos forzados en establecimientos especiales, la prisión con trabajo obligatorio y reclusión celular en las horas no destinadas al trabajo o a la instrucción, en establecimientos también especiales, y la detención, que podrá sufrirse en cualquier cárcel y sin obligación de trabajo.

De esta manera, damos un paso hacia la unificación, pero respetamos lo que está tradicionalmente arraigado en nuestra legislación, esto es, el trabajo forzado para el presidio, el trabajo común para las penas inferiores.

Ahora, ante el hecho de que algunas provincias, por la escasez de sus recursos, no puedan crear y sostener los establecimientos penales que se requieren, hemos establecido que los condenados a presidio, prisión, deportación o detención, serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales, con cuya medida queda salvado uno de los inconvenientes que podrían impedir la aplicación de las penas, tal como el proyecto las establece.

Antes de dejar de lado esta parte del trabajo, la Comisión desea hacer constar que, deliberadamente, no ha querido establecer para el presidio y la prisión, más reglas que los trabajos forzados para el primero y el trabajo obligatorio y la reclusión celular para la segunda, porque entiende que es de positivas conveniencias, que salvo aquellas reglas fundamentales, la organización y régimen de los presidios y prisiones, sea obra de leyes o reglamentos especiales.

Si hay alguna cuestión palpitante en la actualidad, en la esfera del Derecho Penal, es indudablemente la que se refiere al régimen penitenciario. Ella preocupa a todos los gobiernos, es objeto de preferente atención de parte de todos, los que se dedican al estudio de las ciencias sociales, y frecuentemente es discutida en congresos internacionales, que buscan con anhelo su mejor solución.

Bien, pues, si este es el estado de la cuestión, ¿para qué incorporar a una ley que debe ser rela-

tivamente permanente como el Código Penal, sistemas que todavía están en tela de juicio? ¿No importaría esto, en cierto modo, impedir o dificultar la rápida implantación de los progresos que día a día se efectúan?

La Comisión así lo piensa, y en consecuencia, deja librado a la reglamentación, bajo la base de las reglas antes indicadas, la elección del lugar donde deban establecerse los presidios y cárceles, la distribución de los condenados en clases, la elección del trabajo, en fin, todo lo relativo a la organización del régimen que corresponda.

Procediendo así, la Comisión, no hace, por otra parte, sino seguir el sistema que se observó en la redacción del Código de Holanda: "El proyecto de la Comisión Real y el primitivo proyecto gubernativo, dice Van Swinderen, contenían algunas disposiciones relativas a la organización de las prisiones, que la ley no ha adoptado, abandonándolas a una ley especial. El trabajo obligatorio, agrega, es un elemento esencial de la prisión, que debe ser consignado en la ley, en tanto que la organización ulterior, debe ser abandonada a disposiciones reglamentarias".

Pasando ahora a penas de otro orden, mantenemos todas las del Código vigente, con excepción de la de destierro.

La de muerte, no obstante la disidencia de dos de los miembros de la Comisión, doctores Rivarola y Beazley, fue aceptada por la mayoría, pero limitada a casos muy excepcionales, y establecida en forma tal, que aun dentro de éstos, constituirá una excepción. La Comisión propone, en efecto, para los homicidios que hoy se castigan con la pena de muerte, la aplicación de ella o la de presidio por tiempo indeterminado, de modo que esta opción que se deja a los jueces, conducirá seguramente a restringir más la aplicación de dicha pena, y reservarla sólo para algún crimen verdaderamente atroz.

El proyecto contiene también algunas disposiciones nuevas, que tienden no sólo a establecer mayores garantías de acierto, sino también a obtener una uniformidad completa en la aplicación de dicha pena en la república, porque debido a diferencias en la legislación de las provincias, — unas exigen sentencia confirmatoria y por unanimidad de votos del Tribunal Superior, y otras no, — puede ocurrir que un reo se salve de la pena de muerte en Catamarca, porque hubo un voto disidente, y sea condenado en la capital por el mismo delito, aunque concurra la misma circunstancia del voto disidente. A evitar estas injusticias, responden, pues, las disposiciones que consigna el artículo 60. del proyecto.

La pena de multa, que no puede faltar en un sistema penal para delitos leves, ya que ofrece las ventajas de no aumentar inútilmente la población de las cárceles y de no afectar la persona del delincuente, es aplicada en mayor proporción que en el código actual, y a fin de que no sea ilusoria por la insolvencia o la mala voluntad, se dispone que en caso de no pagarse en el término que el juez señale, el condenado sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

El destierro lo hemos suprimido, porque en la actualidad, dados los vínculos de estrecha amistad que nos unen a todos los países, ha perdido completamente su eficacia, y porque aparte de esto, es desigual y de muy difícil cumplimiento. Es des-

igual y de muy difícil cumplimiento. Es desigual, porque para el que cuenta con medios de fortuna, la residencia en otro país es una incomodidad muy soportable, en tanto que no lo es para el que carece de ellos. Y es de difícil cumplimiento, por la casi imposibilidad de impedir su quebrantamiento, sobre todo en un país de las condiciones territoriales del nuestro.

Esta pena, además, ha sido casi exclusivamente reservada para los delincuentes políticos, y la experiencia ha demostrado que ella sólo ha servido para preparar revoluciones en el extranjero con mayor libertad. La pena de detención en la forma y en las condiciones que establece el proyecto, la reemplaza ventajosamente.

Proponemos, sin embargo, la expulsión del país, pero no como pena, de los que habiendo cometido delitos en el extranjero, no hayan sido allí juzgados, y cumplido su pena. Al país no le conviene de ninguna manera, tener en su seno sujetos de esta clase.

Finalmente, y para concluir con este capítulo, observaremos a V. E. que habiendo instituido la condenación condicional, la Comisión entiende que ninguna pena corporal podrá ser redimida por dinero.

Esta gracia que han acordado leyes anteriores, y que es tan desigual e injusta, queda substituida por aquella nueva institución, que permite salvar de la cárcel a todo el que lo merece, sea rico o no lo sea.

Disposiciones tendientes a suplir vicios y deficiencias del código actual

LIBRO PRIMERO

El Código vigente no contiene regla alguna sobre la aplicación de la ley con relación al territorio. La gran mayoría de los códigos modernos, dedican, sin embargo, a este punto, su primer capítulo, y nosotros, siguiendo estos precedentes de la legislación universal, proponemos las disposiciones respectivas, porque consideramos indispensable que sea la ley misma la que fije con toda precisión su alcance jurisdiccional. A este fin responde el artículo 10. del proyecto.

Al artículo 48 del Código actual, correspondiente al 30. del proyecto hemos agregado, para completar el principio de la retroactividad de la ley en cuanto sea favorable al procesado y penado, la disposición que prescribe que en el cómputo de la prisión preventiva, se observará siempre la ley más favorable para el procesado. La siguiente transcripción del acta respectiva de la Comisión, revelará con toda claridad, el concepto y el alcance del precepto agregado: "Se hace notar que de las dos leyes, una puede ser favorable al procesado en un punto, en la benignidad de la pena, pero desfavorable en el cómputo de la detención preventiva, y que en estas condiciones, hay que aplicar las dos leyes, cada una en la parte favorable".

La otra modificación que se observa al mismo artículo 48, responde al propósito de evitar la reapertura de los procesos en los casos en que se dicte una ley más benigna mientras se cumple la condena. Esta ley debe aplicarse solamente, cuando consten en el mismo proceso las circunstancias que invoque el reo como motivos de la disminución de pena.

En las disposiciones relativas a la multa, hemos suplido otra deficiencia del Código actual, estableciendo que en cualquier tiempo que el reo la satisficiera, será puesto en libertad. El interés de la ley es que se cumpla la pena principal que ella fija, y no la supletoria. En cualquier tiempo, puede pues, el reo, pagar la multa para hacer cesar la prisión.

La reparación de los perjuicios morales y materiales causados por el delito, es otro punto que el Código vigente legisla de una manera manifiestamente incompleta. Los artículos 47, 139, 176 y 225, son disposiciones aisladas que no responden a un plan uniforme, como la materia lo exige. La simple declaración de que la aplicación de la pena, es sin perjuicio de las acciones del damnificado para pedir la correspondiente indemnización, no importa establecer nada de efectivo ni de práctico, para ese objeto, y la obligación del dote en los delitos contra la honestidad, y de la restitución de las cosas sustraídas o defraudadas, no contemplan sino dos clases de delitos, olvidando que hay muchos otros que causan perjuicios aún mayores.

Es indispensable, por consecuencia, la modificación de esta parte del Código, en dos sentidos: 1o. en el de que la reparación del perjuicio sea impuesta conjuntamente con la pena; y 2o. en que dicha reparación se extienda a todos los delitos susceptibles de producir un daño moral o material.

Del primer punto de vista, la modificación se justifica plenamente, por las consideraciones expresadas por la Comisión revisora anterior, que transcribimos: "Si el delito es un quebrantamiento del orden jurídico, que debe hacerse cesar y reponerse del modo más perfecto posible, es evidente que el poder social debe proceder al restablecimiento del orden alterado, obligando al delincuente a resarcir todos los daños causados por la alteración. Una pena que sólo tiende a reparar el daño moral causado a la sociedad, descuidando el resarcimiento del perjuicio real inferido a la víctima del delito, no llena los objetos racionales de la penalidad, ni justifica suficientemente el ejercicio del derecho de represión por el Estado. Históricamente y teóricamente, el Estado, en materia penal, no es más que el depositario del derecho de defensa, inherente a cada hombre. La fuerza del individuo ha sido reemplazada por la fuerza del Estado en la evolución de la sociedad, pero el fin no ha cambiado, ni tiene por qué cambiar: es, y tiene que ser siempre, proteger al individuo y a las instituciones protectoras del individuo" (Exposición de motivos del Proyecto de Código Penal de los Dres. Piñero, Rivarola y Matienzo, pág. 37).

La exactitud de estos razonamientos, se evidencia con sólo esta pregunta: ¿sería justo que el Estado, que toma a su cargo el restablecimiento del orden alterado por el delito, se preocupara sólo de sí, y del daño indirecto que ha recibido, y olvidara al principal ofendido y el daño real que éste ha sufrido? Tal procedimiento, por parte del Estado, importaría un acto de tan irritante injusticia, como la que cometería un padre de familia defendiendo sus intereses personales, y abandonando los del hijo que está bajo su protección.

La reparación de los perjuicios causados a la víctima del delito, debe ser, pues, un objeto tan principal, como la aplicación misma de la pena.

Ahora bien, ¿cuál es el medio más conducente para la realización de este fin? En nuestra opinión, el de imponer al Juez, en todos los casos, la obligación de condenar al delincuente al resarcimiento de los daños y perjuicios, en la forma y con la extensión que consignamos en el título respectivo.

La objeción que podría hacerse a este sistema

que, según el Código Civil, la indemnización del daño causado por el delito, sólo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal, no tiene ya fundamento, por una de esas anomalías de nuestra legislación, en el derecho positivo que rige en la Capital y Territorios Federales. El Código de Procedimientos en lo Criminal, ha derogado, en efecto, ese precepto del Código Civil, disponiendo que la sentencia, en el juicio penal, debe resolver todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hubiesen sido objeto del juicio.

Pero aparte de esto, el principio consagrado por el Código Civil, es necesario que desaparezca en la legislación de la República, primero por razón de materia, y segundo, por motivos de conveniencia.

Por razón de materia, porque todo lo que se refiere a la pena,—y en la pena está comprendida la reparación del perjuicio, como se ha demostrado,—corresponde al Código Penal.

Por motivos de conveniencia, porque entregando a la justicia del crimen estas cuestiones, se evita la multiplicidad de los procesos y los consiguientes perjuicios, a lo que se debe agregar que racionalmente, un hecho es mejor juzgado cuando se le examina en conjunto, que cuando se estudia sólo por partes.

Resumiendo, resulta que la modificación que en esta parte proponemos, se encuentra perfectamente fundada, y que en definitiva, ella no tiene más mérito que la incorporación al Código Penal de un principio ya establecido en otro Código Nacional, y que la jurisprudencia de los tribunales aplica constantemente, con resultados muy satisfactorios.

La reforma, del segundo punto de vista que hemos indicado, no requiere mayores explicaciones. Los delitos contra la honestidad y contra la propiedad, no son los únicos que causen perjuicios. El homicidio que deja en la orfandad y la miseria a una familia, las lesiones que imposibilitan a un hombre para ganarse el sustento diario, o se lo impiden durante un tiempo, los ultrajes al honor que hacen perder una situación cómoda y cierran las puertas del crédito y del trabajo, la concurrencia desleal en el comercio, que conduce a la ruina, y hasta la simple interceptación de una carta, de la que puede depender todo el porvenir, son causa de perjuicios morales y materiales de tanta o mayor importancia que el hurto y la defraudación. ¿Por qué entonces limitar la obligación de indemnizar? No: todo delito, de cualquier naturaleza que sea, susceptible de producir un daño material o moral, obliga a su autor a la indemnización correspondiente.

La Comisión, penetrada de esta necesidad de reparar los daños del delito, y dispuesta a que la obligación respectiva del delincuente sea realmente efectiva, y no pueda eludirse en modo alguno, propone por fin, como medios de llegar a este resultado, los tres siguientes: 1o. Que la indemnización sea fijada prudencialmente por el Juez, en defecto de plena prueba; 2o. Que la obligación de indemnizar sea preferente a todas las que contrajere el responsable, después de cometido el delito, incluso el pago de las multas; y 3o. Que el producto del trabajo del condenado a presidio o prisión, se destine, en primer término, al pago de esa indemnización.

En las causas que eximen de responsabilidad, hemos introducido las modificaciones que pasamos a señalar.

En el inciso 1o., teniendo en cuenta que las enumeraciones son difícilmente completas, hemos substituído la que dicho inciso contiene, por un término genérico que comprenda todas las causas de irresponsabilidad de origen psíquico. El término adoptado "estado de enajenación mental", llena, en nues-

tro sentir, aquel objeto, porque dentro de él caben todas las alteraciones de la mente y de la voluntad, ya provengan de un estado permanente o de un estado meramente transitorio, ya sean el resultado de una enfermedad, como la locura en cualquiera de sus formas, de una anomalía como el idiotismo, o de una perturbación momentánea como la embriaguez, que no sea habitual, o el justo dolor.

Complementamos la legislación sobre este punto, proponiendo la reclusión del agente en un manicomio, del que no podrá salir, sino después de comprobarse que ha desaparecido el peligro de que se dañe a sí mismo a los demás.

No es posible poner, en la calle a un loco peligroso, y que ya ha demostrado serlo con la ejecución de un delito. Las más elementales nociones de prudencia y conservación imponen esta medida, que se practica y está establecida en otras naciones.

Tampoco constituye esto una novedad en nuestra legislación general, porque el Código Civil autoriza el encierro de los locos en esas condiciones. Nosotros no hacemos, pues, sino seguir sus indicaciones, con la diferencia de que la ejecución de esa medida la imponemos como una obligación a cargo del Juez del Crimen, porque nos parecería completamente ilógico, que el juez que tiene en sus manos la prueba fehaciente de la locura y de sus peligros, tuviera que recurrir a otro Juez para ordenar el encierro. Los locos delincuentes deben depender de los Jueces del Crimen en cuanto a su libertad, y sin perjuicio de que la declaración de incapacidad, a los efectos civiles, la curatela y todo lo relativo a sus bienes y demás derechos, sean del resorte de la jurisdicción civil.

Los incisos 2o. y 3o. los hemos refundido en uno, estableciendo la irresponsabilidad absoluta de los menores de 14 años, y borrando la distinción que aquellos hacían, según que el mayor de 10 y menor de 15, hubiese obrado o no con discernimiento. No creemos que la sociedad tenga interés ni necesidad de castigar a niños menores de 14 años; creemos, al contrario, que la sociedad y el delincuente de esa edad, ganan con que no se aplique pena alguna. El menor que ha sufrido una pena, se siente ya diferente y extraño al resto de la sociedad, se considera un perseguido de las leyes y de las autoridades, de quienes se declara enemigo; pierde todo rubor, y es arrastrado fatalmente por esa situación de espíritu, a la caída definitiva. Esto, sin hablar de lo que se aprende en las prisiones, al lado de otros menores también, pero ya veteranos del crimen. Ante estos resultados de la condena, tenemos razón, pues, para decir que la sociedad y el delincuente salen ganando, con declarar exentos de pena a los menores de 14 años.

Pero del menor, como del loco que ha delinquido, la sociedad tiene que defenderse, y entonces nada más natural que la disposición que proponemos en el inciso 2o. del artículo 41 del proyecto. Cuando por las condiciones personales del menor, o de sus padres o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, se ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores.

La justicia en esta disposición, en cuanto a las condiciones que harán obligatorio el depósito del menor, es evidente. Si el menor es uno de esos seres impulsivos, que no se detienen ante ninguna consideración, y que no tienen respeto por nada, o si sus padres no tienen hábitos morales, o son de los muchos que dejan en el abandono a sus hijos, el único medio de prevenir la pérdida completa del menor,

será que la sociedad lo recoja y lo coloque en los establecimientos correspondientes.

El inciso 5o.—3o. de nuestro proyecto—ha sido alterado en su redacción, con el propósito de dar mayor claridad al concepto. Alguna vez se ha sostenido que la fuerza moral a que se refiere el inciso, puede ser la ira, el dolor u otro sentimiento análogo, y a fin de evitar esta errónea interpretación, consignamos expresamente que la eximente sólo comprende al que obrase impulsado por amenazas de sufrir un mal grave e inminente.

En la legítima defensa, hemos incluido el inciso 11 del Código, porque pensamos que están comprendidos en dicha causa de irresponsabilidad, los actos de fuerza que el referido inciso enumera.

Los incisos 9o. y 10, los hemos reducido a uno—el 8o.—porque ambos se refieren a la defensa de otro, sea éste un pariente o un extraño.

Se ha suprimido el artículo 82, porque se observó que en muchos casos, la falta de aviso a la autoridad, puede provenir de ignorancia o simplemente del temor a las incomodidades y molestias consiguientes, y que, por lo tanto, era injusta la presunción general que el artículo establece. Esto no obstante, la Comisión entiende que la fuga y ocultación del hecho, debe ser apreciada por el juez como antecedente ilustrativo, a la par de todos los demás, para decidir, en cada caso, sobre la existencia o inexistencia de la eximente en cuestión.

Hemos suprimido igualmente el inciso 6o., porque el hecho que menciona, no es, ni puede ser considerado delito, y porque aquí se legisla únicamente sobre la irresponsabilidad de los que cometen actos delictuosos.

El inciso 14, está comprendido en el 9o., que prevé los casos de defensa de la persona o derechos, y nada más típico como defensa de la persona y de los derechos, que la acción de la mujer que hiere o mata al que intenta violarla o robarla.

La supresión que también se ha efectuado de los incisos 12 y 13 responde a esta idea:—Que la irresponsabilidad alcance sólo al padre, marido o hermano que la merezcan, es decir, a aquellos a quienes la vista del doloroso espectáculo, dadas sus condiciones personales, sus antecedentes y la situación de su espíritu, les haya producido una enajenación momentánea. No ha creído la Comisión que pueda reconocerse el derecho de matar en tales casos; tampoco ha creído que todos sin excepción, los que se encuentran en esas condiciones, lleguen a un estado de perturbación mental, y entonces, ha pensado con razón, que no podía establecer como regla absoluta la irresponsabilidad, y que haciendo obra de individualización, debía librar al juez la facultad de absolver según las circunstancias particulares del hecho. Es lo que proponemos mediante el párrafo último del inciso 3o. del artículo 85, cuya mejor explicación son las siguientes palabras de los miembros de esta Comisión, doctores Piñero, Rivarola y Ramos Mejía. El primero dijo: "La cuestión del adulterio no puede ser considerada de una manera uniforme, porque en todas las esferas de la sociedad, las relaciones conyugales no tienen la misma delicadeza. Tratándose de la clase baja del pueblo, es sabido que a veces el hombre elige como esposa, a una mujer cuya falta de honestidad le consta. También se ha comprobado en algunos procesos, que el marido ha consentido el adulterio de su esposa, o que él mismo la ha impulsado a cometerlo. En tales casos, y en otros que podría citarse, el Juez debe tener completa libertad para apreciar los hechos y negar la exención de responsabilidad. Te-

niendo presente las consideraciones anteriores, votaré por la supresión del inciso, pero esto no importará coartar el derecho que tiene todo hombre, sobre todo los de cierta clase social, para ampararse en la exención de responsabilidad, cuando procede impulsado por la excitación que le produce el adulterio de la mujer. El segundo dijo: "Que al suprimir en su anteproyecto la disposición sobre el conyuge, tuvo presentes los casos en que la exención de irresponsabilidad se impone: que, al efecto, en el artículo 27, exceptuaba de responsabilidad al que hubiere cometido el hecho en un estado de perturbación mental cualquiera, en cuyos términos estaba comprendido el impulso motivado por el justo dolor, y que, a pesar de haber sido substituida la palabra "perturbación", por la de "enajenación", cree que la disposición siempre será aplicable". El doctor Ramos Mejía dijo, por último, con referencia a las anteriores palabras del doctor Rivarola, que la exención será aplicable porque el nuevo término "enajenación", es más vasto que el anteriormente propuesto, porque comprende toda perturbación, inclusive la producida por la embriaguez.

En cuanto al inciso 13, del mismo artículo 81 del Código, que exime de pena al padre que hiera o mate al que encuentre yaciendo con su hija o hermana menor de 15 años, también es eliminado, por las mismas razones que han motivado la supresión del precedente". (Actas de la Comisión).

En la tentativa, proyectamos dos modificaciones que responden también a la idea de la individualización, al principio de que debe considerarse al criminal lo mismo que al hecho.

La primera es para la apreciación de los actos constitutivos de la tentativa, deben tenerse en cuenta los antecedentes personales del agente. Se encuentra, por ejemplo, a un hombre que se ha introducido a una casa ajena, y se comprueba que ese hombre ha sufrido varias condenas por delitos contra la propiedad. Dados esos antecedentes, nadie puede dudar que su entrada en aquella casa responde al propósito de hurtar o robar, y no a violar simplemente el domicilio. Pues bien, la Comisión pretende que eso que todo el mundo piensa, lo piense también el Juez, y que, en consecuencia, castigue el hecho como tentativa de robo o hurto, y no como violación de domicilio.

La segunda, es que la ley presume voluntario el desistimiento, a menos que se trate de un reincidente, en cuyo caso regirá la presunción contraria. ¿Por qué ha de creerse que desiste espontáneamente de un delito (el que ha cometido uno anterior, cuando su resolución de realizarlo, ha tenido ya un principio de ejecución)? ¿No es mucho más verosímil suponer en tal caso, que si no llevó adelante su intento, fué por motivos ajenos a su voluntad y que no pudo vencer? La Comisión así lo piensa, y por eso propone la referida modificación.

Los tres títulos del Código sobre autores, cómplices y encubridores, los hemos reunido en uno solo, después de la eliminación de los últimos, por las razones que hemos expuesto en otra parte de esta nota.

Con referencia a los autores, en los dos primeros incisos del Código, nos hemos limitado a modificar la redacción, a fin de precisar los conceptos y evitar redundancias, y en el tercero, a suprimir la enumeración de los medios de determinar a la ejecución de un delito, de acuerdo con las ideas ya manifestadas sobre la inconveniencia de las enumeraciones.

Los artículos 22, 22 y 24, han sido suprimidos, porque son simples soluciones de casos particula-

res, justas algunas, como la del 22, injustas otras, como la del 23, pero que de todos modos no deben figurar en la Ley, porque los preceptos generales, en concordancia con las circunstancias especiales de cada caso, son suficientes, al efecto.

Se ha resuelto asimismo suprimir las disposiciones sobre el complot, teniendo en cuenta que él no constituye sino una forma especial de la codefincuencia o de la complicidad. Los que formen un complot, serán autores o serán cómplices, con arreglo a las disposiciones generales, y sin necesidad alguna de dictar a su respecto preceptos de orden particular.

Lo mismo hemos resuelto con referencia a las bandas, de las cuales hacemos un delito en la parte especial del Código, siguiendo el ejemplo de muchas legislaciones, que consideran con toda razón, que una asociación cuyo fin es el delito, debe ser castigada por el hecho sólo de su organización.

Por lo demás, las reglas generales sobre tentativa, o delincuencia y complicidad, serán suficientes para determinar la parte de responsabilidad que tiene cada uno de los miembros, sea en los delitos cometidos o tentados, sea en la formación misma de la banda.

En la complicidad, sólo hemos modificado la redacción del inciso C. del artículo 4o. de la Ley de Reformas y agregado al D. una condición esencial para que no se consideren cómplices de los delitos cometidos por la prensa, a los editores y demás personas que presten la cooperación material para la publicidad. Esa condición, que responde al propósito de evitar la impunidad de tales delitos, es que el autor sea conocido y se encuentre en el país.

El concurso de delitos legislado por el Código en el título de la agravación de las penas, es objeto de un título especial en nuestro proyecto y las modificaciones que hemos introducido, tienen por objeto llegar, lo más aproximadamente posible, a la justa proporcionalidad del castigo.

La extinción de acciones y de penas, que el Código no legisla sino respecto de una de sus causas—la prescripción,—es materia de un título especial en nuestro proyecto. En él se establecen las distintas causas de extinción, y se fija el alcance de cada una, como lo hacen casi todos los Códigos extranjeros.

Las disposiciones aisladas que contiene el Código vigente, sobre ejercicio de las acciones, han sido reunidas del mismo modo en un título especial, que lógicamente debía figurar en esta parte del Código, puesto que constituyen reglas de carácter general.

Fuera de esta modificación, más de forma que de fondo, hemos dividido las acciones en tres categorías, según la naturaleza de los delitos, limitando la acción de oficio respecto de algunos, que por sus caracteres, debían dejarse a la iniciativa privada.

El último título del proyecto en la parte general, no figura en el Código actual y tiene por objeto fijar el alcance de algunos de los términos empleados en el Código. Su utilidad nos parece evidente, porque servirá para evitar dudas y controversias en la aplicación de la Ley.

En lo que forma la materia de este libro, nuestra preferente atención, se ha contraído al doble objeto de atenuar, en ciertos delitos, el rigor excesivo de la ley actual y de no dejar sin castigo acto alguno que revista los caracteres del delito.

V. E. conoce las frecuentes críticas de que ha sido objeto la penalidad de ciertos delitos y especialmente de algunos contra las personas y la pro-

piEDAD, y sabe también que desgraciadamente, muchas de ellas son, a todas luces, justificadas.

El delito de lesiones, por ejemplo, tiene como minimum, seis meses de arresto y esta pena forzosamente tiene que ser aplicada, cualesquiera que sean el número y calidad de las atenuantes, y aunque se trate de una contusión levísima. La Comisión tiene acerca de esta penalidad el juicio de muchos funcionarios judiciales y ninguno discrepa, en cuanto a la necesidad de disminuirla a términos moderados.

Si este mismo delito de lesiones es cometido por un marido contra su mujer, la pena no baja hoy de un año de prisión, y no son pocos los casos en que un simple golpe de puño entre marido y mujer, ha dado lugar a la aplicación de esta pena.

Por lo que se refiere a los hurtos, el P. E. no obstante la prevención que inspiran en general, los delitos contra la propiedad, ha hecho uso, más de una vez, del derecho de conmutación que le acuerda la Constitución, para suavizar los efectos de la excesiva penalidad de la Ley.

Satisfaciendo, pues, esta necesidad, hemos procedido a una revisión completa de las penas, reduciéndolas en algunos delitos, ya por disminución del minimum, ya bajando el maximum, ya por fin, limitando uno y otro de los dos extremos.

Debemos agregar, también, que al practicar esta revisión tan prolijamente como nos ha sido posible, hemos notado que en ciertos delitos, el reproche a la penalidad podrá ser, no por excesivo rigor, sino por exceso de benignidad, y que en tales casos hemos aumentado las penas mediante el procedimiento opuesto al anterior, esto es, subiendo el minimum, el maximum o los dos a la vez.

No nos detenemos a indicar cuales son las modificaciones que en los dos sentidos anteriores hemos hecho, porque el simple cotejo de los artículos del Código y del proyecto, las revelan, pero si agregaremos, que con el sistema de no enumerar las causas de atenuación y agravación, y con dar suficiente extensión a la escala de penas correspondientes a cada delito, se facilita grandemente la aplicación proporcionada de la pena y se remedia, en gran parte, ya la extrema lenidad, ya el excesivo rigor de la Ley.

Pasamos ahora a dar cuenta de las otras reformas e innovaciones que hemos hecho en esta parte del Código.

En los delitos contra el honor, incluidos en el Código entre los delitos contra las garantías individuales, bajo el rubro "De las calumnias e injurias", la Comisión propone cambios de importancia.

La larga experiencia de algunos de nosotros en la magistratura y en el foro, nos ha llevado a este triste convencimiento: que el honor, es decir, el bien más precioso y querido del hombre culto, no tiene protección en la Ley, porque ésta y la jurisprudencia que le ha dado vida, conducen, a fuerza de exigencias, sutilezas y distinguos, a la completa impunidad de los delitos de este género.

Se le dice a un hombre cualquiera y a boca llena en una reunión pública o por medio de la prensa, "ladrón y estafador", y el que es víctima de esa calumniosa imputación, acude a los tribunales pidiendo el castigo del delincuente, como justa reparación del daño que se le ha inferido. ¿Qué resuelven los jueces, en tal caso, después que el acusador ha probado que efectivamente, el acusado le ha dirigido esa imputación, y cuando el último nada ha dicho en su descargo y ni siquiera ha comparecido al juicio? Pues, asómbrase V. E.: los jueces reconocen que, en realidad, un hombre le ha dicho a

otro "ladrón y estafador", pero el acusado es absuelto, porque la imputación no es de un hecho concreto y el acusador, es decir, la víctima, es condenado al pago de las costas y a Dios gracias, a nada más.

Pero se ha imputado un hecho concreto; se le ha dicho al acusador que en tal día, a tal hora y en tal sitio cometió un robo. Viene la acusación y viene la consiguiente absolución, porque el hecho no es lo suficientemente concreto; falta la indicación de la persona robada, circunstancia indispensable para que haya robo.

Llegamos, sin embargo, a la imputación de un hecho que por reunir todas las indicaciones necesarias y aun algunas, no es posible dejar de considerarlo como concreto. ¿Piensa V. E. que en ese caso el delincuente es condenado? Pues también es absuelto, porque no hay prueba de que la imputación de tal hecho, fuese a sabiendas de su falsedad.

Se acusa por injurias; y tampoco falta nunca la razón para absolver; unas veces falta el ánimo de injuriar; otras veces, la acusación es por injurias graves y como para el Juez resultan sólo leves, opta por no imponer pena, porque no puede separarse de los términos de la acusación; algunos, en fin, constituyen calumnia y el acusador es mandado a que haga uso de su derecho ante otro Juez y por otra vía.

No se detienen aquí los recursos que la Ley y la jurisprudencia acuerdan a los autores de un delito contra el honor, para asegurar su impunidad.

Se sigue un largo juicio, con su cortejo inevitable de gastos, pérdida de tiempo e incomodidades: se obtiene sentencia condenatoria, después de muchísimo tiempo; está próxima la sentencia de segunda instancia, que, al fin, hará justicia; parece inevitable, pues, el castigo y la reparación; pero no; todavía queda el recurso supremo: la retracción y el acusado que durante todo el juicio ha persistido en sus imputaciones, declara que las retira, a más no poder y viene el sobreseimiento definitivo de la causa, con la declaración de que su formación no perjudica el honor y buen nombre del acusado.

Todo esto, señor Ministro, que parece mentira, es el reflejo fiel de lo que ocurre en nuestros Tribunales, en cuanto a los delitos contra el honor.

En presencia de tal estado de cosas, la Comisión piensa que esto no puede llamarse justicia y que no es así como se debe proteger el honor de los habitantes del país. Propone, en consecuencia, una modificación radical en la legislación de esta materia, persuadida de que se evitarán muchos motivos de intranquilidad y muchas causas de perjuicios, tanto públicos como privados, el día que la Ley consiga la disminución de estos delitos, mediante el castigo efectivo de los que se produzcan.

En consecuencia con las anteriores ideas, y teniendo en cuenta que bajo esta faz, la persona puede ser afectada en tres formas, cada una con distinta gravedad y con efectos diferentes, — imputación de un hecho que pueda perjudicar el honor y la reputación, divulgación de esa imputación, y ofensas de otro orden, de palabras o de hecho, — hacemos de estas tres distintas agresiones al honor, otros tantos delitos independientes, calificando de injuria la primera forma, de difamación la segunda y de ultraje la última. La calificación de calumnia, que encierra en el concepto general la idea de falsedad de la imputación, la reservamos para los casos en que, admitiendo la prueba de la verdad de ella, el acusado no la produjere.

Como V. E. ve, legislando en esta forma tomamos en cuenta todos los hechos que importan un ataque al

honor y a la vez los precisamos en términos comprensibles para todos, porque todos saben lo que es una ofensa, y todos aprecian con igual facilidad lo que afecta el honor y la reputación.

Nos separamos así de la división de las injurias en graves y leves, — concepto esencialmente relativo y muy difícil de deslindar en la práctica, — y hacemos a un lado igualmente la enumeración de unas y otras, por las mismas razones que nos han hecho criticar más de una vez en el curso de esta nota ese sistema de legislar.

Nos hemos separado también, en cuanto a la calumnia, de la doctrina corriente entre ciertos autores y que ha prevalecido en nuestra jurisprudencia, de que existe cuando la imputación se hace a sabiendas de su falsedad. Para nosotros, hay calumnia cuando el acusado de ese delito no prueba la verdad de su imputación.

¿Por qué, se preguntará, esta noción del delito de calumnia? Porque, en primer lugar, es eso lo que piensa la sociedad en que vivimos y para quien legislamos: todo el mundo califica de calumniador al que lanza una imputación contra el honor de otro, y no la prueba. Y en segundo lugar, porque nos parece racional que nadie juegue con el honor ajeno que es, en definitiva, lo que se autoriza con la doctrina a que nos hemos referido. Luego, pues, la conciencia de la falsedad no debe cambiar la naturaleza del delito, sino constituir meramente una circunstancia agravante.

Lo mismo pensamos del otro requisito que dicha doctrina requiere, el de que la imputación sea de un delito perseguible de oficio. Tan gravemente puede afectarse el honor de un individuo, con la imputación de un delito, como con la imputación de un vicio o de una conducta de esas que causan la pérdida moral y social de un hombre.

Finalmente, rechazamos en absoluto el otro requisito de que el delito imputado debe ser determinado y concreto, porque, a nuestro juicio, no hay diferencia, del punto de vista del honor, entre llamarle a un hombre estafador y decirle que ha cometido una estafa.

Hemos completado el proyecto sobre estos delitos estableciendo que cuando la imputación se dirige contra una corporación social o institución, y ésta puede afectar el honor o la reputación de las personas que constituyen o representan a las mismas, el delito se entenderá cometido contra éstos, quienes podrán, por consecuencia, ejercer las acciones correspondientes.

El proyecto contiene otras dos disposiciones que no figuran en el Código vigente y cuya justicia nos ha parecido evidente.

La primera es que, el acusado por injuria o difamación, podrá ser admitido a probar la verdad de la imputación, en los tres casos que establece el artículo respectivo.

No se puede desconocer el derecho del ofendido para exigir la prueba de la imputación que se le ha dirigido, porque ese es el mejor medio de que se haga en el asunto plena luz y no quede para siempre la terrible duda que la calumnia engendra. La declaración de que no hay prueba de la imputación o de que ella es falsa, es la mejor satisfacción del agravio recibido.

Tampoco es posible desconocer la justicia y la conveniencia general de que se admita la prueba, cuando se trata de imputaciones que han tenido por objeto defender un interés público actual o dirigidas a un funcionario público, con motivo del ejercicio de sus funciones, porque a todos interesa en el primer caso porque no se coarte la libertad de defender lo que afecta a la colectividad, y porque en el segundo, la sociedad tiene derecho, para saber cómo desempeñan sus cargos los funcionarios públicos, y si son o

no ciertas las imputaciones que se hacen contra su honor.

La segunda disposición que hemos insinuado, es la de que se impondrá la pena de la injuria o del ultraje si así correspondiere al hecho acusado, aun cuando la acusación fuere por calumnia o difamación. Este artículo se propone concluir con lo que pasa en la actualidad que aun cuando haya prueba de la injuria y el juez la reconoce, no aplica, sin embargo, la pena, porque la acusación fué por calumnia o viceversa.

En los delitos contra la honestidad, hemos agregado algunas disposiciones que hacían falta en el Código vigente, y que son urgentemente reclamadas por imperiosas necesidades de moral pública. Esas disposiciones son las del artículo 131, que se propone combatir la infame trata de blancas; la del artículo 132, que castiga a los que explotan en su beneficio la prostitución, a los que viven de ella; la del 133, que reprime a los fabricantes o circuladores de imágenes u objetos obscenos, con que se invaden las calles de las principales ciudades de la República, y la del 134, que pena igualmente a los que hacen obscenidades en sitios públicos, contra los cuales, no obstante ser muchos, la autoridad ha sido hoy impotente.

En los matrimonios ilegales, establecemos una distinción impuesta por la diferente gravedad del hecho. No es lo mismo el matrimonio celebrado entre dos personas que conocen el impedimento, que aquel en que una de ellas lo ignora. En el primer caso, el daño es sólo a la sociedad; en el segundo, es a esta misma y juntamente al contrayente engañado. Castigamos, pues, al último, con una pena más grave que al primero.

En los delitos que el Código llama contra el estado civil, y que nosotros calificamos de supresión y suposición del estado civil, empleamos para evitar dudas e incertidumbres, una fórmula genérica, dentro de la cual caben todos los actos de cualquier naturaleza que produzcan por resultado, hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de otro. Lo suposición de preñez o parto, y la exposición u ocultación, que no son más que actos tendientes a aquel fin, lo legislamos como meras circunstancias agravantes.

En el título que proyectamos "Delitos contra la libertad", ponemos el caso del que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga, como ha ocurrido alguna vez, y del que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella, hechos calificados de crímenes por la Constitución Nacional. Agregamos también algunas circunstancias que agravan el hecho y que no figuran en el Código, como son las siguientes: 1o. cometer el hecho con violencias o amenazas, o con propósitos de lucro, o con fines religiosos o de venganza; 2o. cuando resulte grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito mayormente penado.

Hemos incluido en este título muchos delitos que el Código coloca entre los que son especiales a los empleados públicos, siguiendo el método que nos hemos trazado, y cuya exposición será la materia del capítulo siguiente.

Basta, por ahora, decir, que en el artículo 143, nos ocupamos de los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, y que su enumeración comprende, a nuestro juicio, todos los casos en que la libertad individual resulte suprimida o disminuida, o simplemente afectada por un acto emanado de aquellas funciones.

Establecemos, bajo el mismo título indicado, un delito que no ha sido previsto anteriormente: el del que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. Legislamos igualmente como delitos contra la

libertad, la substracción u ocultación de un menor de diez años, modificando en esto al que fija la edad de nueve; su falta de presentación por parte del encargado, la inducción a la fuga de un mayor de diez y menor de quince, y la ocultación a las investigaciones de la justicia o de la policía, de los que dentro de aquellas edades se hubieren fugado.

Salvamos también en este mismo título las deficiencias del Código actual, en cuanto no reprime la coacción en general, o sea el hecho del que use violencia, o amenaza para compeler a otro a hacer o no hacer o tolerar algo, en cuanto no castiga la amenaza de violencia pública o de otros delitos, y en cuanto ha olvidado también la represión de las violencias o amenazas no previstas especialmente.

El capítulo segundo de este título, se ocupa de la violación de domicilio, y en él nos pronunciamos expresamente sobre la cuestión que discute la doctrina, respecto de lo que debe considerarse el domicilio, y acerca de la manera de expresar su voluntad el morador. Con relación a la primera, consideramos que el delito existe cuando se entra en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias, o en el recinto habitado por otro. Y con respecto a la segunda, entendemos que la entrada para que haya delito, debe ser contra la voluntad expresa o presunta, de quien tenga derecho de excluirla.

Reputamos igualmente que comete el mismo delito, el que encontrándose en domicilio ajeno, no se retira después de recibir intimación de salir. Esto constituye un complemento forzoso de la inviolabilidad del domicilio.

El artículo 159, prevé otro caso de violación del domicilio: el del funcionario público que lo allana, sin observar las formalidades que para el efecto exige la ley.

El Código legisla en dos partes la violación y revelación de secretos, y nosotros reunimos toda la materia en un solo capítulo, garantizando de una manera mucho más efectiva la inviolabilidad de la correspondencia, porque penamos todos los actos de apoderamiento de toda clase de documentos privados, carta, telegrama, etcétera, y la supresión o desviación de su destino y la publicación de su contenido, estableciendo a la vez penas más severas para el empleado de correos o telégrafos que viole en cualquier forma la correspondencia.

Las dos últimas disposiciones de este capítulo, se refieren a la violación del secreto profesional y a la divulgación de actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos.

En el capítulo cuarto del título de que nos ocupamos, hemos previsto dos delitos que no existen en el Código actual, y cuya creación era necesaria para garantizar la libertad de trabajo e industria. Esos delitos consisten, el primero, en emplear violencias o amenazas contra otro para restringir o impedir el ejercicio de su industria o comercio, y el segundo, en valerse de maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, para desviar con un fin interesado, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

El capítulo séptimo se propone asegurar la libertad de la prensa, de que tampoco se ocupa el Código vigente. En él proyectamos el castigo de todo el que implidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico que no contenga escritos ilícitos.

El capítulo octavo, es completamente nuevo en el Código Penal; se refiere a los delitos contra la libertad política, y forman parte de él las disposi-

ciones penales de la ley de elecciones nacionales, con las correcciones y modificaciones que hemos creído convenientes.

Repetimos en este caso lo que dice la *Exposición de motivos*, que acompaña el proyecto de 1891: "Un país republicano no puede dejar de prever en su Código Penal, las violaciones de la libertad política previstas en los suyos por los países monárquicos, y mucho menos, cuando ellas son tan frecuentes como en la República Argentina. Libertad tan esencial al funcionamiento del régimen representativo, debe estar protegida tan permanentemente como la vida, la seguridad, la propiedad y el honor de los ciudadanos, en el mismo cuerpo de legislación que estos derechos fundamentales, y no debe quedar librada a las contingencias de una legislación especial, dictada casi siempre bajo la presión de los intereses y de las pasiones del momento" (pág. 155).

Después de determinar en general la penalidad de todo acto de violencia, amenaza, tumulto o fraude, que tienda a impedir o estorbar el ejercicio de algún derecho político, nos ocupamos preferentemente de garantizar la libertad del sufragio pensando todo acto de coacción o de fraude en la emisión del voto, o en la preparación y terminación del acto electoral.

Concluye este capítulo, negando a los autores de delitos contra la libertad política, el beneficio de la condena condicional, medida que juntamente con la sanción del artículo 81 acordamos a cualquier ciudadano, y la obligación que imponemos al ministerio fiscal de continuar hasta su terminación estas causas, tienden a desarraigar de nuestras costumbres el funesto vicio del fraude y la mentira en los actos más solemnes de las democracias.

Después de esto, viene en nuestro proyecto el título de "Delitos contra la propiedad".

En el hurto, robo, extorsión y estafas y otras defraudaciones, las principales reformas son las siguientes: 1.º Diminución de algunos de los hechos que importan hurto calificado; 2.º Borrar la división, a los efectos de la penalidad, de delitos de menor o de mayor cuantía. La Comisión piensa sobre este punto, que la importancia pecuniaria del delito, es motivo que corresponde al juez apreciar juntamente con las demás circunstancias del hecho y del agente para la determinación de la pena; y 3.º Inclusión en las estafas de algunos hechos que no están consignados en el Código. Entre éstos, puede citarse el hecho de los empresarios constructores de obras, o vendedores de materiales de construcción, que en la ejecución de la obra o entrega de los materiales cometen un acto fraudulento, capaz de poner en peligro la seguridad de las personas o de los bienes; el fraude cometido en perjuicio de alguna administración pública; y por fin, el hecho tan frecuente del que consume bebidas o alimentos en los establecimientos que ejercen este negocio, o se hace prestar un servicio de los que se pagan al contado, como ser conducido en un carruaje, por ejemplo, y no pagase el precio correspondiente al ser requerido con tal objeto.

En el capítulo de este mismo título, destinado a los quebrados y otros deudores punibles, las modificaciones son de mayor importancia. Hemos empezado por precisar el débito, a fin de hacer desaparecer las incertidumbres que resultan del sistema actual del Código, que no expresa sino el

concepto de quebrado fraudulento, y que obliga a recurrir al Código de Comercio para saber quién debe ser considerado tal. Desde que se trata de un delito, lo natural es que sea el Código Penal quien lo defina y establezca con sus requisitos y condiciones. Es lo que hacemos en el proyecto, disponiendo que el delito de quiebra fraudulenta se comete, cuando un comerciante declarado en quiebra, ha ejecutado en fraude de sus acreedores, algunos de los hechos que se enumeran. Estos actos han sido limitados a los que realmente revisiten el carácter de fraudulentos, como son simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener, substraer u ocultar alguna cosa que correspondiera a la masa, o conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

La quiebra culpable ha sido también definida en sus elementos constitutivos, los que se reducen a actos de negligencia o imprudencia manifiestos. No hemos olvidado tampoco la quiebra de una sociedad que ejerce el comercio, considerando como autores de quiebra fraudulenta o culpable, según el caso, a los directores o administradores que hubieren cooperado a la ejecución de los actos respectivos.

Con respecto al deudor no comerciante que hubiere sido concursado civilmente, disponemos su castigo, cuando para defraudar a sus acreedores hubiere cometido alguno de los actos que dan lugar a la quiebra fraudulenta de los comerciantes. Actos de esta naturaleza deben ser penados, tanto en el comerciante, como en el que no lo es, sin más diferencia que una atenuación en la pena.

Inspirados en los propósitos y preceptos de la ley comercial como de la civil, erigimos también en delito la connivencia del deudor y un tercero, que tenga por resultado la concesión de ventajas especiales, en caso de aceptación de un arreglo.

En el delito de usurpación, queremos evitar hechos que no están comprendidos en el Código, y que sin embargo, violan la propiedad raíz en una forma perfectamente delictuosa. El individuo que por violencia, engaño o abuso de confianza, se apodera, instalándose como en casa propia de una, casa desocupada, hecho que tantas veces se comete, especialmente en las grandes ciudades, priva de uno de los atributos de la propiedad, causa un perjuicio considerable, y es, por tales razones, y por la audacia del acto, merecedor de una pena. A fin, pues, de proteger la propiedad inmueble contra estos atentados y otros análogos, extendemos el concepto de la usurpación, disponiendo que la comete el que por violencia, engaño o abuso de confianza, despoja a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o de un derecho real, o al que con violencia o amenaza turbase la posesión de un inmueble.

Al legislar sobre este delito, hemos tenido también presente que en ciertos puntos del territorio, el uso de las aguas de represas, ríos, arroyos, etcétera, es una necesidad vital de la población y de sus industrias, y que, en consecuencia era necesario proteger eficazmente el derecho de cada cual, con relación a ellos. Es lo que hacemos por el artículo 198, habiéndonos preocupado de prever todos los casos y situaciones.

Castigamos en el capítulo séptimo, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La Comisión no se explica por qué la propiedad intelectual, la más querida, tal vez, por su dueño, no es

protegida por la ley penal, a la par de cualquier otra. El inconveniente no puede nacer del precepto constitucional, porque éste, en vez de desconocer, afirma la propiedad de esta clase, y es bien es cierto que autoriza su limitación en cuanto al tiempo, no es menos cierto que la propiedad existe y que ella tiene un carácter permanente, mientras no se dicte la ley reglamentaria. Proponemos, pues, en virtud de estas ideas, que castigamos los delitos contra la propiedad intelectual, en la extensión y por las causas que expresamos en el artículo 109.

Respecto de la propiedad industrial, hemos incorporado al proyecto las disposiciones respectivas de la Ley de marcas y patentes, amoldándolas a los principios generales que han presidido la confección de nuestro trabajo, y sometiéndonlas a una revisión esmerada.

En el título "Delitos contra la seguridad pública", hemos incluido algunos preceptos del Código que figuran como delitos contra la propiedad particular en el capítulo "De los incendios y otros estragos", y hemos generalizado algunas de sus disposiciones sobre caminos de hierro, a todas las vías u obras destinadas a la comunicación pública por tierra o por agua. De acuerdo con este plan, castigamos a todo el que inutilice o destruya esas obras, al que impida o estorbe la ejecución de las medidas adoptadas para seguridad de las mismas, al que emplee cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o hacerlo destarrillar, al que ejecute cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfonos destinado al servicio de un ferrocarril, al que arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha, al que practicare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante, a detener o entorpecer la navegación, al conductor y demás empleados de un tren o de un buque que abandonaren su puesto durante su servicio respectivo, y por último, al que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica, o resistiere voluntariamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

Entre la misma clase de delitos, comprendemos la piratería, cuyas disposiciones son, con pocas variantes, las de la Ley de 14 de septiembre de 1863.

Vienen, por fin, a completar este título, el capítulo de los delitos contra la salud pública, que contiene varias disposiciones que hacían falta en el Código actual.

Indúl nos parece la justificación de todas las disposiciones enumeradas en el capítulo, que como V. E. verá, tienen por objeto el castigo de actos que constituyen graves atentados contra la salud pública, que el Estado tiene el deber de proteger por todos los medios a su alcance.

Respecto del ejercicio ilegal de la medicina, nos ha de permitir V. E. algunas breves consideraciones.

El curanderismo, en todas sus formas, es uno de los peores enemigos de la salud, a la vez que un medio inepto de explotación; lo primero, porque cuando no precipita la muerte, con procedimientos absurdos y antihigiénicos, deja avanzar las enfermedades mediante el empleo de medios completamente pueriles e inicuos; lo segundo, porque aprovecha del sufrimiento y del dolor para hacerse pagar generosamente su engaño y su mala fe. La Comisión piensa, pues, que es necesario, una vez por todas, acabar con este mal, que desgraciadamente, se extiende en todas partes, gracias a la divulgación de ciertos medios que pueden dar resultado en manos de un hombre de

ciencia, pero que son una desgraciada paredia en poder del chariatán.

No podríamos prescindir, por otra parte, ya que hacemos obra nacional, del clamor público contra estos profesionales del engaño y la mentira; no podíamos desatender las quejas que todos los días oíamos; no podíamos, en fin, ser sordos a la protesta de todos los hombres cultos y de las corporaciones científicas más autorizadas. Hemos procedido, en consecuencia, a legislar esta materia, cuidando todos los detalles, a fin de llegar a la extirpación completa de este reconocido mal.

Agregaremos que hemos tenido presente para este capítulo, el proyecto que el P. E. remitió al H. Congreso en 1904.

El título octavo del proyecto — "Delitos contra el orden público" — contiene algunas disposiciones adoptadas por la Ley de reformas, y otras que no se encuentran en el Código, pero que son verdaderas garantías del orden; entre las últimas, están la instigación pública a cometer delitos, la instigación al odio contra determinada persona o institución, y la asociación para cualquier fin ilícito.

En el título de los delitos contra la seguridad de la Nación, están todas las disposiciones de los títulos 1o. y 2o. de la Ley de 14 de septiembre de 1863, con algunas variantes de redacción, y además, algunos preceptos nuevos que tienden a completar la materia. Entre éstos, citamos el artículo 235, que castiga con las penas de la traición los actos de este carácter ejecutados contra una potencia aliada de la República, en guerra, contra un enemigo común; el 239 que reprime al que revele secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o las relaciones exteriores de la Nación; el 241, que prevé los casos de levantamiento indebido de planos de fortificaciones, buques u otras obras militares, y de introducción clandestina o engañosamente a dichos lugares; y el 242, que impone pena al que encargado por el Gobierno Argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.

Todos estos hechos deben figurar en el Código, dados los peligros que entrañan y los perjuicios que pueden producir.

Nuestro título décimo, está calcado también sobre la ley citada, pero hemos agregado en vista de mejorar la legislación, el artículo 244 que reprime al que ejecute cualquier acto encaminado a alterar o destruir, por medios ilícitos, la Constitución Nacional; el 245, que reproduce el art. 27 de la Constitución; el 247, que considera sedición el hecho de levantarse en armas contra algún gobierno de provincia o de territorio nacional; el 248, que declara reos del mismo delito a los que proponen por medios ilícitos alterar o cambiar la Constitución de una Provincia y a los que se alzan en armas para substraer a la obediencia de una Provincia a algún Departamento o Partido de ella; y el 249, que castiga a los que se atribuyen los derechos del pueblo y a los que se alzan públicamente para impedir, fuera de los casos especiales, la ejecución de las leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos.

En el título once, hemos combinado las disposiciones del Código con las de la ley de 14 de septiembre, metodiizándolas, completándolas, y agregando algunas nuevas. Entre éstas, citamos el art. 262, que castiga al que citado legalmente como testigo, perito o intérprete, no compareciere o no prestare la declaración o exposición respectiva; el 266, que reprime al que públicamente llevara insignias o distintivos de un cargo que no ejerza, o se arrogare grados aca-

démicos, títulos profesionales u honores que no le correspondan; el 267, que se refiere a los funcionarios públicos que dictan resoluciones contrarias a las leyes, que cumplieran resoluciones ilegales o no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento les incumba; el 268, que castiga al funcionario que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio; el 269, que impone pena al jefe de la fuerza pública, que no prestare como corresponde el auxilio que le requiera la autoridad civil; el 270, que prevé el caso del funcionario que requiera la fuerza pública para oponerse a la ejecución de órdenes de autoridad legítima; el 271, aplicable al funcionario que hace abandono de su cargo con daño del servicio público; el 272, tendiente a impedir el nombramiento de personas que no reúnan las condiciones legales; el 273, que pena la violación de los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o identidad de una cosa; el 274, que reprime la subtracción, ocultación o mutilación de objetos destinados a servir de prueba, o de documentos o registros guardados en el interés del servicio público; el 278, que castiga al funcionario público que admite regalos que le fueron presentados en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio de su cargo; el 290, que considera delictuoso el hecho de que un abogado o mandatario judicial, defienda o represente simultánea o sucesivamente a partes contrarias en el mismo juicio; el 292, que castiga al Juez que niega o retarda la administración de justicia; el 293, aplicable al funcionario que dejare de promover la persecución y represión de los delinquentes, cuando tiene esa obligación, y por fin, todo el capítulo XIII, que castiga el encubrimiento. El título XII, reúne las disposiciones de la Ley 3972, sobre falsificación de moneda, y las correspondientes del Código sobre falsificación en general. Señalamos entre las disposiciones nuevas, la equiparación a la moneda, de los títulos de la deuda provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los bancos provinciales o municipales, y los títulos, cédulas y acciones al portador, emitidas legalmente por los bancos y compañías autorizadas para ello; la disposición del artículo 306, que castiga al funcionario o Director de banco o compañía, que emitiere o autorizare la emisión en título o peso inferiores al de la Ley, o billetes de banco o títulos con cantidad inferior a la autorizada; el artículo 314, que se refiere al médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión; el 319, referente a los que hicieren alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas, por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género, con el fin de no venderla, o de no venderla sino a un precio determinado; el inciso 2o. del mismo artículo, sobre los que ofrecieren fondos públicos o acciones u obligaciones de una compañía, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas, o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas; y finalmente, el artículo 320, que castiga a los directores o administradores de una sociedad anónima que presten su concurso a actos contrarios a las leyes o estatutos, y a consecuencia de los cuales, aquella queda en la imposibilidad de atender sus compromisos, o en la necesidad de ser disuelta.

Como podrá observarse, después de esta larga y fatigosa enumeración, todos los nuevos delitos que creamos en esta parte del código, responden a necesidades manifestadas del orden social, y a la garantía de respetables y primordiales derechos, tanto

públicos como privados. Por lo demás, ellos figuran en la mayoría de los códigos extranjeros, especialmente modernos, y no hay razón alguna para que no sean incorporados a nuestra legislación positiva.

Mejor ordenación de las distintas materias

Con referencia a esta parte del proyecto, sólo diremos que el método seguido por el código, es, a nuestro juicio, defectuoso, y que su comparación con el que hemos adoptado, y que vamos a exponer, demostrará la exactitud de esta opinión.

En la parte general, empezamos por legislar la aplicación de la ley con relación al territorio y al tiempo, que en un orden lógico parece que debe ser lo primero: antes de todo, la ley debe decir dónde y cuándo se aplicará.

La determinación de las penas, debe venir en seguida, porque ellas no sólo son la base de todo el código, sino porque es indispensable su previo conocimiento para legislar otras materias de la propia parte general, como la complicidad y la tentativa.

Forman parte de la legislación sobre las penas, las reglas sobre la forma de su aplicación, y es el cumplimiento de ellas, la indemnización de los perjuicios inferidos a la víctima del delito. Nos ocupamos, pues, como materia más próxima, y en seguida de las penas, de la condenación condicional, — forma de aplicación de una pena y de la reparación de perjuicios — complemento de todas.

Una vez hecho esto, y en posesión de las penas, ¿qué es lo que hay que hacer en orden sucesivo y lógico? Establecer la responsabilidad por la violación de la ley, que es lo que da lugar a la aplicación de las penas, determinar los casos en que no hay responsabilidad o en que ella está modificada, y dar la regla para la fijación de la pena, según el mayor o menor grado de responsabilidad. Por eso, el título quinto del proyecto, se ocupa de esa materia.

En ese estado, parece que ya se necesita decir, a quiénes se aplica la ley, y es lo que hacemos, ocupándonos de los reos de tentativa, de los autores y de los cómplices, y dictando en seguida reglas especiales para todos ellos, cuando son reincidentes.

Ahora, como los delinquentes de que acabamos de ocuparnos, pueden haber cometido varias infracciones, es claro que se necesitaba tratar de la concurrencia de delitos.

Sancionado todo esto, y establecido el derecho de castigar y a quiénes, con todos los detalles correspondientes, debe decirse, a continuación, cuándo ese derecho se pierde, y a tal fin responde el título X el lugar que ocupa.

¿Pero quiénes pueden pedir la aplicación de la pena? Era lo único que faltaba para completar el mecanismo de la ley, y, por consecuencia, se requería, el título "Del ejercicio de las acciones".

Tal es el plan que hemos desarrollado, y que responde al propósito de observar un orden lógico y sucesivo en la exposición de las distintas materias, y no incurrir en el defecto de pasar gradaciones de un tópico a otro completamente distinto.

En la parte especial, nos hemos preocupado de seguir el mismo método, formando las grandes divi-

siones que constituyen los títulos, por la naturaleza del principal derecho lesionado, y agrupando luego en capítulos, todo lo que tenga relación con aquél. Así, por ejemplo, para la materia del título primero, tomamos todos los delitos de que puede ser objeto la persona física, y bajo el título "Delitos contra las personas", legislamos en capítulos separados todos los hechos que pueden afectar la vida o la salud: el homicidio, las lesiones, las agresiones con armas, y el abandono de las personas.

En otro título — el quinto — y será el último que citaremos también por vía de ejemplo, consideramos los delitos contra la libertad, y en él incluimos todos los actos delictuosos de que puede ser objeto aquel derecho, en cualquiera de sus manifestaciones, y sea quien fuere la persona que lo cometa. Por eso, bajo este título, nos ocupamos de los delitos contra la libertad individual, ya sean cometidos por particulares o por funcionarios públicos, de la violación del domicilio, que afecta un derecho emergente de la libertad individual, de la violación de secretos, que se encuentra en idénticas condiciones, de los delitos contra la libertad del trabajo e industria, contra la libertad de cultos, de reunión, de la prensa y de la libertad política.

Siguiendo este plan que reputamos el mejor, porque en él todo se sucede y encadena, forzoso nos ha sido suprimir algunos títulos del código vigente, y cambiar la ubicación a muchos de sus artículos. No nos detendremos a indicar cuáles son estas supresiones y cambios, porque sería innecesaria; pero indicaremos una, entre muchas, que revelará la superioridad de nuestro método.

El código tiene un título "De los delitos pecuniarios a los empleados públicos", y si se examinan una por una sus disposiciones se verá que todos y cualquiera de los delitos que dichos empleados pueden cometer, afectan alguno de los derechos principales que sirven de base a la división que contiene el proyecto. ¿Por qué entonces esta calificación aislada e independiente de toda otra, cuando la calidad de los delinquentes no ha servido ni podría servir en el código para la división de los delitos? Las condiciones personales del agente, de cualquier naturaleza que sean, no pueden influir en la calificación del delito; ellos sólo influyen para la apreciación de la responsabilidad, y es a ese único efecto, que el proyecto tiene en cuenta el carácter de funcionario público.

Queda así esbozado, en sus líneas generales, el plan que hemos adoptado y seguido, y que en nuestro concepto, responde mejor que cualquier otro, a la idea de ir desarrollando la materia del código, en un orden lógico y sucesivo.

Con esto, quedan también cumplidos los propósitos de la presente nota, a la que sólo falta agregar que la comisión pone a disposición de V. E., las actas de sus reuniones y el concurso personal de sus miembros.

Saludamos a V. E. con nuestra más distinguida consideración.

Diego Saavedra. — Francisco J. Beazley. — Rodolfo Rivarola. — Cornelio Moyano Gacitúa. — Norberto Piñero. — José María Ramos Mejía.

PROYECTO DE CODIGO PENAL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

Aplicación de la ley penal

a) Con relación al territorio.

Art. 10.—Este Código se aplicará:

10. Por delitos y faltas cometidas, o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, en buques que lleven su bandera, o en buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en aguas jurisdiccionales;
20. Por delitos y faltas cometidas en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas, en desempeño de su cargo;
30. Por delitos de piratería, cuando los responsables cayeren bajo el poder de la Nación.

No se aplicará por delitos cometidos a bordo de buques mercantes de bandera argentina, en aguas jurisdiccionales de otro Estado, si fueren reprimidos por éste.

Art. 20.—Salvo los casos del artículo precedente, los que hubieren cometido en el extranjero hechos u omisiones calificadas de delitos por este Código, sin haber sido juzgados y cumplido su condena, serán expulsados del país, si la autoridad extranjera competente, requerida para su extradición, no la verificase. Si quebrantaren la expulsión, serán juzgados como si hubieren cometido el delito en el país.

No se comprenden en las disposiciones de este artículo a los autores de delitos políticos.

b) Con relación al tiempo.

Art. 30.—Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito, fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley, si el penado lo solicitare y las circunstancias invocadas constaren de autos.

En el cómputo de la prisión preventiva, se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

TITULO II

DE LAS PENAS

Art. 40. — Las penas que este Código establece, son las siguientes: muerte, presidio, prisión, detención, deportación, multa e inhabilitación.

Pena de muerte:

a) Prueba del hecho.

Art. 50. — No se impondrá pena de muerte, cuando el hecho o sus circunstancias calificativas resulten probadas sólo por presunciones o por confesión.

d) Garantías del procedimiento.

Art. 60. — Sólo podrá aplicarse la pena de muerte, cuando concurren las siguientes circunstancias:

10. Que la causa haya sido vista en todas las instancias que establezca la respectiva organización judicial.
20. Que en todas las instancias se haya decidido la imposición de aquella pena.
30. Que haya habido unanimidad de votos y tribunal pleno en los tribunales colegiados;
40. Que el reo haya sido oído personalmente en audiencia por todos los jueces y tribunales que dictaren sentencia.

c) Excepciones.

Art. 70. — No se impondrá la pena de muerte a las mujeres, a los menores de edad, y a los mayores de setenta años.

d) Ejecución.

Art. 80. — La ejecución de la pena de muerte, tendrá lugar dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, quien será asistido por el sacerdote o ministro del culto cuyo auxilio hubiere solicitado o aceptado.

El juez de la causa hará constar la ejecución de la pena en un acta que se unirá al proceso. Esta acta y la sentencia, se darán a la publicidad.

Art. 90. — La ejecución de la pena de muerte, tendrá lugar al día siguiente de la notificación de la sentencia irrevocable.

La notificación no podrá hacerse en víspera de domingo, ni de fiesta religiosa o nacional.

e) Entrega del cadáver.

Art. 10. — El cadáver del ejecutado será entregado a sus parientes dentro del segundo grado, si lo solicitaren al juez de la causa.

Presidio:

Art. 11. — El presidio se cumplirá con trabajos forzados, en establecimientos destinados al efecto.

a) Falta de establecimiento.

Art. 12. — Si por falta de establecimientos en donde los condenados deban sufrir el presidio, o por falta de trabajo en que deban ocuparse no pudieren cumplir su condena, serán destinados a obras públicas de cualquier género, con tal que no fueren contratadas por particulares.

b) Exceptuados de presidio.

Art. 13. — Los hombres débiles o enfermos, los menores de edad, los mayores de sesenta años y las mujeres que merecieren presidio, sufrirán la condena en prisión.

Prisión:

Art. 14. — La prisión será por tiempo indeterminado, o temporal, hasta por quince años.

Se cumplirá en establecimientos distintos de los presidios, con reclusión celular en las horas no destinadas al trabajo o a la instrucción.

a) Exceptuados de prisión.

Art. 15. — Cuando la prisión no excediere de seis meses, podrán ser detenidas en sus propias casas, las mujeres honestas y las personas ancianas o valetudinarias.

Disposiciones comunes:

a) Producto del trabajo.

Artículo 16. — El producto del trabajo del condenado a presidio o prisión, se aplicará:

10. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, que no satisficiera con otros recursos;
20. A la prestación de alimentos, según el Código Civil;
30. A costear los gastos que causare en el establecimiento;
40. A formarle un fondo propio que se le entregará a su salida.

b) Inhabilitación.

Art. 17. — El presidio y la prisión por más de tres años importan la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, y la privación de los derechos civiles, con excepción del de testar.

El condenado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para incapaces.

c) Libertad condicional.

Art. 18. — El condenado a presidio o prisión por tiempo indeterminado, que hubiere cumplido veinte años de condena, y el condenado a presidio temporal o prisión por más de tres años, que hubiere cumplido los tercios de su condena, observando con regularidad los reglamentos penales, obtendrán la libertad por resolución judicial, bajo las siguientes condiciones:

10. Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
20. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto;
30. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;
40. No cometer nuevos delitos.

Art. 19. — La libertad condicional, no se concederá a los reincidentes.

d) Revocación.

Art. 20. — La libertad condicional será revocada, cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare o intentare violar la obligación de residencia. En estos casos, no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 20. y 30. del artículo precedente, el tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena, todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliera lo dispuesto en dichos incisos.

e) Extinción de la pena.

Art. 21. — Transcurrido el término de la condena, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

f) Consecuencias de la revocación.

Art. 22. — Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.

Detención.

Art. 23. — La detención no excederá de diez años y se cumplirá en cualquier cárcel, sin sujeción al trabajo reglamentario.

Deportación.

Art. 24. — La deportación consistirá en la relegación por tiempo indeterminado, en un paraje adecuado que designará el P. E.

La deportación lleva consigo la inhabilitación absoluta. Los deportados estarán sujetos: a la vigilancia de la autoridad, a observar las reglas de inspección que fije la sentencia; a adoptar oficio, arte, industria o profesión.

El deportado que justificare haber observado buena conducta durante quince años, obtendrá, por auto judicial, la exoneración de la pena.

Admisión de condenados por tribunales provinciales.

Art. 25. — Los condenados por tribunales provinciales a presidio, prisión, deportación o detención, serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales.

Inhabilitación:

a) Absoluta.

Art. 26. — La inhabilitación absoluta importará:

10. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de elección popular;
20. La privación del derecho electoral;
30. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;
40. La pérdida de toda jubilación, pensión o goce de montepío de que disfrutare.

b) Especial.

Art. 27. — La inhabilitación especial, producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere, y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.

La inhabilitación especial para derechos políticos, producirá la incapacidad de ejercer, durante la condena, aquellos sobre que recayere.

Multa.

Art. 28. — La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia,

dentro del máximo y mínimo establecidos para el delito, teniendo en cuenta, además de las causas generales del artículo 43, la situación económica del penado.

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

En cualquier tiempo que satisficiera la multa, quedará en libertad.

Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

Comiso.

Art. 29. — Toda condena penal llevará consigo la pérdida de los efectos que provengan del delito y de los instrumentos con que se ejecutó. Los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable.

Prisión preventiva.

Art. 30. — La prisión preventiva que hubiere sufrido el condenado, se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de presidio; por un día de prisión preventiva, uno de deportación, de prisión o detención, o dos de inhabilitación, o la cantidad de multa que el tribunal fijare entre cuatro y diez pesos.

Art. 31. — Si durante la condena el penado se volviera loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena.

TITULO III

CONDEXACION CONDICIONAL

a) Circunstancias de su pronunciamiento.

Art. 32. — En los casos de primera condena por delito que deba cumplirse en cárcel, siempre que su término no excediere de dos años, los tribunales podrán ordenar en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión será motivada en la comprobación de los buenos antecedentes del reo, mediante información de la policía y demás pruebas que el juez considere necesarias.

b) Extinción de la condena.

Art. 33. — Si en el plazo de cinco años, a contar desde la fecha de la sentencia, el condenado no cometiere un nuevo delito la condenación se tendrá como no pronunciada.

c) Ejecución de la condena.

Si dentro del plazo indicado se descubrieren malos antecedentes del condenado, sufrirá la pena que le hubiere sido impuesta. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación, y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas.

d) Limitaciones.

Art. 34. — La suspensión de la pena no comprenderá:

10. La reparación de los daños causados por el delito, y el pago de los gastos del juicio.
20. Las incapacidades anexas a la condenación, impuestas accesoriamente.

Sin embargo, estas incapacidades cesarán el mismo día en que, por haber transcurrido el término de cinco años a que se refiere el artículo 33, se tuviere la condenación como no pronunciada, o en el plazo que la sentencia les hubiere fijado, si fuere menor que aquél.

TITULO IV

REPARACION DE PERJUICIOS

Indemnizaciones.

Art. 35. — La sentencia condenatoria ordenará:

10. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia, o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez, en defecto de plena prueba;
20. La restitución a su dueño, de la cosa obtenida por el delito. Si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente de la cosa, más el de estimación si lo tuviere;
30. El pago de costas.

a) Preferencias.

Art. 36. — La obligación de indemnizar, es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito y al pago de multas.

Si sus bienes no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

10. La indemnización de los daños y perjuicios;
20. El resarcimiento de los gastos del juicio.

b) Solidaridad.

Art. 37. — La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.

El que pagare todo el daño, no podrá demandar a los otros cuota alguna.

c) Obligaciones del partícipe de los efectos del delito.

Art. 38. — El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.

d) Cumplimiento de la reparación.

Art. 39. — La reparación se hará efectiva por la vía de apremio. En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:

10. Tratándose de condenados a presidio o prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 16;
20. Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

TITULO V

RESPONSABILIDADES

Se presume la intención.

Art. 40. — En la ejecución de un delito se presume la intención de cometerlo; a no ser que resulte lo contrario de las circunstancias particulares del proceso.

Excepciones.

Art. 41. — Están exentos de responsabilidad:

a) Enajenación mental.

10. El que ha resuelto y ejecutado el hecho en un estado de enajenación mental cualquiera, no imputable al agente.

En caso de enfermedad mental, el juez ordenará la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

b) Menor de 14 años.

20. El menor de catorce años.

Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente, o de sus padres o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el juez ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores, hasta que cumpla diez y ocho años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres o guardadores;

c) Fuerza o amenazas.

30. El que obrare violentado por fuerza física irresistible, o impulsado por amenazas de sufrir un mal grave e inminente;

d) Causar un mal por evitar otro mayor.

40. El que causare un mal, por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño;

e) Cumplimiento del deber.

50. El que obrare en cumplimiento de un deber, o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;

f) Obediencia.

60. El que obrare en virtud de obediencia debida;

g) Defensa legítima.

70. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:

- a) Agresión ilegítima;
- b) Necesidad racional del medio empleado para impedir la o repelerla;

- c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas circunstancias, respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

Igualmente, respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia;

80. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurren las circunstancias a) y b) del inciso anterior; y en caso de haber precedido provocación suficiente de parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

h) Pena ordinaria del delito.

Artículo 42. — En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, la pena ordinaria del delito será el término medio entre el máximo y el mínimo; pero los tribunales podrán abreviarla o prolongarla dentro de estos límites, motivando la medida de la pena en las circunstancias expresadas en el artículo siguiente:

i) Reglas para su aplicación.

Artículo 43. — A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

10. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y la extensión del daño y del peligro causados;
20. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiere incurrido, y los demás antecedentes y condiciones personales que demuestren su mayor o menor perversidad.

TITULO VI

TENTATIVA

Definición.

Artículo 44. — Hay tentativa cuando la resolución de cometer un delito, ha sido manifestada por ac-

tos exteriores que tengan relación directa con el mismo.

Para la apreciación de los actos, se tendrán en cuenta los antecedentes del agente.

Desistimiento del delito.

Artículo 45. — La tentativa no está sujeta a pena, cuando se desistiere voluntariamente del delito.

a) Cuando se presume voluntario.

Artículo 46. — La ley presume voluntario el desistimiento, a menos que se trate de un reincidente, caso en el cual regirá la presunción contraria.

b) Penalidad de la tentativa.

Art. 47. — La pena que correspondería al agente si hubiere consumado el delito, se disminuirá en un tercio. Si la pena fuere de muerte o presidio por tiempo indeterminado, la pena de la tentativa será presidio de quince a veinte años. Si la pena fuere de prisión por tiempo indeterminado, la de la tentativa será prisión de diez a quince años.

TÍTULO VII

AUTORES Y CÓMPICES

Autores.

Art. 48. — Se considerarán autores:

10. Los que tomen parte en la ejecución del hecho;
20. Los que prestaren al ejecutor un auxilio o cooperación, sin los cuales el hecho no habría podido cometerse;
30. Los que determinaren a otros a cometerlo.

Cómplices.

Art. 49. — Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo precedente, cooperaren a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.

a) Pena del cómplice.

Art. 50. — El cómplice será reprimido con la pena correspondiente al hecho a que hubiere cooperado, no pudiendo aplicársele el máximo.

Art. 51. — Si la pena que correspondiere al autor fuere la de muerte, sufrirá el cómplice la de presidio por tiempo indeterminado; si le correspondiere ésta, la de presidio temporal que no bajará de quince años; y si le correspondiere prisión por tiempo indeterminado, se le aplicará prisión que no baje de diez años.

Art. 52. — Si de las circunstancias particulares de la causa, resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor principal, la pena será aplicada al cómplice, solamente en razón del hecho a que tuvo intención de prestar ayuda. Si el hecho no se consumare, la pena del cómplice

se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de tentativa.

b) Tentativa de complicidad.

Art. 53. — La tentativa de complicidad será reprimida conforme a las reglas de la tentativa.

c) En delitos cometidos por la prensa.

Art. 54. — No se considerarán cómplices ni autores de los delitos cometidos por la prensa, a los editores, impresores y demás personas que prestaren al autor del escrito o grabado, la cooperación material necesaria para su publicación, cuando el autor fuere conocido y se encontrare en el país.

TÍTULO VIII

REINCIDENCIA

Reincidencia.

Art. 55. — Habrá reincidencia, siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación.

A los efectos de la reincidencia, no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados.

a) Reincidentes por segunda vez.

Art. 56. — Los reincidentes por segunda vez, condenados a pena restrictiva de la libertad que excediera de un año, cumplirán su condena en un paraje de los territorios del Sud.

b) Deportación como accesoría.

Art. 57. — La deportación será impuesta como accesoría de la última condena, cuando mediaren:

10. Dos condenas a presidio, o una a presidio y otra a prisión mayor de tres años;
20. Tres condenas a prisión mayor de tres años, o una de presidio y dos de prisión de tres años o menos;
30. Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años;
40. Cinco condenas a prisión de tres años o menores.

No se computarán las condenas por delitos exclusivamente militares o políticos.

Se aplicará también como accesoría de la condena, en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos, y que dos de ellos tuvieran fijada pena mayor de tres años de prisión.

TÍTULO IX

CONCURSO DE DELITOS

Hecho que cae bajo más de una sanción.

Art. 58. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fuere pena mayor.

Hechos reprimidos con la misma especie de pena.

Art. 59. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso, tendrá como minimum el minimum de la pena mayor, y como maximum, la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del maximum legal de la especie de pena de que se trate.

Hechos reprimidos con penas diferentes.

Art. 60. Cuando concurrieren varios hechos independientes, reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor.

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión por tiempo indeterminado y la de presidio temporal, en que se aplicará presidio por tiempo indeterminado.

La inhabilitación se aplicará siempre, sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1o.

Gravedad relativa.

Art. 61. — A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza, se determinará por el orden en que se hallan enumeradas en el Art. 4o.

Acumulación en caso de condena ya impuesta.

Art. 62. — Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que, después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona, por otro hecho cometido antes de dicha condenación.

TÍTULO X

EXTINCIÓN DE ACCIONES Y DE PENAS

Causa de extinción.

Art. 63. La acción penal se extinguirá:

- 1o. Por la muerte del imputado;
- 2o. Por la amnistía;
- 3o. Por la prescripción;
- 4o. Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.

Renuncia de la persona ofendida.

Art. 64. La renuncia de la persona ofendida, al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.

Amnistía.

Art. 65. La amnistía extinguirá la acción penal, y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Prescripción de las acciones.

Art. 66. — La acción penal se prescribirá por la buena conducta del imputado, durante el tiempo fijado a continuación:

- 1.º A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de muerte o presidio;
- 2.º Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con prisión o detención, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción, exceder de doce años ni bajar de dos meses;
- 3.º A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;
- 4.º Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;
- 5.º A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa mayor de dos mil pesos;
- 6.º Al año, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa de quinientos a dos mil pesos;
- 7.º A los seis meses, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa que no excediere de quinientos pesos.

Desde cuando corre.

Art. 67. — La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, o si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

Acción por delito reprimido con multa.

Art. 68. — La acción penal por delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito, y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Prescripción de las penas.

Art. 69. — Las penas se prescribirán por la buena conducta del condenado, en los términos siguientes:

- 1.º La de muerte o presidio, a los veinte años;
- 2.º La de deportación o prisión por tiempo indeterminado, a los quince años;
- 3.º La de prisión, en un tiempo igual al de la condena;
- 4.º La pena de multa mayor de dos mil pesos a los tres años;
- 5.º La pena de multa que no excediere de dos mil pesos al año.

a) Desde cuándo corre.

Art. 70. — La prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

b) Separadamente para cada partícipe.

Art. 71. — La prescripción correrá o se interrumpirá separadamente, para cada uno de los partícipes de un delito.

Indulto.

Artículo 72. — El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Perdón del ofendido.

Artículo 73. — El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el Art. 77.

Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos, aprovechará a los demás.

Las indemnizaciones pecuniarias.

Artículo 74. — Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a la pena, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aún después de su muerte.

TITULO XI

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

De oficio.

Artículo 75. — Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:

- 1.º Las que dependieren de instancia privada;
- 2.º Las acciones privadas.

Dependientes de instancia privada.

Art. 76. — Son acciones dependientes de instancia privada, las que nacieren de los delitos de violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida, o lesiones de las mencionadas en el Art. 95.

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa, sino, por acusación o denuncia del agraviado, o de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

Acciones privadas.

Artículo 77. — Son acciones privadas, las que nacen de los siguientes delitos:

- a) Adulterio;
- b) Calumnias, injurias, difamación y ultrajes;
- c) Amenazas y violencias, comprendidas en los artículos 155 y 157;
- d) Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 162;
- e) Extorsión en el caso del artículo 185;

f) Concurrencia desleal, prevista en el artículo 167.

a) De adulterio.

Artículo 78. — La acción por delito de adulterio, corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal.

b) De calumnia, injuria, difamación o ultraje.

Art. 79. — La acción por calumnia, injuria, difamación o ultraje, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y, después de su muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

Los demás casos de acción privada.

Art. 80. — En los demás casos del artículo 77, se procederá únicamente por querrela o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.

Los delitos contra la libertad política.

Art. 81. — Por los delitos contra la libertad política, además de la acción penal, procederá la acción particular de cualquier ciudadano.

Iniciada una acción por un ciudadano, el representante del Ministerio Fiscal deberá intervenir en el proceso, desde el principio hasta la terminación, y no podrá desistir de la querrela, aunque desistiere el acusador particular.

TITULO XII

SIGNIFICACION DE ALGUNOS TERMINOS EMPLEADOS EN EL CODIGO

Art. 82. — Para la inteligencia del texto de este Código, se tendrán presentes las siguientes reglas: Los plazos señalados en este Código, se contarán con arreglo a las disposiciones del Código Civil.

La expresión *reglamentos u ordenanzas*, comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que tratan.

Por los términos *funcionario público y empleado público* usados en este Código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Se entiende por *banda*, la asociación de dos o más individuos para cometer delitos indeterminados.

Se entiende que hay *escalamiento*, cuando se penetra por vía que no está destinada a servir de entrada.

Con la palabra *mercadería*, se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio, incluso las drogas o medicamentos.

El hecho de narcotizar una persona u ocasionarle un síncope, se asimilará a la violencia o fuerza.

El término *capitán*, comprende a todo comandante de embarcación o al que le substituye.

El término *tripulación*, comprende a todos los que se hallen a bordo como oficiales o marineros.

LIBRO SEGUNDO

De los delitos

TITULO I

DELITO CONTRA LA PERSONA

CAPITULO I

DELITOS CONTRA LA VIDA

Homicidio en general.

Art. 83. — Se aplicará presidio de diez a veinticinco años al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere otra pena.

Agravaciones.

Art. 84. — Se aplicará presidio por tiempo indeterminado o muerte:

- 1o. Al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o bienhechor, sabiendo que lo son;
- 2o. Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, sevicias graves, impulso de perversidad brutal, o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión, o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos;
- 3o. Al que matare a otro para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para sus cooperadores, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.

Atenuaciones.

Artículo 85. Se impondrá prisión por tres a seis años:

- 1o. Al que matare a otro, si la víctima misma provocó el acto homicida con ofensas o injurias ilícitas y graves.
- 2o. A la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o hasta tres días después, y a los padres, hermanos marido o hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo delito;
- 3o. Al cónyuge, al ascendiente o al hermano, que matare a su cónyuge, descendiente o hermana, o al cómplice, o a ambos, en el acto de sorprenderles en ilegítimo concubito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las circunstancias particulares del hecho;
- 4o. Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona.

Concurso de agravaciones y atenuaciones.

Artículo 86. Cuando en el caso del inc. 1o. del Art. 84, concurriere alguna de las circunstancias de los incisos 1o. y 4o. del artículo anterior, la pena será de presidio por diez a veinticinco años.

Instigación al suicidio.

Art. 87. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio tuviere lugar.

Homicidio por imprudencia.

Artículo 88. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte.

Aborto.

Artículo 89. El que causare un aborto, será reprimido:

- 1o. Con prisión de tres a diez años, si obrare sin el consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
- 2o. Con prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

Artículo 90. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusaren de su ciencia o arte para causar aborto, o cooperaren a causarlo.

Artículo 91. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

Art. 92. — Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto, o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer, no es punible.

CAPITULO II

LESIONES

Lesiones en general.

Artículo 93. Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código.

Lesiones graves.

Artículo 94. Se impondrá prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo, por más de un mes, o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Artículo 95. Se impondrá prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra, o de la capacidad de engendrar o concebir.

Concurso de agravaciones.

Artículo 96. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 84, la pena será: en el caso del artículo 92, de seis meses a dos años en el caso del artículo 94, de tres a diez años, y en el caso del artículo 95, de tres a quince años.

Concurso de atenuaciones.

Art. 97. — Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1.º del artículo 85, la pena será: en el caso del artículo 92, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 94, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 95, de uno a cuatro años.

Lesiones por imprudencia.

Artículo 98. Sufrirá la pena de doscientos a mil pesos de multa, e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

CAPITULO III**HOMICIDIO O LESIONES EN RIÑA****Homicidio o lesiones graves.**

Artículo 99. — Cuando en riña o agresión en que toman parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 94 y 95 sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará prisión de dos a seis años en caso de muerte, y de uno a cuatro, en caso de lesión.

Lesiones leves.

Si las lesiones fueran las previstas en el artículo 93, la pena aplicable será de cuatro a ciento veinte días de prisión.

CAPITULO IV**DUELO****Con padrinos.**

Artículo 100. — Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

10. Con prisión de uno a seis meses, al que no infiriere lesión a su adversario, o sólo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 93;
20. Con prisión de uno a cuatro años, el que causare la muerte de su adversario, o le infiriere lesión de las determinadas en los artículos 94 y 95.

Sin padrinos.

Artículo 101. — Los que se batieren sin la intervención de padrinos mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

10. El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicidio;
20. En que causare lesiones, con pena señalada para el autor de lesiones;
30. El que no causare lesiones, con prisión de un mes a un año.

Instigación al duelo.

Artículo 102. — El que instigare a otro a provocar o aceptar un duelo, y el que desacreditare públicamente a otro para no desafiar o por rehusar un desafío, serán reprimidos:

10. Con multa de doscientos a mil pesos, si el duelo no se realizare, o si realizándose, no produjere muerte ni lesiones, o sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 93;
20. Con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte, o lesiones de las mencionadas en los artículos 94 y 95.

Agravaciones.

Artículo 103. — El que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario o otro objeto inmoral, será reprimido:

10. Con prisión de uno a cuatro años, si el duelo no se verifica, o si efectuándose, no resultare muerte ni lesiones;
20. Con prisión de tres a diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones;
30. Con presidio de diez a veinticinco años, si se produjere la muerte.

Art. 104. — El combatiente que faltare en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido:

10. Con prisión de tres a diez años, si causare lesiones a su adversario;
20. Con presidio de diez a veinticinco años, si le causare la muerte.

Alevosía de los padrinos.

Artículo 105. — Los padrinos de un duelo que usen cualquier género de alevosía en la ejecución del desafío, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren.

Duelo a muerte.

Artículo 106. — Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte, o en condiciones tales que de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos a mil pesos.

CAPITULO V**ABUSO DE ARMAS****Disparo de arma de fuego.**

Artículo 107. — Será reprimido con seis meses a dos años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona, sin herirla.

Esta pena se aplicará, aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Agresión con otra arma.

Artículo 108. — Será reprimida con prisión de quince días a seis meses la agresión con otra clase de armas, cuando no se causare herida.

CAPITULO VI**ABANDONO DE PERSONAS****De menor de 10 años o incapaz.**

Art. 109. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que abandonare o dejare en desamparo a un menor de diez años, u otra persona incapaz por causa de enfermedad, a quien deba mantener o cuidar.

La prisión será de dos a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz.

La prisión será de tres a diez años, si ocurriere la muerte.

Agravación y atenuación.

Artículo 110. — El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio, cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos, y por éstos contra aquéllos, o por el cónyuge. Serán disminuídos a la mitad, cuando el abandono fuere de un menor de tres días, aún no inscripto en el Registro Civil, para salvar el honor propio, o el de la esposa, madre, hija o hermana.

Omisión de auxilio.

Artículo 111. — Será reprimido con multa de cien a quinientos pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años, o a una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal, o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.

TITULO II**DELITOS CONTRA EL HONOR****Injuria.**

Artículo 112. — El que atribuyere, directa o indirectamente, a una persona o a una corporación, sociedad o institución cualquiera, un hecho, una calidad o una conducta que pueda perjudicar el honor o la reputación de la primera, o el de las personas que constituyan o representen a las últimas, será culpable de injuria, y reprimido con multa de doscientos a mil pesos.

Difamación.

Artículo 113. — El que divulgare una injuria por medio de escritos o dibujos, o en reuniones públicas, será culpable de difamación, y reprimido con la pena de la injuria, aumentados en un tercio el máximo y el mínimo.

Esta disposición se aplicará, al que divulgare o reprodujere injurias o calumnias inferidas por otro.

Prueba de la imputación.

Artículo 114. — El acusado por injuria o difamación, será admitido a probar la verdad de la imputación, en los casos siguientes:

10. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender un interés público actual;
20. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él;
30. Si el imputado fuere un funcionario público, y la imputación se refiriese al ejercicio de sus funciones.

El acusado quedará exento de pena, en el primer caso, si probare la verdad de la imputación, y resultare efectivo el propósito de interés público. En los demás casos, si probare la verdad de la imputación.

Prohibición de la prueba.

Artículo 115. — Queda prohibida la recepción de la prueba de cualquiera imputación que se refiera a la vida conyugal, o a la vida de familia, o a un delito contra la honestidad que no pueda perseguirse por acción pública, o cuya persecución dependa de instancia privada.

Calumnia.

Artículo 116. — Si en los casos del artículo 114, el acusado no probare la verdad de la imputación, será culpable de calumnia, y reprimido con prisión de seis meses a dos años.

Ultraje.

Artículo 117. — Será reprimido con multa de cincuenta a trescientos pesos, el que ultrajare a otro de obra o de palabra, si el hecho no se hallare comprendido en los artículos anteriores.

Regla para la aplicación de la pena.

Artículo 118. — Se impondrá la pena de la injuria o del ultraje, si así correspondiere al hecho acusado, aun cuando la acusación fuere por calumnia o difamación.

Injurias y ultrajes en juicio.

Artículo 119. — Las injurias o ultrajes proferidos por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos o en las audiencias, quedarán sujetos a las correcciones disciplinarias, a menos que fueren dados a la publicidad, caso en el cual, se impondrá la pena al que los publicare.

TITULO III**DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD****CAPITULO I****ADULTERIO**

Artículo 120. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año:

10. La mujer que cometiere adulterio;
20. El codeficiente de la mujer;

- 3o. El marido cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal;
- 4o. La manceba del marido dentro de la casa conyugal.

CAPITULO II

VIOLACION Y ESTUPRO

Violación.

Artículo 121. — Será reprimido con prisión de tres a diez años, el que tuviere acceso carnal con personas de uno u otro sexo, en los casos siguientes:

- 1o. Cuando la víctima fuere menor de doce años;
- 2o. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistir;
- 3o. Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Estupro.

Artículo 122. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años cuando la víctima fuere mujer honesta, mayor de doce años y menor de quince, y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

Por engaño.

Artículo 123. — Se impondrá prisión de dos a seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido, y tuviere con ella acceso carnal.

Agravaciones.

Artículo 124. — La prisión será de tres a quince años, cuando en los casos del artículo 121 resultare un grave daño en la salud de la víctima, o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote, o encargado de la educación o guarda de aquélla, o con el concurso de dos o más personas.

Artículo 125. — Se impondrá prisión de tres a diez años, cuando en el caso del artículo 122, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el anterior.

Artículo 126. — Se impondrá presidio de quince a veinticinco años, cuando en los casos de los artículos 121 y 122 resultare la muerte de la persona ofendida.

CAPITULO III

CORRUPCION Y ULTRAJE AL PUDOR

De menor de 18 años.

Artículo 127. — Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el que para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de persona menor de 18 años.

De mayor de 18 años, por fraude o violencia.

Artículo 128. — Será reprimido con la misma pena, el que para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de persona

mayor de 18 años, por medio de fraude o con ayuda de violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualesquiera otros medios de coerción.

Presunción contra regentes de casas de prostitución.

Artículo 129. — Si se encontrare en una casa de prostitución pública o clandestina, una víctima de los delitos previstos en los dos artículos anteriores, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona o personas regentes de dicha casa, son autores o coautores del delito.

Ultraje al pudor.

Artículo 130. — Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 121, sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en el Art. 124, se le aplicará de tres a diez años de prisión.

Trata de blancas

Artículo 131. — Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el que por medio de fraude, o con ayuda de violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualesquiera otros medios de coerción, hubiere detenido o facilitado o permitido la detención de una persona, aunque sea mayor, contra su voluntad, y aun por causa de deudas, en casa de prostitución, o la hubiere obligado a entregarse a la prostitución.

Lucro con la prostitución ajena.

Artículo 132. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que lucrare con la prostitución de una mujer.

No están comprendidos en esta disposición, los regentes de casas de prostitución autorizada.

Escritos e imágenes obscenas.

Artículo 133. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que publicare, fabricare, o reprodujere libros, escritos, figuras, imágenes u objetos obscenos, y el que los expusiere, distribuyere o hiciere circular.

Exhibiciones y palabras obscenas.

Artículo 134. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que en sitio público ejecutare o hiciere ejecutar por otro, actos, gestos, actitudes o exhibiciones obscenas, o profiriere o hiciere profirir palabras obscenas.

La misma pena se aplicará cuando los actos o palabras tuvieren lugar en sitio privado, pero expuesto a que sean vistos u oídos involuntariamente por terceros.

CAPITULO IV

RAPTO

Con violencia o fraude.

Artículo 135. — Sufrirá prisión de uno a cuatro años, el que con miras deshonestas, substraiera o

retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude.

La prisión será de dos a seis años, si la robada fuere una mujer casada.

De una menor.

Artículo 136. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de dos a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ARTICULOS ANTERIORES

Matrimonio con la ofendida.

Artículo 137. — En los casos de violación, estupro o rapto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, presando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

Abuso de autoridad, en cargo o confianza.

Artículo 138. — Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos, y cualesquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

TITULO IV

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

CAPITULO I

MATRIMONIOS ILEGALES

Sabiendo ambos contrayentes la ilegalidad.

Artículo 139. — Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeran matrimonio, sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.

Sabiéndolo uno sólo, o simulando matrimonio.

Artículo 140. — Serán reprimidos con prisión de dos a seis años:

- 1o. El que contrajere matrimonio, cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente.
- 2o. El que engañando a una persona, simulase matrimonio con ella.

El oficial que autoriza el matrimonio.

Artículo 141. — El oficial público que, a sabiendas, autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá en su caso, la pena que en ella se determina.

Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de cien a mil pesos, e inhabilitación especial por seis meses a dos años.

Sufrirá multa de cien a mil pesos, el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio, sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.

El representante legítimo del menor impúber.

Artículo 142. — En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber, que diere su consentimiento para el matrimonio del mismo.

CAPITULO II

SUPRESION Y SUPOSICION DEL ESTADO CIVIL

En general.

Artículo 143. — Se aplicará prisión de seis meses a dos años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro.

Agravantes.

Artículo 144. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años:

- 1o. A la mujer que fingiere preñez o parto, para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan, y al médico o partera que co- opere a la ejecución del delito.
- 2o. Al que por medio de exposición, de ocultación o de otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de un menor de diez años.

TITULO V

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

CAPITULO I

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Reducción a servidumbre o condición análoga.

Artículo 145. — Serán reprimidos con prisión de tres a quince años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.

Privación de la libertad, en general.

Artículo 146. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.

Agravantes.

Artículo 147. — Se aplicará prisión de uno a cua-

tro años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

10. Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas o con propósitos de lucro, o con fines religiosos o de venganza;
20. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular;
30. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor;
40. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública, u orden de autoridad pública;
50. Si la privación de la libertad durare más de un mes.

Con abuso de autoridad.

Art. 148. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, e inhabilitación especial por doble tiempo:

10. El funcionamiento público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privare a alguno de su libertad;
20. El funcionario que retuviere a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar;
30. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente;
40. El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido;
50. El funcionario que impusiere a los presos que guarda, severidades, vejaciones o apremios ilegales, o los colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados para el efecto;
60. El jefe de presidio, prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiere algún reo, sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena;
70. El alcalde o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad, que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito;
80. El funcionario que desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquiera vejación contra las personas, o les aplicare apremios ilegales;
90. El funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal, omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar, o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.

Art. 149. — Cuando en los casos del artículo anterior, concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 147, se aplicará la pena establecida en este último.

Sujeción al poder de otro o alistamiento en el extranjero.

Art. 150. — Será reprimido con prisión de tres

a diez años, el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la república, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro, o de alistarla en un ejército extranjero.

Substracción u ocultación de un menor de diez años.

Art. 151. Será reprimido con prisión de tres a diez años, el que substrajere a un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.

No presentación a sus padres o guardadores.

Art. 152. En la misma pena incurrirá el que, habiéndose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentare a los padres o guardadores que lo solicitaren, o no diere razón satisfactoria de su desaparición.

Incitación a la fuga de un menor de 15 años.

Art. 153. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que indujere a un mayor de diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.

Ocultación de un menor de 15 años.

Artículo 154. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años, que se hubiere substraido a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.

La pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviere diez años cumplidos.

Coacción.

Art. 155. — Será reprimido, si el hecho no importa otro delito más severamente, con prisión de un mes a un año, el que usare de violencia o amenaza, para compeler a una persona a hacer o no hacer o tolerar algo.

Amenaza de violencia pública o de otro delito.

Artículo 156. — Será reprimida con prisión de seis meses a dos años, la amenaza de violencia pública con fuerzas reunidas, contra las personas o las propiedades, o de un delito que ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades, o de un delito contra la honestidad.

Violencias y amenazas en general.

Artículo 157. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro meses, el autor de violencias o de amenazas no comprendidas en los artículos anteriores.

CAPITULO II

VIOLACION DE DOMICILIO

En general.

Artículo 158. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito

más severamente penado, el que entrare en morada casa de negocio ajera, en sus dependencias, o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo, o el que encontrándose allí, no se retirare, después de recibir éste la intimación de salir.

Albanación de domicilio.

Artículo 159. — Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario público o agente de la autoridad, que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley, o fuera de los casos que ella determine.

Excepciones.

Artículo 160. — Las disposiciones de los artículos anteriores, no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad, o prestar auxilio a la justicia.

CAPITULO III

VIOLACION DE SECRETOS

Cartas y papeles privados.

Artículo 161. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que abriese indebidamente una carta, un pliego cerrado, o un despacho telegráfico, telefónico, o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida.

Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho.

Abuso de un empleado de correos o telégrafos.

Artículo 162. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.

Publicación de una correspondencia privada.

Art. 163. — El que, habiéndose en posesión de una correspondencia no destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de doscientos a mil pesos, si el hecho causare o pudiere causar perjuicio a tercero.

Revelación de secreto.

Art. 164. — Será reprimido con multa de doscientos a mil pesos, e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo no-

ticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

De actuaciones.

En la misma pena incurrirá el que divulgare actuaciones o procedimientos, que por la ley deban quedar secretos.

CAPITULO IV

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DEL TRABAJO E INDUSTRIA

Compeler a una huelga.

Art. 165. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que ejerciere violencia o amenazas sobre otro, para compelerlo a tomar parte en una huelga.

Impedir el ejercicio de industria o comercio.

Art. 166. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare violencias o amenazas contra otro, para restringir o impedir el ejercicio de su industria o comercio.

Propaganda desleal.

Art. 167. — Será reprimido con multa de dos mil a diez mil pesos, el que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratase con un fin interesado, de desviar la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

CAPITULO V

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CULTOS

Art. 168. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que impidiere o perturbare la celebración de una ceremonia o función religiosa.

CAPITULO VI

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE REUNION

Art. 169. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que impidiere o turbare una reunión lícita.

CAPITULO VII

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE LA PRENSA

Art. 170. — Sufrirá prisión de un mes a un año, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico que no contenga escritos ilícitos.

CAPITULO VIII

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD POLITICA

En general.

Art. 171. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación absoluta por el

tiempo de la condena, el que por medio de violencia, amenaza, tumulto o fraude, impidiere o estorbare el ejercicio de algún derecho político, no hallándose comprendido en otra disposición de este Código.

Contra la libertad de sufragio.

Art. 172. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año:

10. El que impidiera a alguien ejercer el derecho de sufragio en una elección nacional, provincial o municipal;
20. El que, con violencia o amenaza, compeliere a otro a ejercer un derecho de sufragio en un sentido determinado;
30. El que se inscribiera en más de una sección electoral, o votare o se presentare a votar más de una vez en la misma elección;
40. El que votare o pretendiere votar, haciéndose pasar por otra persona;
50. El que, por medio de dádivas o promesas, determinare a otro a no ejercer su derecho electoral, o a ejecutarlo de cierta manera; y el elector que consintiere en ejecutar estos actos.

Si en cualquiera de los casos precedentes, el autor del hecho fuere un funcionario público, se le impondrá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena.

Coacción de funcionarios sobre empleados.

Art. 173. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público nacional, provincial o municipal, que instigare a los empleados que tenga bajo su dependencia a adherir a candidatos o partidos determinados.

Agravaciones.

Art. 174. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena:

10. El encargado de la formación del registro de electores nacionales, provinciales o municipales, que omitiere la inscripción de un elector, o inscribiera el nombre de una persona supuesta, o que no deba ser inscripta;
20. El receptor de votos que dejare de consignar un sufragio emitido, o que lo consignare adulterándolo, o que supliere la emisión de un voto que no ha tenido lugar, o que admitiere como legítimo el voto de una persona que no sea elector, o que se presente con nombre ajeno.
30. El que sustrajere, destruyere o falsificare las listas de votos, o por cualquier medio hiciere imposible o defectuoso el escrutinio, o falseare el resultado de una elección;
40. El que impidiera la celebración de un comicio o perturbare el orden en él.

Pena del cómplice.

Art. 175. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, e inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los particulares que cooperaren a la ejecución de los delitos previstos en los números 1 y 2 del artículo precedente.

No procede la libertad condicional.

Art. 176. — Los autores de delitos contra la libertad política, no gozarán del beneficio de la libertad condicional.

TITULO VI

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

CAPITULO I

HURTO

En general.

Art. 177. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.

Calificado.

Artículo 178. — Se aplicará prisión de uno a seis años, en los casos siguientes:

10. Cuando el hurto fuere de animales en rebaño, o de productos separados del suelo, y dejados por necesidad en el campo;
20. Cuando el delito se cometiere con abuso de confianza, o con auxilio de un doméstico o dependiente de la casa;
30. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública, o de un infortunio particular del damnificado;
40. Cuando se hiciera uso de ganza, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halle la cosa objeto de la sustracción o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída o hallada;
50. Cuando se perpetrare con escalamiento.

CAPITULO II

ROBO

En general.

Artículo 179. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, o con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o intimidación tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

Con homicidio.

Artículo 180. — Se impondrá presidio de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.

Otras agravantes.

Artículo 181. — Se aplicará prisión de cinco a quince años:

10. Si por las violencias ejercidas para consumir el robo, se pusiere en peligro de muerte a una persona, o se alterare permanentemente su salud;
20. Si el robo se cometiere en despoblado y en en banda.

Artículo 182. — Se aplicará prisión de tres a diez años:

10. Si se cometiere el robo en despoblado y con armas;
20. Si el robo se cometiere en despoblado y en banda.
30. Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, puerta o ventana de un lugar habitado, o sus dependencias inmediatas;
40. Si concurren alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 178.

CAPITULO III

EXTORSION

Por violencia o simulación de autoridad.

Artículo 182. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que, con violencia o intimidación, simulando orden de autoridad pública, obligue a otro a enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Por amenaza de imputaciones contra el honor.

Artículo 184. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, obligare a otro o intentare compeler a otro a la entrega de un valor o de una cosa cualquiera que no sea del culpable, a contraer una obligación o a extinguir un crédito.

Por rehenes para sacar rescate.

Artículo 185. — Sufrirá prisión de tres a diez años el que detuviere en rehenes a una persona para sacar rescate.

Por sustracción de un cadáver.

Artículo 186. — Sufrirá prisión de dos a seis años el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución.

CAPITULO IV

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

En general.

Artículo 187. — Será reprimido con prisión de un mes a seis años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

Casos particulares de defraudación.

Artículo 188. — Sin perjuicio de la disposición ge-

neral del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación, y sufrirán la pena que él establece:

En substancia, calidad o cantidad.

10. El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio;

Abuso de depósito, comisión o administración.

20. El que con perjuicio de otro, negare haber recibido, o se negare a restituir, o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos, o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración, u otro título que produzca obligación de entregar o devolver.

Por suscripción de un documento.

30. El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento;

Abuso de firma en blanco.

40. El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dió o de tercero;

Substracción de una cosa mueble por su dueño.

50. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero;

Simulación.

60. El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos;

Engaño en las cuentas o gastos.

70. El comisionista, capitán de buque o cualquier otro mandatario que cometiere defraudación, alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho;

Ocultación o mutilación de un proceso.

80. El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante;

Ilícita disposición de bienes.

90. El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos;

Supuesta remuneración a jueces o empleados.

10. El que defraudare, con pretexto de supuesta

remuneración a los jueces u otros empleados públicos.

Con pena mayor.

Art. 189. — Sufrirá prisión de dos a seis años:

Incendio o destrucción de una cosa asegurada.

- 1o. El que para procurar a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurado o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada, o cuya carga o flete estén asegurados, o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa;

Abuso de la inexperiencia de un menor o incapaz.

- 2o. El que abusare de las necesidades, pasiones inexperiencia de un menor, o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo;

Pesas o medidas falsas.

- 3o. El que defendare usando de pesas o medidas falsas;

Fraude en materias de construcción.

- 4o. El empresario o constructor de una obra cualquiera, o el vendedor de materiales de construcción, que cometiére, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado;

En perjuicio de la administración pública.

- 5o. El que cometiére fraude en perjuicio de alguna administración pública.

En los casos de los números precedentes, el culpable, si fuere empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.

Fraude de un servicio o de alimentos.

Art. 190. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que consumiere bebidas o alimentos en establecimientos que ejerza ese comercio, o se hiciere prestar un servicio cualquiera de los de pago inmediato, y no los abonare al ser requerido.

Con pena menor.

Art. 191. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos:

Hallazgo de una cosa ajena.

- 1o. El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca, o un tesoro correspon-

diente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil.

Apropiación por error o caso fortuito.

- 2o. El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiera entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito;

Apropiación o venta de la cosa recibida en prenda.

- 3o. El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero, o se la apropiare o dispusiere de ella, sin la formalidades legales.

CAPITULO V

QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES

Quiebra fraudulenta.

Art. 192. — Será reprimido como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra, que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en alguno de los hechos siguientes:

- 1o. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;
- 2o. No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa;
- 3o. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

Quiebra culpable.

Art. 193. — Será reprimido como quebrado culpable, con prisión de un mes a un año, e inhabilitación especial de dos a cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios, o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta.

Quiebra de una sociedad anónima o cooperativa.

Art. 194. — Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador o gerente de la sociedad o establecimiento fallido, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento o culpable, en su caso.

Deudor no comerciante.

Art. 195. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente, que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiére alguno de los actos mencionados en el artículo 193.

Conclusión de un concordato, convenio o transacción.

Art. 196. — Será reprimido con prisión de un mes

a un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción.

La misma pena sufrirá, en su caso, todo director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de ese género.

CAPITULO IV

USURPACION

De un inmueble.

Art. 197. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años:

Despojo.

- 1o. El que por violencia, engaño o abuso de confianza, despojare a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble;

Alteración de límites.

- 2o. El que para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo;

Turbación de la posesión.

- 3o. El que, con violencias o amenazas, trabare la posesión de un inmueble.

Usurpación de aguas.

Art. 198. — Será reprimido con prisión de quince días a un año:

- 1o. El que ilícitamente sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos, o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho;
- 2o. El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas;
- 3o. El que ilícitamente represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes, o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes, hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.

CAPITULO VII

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Art. 199. — Será reprimido con multa de mil a diez mil pesos:

Reproducción de una obra y explotación de un invento ajeno.

- 1o. El que sin consentimiento del autor o de su sucesor, reprodujere una obra literaria, científica o artística, o explotare un invento o descubrimiento ajeno, a menos que la propiedad exclusiva de la obra, invento o descubrimiento, se encuentre extinguida.

Esta disposición comprende la representación de piezas teatrales;

Marca de fábrica o de comercio.

- 2o. El que falsificare o adulterare una marca de fábrica o de comercio;

Uso de marca ajena.

- 3o. El que pusiere, sobre sus productos o sobre los efectos de su comercio, una marca ajena;

Venta con marca falsificada.

- 4o. El que vendiere, pusiere en venta, o se prestare a vender o a circular, artículos con marca de fábrica o de comercio falsificada, o fraudulentamente aplicada;

Abuso del nombre de un comerciante, etc.

- 5o. El que hiciere uso, sin derecho, del nombre de un comerciante, de una razón social, o de la muestra o designación de una fábrica o de una casa de comercio.

CAPITULO VIII

DAÑOS

En general.

Art. 200. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer, o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble, o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

Agravaciones.

Art. 201. — La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

- 1o. Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad, o en venganza de sus determinaciones;
- 2o. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;
- 3o. Emplear substancias venenosas o corrosivas;
- 4o. Cometer el delito en despojado y en banda;
- 5o. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos, o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso públicos; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte, colocados en edificios o lugares públicos.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Hurtos, defraudaciones y daños.

Art. 202. — Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren:

- 1o. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta;
 - 2o. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro;
 - 3o. Los hermanos y cuñados si viviesen juntos.
- La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito.

TITULO VII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

CAPITULO I

INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS

Incendio.

Art. 203. — El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:

- 1o. Con presidio de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes;
- 2o. Con prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería;
- 3o. Con prisión de tres a quince años, si hubiere peligros de muerte para alguna persona;
- 4o. Con presidio de diez a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Estrago.

Art. 204. — Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de inmersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina, o cualquier otro medio poderoso de destrucción.

Peligro por destrucción o inutilización de diques, etc.

Art. 205. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.

La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, substraere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referidas.

Por imprudencia, negligencia o impericia.

Art. 206. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otro estrago.

Si el hecho u omisión culpable, pusiere en peligro de muerte a alguna persona, o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cuatro años.

CAPITULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACION

Inutilización o destrucción de vías u obras.

Art. 207. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública por tierra o por agua, o impidiere o estorbare la ejecución de las medidas adoptadas para seguridad de las mismas.

El máximo se elevará a seis años, si resultare peligro para las personas. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de tres a quince años.

Detener o entorpecer la marcha de un tren.

Artículo 208. — El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren, o para hacerlo descarrilar, será reprimido:

- 1o. Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente;
- 2o. Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente;
- 3o. Con prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona;
- 4o. Con presidio de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona.

Interrupción del telégrafo o del teléfono de un ferrocarril.

Artículo 209. — Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior, en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono, destinado al servicio de un ferrocarril.

Arrojar proyectiles contra un tren en marcha.

Artículo 210. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha.

Peligro de nave o construcción flotante.

Artículo 211. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante, o a detener o entorpecer la navegación.

Si el hecho produjere naufragio, avería o varamiento, la pena será de tres a doce años de prisión.

Si el accidente causare lesión a alguna persona, la pena será de tres a quince años de prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de presidio.

Abandono del servicio de un tren o de un buque.

Artículo 212. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque, que abandonaren su puesto durante su servicio respectivo.

Por imprudencia, negligencia o impericia.

Artículo 213. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que por imprudencia o negligencia, o por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio, u otro accidente previsto en este artículo.

Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cuatro años.

Interrupción de comunicaciones telegráficas o telefónicas.

Artículo 214. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

CAPITULO III

PIRATERIA

Artículo 215. — Será reprimido con prisión de tres a quince años:

Depredación o violencia contra un buque, etcétera.

- 1o. El que practicare en la mar o en los ríos de la República, algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante, o sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida;

Abuso de patente de corso.

- 2o. El que, abusando de una patente de corso, legítimamente concedida, practicare algún acto de depredación o cualquiera hostilidad contra buques de la República o de otra nación, para hostilizar a la cual no estuviere autorizado;

Fraude o violencia contra el comandante de un buque.

- 3o. El que se apoderare de algún buque o de lo que perteneciere a su equipaje, por me-

dio de fraude o violencia cometida contra su comandante;

Entrega de un buque a piratas.

- 4o. El que entregare a piratas un buque, su carga, o lo que perteneciere a su tripulación;

Oposición a la defensa del buque.

- 5o. El que, con amenazas o violencias, se opusiere a que el comandante o la tripulación defendiera el buque atacado por piratas;

Destinación de un buque a la piratería.

- 6o. El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque destinado a la piratería.

Tráfico con piratas.

- 7o. El argentino o extranjero residente en la República, que traficare con piratas, o les suministrare auxilios;

Buque armado con diversas patentes.

- 8o. El comandante de un buque armado, que navegare con dos o más patentes de diversas potencias.

Con homicidio.

Artículo 216. — Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque atacado, la pena será de diez a veinticinco años de presidio.

CAPITULO IV

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA

Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas.

Artículo 217. — Será reprimido con prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de presidio.

Venta o distribución de los mismos.

Artículo 218. — Las penas del artículo precedente serán aplicadas, al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercederías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

Contagio de enfermedad peligrosa.

Artículo 219. — Será reprimido con prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Imprudencia, negligencia o impericia.

Artículo 220. — Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia o negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de quinientos a dos mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de seis meses a dos años si resultare enfermedad o muerte.

Violación de prescripciones médicas en la preparación de medicinas.

Artículo 221. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos, el que estando autorizado para la venta de substancias medicinales, las suministre en especie, calidad o cantidad no correspondiente a las prescripciones médicas, o diversa de la declarada o convenida.

Si del hecho resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de dos a seis años de prisión.

Violación de medidas antiepidémicas.

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Política sanitaria animal.

Artículo 223. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses, el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.

Agravaciones.

Artículo 224. — En el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.

Ejercicio ilegal de la medicina.

Artículo 225. — Será reprimido con prisión de quince días a un año:

- 1o. El que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo, o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas aun a título gratuito;
- 2o. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiére la curación de enfermedades a término fijo, o por medios secretos o infalibles;
- 3o. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1o. de este artículo.

TITULO VIII**DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO****CAPITULO I****INSTIGACION A COMETER DELITOS****Instigación pública a cometer delitos.**

Artículo 226. — El que públicamente instigare a cometer un delito, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes a cuatro años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 43.

Si la instigación produjere efecto, el instigador será penado como autor del hecho cometido.

Instigación al odio contra determinada persona o institución.

Artículo 227. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que a sabiendas, circulare o fijare en lugares públicos, un escrito incitando al odio o menosprecio contra determinada persona o institución.

CAPITULO II**ASOCIACION ILICITA****Para cometer delitos.**

Artículo 228. — Será reprimido con prisión de un mes a cinco años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas, destinadas a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

Para otro fin ilícito.

Art. 229. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que formare parte de cualquier otra asociación con un fin ilícito.

CAPITULO III**INTIMIDACION PUBLICA**

Artículo 230. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, o amenazare con un desastre de peligro común.

TITULO IX**DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION****CAPITULO I****TRACION****Traición.**

Artículo 231. — Será reprimido con penitenciaría de diez a veinticinco años o presidio por tiempo indeterminado, y en uno u otro caso inhabilitación absoluta

perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este Código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos, o les prestare cualquier ayuda o socorro.

Agravaciones.

Artículo 232. — Será reprimido con presidio por tiempo indeterminado, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

- 1o. Si ejecutare un hecho dirigido a someter, total o parcialmente, la Nación, al dominio extranjero, o a menoscabar su independencia o su integridad;
- 2o. Si indujere o decidiere a una potencia extranjera, a hacer la guerra contra la República.

Conspiración para la traición.

Artículo 233. — Será reprimido con prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

Exención de pena.

Artículo 234. — Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento.

Delitos contra una potencia aliada.

Artículo 235. — Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República en guerra contra un enemigo común.

CAPITULO II**DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ Y LA DIGNIDAD DE LA NACION****Peligro de una declaración de guerra, represalias, etc.**

Artículo 236. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos hostiles, no aprobados por el Gobierno Nacional, diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o alterare las relaciones amistosas del Gobierno Argentino con un gobierno extranjero.

Si de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de tres a quince años de prisión.

Violación de tratados, treguas, armisticio, etc.

Art. 237. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra, o los salvoconductos debidamente expedidos.

Violación de inmunidades diplomáticas.

Art. 238. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare inmunidades del jefe

de un Estado o del representante de una potencia extranjera.

Revelación de secretos políticos o militares.

Art. 239. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa, o a las relaciones exteriores de la Nación.

En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.

Revelación por imprudencia o negligencia.

Art. 240. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que, por imprudencia o negligencia, diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.

Planos de fortificaciones u obras militares.

Art. 241. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente levantara planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares, o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.

Violación de instrucciones diplomáticas.

Art. 242. — Será reprimido con prisión de tres a diez años, el que, encargado por el Gobierno Argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.

TITULO X**DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL****CAPITULO I****REBELION****Alzamiento en armas.**

Art. 243. — Serán reprimidos con detención de uno a diez años, los que se alzaren en armas para depouer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Alteración ilícita de la Constitución Nacional.

Art. 244. — Será reprimido con detención de tres a diez años, el que ejecutare cualquier acto encaminado a alterar o destruir, por medios ilícitos, la Constitución Nacional.

Facultades extraordinarias.

Art. 245. — Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 232 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional, y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de Provincias, facultades extraordinarias, la

suma del poder público, o sumisión o supremacías por las que, la vida, el honor o la fortuna de los argentinos, queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (Art. 29 de la Constitución Nacional).

Ejecución de bulas, rescriptos del Papa, etc.

Art. 246. — Se impondrá detención de seis meses a cuatro años al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su cumplimiento, necesiten del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno a seis años de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase.

CAPITULO II

SEDCION

Contra poderes públicos provinciales o de territorios nacionales.

Artículo 247. — Serán reprimidos con detención de uno a seis años los que, sin rebelarse contra el Gobierno Nacional, armaren una Provincia contra otra, se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos de una Provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales, o su formación o renovación en los términos y formas establecidos en la ley.

Alterar la Constitución de la Provincia.

Artículo 248. — Serán reprimidos con detención de dos a seis años:

- 1.º Los que ejecutaren cualquier acto encaminado a alterar o destruir por medios ilícitos, la Constitución de una Provincia;
- 2.º Los que se alzaren en armas para substraer a la obediencia del gobierno de una Provincia, algún departamento o partido de ésta.

Atribuirse derechos del pueblo e impedir la ejecución de las leyes.

Artículo 249. — Serán reprimidos con detención de un mes a cuatro años:

- 1.º Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (Art. 22 de la Constitución Nacional);
- 2.º Los que, se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales, o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ARTICULOS PRECEDENTES

Intimación a los sublevados.

Artículo 250. — Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima inti-

mará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuélvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación, el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.

No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas.

Disolución del tumulto.

Artículo 251. — En caso de disolverse el tumulto, sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.

Conspiración.

Artículo 252. — El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.

Seducción de tropas, mando ilegal, etc.

Artículo 253. — El que sedujere tropas, o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia, o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar.

Si llegare a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos.

Agravación para el funcionario público.

Art. 254. — Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán, además, inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena.

Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años.

Art. 255. — Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.

TITULO XI

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPITULO I

ATENTADO Y RESISTENCIA CONTRA LA AUTORIDAD

Atentado.

Art. 256. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Agravaciones.

Art. 257. — La prisión será de seis meses a dos años:

- 1.º Si el hecho se cometiere a mano armada;
- 2.º Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas;
- 3.º Si el culpable fuere funcionario público;
- 4.º Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Resistencia.

Art. 258. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requisición de aquel, o en virtud de una obligación legal.

Funcionarios públicos a los efectos de este capítulo.

Artículo 259. — Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público, al particular que tratarse de aprehender, o hubiere aprehendido a un delincuente, en flagrante delito.

Perturbar el orden de las sesiones, audiencias, etc.

Artículo 260. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses.

- 1.º El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones;
- 2.º El que sin estar comprendido en el artículo 257, impidiere o estorbare a un funcionario público, cumplir un acto propio de sus funciones.

Inobservancia de formas legales para encausar a un funcionario.

Artículo 261. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas.

Violación de deberes de perito o testigo.

Artículo 262. — Será reprimido con multa de cincuenta a mil pesos, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.

En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación de un mes a un año.

CAPITULO II

DESACATO

Provocación a duelo, amenazas o injurias.

Artículo 263. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que provocare a duelo, amenazare, injuriare, o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o decoro, a un funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones, o al tiempo de practicarlas.

La prisión será de un mes a un año, si el ofendido fuere el Presidente de la Nación, un miembro del Congreso, un Gobernador de Provincia, un Ministro Nacional o Provincial, un miembro de las Legislaturas provinciales o un juez.

No admisión de prueba de las imputaciones.

Artículo 264. — Al culpable de desacato no se le admitirá la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos o cualidades atribuidas al ofendido.

CAPITULO III

USURPACION DE AUTORIDAD, TITULOS U HONORES

Por ejercicio indebido.

Artículo 265. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

- 1.º El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente;
- 2.º El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público, o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión en sus funciones, continuare ejerciéndolas;
- 3.º El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

Uso indebido de insignias, títulos, etc.

Artículo 266. — Será reprimido con multa de cincuenta a mil pesos, el que públicamente llevara insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere, o se arrogare grados académicos, títulos profesionales, u honores que no le correspondieren.

CAPITULO IV

ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Contra la constitución y las leyes.

Artículo 267. — Será reprimido con detención de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no

ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Por negativa o inercia de un acto de su oficio.

Art. 268. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente, omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

Omisión de auxilio requerido.

Artículo 269. — Será reprimido con detención de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

Requerimiento indebido de la fuerza pública.

Artículo 270. — Será reprimido con detención de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad, o de sentencias o de mandatos judiciales.

Abandono del servicio público.

Artículo 271. — Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habersele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

Nombramientos ilegales.

Artículo 272. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

En la misma pena incurrirá, el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

CAPITULO V

VIOLACION DE SELLOS Y DOCUMENTOS

De sellos.

Artículo 273. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa.

Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además, inhabilitación por doble tiempo.

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de cincuenta a quinientos pesos.

De documentos.

Artículo 274. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que substrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos.

CAPITULO VI

COHECHO

De un funcionario.

Artículo 275. — Será reprimido con multa de doscientos a cuatro mil pesos e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

De un juez.

Artículo 276. — Será reprimido con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perfecta, el juez que aceptare promesa o dádiva para dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia.

El que ofreciere dádivas.

Artículo 277. — Será reprimido con multa de doscientos a cuatro mil pesos el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere dádivas a un funcionario público, para que haga u omita un acto relativo a sus funciones. Si la dádiva se hiciere u ofreciere a un juez, la pena será de un mes a cuatro años de prisión.

Si el culpable fuere funcionario público sufrirá, además, inhabilitación, en el primer caso, por seis meses a seis años, y en el segundo, por uno a diez años.

Aceptación de regalos.

Artículo 278. — Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere regalos que le fueren presentados en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

CAPITULO VII

MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS

Mala aplicación de fondos.

Artículo 279. — Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Substracción.

Artículo 280. — Será reprimido con prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que substrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

Por imprudencia o negligencia.

Artículo 281. — Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona, la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

Administradores públicos.

Artículo 282. — Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

Demora de pagos.

Artículo 283. — Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario público que, teniendo fondos expedidos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente.

En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

CAPITULO VIII

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS

Artículo 284. — Será reprimido con multa del diez al sesenta por ciento del valor de la parte que hubiere tomado en el negocio e inhabilitación absoluta por uno a cinco años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación hubieren intervenido y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarias o concursos.

CAPITULO IX

EXACCIONES ILEGALES

De una contribución ilegal.

Artículo 285. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exigiere una contribución ilegal, o abusando de su cargo, reclamare o recibiere dinero u otros valores.

La inhabilitación será de uno a cuatro años si la exacción se verificare empleando fuerza.

En provecho propio o de tercero.

Artículo 286. — Será reprimido con prisión de

uno a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en el artículo anterior.

Cobro indebido de derechos.

Artículo 287. — Será reprimido con multa del duplo al cuádruplo de la cantidad que hubiere percibido, e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exigiere por sí o por persona interpuesta, derechos o propinas por lo que deba practicar gratuitamente, en virtud de su oficio, o cobrare mayores derechos que los que le correspondan.

Si para efectuar la exacción, supusiere orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, sufrirá además, inhabilitación especial por uno a seis años.

CAPITULO X

PREVARICATO

Resolución contraria a la ley o a los hechos.

Artículo 288. — Sufrirá multa de mil a cuatro mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua, el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo, o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Lo dispuesto en el párrafo 1.º de este artículo, será aplicado en su caso, a los árbitros y arbitadores amigables componedores.

Por prisión ilegal.

Artículo 289. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil quinientos pesos e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda, o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 30, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

De abogados y mandatarios judiciales.

Artículo 290. — Será reprimido con multa de doscientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

De fiscales, asesores, etc.

Artículo 291. — La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante autoridades.

CAPITULO XI

DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA

Del juez.

Artículo 292. — Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

En la misma pena incurrirá el juez que retardare la administración de justicia después de requeridos por las partes y de vencidos los términos legales, salvo la prueba de un inconveniente insuperable.

Del funcionario público.

Art. 293. — El funcionario público, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

CAPITULO XII

FAISO TESTIMONIO

En general.

Artículo 294. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad, o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculcado, la pena será de uno a diez años de prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

Mediante cohecho.

Artículo 295. — La pena del testigo, perito o intérprete falso cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

CAPITULO XII

ENCUBRIMIENTO

Hechos reprimidos.

Artículo 296. — Será reprimido con prisión de quince días a dos años, el que sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:

- 1.o Ocultar al delincuente o facilitar su fuga, para substraerlo a la justicia;
- 2.o Procurar la desaparición de los rastros o pruebas del delito;
- 3.o Guardar, esconder, comprar, vender, o re-

cibir en prenda o en cambio los efectos substraídos;

4.o Negar a la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de penetrar en el domicilio para tomar la persona del delincuente que se encuentre en él;

5.o Guardar habitualmente delincuentes, o ocultar en la misma forma, armas o efectos de los mismos, aunque no tuviere conocimiento determinado de los delitos;

6.o Dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo.

Exención de pena.

Artículo 297. — Estarán exentos de pena por ocultación los consanguíneos y afines en línea ascendente y descendente, los hermanos, los cónyuges y los afines colaterales en segundo grado.

En los casos de delitos contra las personas, quedarán también exentos de pena por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

Art. 298. — La exención de pena a que se refiere el artículo anterior, se entenderá siempre que la ocultación no se haya hecho por precio o participando de los efectos del delito.

CAPITULO XIV

EVASION

Con violencia o fuerza.

Art. 299. — Será reprimido con prisión de un mes a un año el que, hallándose legalmente detenido, se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.

El que favoreciere la evasión.

Art. 300. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de cien a mil pesos.

TITULO XII

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

CAPITULO I

FALSIFICACION DE MONEDA, BILLETES DE BANCO, TITULOS AL PORTADOR Y DOCUMENTOS DE CREDITO.

Falsificar, introducir, circular.

Artículo 301. — Será reprimido con prisión de tres a quince años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación.

Cercenar o alterar.

Artículo 302. — Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada.
Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a tres años de prisión.

Moneda falsa recibida de buena fe.

Artículo 303. — Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulara con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de cien a dos mil pesos de multa.

Billetes y títulos equiparados a moneda.

Artículo 304. — Para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados a la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial, o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales o municipales, los títulos, cédulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o compañías autorizados para ello.

Monedas extranjeras.

Artículo 305. — Si la falsedad, cercenamiento o alteración se cometiere respecto de monedas extranjeras que no tengan curso legal en la República, o respecto de billetes de banco, títulos de deuda pública, títulos al portador y documentos de crédito extranjeros, la pena será de uno a cinco años de prisión en el caso del artículo 301, de seis meses a dos años en el artículo 302, y de cincuenta a quinientos pesos de multa en el del artículo 303.

Emisión ilegal.

Artículo 306. — Serán reprimidos con prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley; billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada.

CAPITULO II

FALSIFICACION DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS

De sellos oficiales.

Artículo 307. — Será reprimido con prisión de uno a seis años:

- 1.o El que falsificare sellos oficiales;
- 2.o El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad, o tenga por objeto el cobro de impuestos.

En estos casos, así como en los de los artículos si-

guientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero.

De marcas, contraseñas, etcétera.

Artículo 308. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

- 1.o El que falsificare marcas, contraseñas o firmas de que se use en las oficinas públicas o por funcionarios públicos, para contristar pesas o medidas o identificar cualquier objeto;
- 2.o El que falsificare billetes de empresas, sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, exigidas por la ley en cierta clase de trabajos o de artículos;
- 3.o El que aplicare marcas o contraseñas de las oficinas públicas, o los sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, a que se refiere el número precedente, a objetos, obras o artículos distintos de aquellos a que debían ser aplicados.

Uso de sellos, timbres o marcas inutilizadas.

Artículo 309. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición.

El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etcétera, inutilizados, será reprimido con multa de cien a cinco mil pesos.

Con abuso de funciones públicas.

Artículo 310. — Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPITULO III

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Falsificar un documento.

Artículo 311. — El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con prisión de uno a seis años si se tratare de un instrumento público, y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.

Insertar declaraciones falsas.

Artículo 312. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Suprimir o destruir un documento.

Artículo 313. — El que suprimiere o destruyere en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.

Falso certificado médico.

Artículo 314. — Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad o lesión.

La pena será de uno a cuatro años si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

Uso de documento falso.

Artículo 315. — El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Documentos equiparados a instrumentos públicos.

Artículo 316. — Para los efectos de este capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 304.

Abuso de funciones públicas.

Artículo 317. — Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPITULO IV**DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS PRECEDENTES**

Artículo 318. — Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introdujere en el país o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título.

CAPITULO V**DE LOS FRAUDES AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA**

Artículo 319. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:

Alteración de precios por noticias falsas, coalición, etcétera.

10. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas, o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla, o de no venderla sino a un precio determinado;

Oferta fraudulenta, de fondos públicos, etcétera.

20. El que ofreciere fondos públicos, o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando

hechos o circunstancias verdaderas, o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas;

Sociedades anónimas: falsos informes o balances.

30. El fundador, director, administrador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa, o de otro establecimiento mercantil, que publicare un balance o cualquier otro informe falso o incompleto.

Actos contrarios a estatutos, leyes u ordenanzas.

Artículo 320. — Será reprimido con multa de cuatro mil a veinte mil pesos, el director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica de otra índole, que prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a los estatutos, leyes u ordenanzas que los rijan, a consecuencia de los cuales, la persona jurídica o la asociación, quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos, o en la necesidad de ser disuelta.

LIBRO TERCERO**De las faltas****TITULO I****DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 321. — Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el libro primero, con las modificaciones siguientes:

Tentativa.

10. La tentativa de falta no es punible;

Menores.

20. Los menores de catorce años que cometieren alguna falta, serán entregados a la corrección doméstica, sin perjuicio de la corrección y vigilancia de la autoridad;

Responsabilidad del guardador.

30. Cuando una falta fuere cometida por persona subordinada a la potestad, dirección o vigilancia de otra, la pena se aplicará también a ésta, si se tratare de faltas a disposiciones que estaba obligada a hacer observar, y si la falta pudo ser impedida por ella, empleando la debida diligencia.

Si la falta fuere cometida por orden de la persona investida de la potestad o encargada de la dirección o vigilancia, y violare disposiciones que ella misma estuviera obligada por la ley a hacer observar, la pena se aplicará también a la persona subordinada, si ésta hubiere cometido la falta a pesar de la advertencia o prohibición especial de la autoridad pública;

Reincidencia.

40. Las condenas impuestas por faltas no se-

rán computadas a los efectos de la reincidencia y su represión;

Comiso.

50. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas será decretado por los tribunales, a su prudente arbitrio, según los casos y circunstancias;

Regla de aplicación de las penas.

60. En la aplicación de las penas por faltas, los tribunales procederán según su prudente arbitrio dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso.

TITULO II**FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD GENERAL**

Artículo 322. — Será reprimido con multa de veinte a doscientos pesos:

Pozos, excavaciones, etcétera.

10. El que abriere pozos o excavaciones, obstruyere con materiales o escombros, o cruzare con cuerdas, alambres o cualquier otro objeto, un camino u otro paraje de tránsito público, y omitiere las precauciones necesarias para evitar el peligro proveniente de los mismos;

Señales.

20. El que removiere las señales puestas para indicar un peligro en el tránsito público;

Alumbrado.

30. El que arbitrariamente apagare el alumbrado público, el del exterior de los edificios o el de los portales o escaleras de los mismos;

Objeto que cause daño.

40. El que arrojaré o colocare en la calle, sitio público o edificio habitado, cualquier objeto que pueda causar daño a las personas;

Animal suelto.

50. El que dejare en la vía pública una bestia de carga, de tiro o de carrera, o cualquier otro animal, sin haber tomado las precauciones suficientes para que no cause daño, o excitare o espantare intencionalmente un animal con peligro para la seguridad de las personas;

Custodia de un loco.

60. El encargado de la guardia o custodia de un loco, que lo dejare vagar por las calles y sitios públicos, sin la debida vigilancia, o no diere aviso a la autoridad cuando se substraiera a su custodia;

Arma de fuego.

70. El que en paraje poblado disparare una arma de fuego, o arrojaré un fuego cualquiera con peligro para las personas o las cosas;

Peligro de incendio.

80. El que contraviniera a las reglas establecidas para evitar la propagación del fuego en las máquinas de vapor, calderas, hornos, estufas, chimeneas, u otros lugares semejantes, o dejare de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio;

Edificio que amenaza ruina.

90. El que descuidare la demolición o reparación a que esté obligado, de edificios que amenacen ruina, con peligro para la seguridad;

Materias explosivas, etc.

10. El que infringiere los reglamentos u ordenanzas sobre la elaboración, tenencia, custodia o transporte de materias explosivas, inflamables o corrosivas, o productos químicos que puedan causar estragos;

Nodrizas.

11. La mujer que sabiendo que está atacada de enfermedad contagiosa, se colocare como nodriza, o no manifestare su enfermedad cuando la conoce, estando en aquel servicio, salvo lo dispuesto en los artículos 220 y 221;

Servicio profesional.

12. El médico, cirujano, partera o flebotomo que, sin causa justificada, rehusare o demorare prestar el servicio profesional que se le solicitare en caso urgente, y el farmacéutico que rehusare o demorare, sin causa justificada, los medicamentos prescritos por los médicos;

Conducción de vehículos.

13. El que condujere vehículos en lugares poblados, con velocidad que pueda poner en peligro a las personas o las cosas, o confiare su manejo a personas inexpertas.

TITULO III**FALTAS CONTRA EL ORDEN PUBLICO**

Artículo 323. — Será reprimido con prisión de cinco a ciento veinte días:

Alborotos, encerradas, etc.

10. El que causare alboroto en el pueblo, perturbare una reunión o fiesta, u ofendiere a una persona con gritos, encerradas u otros ruidos;

Toques de campana, ruidos, etc.

20. El que con gritos, toques de campana u otros

ruidos, o ejercitando su oficio de un modo contrario a los reglamentos, turbare las ocupaciones o el reposo de los vecinos;

Vagancia.

30. El que siendo capaz de trabajar se entregare a la vagancia;

Mendicidad.

40. El que por holgazanería o avaricia, siendo capaz de trabajar, mendigare o enviare a mendigar a un hijo suyo o a persona confiada a sus cuidados, protección o vigilancia;

Acto profesional ilícito.

50. El que, fuera del caso de urgencia, ejecutare, sin título o permiso de la autoridad, un acto de una profesión que los exija o traspasare los límites de su autorización;

Armas, pólvora, etc.

60. El que sin permiso de la autoridad competente, cuando él sea legalmente necesario, fabricare, introdujere, pusiere en venta o expendiere armas, pólvora u otras materias explosivas;

Uso imprudente de armas.

70. El que confiare o permitiere llevar armas de fuego cargadas, a menores de catorce años, o a cualquier persona que no sepa o no pueda manejarlas;

Sepulcros, cadáveres, etc.

80. El que violare sepulcros o profanare cadáveres o restos humanos, o los trasladare o removiere sin autorización competente.

TITULO IV

FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Art. 324. — Será reprimido con prisión de cinco a sesenta días:

Negativa de declarar el nombre.

10. El que, requerido por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, para declarar su nombre, profesión, estado, lugar de nacimiento o domicilio, u otras indicaciones personales, rehúsare contestar o diere falsos datos;

Anuncios.

20. El que, sin derecho, arrancare, hiciere ilegible o rompiere un anuncio fijado en paraje público por la autoridad competente;

Registro de estado civil.

30. El que no hiciere las declaraciones a que esté legalmente obligado para el registro del estado civil de las personas;

40. El oficial de estado civil o capitán de buque que infringiere una disposición cualquiera de la ley, concerniente a los registros o a las actas del estado civil.

Matrimonio religioso sin comprobación del civil.

50. El ministro, pastor o sacerdote de cualquier religión o secta, que procediera a la celebración de un matrimonio religioso, sin tener a la vista el acta de la celebración del matrimonio civil;

Subscripción para el pago de pena pecuniaria.

60. El que promoviere o levantara una subscripción pública para pagar o reembolsar una pena pecuniaria;

Ejercicio prohibido de la profesión.

70. El que ejerciere profesión, funciones o derechos de que estuviere inhabilitado por sentencia;

Reclutamiento ilegal.

80. El que reclutare gente, sin orden de la autoridad respectiva;

Copia o publicación de documentos.

90. El que, sin autorización competente tomare copia o extracto de documentos secretos de la administración, o los publicare;
10. El que sin autorización competente hiciere o publicare un plano, dibujo o descripción de una obra de defensa militar;

Libros de a bordo.

11. El capitán de buque que no tuviera a bordo todos los papeles del buque, libros o documentos exigidos por las leyes o reglamentos dictados por la autoridad competente.

TITULO V

FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES

Ebriedad.

Artículo 325. — Será reprimido con multa de diez a cien pesos;

- 1.º El que se encontrare en un lugar público, en un estado manifiesto de embriaguez;

Bebidas alcohólicas.

- 2.º El que en sitio público o casa abierta al público sirviere bebidas alcohólicas a un niño menor de catorce años o a una persona ebria o en estado anormal por debilidad o alteración de sus facultades mentales;

Corrupción de menores.

- 3.º El que admitiere o facilitare a un menor impúber la entrada en una casa de prostitución o en otro sitio de corrupción;

Menores en casa de juego.

- 4.º El que admitiere o facilitare la entrada en una casa de juego de azar a un menor de edad o a otra persona incapaz de administrar sus bienes;

Crueldad con los animales.

- 5.º El que cometiere actos de crueldad contra un animal o sin necesidad lo maltratase o lo impeliere a fatigas manifiestamente excesivas;

Respeto a la mujer.

- 6.º El que en sitio público dirigiere preguntas o proposiciones irrespetuosas a una mujer que no hubiera dado motivo para ello, o la siguiere o molestare con hechos o actitudes que no importaren delito;

Adivinaciones.

- 7.º El que se ocupare en interpretar sueños, hacer pronósticos o adivinaciones, o abusare de la credulidad pública de otra manera semejante.

Juego.

Artículo 326. — Serán reprimidos con prisión de cinco a ciento veinte días:

- 1.º El que tuviere una casa de juegos de azar en que se admita al público, sea libremente, sea por presentación de los interesados, afiliados o socios;
2.º El administrador, banquero o empleado de la casa, cualquiera que sea la categoría del empleado;
3.º El que participare del juego o a quien la autoridad sorprendiera en el interior de una casa de las comprendidas en el presente artículo.
4.º El que en cualquier sitio o bajo cualquier forma, explotare apuestas sobre carrera de caballos, juegos de pelotas, billar, juegos de destreza en general u otros permitidos por la autoridad, ya sea ofreciendo al público apostar, o apostando con el público directamente o por intermediario;
5.º El dueño, gerente o encargado de un local donde se vendieren o se ofrecieren al público, boletos de apuestas mutuas, o se facilitare en cualquier forma la realización de tales apuestas;
6.º El que se encargare de la compra o colocación de boletos de apuestas fuera del recinto de los hipódromos;
7.º El que hubiera establecido loterías no autorizadas por ley nacional, o cualquier otro juego semejante no autorizado por el P. E., o tuviere en su poder los billetes de loterías clandestinas emitidas dentro o fuera del país;
8.º El administrador propietario, agente o empleado de casas donde se vendan o se encuentren billetes de lotería no autorizadas;
9.º El que por medio de avisos, anuncios, carteles o todo otro medio de publicidad, hi-

- ciere conocer la existencia de esas loterías;
10. El que publicare o presentare al público sus extractos;
11. El que introdujere en la República billetes de lotería no autorizadas, o de cualquier manera los circularen o exhibieren;
12. El que estableciere o tuviere en las calles, caminos, plazas o lugares públicos, juegos de lotería u otros de azar en que se ofrecieren al juego sumas de dinero.

IV

INFORME DEL EX SENADOR Dr. ANGEL ROJAS

(Proyecto de despacho de las comisiones de Códigos y de justicia Militar del Senado 1918), redactado por el ex senador Dr. Angel Rojas.

A la Honorable Cámara de Senadores:

Vuestras Comisiones de Códigos y de Justicia Militar han estudiado reunidas el Proyecto de Código Penal, sancionado por la H. Cámara de Diputados, y por los motivos que exponen en el presente informe, os aconsejan su sanción, con las modificaciones introducidas en dicho proyecto.

Después de haberlo estudiado, las comisiones se propusieron las siguientes cuestiones:

10.—Si convenía presentar un despacho aconsejando la sanción del proyecto de Código Penal venido en revisión, sin proponer ninguna reforma, o bien;

20.—Si era más conducente presentar un dictamen con las modificaciones que el estudio del proyecto había sugerido.

En apoyo del primer temperamento se tenía presente motivos atendibles. Es indudable que el proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados mejora sensiblemente el Código Penal en vigencia, pues ha introducido en él reformas que han sido reconocidas uniformemente como favorables, no sólo desde el punto de vista doctrinario, científico, sino, y sobre todo, bajo el aspecto de los beneficios que se espera producirán en la práctica, en razón de los nuevos organismos que incorpora a la legislación represiva del país.

Siendo esto así, se argüía que acaso fuera prudente no demorar por más tiempo la sanción definitiva del Código Penal, que era reclamada insistentemente como la satisfacción de una necesidad de orden público muy sentida. Para atenderla sin retardo, se creía que correspondía sancionar sin modificaciones el proyecto venido en revisión de la H. Cámara de Diputados, dejando a la jurisprudencia, en cuanto es legalmente posible y a leyes posteriores, el cuidado de mejorar el texto del Código.

Las Comisiones, sin embargo, se han inclinado en el sentido del segundo temperamento, y han pensado que sus deberes hacia el H. Senado se armonizaban mejor presentándole un despacho que reflejara el resultado de sus estudios, antes que aconsejarle la sanción sin modificaciones del Proyecto venido en revisión, haciendo prevalecer, de este modo, la intención de obtener una legislación más completa, aunque con algún retardo, al propósito, muy plausible sin duda, de procurar conseguir una sanción inmediata.

Si es exacto que se necesita, que es urgente la re-

forma del Código Penal, también es cierto que dicho trabajo de codificación, tan amplio, tan fundamental como es, procede que aparezca y sea en realidad el resultado del estudio sereno y reflexivo de mejor forma, los objetos sociales de la represión.

Corresponde que el Código sea un texto claro, firme, previsor, de espíritu ilustrado y progresivo, sustraído en lo posible a la obra de la interpretación, a veces tan varia, sin que quede sujeto a la expectativa próxima de nuevas leyes de reforma. Un Código es de aquellos organismos legales que por su propia índole no pueden estar sometidos a modificaciones frecuentes.

Por estos motivos, brevemente expuestos, las Comisiones han pensado que el tiempo que se empleara consagrándolo a nuevos estudios sobre las materias que el Código Penal comporta, no era inútilmente transcurrido; que traer, para la sanción de dicha ley, nuevos elementos de trabajo, en el deseo patriótico del acierto, tenía a dar al país una ley, más completa, que sirviera con mayor seguridad, con mayor ilustración, a la consecución de sus fines; y que todo esto compensaría favorablemente el retardo en la sanción definitiva del Código Penal.

El examen que el H. Senado haga de las enmiendas propuestas, el nuevo estudio que merezca de los hombres de ciencia de la magistratura y del foro, y el que le consagrará la H. Cámara de Diputados al llegarle en segunda revisión, asegurarán al país un Código más adelantado que el vigente.

El Proyecto de Código Penal sancionado por la H. Cámara de Diputados ha llegado al H. Senado acompañado de antecedentes valiosísimos.

Las Comisiones no creen necesario hacer una exposición de esos antecedentes que, en parte, se encuentran publicados en el volumen, por todo extremo interesante, que ha dado a luz la Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria de la H. Cámara de Diputados, y que contiene el resultado de la encuesta promovida por ella, con respecto al proyecto de Código Penal que tenía a su estudio.

En la primera parte del extenso e ilustrado informe que dicha comisión presentó a la H. Cámara de Diputados fundando el Proyecto de Código Penal, cuya sanción aconsejaba, se enumeran los antecedentes legislativos, leyes de carácter penal de la Nación, con el juicio sintético sobre su valor doctrinario y práctico, proyectos argentinos de Código en materia Penal y obras nacionales sobre esta rama de las ciencias jurídicas, que la Comisión había tenido por delante para redactar el proyecto que sometía a la consideración de la Cámara.

“El proyecto sometido al estudio de la Comisión”—decía en dicho informe—“es el que presentó el doctor Rodolfo Moreno (hijo), o sea el de 1906, con las modificaciones que le introdujo dicho legislador, teniendo en cuenta las leyes dictadas posteriormente”.

El doctor Moreno, una vez que hubo presentado a la Cámara de que formaba parte el Proyecto de Código Penal, promovió una encuesta requiriendo opinión sobre el mismo a los profesores de Derecho Penal de las Universidades Nacionales, y a los jueces, fiscales y defensores de toda la república, encargados de aplicar o pedir la aplicación del Código represivo en sus diversas funciones. Esta encuesta fué ampliada después por la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados, dando lugar a un conjunto de elementos y antecedentes que sintetizan la opinión científica

del país, bajo el punto de vista de la teoría y bajo el aspecto práctico.

Con esos antecedentes, la Comisión Especial estudio el Proyecto de Código Penal de 1906,—tan abundantemente adicionado por el doctor Moreno; y habiendo consultado diversos Códigos, proyectos y autores extranjeros, desde que era necesario recibir impresiones propias y extrañas para llegar a los más acertados—como se expresa la misma Comisión—llegó a formular el Proyecto de Código que presentó a la consideración de la Cámara de Diputados, y que fué aprobado por ella.

El proyecto de Código Penal que presentamos al H. Senado es el sancionado por la H. Cámara de Diputados, con las reformas de que nos ocuparemos en seguida.

Dicho proyecto, reconoce como base los siguientes conceptos fundamentales:

1.º — Unificación de la legislación represiva de la Nación, dando así el carácter de realidad viviente a la disposición constitucional según la cual corresponde al Congreso dictar el Código Penal para toda la república, sin que tal Código altere la competencia judicial, pues corresponde su aplicación a los Tribunales Federales o Provinciales, según que los hechos caigan bajo una u otra jurisdicción.

Por este motivo han quedado absorvidas y armonizadas en el Proyecto de Código, y derogadas, por tanto, como leyes especiales, las siguientes: números: 49, 1920, 4189, 7029, 9077, 9143.

2.º — Mantenimiento de la pena de muerte.

3.º — Reducción de tres penas privativas de la libertad, relegación, reclusión y prisión, el sistema múltiple de penas privativas y restrictivas de la libertad vigente por nuestra legislación penal y que son las siguientes: presidio, penitenciaria, prisión, arresto, deportación, destierro—artículo 7 ley núm. 4189,— trabajos forzados, ley núm. 49.

4.º — Individualización de la pena, buscada a base de las siguientes conclusiones:

- Eliminación de la enumeración casuista de las circunstancias atenuantes y agravantes, dejando al Juez amplitud de criterio para apreciar el hecho y examinar al sujeto, de acuerdo con las normas contenidas en el artículo... del proyecto;
- Eliminación de la regla según la cual la pena normal del delito se encuentra en el término medio entre el maximum y minimum de la pena divisible.
- Determinación de la pena dentro de un minimum suficientemente amplio, para que el Juez la rige con un criterio de justicia y de utilidad social.
- Determinación en la ley del régimen de las penas, fijando sus elementos esenciales, tendientes a la enmienda, a la reforma moral, al adelanto intelectual o a la intimidación de los penados, para procurar de ese modo habilitarles para la lucha de la vida en libertad.
- Determinación de penas paralelas, cuando la índole del delito lo autorice.

5.º — Creación de un régimen represivo especial para las mujeres y menores de edad.

6.º — Condena condicional y libertad provisoria, por resolución judicial.

7.º — Represión especial de la reincidencia.

8.º — Morigeración de la actual penalidad, y proporcionalidad en los castigos.

A través de estas conclusiones se ha desenvuelto el trabajo de revisión del proyecto sancionado por la

H. Cámara de Diputados, y que tiene su exteriorización en las reformas que proponemos y de que pasamos a ocuparnos

LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales

TITULO I

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

Art. 1.º Este Código se aplicará:

1.º — Por los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, en sus buques de guerra, en los mercantes que lleven su bandera cuando naveguen en alta mar o se encuentren en aguas jurisdiccionales de un Estado que no los reprímiese, o en los buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en sus aguas jurisdiccionales.

I

1.º — Pensamos que lo que está regido por el derecho de gentes no debe ser objeto de las leyes internas de un país. Si lo que éstas disponen se encuentra ya arreglado por aquél, esas leyes son superfluas; si contrarían el derecho de gentes, no son aceptables; si omiten casos previstos por la ley de las naciones, la omisión no importa substraer esos casos al imperio de dicha ley. De acuerdo con estos conceptos, encontraríamos inoficioso el inc. 1.º del art. 1.º del proyecto, y como tal creemos que debería suprimirse.

2.º — La ley penal es territorial, y por excepción se reprimen ciertos delitos cometidos en territorio extranjero. Entiéndese por territorio de un Estado no sólo el espacio encerrado por sus límites geográficos, sino también aquellos puntos en que, en virtud de la ficción de la extraterritorialidad, la soberanía del Estado ejerce su dominio, su autoridad, su jurisdicción.

3.º — ¿Qué ley se aplica cuando se comete un delito a bordo de un buque de guerra?

Es obvio que cuando se comete en alta mar, el delito está sometido a la jurisdicción del Estado al cual pertenece el buque. Cuando el delito se consuma hallándose el buque de guerra en las aguas jurisdiccionales de una nación extranjera, el delito queda sujeto a la jurisdicción del Estado al cual pertenece la nave, por cuanto ella representa su soberanía y se halla libre de la jurisdicción civil y criminal del país en cuyas aguas se encuentra.

4.º — Cuando el delito se ha cometido a bordo de un buque mercante en alta mar, no hay tampoco ninguna dificultad, por cuanto, considerándose el barco como una parte del territorio nacional, el delito cae bajo la jurisdicción de la nación cuya bandera lleva el buque.

Ese principio no cesa de tener efecto completamente, por el hecho de penetrar el buque mercante en las aguas territoriales de una nación extranjera.

Un buque mercante puede ser considerado en su individualidad, tomado aisladamente y con abstracción de todo lo que le rodea, o bien, puede considerársele en sus relaciones exteriores con las personas y las cosas que se encuentran en las aguas territoriales.

Bajo el primer aspecto, queda siempre sometido a la soberanía nacional, que, por sus leyes, rige las personas que están embarcadas, regla los actos practica-

dos a bordo, provee y mantiene su disciplina, del mismo modo que reprime los delitos cometidos a bordo.

Bajo el segundo punto de vista, al contrario, el buque se encuentra sometido a la soberanía territorial que rige por sus leyes todas las relaciones exteriores del buque.

En consecuencia, y bajo el primer aspecto, el derecho del soberano territorial no puede extenderse hasta el punto de atribuirse la facultad de inmiscuirse en los asuntos interiores del buque, excepto en los casos de necesidad absoluta, en el interés de la seguridad y de la tranquilidad del puerto. (Flora No. 8 al 12 y notas de dichos números).

Calvo es más terminante que Flore: “La jurisprudencia marítima francesa”, dice—“distingue los casos de pura disciplina interior de los buques, y aun los crímenes y delitos que se cometen entre los tripulantes, cuando no se altera la tranquilidad del puerto, de los que se cometen aunque sea a bordo, por personas extrañas a la tripulación o contra éstas y los tripulantes mismos, siempre que por tal causa se comprometa aquella. Los hechos correspondientes a la primera clase están absolutamente exceptuados de la competencia de la jurisdicción local. Esta no puede intervenir en tales casos, a menos que no se reclame su auxilio o protección. En cuanto a los segundos la legislación francesa reconoce que su conocimiento se debe de derecho a las autoridades del país; que la jurisdicción local es soberana en todo lo que concierne a los intereses públicos del Estado y que, por tanto, los crímenes que cometen los tripulantes de un buque extranjero contra personas extrañas a la tripulación o alterando la tranquilidad pública del puerto, serán justiciables ante las autoridades de la localidad. (Pág. 198, Tomo I.).

5.º — El inciso primero que analizamos expresa que el Código Penal se aplicará a los delitos cometidos a bordo de buques mercantes con bandera argentina, cuando se encuentren en aguas jurisdiccionales de un estado y no los reprímiese.”

¿En qué casos puede y debe reprimirse ese estado? El derecho de gentes lo determina.”

“Cuando ese estado no puede castigarlos, según el derecho de gentes ¿quedaría impune el delito, si no existiera el inciso 5.º que estudiamos? De ninguna manera, desde el momento que nuestro país no puede ni debe substraerse a los principios del derecho internacional: la nación reprimirá el delito, según dicho derecho, cuya eficacia no deriva de la existencia de leyes internas que así lo declaren.

Corresponde, pues, suprimir la parte del inciso que hemos rápidamente analizado.

6.º — Si la Nación reprime los delitos cometidos a bordo de las naves argentinas en aguas territoriales de un Estado extranjero, debería reconocer un derecho análogo a las naciones extranjeras cuando, a bordo de sus buques, en aguas argentinas, se comete un delito. Sin embargo, la parte final del inciso prescribe lo contrario.

No obstante, aun cuando así lo establezca, lo cierto es que la Nación no reprimirá ese delito sino en los casos autorizados por el derecho de gentes.

7.º — Finalmente, el inciso, conviene una enumeración incompleta.

¿En qué casos puede la Nación reprimir los delitos cometidos en las casas de los Ministros extranjeros acreditados ante nuestro Gobierno?

¿Cuándo castiga los delitos cometidos en las causas de nuestras legaciones en el extranjero?

¿Cuándo nuestros ejércitos ocupan un territorio extranjero enemigo, ¿quién juzga los delitos cometidos en ese territorio?

8.º — En razón de lo que expresa y omite, el inciso 1.º debería corregirse y dejarse limitado simplemente a lo siguiente:

Art. 10.—Este Código se aplicará:

10.—A los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación.

II

90.—Dejaríamos el inciso 20 del art. 10. del proyecto tal como se halla redactado.

III

10.—Inciso 30. (art. 10.). "Por delitos de piratería, cuando los responsables cayeran bajo el poder de la Nación."

El delito de piratería está legislado en el proyecto: "hechos que constituyen ese delito y "penas." ¿Para qué lo legisa? Para imponer al reo la correspondiente pena. ¿Cuándo la impondrá? Cuando el reo caiga bajo el poder de la Nación, desde el momento que por nuestras leyes no se puede dictar sentencia condenatoria sino contra los culpables aprehendidos.

Tanta razón hay para establecer que se castigará la piratería cuando el delincuente sea detenido, como para prescribir que se castigará la traición, la falsificación de moneda nacional, etcétera, cometidos en el extranjero, cuando en esos casos el delincuente caiga bajo el poder de la Nación.

No siempre castigará la Nación el delito de piratería, aunque el responsable caiga bajo su poder.

La piratería da lugar a la extradición del delincuente aprehendido en la República. (Tratado de Extradición con Estados Unidos, art. 20. inc. 11).

Suprímase el inciso 30.

IV

11.—Inc. 4, Art. 10.).—"Por delitos cometidos en el extranjero por argentinos nativos, cuando fuesen aprehendidos por las autoridades nacionales y la extradición fuere denegada, o no fuese requerida dentro de los tres meses de la detención."

Se trata de delitos que no han sido consumados con el propósito de que produzcan efecto en la República, pues de eso se ocupa el inciso 10.

Respecto de los delitos cometidos en el extranjero, el ciudadano nativo se encuentra en una situación más desfavorable que el naturalizado y el extranjero. ¿Por qué esa diferencia?

Según el inciso, las autoridades nacionales pueden aprehender a un argentino nativo que ha cometido un delito en el extranjero, cualquier delito,—aun cuando no haya denuncia o querrela de parte,—y aun cuando no exista solicitud de extradición.

Cuando la hay, el ciudadano es entregado o no a la Nación requirente, según se determine en el tratado de extradición respectivo; cuando no hay tratado de extradición, se procede conforme a la ley de extradición a título de reciprocidad, Ley número 1612.

"Cuando no se solicita la extradición dentro de tres meses de la detención, el argentino nativo es juzgado en el país, — dice el inciso 30.

Si se ha solicitado la extradición de un extranjero,—según tratado,—y dentro de un plazo determinado no se formaliza la solicitud de extradición con todos los recaudos que prescribe el tratado, el requerido es puesto en libertad.

Al argentino se le somete a juicio si no se requiere su extradición. Resulta, pues, que al extranjero lo coloca el inciso en mejores condiciones que al argentino.

12.—Respecto a los delitos cometidos en el extranjero y que no son de los que tratan los incisos 10 y 20., tales como los aceptamos, hay que tener en cuenta: 10. los tratados de extradición, y 20., la ley nacional de extradición a título de reciprocidad. Ley número 1612.

Cuando haya tratados de extradición, el inciso 40., aunque quedara en el Código, no podría prevalecer sobre los tratados: estos son la ley suprema de la tierra.

Según el tratado de extradición con Bélgica, la extradición no se acuerda cuando el requerido es ciudadano nativo o por naturalización, y en todo caso, cuando el delito cometido tiene pena menor de un año de prisión.

Si no se acuerda la extradición, al requerido se le pone en libertad; o bien cuando la extradición se deniega por ser nacional el requerido, se le somete a juicio en el país, si el delito imputado autoriza la extradición. Art. 30., inc. 10. Art. 20. y 40. Tratados con Holanda e Italia y España, análogos al con Bélgica.

Tratados con los Estados Unidos. — Se acuerda la extradición por los delitos previstos en el artículo 20. y siempre que la pena sea superior a un año de prisión. La nacionalidad del reo no podrá impedir su extradición.

Tratado con Inglaterra. — Sólo se acuerda la extradición en virtud de los delitos que enumera y cada Estado se reserva el derecho de acordar o negar la extradición de sus propios ciudadanos o súbditos.

Tratado con Perú, Montevideo, Paraguay, Uruguay. — La extradición no la impide la nacionalidad del reo; se acordará cuando se trate de delitos reprimidos con pena que no sea menor de dos años de prisión. Además hay delitos que no dan lugar a extradición.

De lo anteriormente relacionado resulta que hay delitos que, cometidos en el extranjero, por extranjeros, no dan lugar a extradición; y que en esos casos, el extranjero detenido sería puesto en libertad.

A estar a la generalidad de los términos del inciso 40., el argentino en igualdad de condiciones, sería juzgado en el país lo que sería realmente injusto.

13.—Cuando no hay tratado de extradición la entrega de los delinquentes puede acordarse conforme a la ley número 1612. Según dicha ley no se acordará la extradición cuando se trate de un delito castigado en la República con pena que no alcance a un año de prisión. En este caso el requerido si es extranjero, queda libre en la República, y no hay motivo para suponer que el nacional, en el mismo caso no haya de quedarlo igualmente. Por dicha ley citada—Art. 30., inc. 10.—no se acordará la extradición de los ciudadanos argentinos, naturalizados o nativos; pero en los casos en que, con arreglo a dicha ley, no proceda la entrega del delincuente reclamado, deberá ser juzgado por los tribunales del país aplicándosele la pena establecida por la ley a los delitos cometidos en el territorio nacional.

14.—Suprimiríamos, pues, el inciso 40. del proyecto creyendo que, a los fines de la represión de los delitos cometidos en el extranjero cuando el autor es aprehendido por autoridades nacionales, bastan los tratados de extradición y la ley 1612.

V

15.—Art. 30. Las disposiciones generales del presente Código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario.

Lo subrayado es un agregado que se explica por sí solo.

TITULO II

DE LAS PENAS

I

16.—El artículo 50. del proyecto venido en revisión expresa que las penas que el Código establece, son las de reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Las comisiones de códigos y de justicia militar, con la disidencia del señor Senador del Valle Iberlucea, os aconsejan el mantenimiento de la pena de muerte, suprimida en el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

Las comisiones, siguiendo en esta materia el proyecto de código penal de 1906, dejan subsistente la pena de muerte para los casos de homicidios calificados, que actualmente se castigan con dicha pena; y la mantiene también para reprimir el delito de traición como lo hace la ley nacional número 49 sobre crímenes contra la Nación.

El proyecto establece que se impondrá la pena de muerte o la de relegación perpetua, en los casos indicados, de modo que esa opción que se deja a los jueces, aparte de los requisitos que se prescriben para poder aplicarla, "conducirá seguramente a restringir la aplicación de dicha pena, y reservarla sólo para algunos crímenes verdaderamente atroces".

17. — En rigor consideramos que además de las penas enumeradas en el artículo 50. del proyecto en revisión hay la pena de "deportación" que debe cumplirse en un paraje de los territorios del Sud, en un lugar determinado del Territorio Nacional. Es cierto que el informe de la Comisión que presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de Código que ella sancionó, expresa que la "deportación o relegación" en Ushuaia es simplemente la "reclusión"; pero en esencia, en el fondo de las cosas, esa "reclusión" en Ushuaia no es propiamente la reclusión que debe sufrirse en las Provincias, en establecimientos carcelarios distintos de aquellos destinados para la pena de prisión.

La "reclusión" de los "relegados" no es la misma que se impone a los reclusos no relegados. La "relegación", en particular, es la pena especial destinada a los "reincidentes" y a los que se consideran incorregibles. — Art. 51 y 52 del proyecto en revisión.

La relegación, — dice la Comisión en su informe, — "se podrá aplicar a juicio del magistrado", para el delincuente que considere incorregible y para el reincidente. Para el primero es una forma de la condena pronunciada; para el segundo es una penalidad accesoria. — El régimen a que deben sujetarse los "relegados", se prescribirá en la ley sobre establecimientos carcelarios, lo mismo que el de la penalidad", páginas 39 y 40.

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo 50. del proyecto del Código, el artículo 70. del proyecto del régimen carcelario (1), dice:

"Artículo 70. — La relegación se cumplirá con trabajos obligatorios en una Colonia Agrícola que deberá fundarse en un paraje de los territorios del Sud. Hasta tanto sea fundada esa Colonia, los re-

(1) Proyecto de la ley de la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados. Orden del día No. 90 sesiones ordinarias del año 1917.

legados serán sometidos al régimen de la reclusión en el presidio de Ushuaia".

Según la exposición de motivos de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, — página 95, — "La relegación, que es la "deportación" del proyecto, de 1906 no es una nueva pena, puesto que equivale a la reclusión, pero en un paraje de los territorios del Sud. La "relegación" se impone a los reincidentes por segunda vez condenados a reclusión o prisión, estableciendo que cumplirán sus penas en un establecimiento situado en un territorio del Sud. Hoy no se cuenta para esos efectos sino con el presidio de Ushuaia. Para los demás reincidentes a que se refiere el artículo 52 del proyecto, la relegación es una "reclusión por tiempo indeterminado, que se impone como accesoria".

El reincidente es castigado con una pena más grave que la que se le impuso por el anterior delito. Si la relegación es simplemente la reclusión a cumplirse en un paraje de los territorios del Sud; si la relegación es simplemente la reclusión, resultaría que al reincidente no se le impone agravación de pena.

La relegación en Ushuaia es una pena más severa que la reclusión sufrida en el territorio de cualquier provincia. Si así no fuera, querría decir que la reincidencia no es reprimida como corresponde.

Luego, la relegación es una pena, la cual, según

el artículo 70., se cumplirá por el momento, en el presidio de Ushuaia.

II

18. — ¿Qué diferencia legal existe entre la "reclusión" y la "prisión"?

La diferencia está, — dice el informe, — "en la clase de trabajo y en la disciplina carcelaria. Los condenados a reclusión podrán ser empleados en toda clase de trabajos públicos, mientras que los condenados a prisión solo podrán ser empleados en labores dentro del establecimiento. Lo esencial es que los penados trabajen y que aquel se imponga de una manera obligatoria".

Si la diferencia legal que existe entre ambas penas es la indicada respecto de la clase de trabajo, tal diferencia desaparecerá en el hecho, es decir, en la aplicación, en el cumplimiento de la pena. Cuando no haya trabajos públicos, trabajos del Estado, la reclusión se confundirá con la prisión, y esto ocurrirá en la generalidad de los casos. La clase de trabajo, entonces, no da a cada pena su fisonomía propia, sus rasgos típicos de propia diferenciación.

Si en el proyecto mismo no se determina con precisión cuál es el carácter propio y peculiar de cada pena, cuál su índole especial, entenderíamos que no es posible determinar con seguridad a qué delitos debe imponerse una u otra pena. Aceptamos que la pena de reclusión es más severa que la de prisión; admitimos que la primera se destina a reprimir los delitos más graves, a aquellos que revelen en el agente la perversidad, la inmoralidad, la depravación de ánimo; pero eso no resulta de los elementos que el legislador ha fijado para dar a cada pena su ser individual, su entidad represiva peculiar.

El informe de la comisión expresa; "que es indispensable reglamentar, por medio de una ley especial complementaria del Código Penal, el cumplimiento de las penas, porque no hay objeto en incorporar esos preceptos en el Código, en razón de que la penalidad y el sistema para el cumpli-

miento de las mismas son cosas diferentes". El Código—dice el informe—"prevé los delitos y fija las represiones, debiendo ser aplicado por los jueces. El régimen penal depende de la autoridad administrativa. Es indudable, sin embargo, que los fines perseguidos al imponer penas para los delitos, pierde en eficacia si el régimen carcelario no se aplica de acuerdo con los propósitos que se tuvieron en vista al fijar las represiones. Por eso conviene establecerlo en una ley especial."

La Comisión,—dice la "Exposición de motivos" del proyecto de 1906,—"debe hacer constar que deliberadamente no ha querido establecer para el presidio y la prisión más reglas que los trabajos forzados para el primero y el trabajo obligatorio y la reclusión celular, para la segunda, porque entiende que es de positivas conveniencias, que salvo aquellas reglas fundamentales, la organización y régimen de las presidios y prisiones, sean obra de leyes y reglamentos especiales". Págs. 33 y 34.

19. — El doctor Herrera piensa que es un error sostener que el sistema represivo debe dejarse para que lo establezca una ley especial: opina que es al Código al que le corresponde adoptar cualquiera de los sistemas represivos conocidos o crear uno nuevo.

"Puede el Código,—dice el doctor Herrera,—establecer una pena sin decir en qué consiste, cuáles son sus caracteres esenciales? ¿Es que se puede infligir una pena de la cual sólo se conoce el nombre y cuya gravedad intrínseca o en relación a las demás queda ignorada? No es posible confundir lo que se refiere a la esencia de la pena con las demás circunstancias que tienen relación con la ejecución de éstas, como el lugar del cumplimiento, la manera como se ha de realizar el trabajo, la división en clases. La primera es de resorte exclusivo del Código, la segunda puede ser reservada para una ley especial". Página 38, La Reforma Penal.

Por nuestra parte, adherimos en un todo a los juicios formulados por el doctor Herrera.

Pensamos que es al Código al que le incumbe fijar el sistema represivo, determinando netamente sus bases fundamentales, bien claras, bien distintas con caracteres bien salientes y estables de diferenciación para cada pena de manera que se conozca desde luego la fisonomía permanente y peculiar de cada una de ellas.

Dos motivos principales tenemos para pensar de esta manera. Ante todo es necesario que el Código fije de un modo inconfundible el sistema de pena, su gravedad intrínseca y relativa para tener la norma previa según la cual se ha de graduar el castigo correspondiente a cada delito, según la índole propia de la infracción. Si no se tiene esa norma no habrá una regla segura para graduar el castigo. Si no se determina desde luego en qué consiste "la reclusión", no existe propiamente el criterio para imponer 10 a 15 años de dicha pena, 15 a 20, 15 a 25, porque el tiempo de la duración del castigo no basta para determinar su gravedad.

Cuando decimos que al Código incumbe organizar el sistema, el régimen fundamental, la naturaleza propia de cada pena no entendemos que deba penetrar al detalle de ejecución; esto tiene que quedar librado a leyes especiales.

Hay, además, otro motivo de forma, pero que puede llegar a afectar la sustancia.

Si se deja para una ley especial la determinación del sistema, del régimen de las penas, puede ocu-

rrir que sancionado el Código, se demore, o no se sancione aquella ley.

¿Y entonces qué ocurrirá?

La anarquía, el arbitrio en cuanto a la ejecución de las penas, todo lo cual repugna al concepto constitucional relativo a la uniformidad de las penas y a su cumplimiento en la República.

En el único caso en que nosotros admitiríamos que una ley especial fijara el régimen, el sistema de penas sería éste: que dicha ley fuese norma y guía. Teniendo esa ley previa, el legislador podrá a conciencia aplicarla asignando a cada delito su castigo, según su naturaleza y gravedad.

III

20.—La Cámara de Diputados, siguiendo las inspiraciones de su comisión especial de legislación penal y carcelaria, ha dispuesto que una ley especial, complementaria del Código Penal, reglamente el cumplimiento de las penas, determinando su régimen y su sistema de ejecución.

Hemos ya dicho que las bases esenciales, el régimen fundamental de cada pena determina propiamente la pena; que sin ello, no hay pena en rigor, es decir, el sistema racional represivo tendiente a la reforma, a la enmienda o a la intimidación del delincuente; y que, entonces no hay castigo cierto que corresponda aplicar a cada delito; habrá la denominación de una pena, de un mal a imponer, se, pero sin saberse en realidad en qué consiste.

En las sesiones del año pasado, la comisión especial de legislación penal y carcelaria de la Cámara de Diputados, presentó el proyecto de Código Penal que sancionó aquella Honorable Cámara y despachó también un proyecto sobre régimen carcelario, el cual no fué considerado en las sesiones de aquel año. Ese despacho contiene el proyecto de ley complementaria del Código Penal, en lo relativo al régimen de las penas enumeradas en el código.

El proyecto de ley complementaria, contiene el pensamiento de la comisión redactora del Código Penal, en cuanto al régimen, la naturaleza, la entidad propia y característica de cada castigo, que le da su ser individual e inconfundible.

21.—Examinemos las penas enumeradas por el Código Penal a la luz de ese proyecto de ley complementaria del Código:

Reclusión.—Hemos dicho que el Código Penal sancionado por la Honorable Cámara de Diputados no especifica desde un punto de vista fundamental, claro y preciso, en qué consiste la reclusión. Entendemos que el proyecto de ley sobre el régimen carcelario debe llenar ese vacío, que nosotros consideramos tal.

Examinemos dicho proyecto:

La "reclusión" es una pena privativa de la libertad aplicable a "varones mayores de edad, a mujeres y a varones menores de edad", por cuanto cualquiera de esas personas pueden cometer delitos reprimidos con "reclusión".

El proyecto de Código Penal sancionado por la Cámara de Diputados, establece en su artículo 80, que "los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas que les correspondan en establecimientos especiales".

Luego, procede que existan establecimientos de "reclusión" para varones mayores de edad, para mujeres y adultos.

¿Cuál es el régimen fundamental del castigo, que

debe imponerse en cada uno de dichos establecimientos?

Respecto de la reclusión el proyecto del Código Penal sólo nos ha dicho que esa pena se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto; que los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase, con tal que no fuesen contratadas con particulares; que esa pena puede ser perpetua o temporal; que la temporal puede durar desde un mes hasta 25 años, siendo bajo este aspecto igual a la pena de prisión.

Artículo 210 del proyecto:

Veamos cómo caracteriza la pena de "reclusión" el proyecto sobre régimen carcelario.

El título I de dicho proyecto tiene el siguiente rubro: "Régimen de la penalidad". ¿Cuál es el régimen de la penalidad relativo a la reclusión, para los condenados mayores de edad?

Entendemos que el establecido en el artículo 20, que dice: "los condenados a la pena de reclusión por los tribunales nacionales y por los del fuero ordinario de la Capital Federal, así como los que, por razones de la misma pena, y de acuerdo con el artículo 10, (suponemos que es el 18 del Código Penal) fueran enviados por las provincias, cumplirán su condena en el presidio nacional de Ushuaia y en los establecimientos que, para la exclusiva ejecución de tal pena, se fundaren fuera de los centros urbanos".

El artículo 80, del proyecto de que nos ocupamos, dispone que se dictará un reglamento para cada uno de los establecimientos penales, el cual deberá sujetarse a los siguientes principios:

- En cuanto al trabajo: que sea útil, concordante con las exigencias de orden económico del medio social, compatible con las condiciones personales de los penados, con la clase de pena que cumplieren; que aseguren la formación de un peculio para los condenados, y que la jornada diaria no exceda de nueve horas.
- En cuanto a la instrucción: que tenga un carácter eminentemente práctico, utilitario y moral. El P. E. establecerá los planes correspondientes.
- En cuanto a la disciplina: que asegure de la manera más rigurosa el cumplimiento estricto de las disposiciones reglamentarias, mediante un sistema combinado de castigos y recompensas y tratando de que estas últimas importen un estímulo, para los penados de buena conducta.

Y esto es todo lo que contiene el proyecto de ley complementario del Código Penal, en cuanto a la pena de reclusión, a su naturaleza, a su régimen, a la manera en que debe sufrirse, al sistema de corrección de reforma, de intimidación que en sí encierra para procurar que el condenado, que con el delito se reveló un elemento inapto para la convivencia social, vuelva al seno de la sociedad en las mejores condiciones posibles de adaptación a su medio.

¿Basta con lo dispuesto en los artículos 2, 8 y 9 del proyecto de ley de régimen carcelario, para dar a la pena de reclusión para varones mayores, su verdadero carácter represivo? Creemos firmemente que no.

Nosotros no pretendemos que el Código Penal regle las penas en sus bases fundamentales y en sus detalles de ejecución; pero si pensamos que el Có-

digo debe contener los conceptos básicos de cada castigo, así como lo hacen los Códigos de Italia, Alemania, Holanda, etc.

Código Italiano. — Artículo 11. — Las penas establecidas para los delitos son: 1.º el "ergastolo", 2.º la reclusión, 3.º la detención, etc., etc. Artículo 12. La pena de "ergastolo" es perpetua. Se cumple en un establecimiento especial en el cual el condenado permanece los primeros siete años en reclusión celular continua, con la obligación del trabajo. En los años siguientes se le admite al trabajo en común con los demás condenados, bajo el régimen del silencio.

Artículo 13. — La pena de reclusión se sufre en los establecimientos destinados al efecto, con la obligación del trabajo. Dura desde 3 días a 24 años. Si no excede de seis meses, se cumple por entero en reclusión celular. Cuando no excede de seis meses se sufre con reclusión celular continua por un período igual a la sexta parte de la duración de la pena, no inferior a seis meses ni mayor a tres años; el resto de la pena se sufre con reclusión celular nocturna y silencio durante el día.

Artículo 15. — La detención, de tres días a 24 años, se sufre en establecimientos destinados al efecto con obligación del trabajo y reclusión celular nocturna.

Código de Holanda. — Artículo 9.º — Penas principales, prisión, detención...

Artículo 10. — La prisión es perpetua o temporal de seis días a quince años.

Artículo 11. — La pena de prisión de cinco años o menos, se sufre íntegramente bajo el régimen de la separación; la de mayor duración solamente durante los primeros cinco años...

Artículos 14 y 22. — Reglan el trabajo obligatorio, clasificación de los condenados, etc., etc.

Detención. — Artículo 1.º — No es menor de un día ni mayor de un año.

Si como lo hemos dicho, ni el Código, ni la ley complementaria sobre el régimen carcelario, organizan un sistema, un régimen determinado de represión con respecto a la pena llamada de reclusión; si esa determinación no se consigue ni con el artículo 6 del Cód. Penal, ni con los artículos 2, 8 y 9 del proyecto de ley sobre el régimen carcelario, procede que se llegue a determinar dicha pena en la mejor forma posible.

Decir que la reclusión se cumplirá en el presidio de Ushuaia y en los demás establecimientos que al efecto se funden, fuera de los centros urbanos, es decir muy poco con carácter fundamental, o es decir algo contradictorio, porque la reclusión no es presidio, ni relegación, y el presidio de Ushuaia se ha fundado para hacer efectiva la pena de los reincidentes relegados.

IV

22. — Reclusión y prisión aplicada a los adultos. — Según el artículo 8 del proyecto de Código Penal "los menores de edad sufrirán las condenas que les correspondan en establecimientos especiales". A ese punto se refiere el artículo 4.º del proyecto de ley sobre régimen carcelario, el cual establece lo siguiente:

"Los establecimientos penales en que hayan de cumplirse, por adultos, las penas de reclusión y prisión, deberán responder a la necesidad de que los condenados sean sometidos al régimen celular durante las horas no destinadas al trabajo, a la instrucción y al recreo higiénico indispensable".

De este artículo resulta equiparada la reclusión con la prisión. Si no es así, habría correspondido determinar claramente en qué se diferencia una y otra pena.

Suponemos que el artículo 6 del proyecto sobre régimen carcelario, se refiere a las penas de reclusión.

sión y prisión "aplicables a menores adultos varones" que son los únicos menores varones que pueden ser penados. El artículo 6 dice: "Los establecimientos penales destinados a menores varones tendrán, en cuanto sea posible, el carácter de colonias agrícolas. Los que existen actualmente si no tuviesen ese carácter y no fuere posible dársele, se organizarán como escuelas de artes y oficios".

Este artículo 6 se combina con el artículo 4. ¿Quieren ellos decir que los establecimientos penales destinados a varones adultos delincuentes, deben ser colonias agrícolas o escuelas de artes y oficios, en los cuales se cumplirá la pena, sometiendo a los penados a un régimen completamente uniforme, que hace desaparecer la distinción de las penas de reclusión y prisión; régimen que se cumple imponiendo la reclusión celular durante las horas no destinadas al trabajo, a la instrucción y al recreo higiénico indispensable?

Habría que precisar bien el concepto que envuelve el artículo 8.º del Cód. Penal cuando dice: "Los menores de edad... sufrirán las condenas que les corresponden en establecimientos especiales".

En realidad, la pena que se prescribe no consiste propiamente en el nombre de la pena, sino en el régimen que se observe, en el sistema represivo, en la clase de privaciones, en el mal que se impone.

Si los adultos delincuentes van a ser castigados en colonias agrícolas o en escuelas de artes y oficios, lo que es absolutamente laudable, — sometiéndolos a disciplinas severas, — ese sistema de pena no es la reclusión ni la prisión aplicada a los varones mayores de edad; es una pena diferente por su naturaleza, por su modalidad, por su régimen. Corresponde determinarlo así de una manera clara de modo que se conozca que el sistema represivo aplicable a los adultos, no es propiamente la reclusión y la prisión que corresponde a los delincuentes, mayores de edad.

23.—"Régimen penal aplicable a las mujeres delincuentes".

El artículo 8 del proyecto de Código Penal dispone que "las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales".

Es indudable que a las mujeres no se les debe imponer el mismo régimen de penalidad aplicable a los varones delincuentes mayores de edad.

El proyecto sobre régimen carcelario contiene el siguiente artículo sobre la pena aplicable a las mujeres:

Artículo 50. — "En los establecimientos carcelarios de mujeres las menores de 18 años serán rigurosamente separadas del resto de la población penal. En los mismos establecimientos se destinará una sección especial para las mujeres que tuvieran hijos en estado de lactancia".

El artículo 8 del proyecto sobre régimen carcelario del diputado doctor Alberto Arancibia Rodríguez.

El proyecto no crea un castigo especial para las mujeres, pero, en realidad, aun cuando la reclusión del delito cometido por ellas, sea la reclusión o la prisión, dicha pena se cumple en forma diferente de la establecida para los varones mayores de edad.

A las mujeres delincuentes, claro está, se les someterá al régimen del trabajo obligatorio y estarán sometidas a los reglamentos dictados por el gobierno de los establecimientos en que cumplen su castigo.

24. — "Prisión".—El proyecto sobre régimen carcelario dice:

"Artículo 30. — La pena de prisión se cumplirá

en la actual Penitenciaría Nacional de Buenos Aires o en los establecimientos que se construyan o habiliten con carácter de reformatorios dentro o fuera de los centros urbanos. Cuando la pena no exceda de treinta días de prisión podrá cumplirse en los Departamentos de Policía o en los Depósitos de Contraventores".

La pena de prisión es para todos los delincuentes de la República que cometan delitos reprimidos con dicho castigo. Disponer que la pena de prisión se cumplirá en la Penitenciaría de la Capital Federal no significa determinar el régimen de dicha pena. Tiene más significado la expresión de que la pena de prisión se cumplirá en los establecimientos que se construyan o habiliten con carácter reformatorio. Sin embargo, la pena de prisión, en su esencia, para todos los casos, no es una pena determinadamente "reformadora" al reo político, al adúltero, al bigamo, al duelista, al autor de injurias o de columnias, al autor de heridas que ha sido provocado, etc., castigados con prisión, no se les somete propiamente a un sistema reformador.

Luego la prisión tiene un doble carácter; es reformatoria en unos casos y en otros de intimidación solamente.

V

25.—La parte esencial de un Código Penal, la que está destinada a hacer que esa ley se encamine a llenar su fin, es el régimen, el sistema de penas que consagra la manera de ponerlas en ejecución. Para que una buena clasificación de delitos y su razonable graduación de penas pueda surtir efectos individuales y sociales, se requiere que el sistema de penas adoptado y a la manera de cumplirlas, conduzca atinadamente a este fin necesario; rehabilitar al delincuente por la corrección y la reforma, entregar a la sociedad después de la pena sufrida un elemento útil, o que no la dañe nuevamente, aun cuando no sea sino por la intimidación producida por el castigo. Es cierto que esto no se conseguirá en algunos casos, porque hay elementos constitucionalmente rebeldes a la intimidación o a las disciplinas reformadoras; pero de ello no se sigue que la ley penal pueda descuidar esos objetivos. Una ley penal puede contener las más sabias clasificaciones referentes a los delitos, a los hechos y omisiones que debe reprimir; pero esa labor será infecunda si el sistema de castigo, si la manera de aplicarlos no conspira al fin de castigar, reformando, corrigiendo, intimidando, rehabilitando al delincuente.

Si el condenado, al cumplir su castigo, sale de la prisión lo mismo que entró, o con sus elementos morales más pervertidos, la pena, en lugar de ser una reparación en favor del orden social, se ha convertido en una iniquidad. Pena que corrompe es un atentado, es un crimen de la sociedad contra sí misma.

Estas breves indicaciones prueban la necesidad de organizar clara, netamente un sistema, un régimen, una ordenación acertada de penas. Sin ello la reforma penal no dará ningún resultado social: será vana palabra perdida en el vacío, ineficaces construcciones jurídicas.

Se dirá que la Nación, que las provincias, no tienen los establecimientos adecuados para dar cumplimiento a los castigos: ello es cierto; pero fijemos las normas desde luego, y después trabajemos para que se cumpla la buena ley, la ley salvadora, la ley reformadora, la destinada a purificar y no a manchar; los establecimientos penales ya vendrán. ¿Cuáles serán? ¿Cómo deberán ser?

Eso es lo que debe decir claramente la ley, determinando netamente en qué consiste la pena, cómo debe

cumplirse, bajo qué régimen, fijando las reglas fundamentales de ejecución.

Nada tenemos en el presente: y sin aquellas normas, ¿qué podemos esperar mañana?

Fijemos desde luego las bases: empecemos a construir y perseveremos para que en el porvenir se realice la obra del bien: hacer lo menos sensible que se pueda para el cuerpo social de la dolencia perpetua del delito.

VI

26.—La ley de reformas número 4189 (Título II Sec. II del Cód. Penal) suprimió la designación de tiempo fijado a cada pena temporal por el Cód. vigente a la época de la promulgación de aquella ley.

El proyecto de que nos ocupamos enumera las penas y no establece su duración máxima y mínima. "La ley, dice el doctor Moreno en su obra, — "La ley Penal Argentina", al enumerar las penas no debe tener en cuenta más que la calidad, reservando el tratar la cantidad para cuando deben distribuirse entre los diversos delitos" pág. 91.

Fijan el máximo y mínimo de las penas temporales en la parte general entre otros Códigos, los siguientes: Italiano, artículos 12, 15 y 18; Holandés, artículos 11 y 18; Alemán, párrafos 14, 16 y 18.

27.—Fundamentos de orden jurídico y de orden práctico aconsejan que en la "parte general" del Código se fije el máximo y el mínimo de las penas temporales.

El legislador, al designar cada pena temporal, como uno de sus elementos esenciales tiene que establecer su duración mínima y máxima. El legislador, que contempla todos los delitos tiene que llegar a esta conclusión: resolver que la duración mayor que debe atribuirse a tal pena o su menor duración, es de tantos años; una duración mayor daría a la pena un carácter de severidad que la haría inhumana, y por tanto, inadecuado a los objetos esenciales del castigo; una pena menor no llenaría sus fines.

La determinación del máximo y el mínimo, escrito entre las disposiciones generales del Código, da la pauta para prescribir a cada delito su castigo. Los delitos más graves llevarán el máximo, ese máximo que en las penas temporales no deben excederse: los más leves llevarán el mínimo.

Los otros delitos tendrán su pena proporcional, según su gravedad relativa, establecida dentro de los extremos fijados como norma.

El legislador, al prescribir la pena aplicable a cada delito, lo hace teniendo ya un previo concepto preciso sobre la duración mayor o menor de la pena.

Y ese concepto fundamental, que es una de las características de la pena, debe figurar en el libro primero como una noción orgánica de la pena.

Por otra parte, hay un motivo de orden práctico, diré, así, para prescribir en el libro primero la duración de cada pena temporal.

Sin la enunciación del máximo y del mínimo en la parte general del Código, hay que leer cuidadosamente todo el libro segundo para saber, al fin, cuál es el máximo y el mínimo de cada pena.

28.—La pena de relegación es la más grave de las penas privativas de la libertad. Como se imponen a los reincidentes y a los considerados incorregibles, dicha pena no es inferior a dos años, desde que, según artículo del proyecto, el mínimo de la pena que debe imponerse al reincidente condenado por segunda vez no puede ser inferior a dos años de relegación.

La pena de reclusión es reformadora o de intimidación por lo cual, y en persecución de los fines que busca, corresponde que su mínimo no sea inferior a un año.

El código se ocupa de los delitos, propiamente tales, por cuanto las infracciones de policía y municipales, las faltas corresponden a la jurisdicción provincial. Hacer descender el límite de la represión de los delitos abajo de treinta días, es fijar una pena que debe reservarse para las faltas. Por eso establecemos que el mínimo de la prisión es de un mes.

29.—El proyecto de Código, en el Libro II establece el sistema de penas paralelas—"reclusión o prisión"—en casi todos los casos de delitos reprimidos en primer término con la pena de reclusión. Pensamos que a ese sistema, tendiente a la mayor individualización del castigo, se le ha dado una extensión excesiva.

El libro primero (disposiciones generales) no contiene ninguna prescripción referente a la facultad que se acuerda al juez para imponer, alternativamente, la pena de reclusión o de prisión. Pensamos que esa facultad de opción solo puede acordarse respecto de aquellos delitos que las circunstancias permitan admitir que el acto inculminado no es resultado de una intención perversa, como lo establece el Código Penal de Noruega; pero el paralelismo no es admisible en aquellos delitos que por definición o por su esencia acusan depravación del ánimo del agente, su degradante conducta.

En el libro segundo volveremos sobre este asunto. Por el momento, pensamos que el libro primero debería contener una disposición que prescribiera en qué circunstancias el Juez,—en los casos que el Código establece taxativamente,—puede aplicar una u otra pena.

De acuerdo con las ideas que acabamos de exponer, redactaríamos la parte pertinente del título segundo del Código en la siguiente forma:

TITULO II

DE LAS PENAS

ARTICULO

Las penas que este Código establece son las siguientes: muerte, relegación, reclusión y prisión perpetua, relegación, reclusión y prisión temporales, multa; inhabilitación perpetua o temporal.

Pena de muerte: los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Proyecto de Código Penal de 1906.

ARTICULO

La relegación temporal durará de uno a 25 años.

ARTICULO

La relegación se cumplirá con trabajo obligatorio en colonias que deberán fundarse en parajes de los territorios nacionales.

Los relegados serán sometidos al régimen determinado en el artículo.

ARTICULO

La pena de reclusión temporal durará de uno a 25 años.

ARTICULO

Los condenados a reclusión sufrirán su condena en los establecimientos que, para la exclusiva ejecución

de esta pena, se fundaran fuera de los centros urbanos.

ARTICULO

Los condenados a reclusión sufrirán las penas de acuerdo con las siguientes reglas:

1. — Si la pena no excede de cinco años, se impondrá al condenado la reclusión celular continua durante el primer año.

2o. — Si la pena excede de cinco años, se impondrá la reclusión celular continua desde uno hasta cuatro años.

3o. — No se impondrá el régimen celular diurno cuando resulte de examen médico que el recluso no es apto para sufrir dicho régimen.

4o. — La separación celular nocturna es obligatoria por todo el tiempo de la condena.

5o. — Los condenados serán sometidos al régimen del trabajo obligatorio. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratados por particulares.

6o. — La administración y disciplina en los establecimientos de reclusión, la división de los reclusos en clases, la instrucción, la práctica del culto, sobre la base de libertad de conciencia, los ejercicios higiénicos y de recreo, las visitas de las sociedades de patronato, etcétera, estarán sometidas a los reglamentos dictados por el P. E.

ARTICULO

La pena de prisión temporal durará de un mes a veinticinco años y se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos que se construyan o habiliten dentro o fuera de los centros urbanos.

ARTICULO

(El artículo 7o. del proyecto sancionado por la C. de Diputados).

ARTICULO

Cuando la prisión no excediere de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de 60 años o valedurnarias.

Cuando la pena no exceda de treinta días, podrá cumplirse en los Departamentos de Policía o en los Depósitos de Contraventores.

ARTICULO

Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas que les correspondan en establecimientos especiales.

ARTICULO

Los establecimientos penales en que hayan de cumplirse, por adultos, las penas de reclusión y prisión, deberán responder a la necesidad de que los condenados sean sometidos al régimen celular durante las horas no destinadas al trabajo, a la instrucción y al recreo higiénico indispensable.

ARTICULO

Los establecimientos penales destinados a menores varones tendrán el carácter de colonias agrícolas o de escuelas de artes y oficios.

ARTICULO

En los establecimientos penales de mujeres las menores de 18 años serán rigurosamente separadas del resto de la población penal.

ARTICULO

Cuando el Código acuerda al Juez la facultad de optar entre la pena de reclusión o prisión, podrá imponerse esta última si de las circunstancias del caso resulta que el agente ha procedido sin intención depravada.

LIBERTAD CONDICIONAL

ARTICULO 13 DEL PROYECTO

30. — El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena y el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena observando con regularidad los reglamentos carcelarios, obtendrán la libertad por resolución judicial bajo las siguientes condiciones:

1o. — Residir en el lugar que determine el auto de soltura.

2o. — Observar las reglas de inspección que le fije el mismo auto;

3o. — Adoptar, en el plazo que determine el auto de soltura, oficio, industria, arte o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;

4o. — No cometer nuevos delitos.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento del término de la pena.

Supongamos un delincuente condenado a "tres años de prisión". Según el artículo 13, no podrá obtener su libertad condicional; mientras tanto el delincuente condenado a "cuatro años de reclusión" podrá obtener la libertad condicional a los "dos años y ocho meses", que son los dos tercios de cuatro años. Esto no es justo.

31. — Es indudable que no corresponde acordar la libertad condicional sino después de que el condenado haya sufrido una parte de la pena, de tal manera que pueda razonablemente admitirse que el castigo ha obrado sobre su espíritu intimidándolo o corrigiéndolo y haciéndolo apto para la convivencia social: un minimum de sufrimiento de pena es indispensable. ¿Cuál sería ese minimum? El proyecto fija dos tercios de la pena, siempre que ésta sea mayor de tres años. Esa manera de proceder da lugar a la consecuencia ilógica que hemos indicado más arriba.

32. — Supongamos que un delincuente ha sido condenado a "reclusión por 20 años". Cuando haya cumplido trece años y cuatro meses puede obtener la libertad condicional, faltándole aún "seis años y ocho meses". En razón de la gravedad del delito quizá se acuerde muy pronto la libertad.

33. — Veamos como está legislada esta materia en algunos Códigos:

Italiano. — Artículo 16. — El condenado a reclusión o detención por más de tres años, que haya sufrido tres cuartos de la pena y no menos de tres años, cuando se trate de reclusión, o la mitad cuando se trate de detención, podrá obtener la libertad condicional, siempre que el remanente de la pena no exceda de tres años.

Código Alemán. — Párrafo 23. — Casa de Fuerza. Cárcel. Cuando el delincuente ha sufrido tres cuartos de la pena y no menos de un año.

Holandés. — Artículo 15. — Cuando ha sufrido tres

cuartos de la pena de prisión y no menos de tres años.

34. — El inciso 4.º del artículo 13, dice: "No cometer nuevos delitos". Este inciso no tiene objeto en presencia de lo dispuesto en el artículo 16.

35. — El último párrafo del artículo 13 establece que las condiciones bajo las cuales se acuerda la libertad condicional regirán hasta el vencimiento del término de la pena. Esto se aplica a las penas temporales; pero como también se puede conceder la liberación condicional después de 20 años, cuando se ha impuesto la reclusión o prisión perpetua, hay necesidad de determinar hasta cuando, en los casos de imposición de esas penas, regirán las condiciones bajo las cuales se ha obtenido la libertad condicional.

Pienso, por mi parte, que las condiciones deberán observarse por un período de cinco años, por ejemplo, desde que aquéllas no deben pesar indefinidamente sobre el que ha obtenido la libertad condicional.

36. — De acuerdo con las observaciones anteriores redactaríamos el artículo 13 en la siguiente forma:

ARTICULO

El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido más de 20 años de la pena, y el condenado a prisión o reclusión por más de tres años, que hubiera sufrido las tres cuartas partes de la condena, y no menos de tres años, siempre que el remanente de la pena no exceda de cinco años y que, además, hubiera observado los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional por resolución judicial, bajo las siguientes condiciones:

1o. — Residir en el lugar que determine el auto de soltura.

2o. — Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto.

3o. — Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos en las penas temporales, y en las perpetuas hasta cinco años más a contar desde el día de la libertad condicional.

ARTICULO 16

37. — Transcurrido el término de la condena sin que la libertad haya sido revocada (o plazo de cinco años de que trata el párrafo último del artículo 13), la pena quedará extinguida.

INHABILITACION

Artículos 12, 19 y 20 del Proyecto de Código.

38. — La inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial son penas principales o penas accesorias.

La inhabilitación absoluta es pena principal en los casos determinados en los artículos 273, 274 y 259.

Es pena accesoria en los casos que determina el Art. 12; entonces la inhabilitación produce sus efectos durante el tiempo de la condena y de uno a tres años más, según el caso y a juicio del tribunal.

Cuando la inhabilitación absoluta es pena principal resulta obvio que empieza a correr desde el día del fallo condenatorio irrevocable; pero cuando es pena accesoria, no cabe una resolución tan perentoria.

El artículo 12 establece que la reclusión y la prisión por más de tres años, importan la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, y de uno a tres años más, según el caso y a juicio del tribunal.

Disponer que el condenado a reclusión o prisión por

más de tres años incurra en inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, importa, por lo menos, una disposición redundante: se comprende que el recluso que el preso que ha perdido su empleo o cargo público que es inhabilitado para obtenerlo, que ha quedado privado del derecho electoral pueda, durante la condena abandonar el establecimiento penal para desempeñar un cargo público o para dar su voto en una elección popular.

Claro es, entonces, que durante la pena de reclusión o de prisión, el condenado, en las condiciones del artículo 12 queda absolutamente inhabilitado durante el tiempo de la condena.

Lo mismo puede decirse respecto de los condenados a pena de reclusión, o prisión menor de tres años, por cuanto no es aceptable que durante el cumplimiento de la pena, el condenado pueda votar o ser electo, pueda conservar un empleo o pueda ser nombrado para desempeñarlo.

Según esto, podría afirmarse que las palabras por el "tiempo de la condena", que emplea el Art. 12 son inoficiosas?

Así parecería, a primera vista; pero acaso esas palabras tienen alguna importancia positiva en los casos en que la inhabilitación absoluta temporal es una pena accesoria.

El art. 256, dice: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que por sí o por interpuesta persona, recibiere dinero o cualquier dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". Ver artículos 265 y 270.

Desde cuándo se cuenta la pena de inhabilitación absoluta, desde el día de la sentencia irrevocable o desde la terminación de la pena principal?

En los casos especiales en que la ley impone como pena accesoria la inhabilitación absoluta, podría decirse que esa pena corre desde el día de la sentencia, desde que, según el artículo 12, la inhabilitación se aplica durante el tiempo de la pena. Así, por ejemplo, si conforme al art. 256 se impone año y medio de prisión y cinco años de inhabilitación, esta pena se cumplirá a los cinco años, a contar desde el día de la sentencia firme.

Si se considera que la inhabilitación es simplemente una pena accesoria, la inhabilitación no empezará a correr sino después de terminada la pena principal; y en el caso del artículo 256, la pena de inhabilitación terminaría a los seis años y medio, a contar desde el día de la sentencia firme.

El caso no está resuelto de un modo inequívoco en el proyecto, y convendría que lo estuviera para lo cual bastaría con seguir al Código Italiano, Holandés, Belga, etc.

Art. 41. — Código Italiano. — Si la interdicción o la suspensión susodicha u otra incapacidad se une a una pena restrictiva de la libertad, o es el efecto de una condena, la interdicción o suspensión se aplica mientras se sufre la pena; pero la duración establecida en la sentencia o en la ley comienza a correr solamente desde el día de la terminación de la pena.

39. — El artículo 20 del proyecto dispone que la "inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género "durante la condena".

La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer "durante la condena" aquéllos sobre que recayere.

La inhabilitación especial, es pena principal o pena accesoria.

Como pena principal es obvio que empieza a correr desde el día de la sentencia firme. Art. 235, par. 2, art. 260, art. 264.

Cuando la inhabilitación especial es pena accesoria a la de reclusión o prisión, es claro que durante esas penas de inhabilitación surte efectos, y entonces es innecesario decirlo, por cuanto sería contradictorio que el condenado a inhabilitación especial pudiera, durante la condena principal, ser hábil para ejercer los empleos, profesiones o derechos políticos sobre los cuales ha recaído la inhabilitación.

La dificultad que hemos encontrado al ocuparnos de la inhabilitación absoluta como pena accesoria, respecto al día en que empieza a correr, se presenta respecto de la inhabilitación especial.

La inhabilitación especial como pena accesoria es la más frecuentemente impuesta.

¿Desde cuándo corre dicha pena?

Según el artículo 176, al delincuente se le impondrá prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años. Si la inhabilitación empieza a correr desde el día de la pena principal, la inhabilitación aparecerá propiamente, en el hecho, de más corta duración, pero si sólo empieza desde la terminación del castigo principal, la inhabilitación abarca mayor tiempo. La inhabilitación durante la reclusión o prisión desaparece absorbida por esa pena mientras que ella se manifiesta realmente desde que el condenado obtiene su libertad.

40. — Si la inhabilitación impuesta por la sentencia empieza a contarse desde el día del fallo, resultará que en algunos casos la inhabilitación terminará en el día mismo en que se concluye la pena. La violación de domicilio se reprime con prisión de "seis meses a dos años", cuando la comete un particular. La misma se impone, y además la inhabilitación de "seis meses a dos años", cuando el que viola el domicilio es un funcionario público. Si se le impone dos años de prisión, cuando haya sufrido la pena habrá terminado la inhabilitación, si esta pena que en general es accesoria, se sufre durante la condena.

41. — De acuerdo con las observaciones precedentes, redactaríamos el artículo 20 del proyecto en la siguiente forma:

ARTICULO

La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere, y la incapacidad para obtener otro del mismo género.

La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer dichos derechos.

La inhabilitación especial se aplica mientras se sufre la pena; pero la duración establecida en la sentencia o en la ley comienza a correr solamente desde el día de la extinción de la pena.

CONDENA CONDICIONAL

ARTICULO 26 DEL PROYECTO

42. — "Tiempo" — Proyecto del Ejecutivo, dos años. Doctor Herrera. — Par. 95. Ley Francesa

hasta cinco años. — Inglesa hasta dos; otras leyes hasta seis y tres meses.

43. — "Art. 28 del proyecto". — Se comprende desde luego lo dispuesto en el inciso 1.º—no así lo dispuesto en el segundo—G. Roura. Si la condena condicional con la libertad que aparece, ha de servir de estímulo, las incapacidades e restricciones fuerza y harán menos eficaz la prueba de buena conducta que se requiere como afirmación.

Se quiere que la condena condicional, es decir la libertad en que se deja al agente, obre en su espíritu de manera que lo aleje de la tendencia o de la posibilidad de cometer nuevos delitos.

Se espera que la libertad y la amenaza que comporta, le coloque en condiciones de no ofender a la sociedad. Para esto la ley no debe presentarle obstáculos y corresponde que le allane los que hay en su camino. Las incapacidades son una traba para su mejora o para su colación regular en la sociedad.

Parecería entonces conveniente suprimir el inciso 2º. y así lo proponemos.

TITULO IV

REPARACION DE DAÑOS

44. — Pensamos que este título debe suprimirse del proyecto, por los motivos fundamentales que exponen los doctores Jofré y G. Roura y que transcribimos a continuación.

"En mi opinión—dice el doctor Jofré—no es el Código Penal el que debe reglar la materia sino las leyes de procedimiento.

El Título IV es innecesario desde que el punto se encuentra mejor legislado en los artículos 1096 y siguientes del Código Civil. El congreso no puede por otra parte, establecer reglas de organización judicial obligatorias para las Provincias, desde que son éstas quienes establecen cuál es el Juez competente para resolver lo que se refiere a las acciones penales y civiles. P. de C. de P. Criminales, doctor M. Obarrio, artículo 27 y 28, informe pág. 19. Encuesta de la Cámara de Diputados, pág. 276, T. Jofré."

El doctor G. Roura dice por su parte: "Dejando de lado la inutilidad de pasar al Código Penal lo que se halla en el Código Civil,—no sin razón—por cierto, queda el óbice constitucional que es inevitable: son únicamente las legislaturas locales las que pueden fijar la jurisdicción y el procedimiento. Y como los Códigos respectivos, tienen previsto lo necesario al respecto, para el caso de que la parte interesada haga la cuestión civil en el proceso penal,—que es como debe ser,—pues esta reparación de oficio sólo se explica cuando el Estado responde subsidiariamente, ya que la gran mayoría de los procesados es irresponsable o porque nada tienen o porque la brevedad de la pena no les permitirá responder con el producto de su trabajo, resulta que la innovación, explicable en un país de sistema de gobierno unitario, además de inconstitucional es innecesaria."

"Lo que se conseguirá será sembrar los procesos penales de controversias y trabas, que los complicarán inútilmente, con grave daño para la libertad de los procesados en muchos casos, pues se subordinará la celeridad de la causa criminal a la reparación civil". O. G. Roura: Revista Argentina de Ciencias Políticas. Entrega No. 92, página 161.

TENTATIVA

Art. 42. — El que comienza la ejecución de un delito "premeditado de antemano", pero que no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.

45. — La comisión Especial de la Cámara de Diputados dice en su "Exposición de motivos": Un mismo acto puede ser juzgado de manera diferente, según cual sea la situación de espíritu que ponga de manifiesto el acusado. Un individuo dispara contra otro su revólver y no lo hiere: he ahí un delito. Si el delito es el disparo de arma, la pena es leve. Si el delito es tentativa de homicidio la pena es grave. ¿Cuál es el medio de diferenciar uno y otro delito? La diferencia estriba en el elemento intencional, en el propósito. Si el sujeto pensó en matar, hubo tentativa; si pensó sólo en dañar, ocurrió siempre un disparo de arma de fuego. Como la situación interna del sujeto es difícilmente apreciable cuando el mismo no la pone de manifiesto, es general que la condenación se verifique a base de declaración del acusado. De manera que es este mismo, que proporciona el arma que ha de utilizarlo o el elemento que ha de salvarlo. La ley no debe permitir esa situación que expone a que se condene más que al delincuente, al ignorante, y que permita se salve el experto, aunque debiera sufrir un castigo serio.

La comisión ha puesto un agregado al artículo ... exigiendo la premeditación, es decir, el "pensamiento anterior", el que deberá apreciarse valiéndose de los medios comunes de prueba.

No puede juzgarse el "acto primo como tentativa" de un hecho más grave que el ejecutado, sino cuando se pone de manifiesto la existencia de un pensamiento desenvuelto de antemano.

46. — Por nuestra parte, no aceptamos que para la existencia legal de la tentativa haya de tratarse de un "delito premeditado"; es decir, que únicamente se admita la existencia legal y de hecho de la tentativa en aquellos delitos que hubieran de consumarse con premeditación.

Es indudable que la tentativa sólo podrá considerarse que existe cuando el hecho que la constituye pueda relacionarse inequívocamente con el "pensamiento anterior" de cometer un delito "cierto", determinado en especie, aun cuando ese pensamiento anterior de cometerlo "sea un acto primo". El acto primo de cometer un delito cierto, por medios idóneos, puede constituir jurídicamente una tentativa. La única cuestión está en probar que ese acto primo es el resultado del propósito cierto de cometer un delito determinado; pero la dificultad de la prueba no puede autorizar la conclusión de que sólo hay tentativa respecto de los delitos consumados con premeditación, por cuanto aun en los delitos premeditados puede ser difícil la prueba de que el hecho anterior realizado es el principio de ejecución de un delito particular.

Si fuera jurídicamente aceptable que la tentativa presume la "premeditación de antemano" de cometer un delito, resultaría que no hay tentativa cuando una persona se propone matar a otra y simplemente le hiere con arma blanca o dispara contra ella con arma de fuego, sin hierirla, pero

sin "haber habido premeditación"; resultaría igualmente que no hay tentativa, cuando una persona, en un momento de exaltación, de cólera, se resuelve a incendiar: toma fuego, lo arroja contra las cosas que quiere incendiar y el fuego no llega hasta los objetos que tiene por delante; resultaría finalmente que cualquier principio de ejecución de un delito "no premeditado de antemano, no constituye jurídicamente tentativa, porque no hay premeditación, aunque se pruebe que el agente quiso matar, incendiar, robar, causar estrago.

No; para que exista tentativa punible es indudable que se necesita probar que el agente tenía el propósito de cometer un delito cierto, y que ese propósito salió de los dominios de la intención,—dejó atrás los simples actos preparatorios,—y avanzó en el terreno de los actos de ejecución, por medios idóneos, inequívocamente encaminados a consumar el delito, pero que esa consumación no tuvo lugar por causas independientes de su voluntad. Todo esto debe probarse contra el agente. Si se prueba, habrá tentativa, sin que sea necesario acreditar además, que se trata de un delito "premeditado de antemano". Si no se prueba habrá simplemente un acto exterior no imputable criminalmente, tan equivoco como se quiera; o habrá un hecho exterior punible de por sí cuando ese hecho constituye por sí mismo un delito completo.

47. — Ningún Código, de los que conocemos, requiere la premeditación como elemento propio de la tentativa.

Código Italiano. — Art. 71. — El que con fin de cometer un delito comienza su ejecución por medios idóneos, pero por circunstancias independientes de su voluntad, no ejecuta todo lo que es necesario para la consumación del mismo.

Código Alemán. — Art. 43. — El que ha manifestado la intención de cometer un crimen o delitos mediante actos que constituyen un principio de ejecución de este crimen o de este delito, es castigado por tentativa.

Código Holandés. — Art. 43. — La tentativa de delitos es punible cuando el designio del agente se ha manifestado por un principio de ejecución.

48. — La premeditación, según su aceptación común y jurídica significa la meditación reflexiva sobre algún hecho antes de ejecutarlo—Viada— al artículo 10., inc. 7º., Código Español.

"Premeditar es meditar antes de detentamiento, con reflexión acerca del acto o delito de que trata de ejecutar. La premeditación no es el pensamiento criminal, no es la resolución de llevar a cabo el delito". En toda acción humana existe un pensamiento y una resolución.—Sin ellos no obraría la voluntad ni se levantaría el brazo para dar la puñalada que ha de ocasionar una víctima.—Pero ni la violación ni la determinación bastan para constituir la premeditación. Para que ésta exista se necesita que haya meditación detenida, que ésta sea reflexiva, que no sea involuntaria. Es necesario no confundir la premeditación y la resolución que son cosas muy distintas. La premeditación exige que se haya meditado antes de obrar, que se haya reflexionado para tomar la resolución y después de tomada ésta, que la acción comience.

Código Español, tomo 1, página 401. Vidal Droit Criminal, página 189, Nota 1a.

49. — Nosotros reemplazaríamos el artículo 42 del proyecto por el artículo 71 del Código Italiano.

TITULO VII

PARTICIPACIÓN CRIMINAL

50. — Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor, instigador o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas del partícipe.

51. — Herrera. Hay dos sistemas: el de la comunicabilidad y el de la personalidad; un tercero aspira a conciliarlos.

"Primer sistema". — Las circunstancias agravantes provenientes de las calidades del autor modifican la criminalidad y el título de la infracción, y como la criminalidad del cómplice proviene del hecho principal, sufre la influencia de las circunstancias que le son extrañas.

Este sistema no es admisible porque confunde la participación material en el hecho criminal y la participación en las condiciones personales del autor, que agravan su criminalidad, su culpabilidad.

No existe nexo entre el autor y el cómplice bajo el punto de vista de la imputabilidad subjetiva: sólo existe entre ambos con respecto a la materialidad del hecho. El cómplice debe ser castigado con la pena que la ley fija para el delito que ha consumado y en la proporción que ella establezca; pero no puede serlo más severamente por la existencia de una cualidad en el autor, que es extraña al hecho mismo.

"Segundo sistema". — La cualidad del autor determina una agravación de la pena ordinaria, porque ella implica en él, además de la culpabilidad relativa del hecho, la falta de un deber especial resultante de esa cualidad, y esta falta no puede ser reprochada al cómplice, el cual, no teniendo esta cualidad, no tiene tampoco el deber que ella implica.

Este sistema en su absolutismo, parece erróneo, si es que los cómplices concurren sabiendo a la violación del deber especial del autor principal, y si ese conocimiento pudo servir de medio a la perpetración del delito, compenetrándose hasta cierto punto con el hecho mismo, sirviendo a su ejecución como sucede en la fractura, el escalamiento. El sistema conculcatorio, el tercero sería aquél en el cual las circunstancias personales que agravan la penalidad se deben comunicar a los autores o cómplices sólo, en cuanto han sido conocidos y han servido para "facilitar el delito".

Haus, No. 573. — Las circunstancias agravantes que resultan de calidades o relaciones personales son de cargo sólo de los partícipes en cuya persona se encuentran, sin dañar a otros, aun "cuando hayan conocido esas circunstancias"; esas calidades son inherentes a la persona. Tales son, especialmente la reincidencia, la premeditación, la calidad de funcionarios, de domésticos, de padres y de hijos, y en general, toda calidad, en razón de la cual se agrava la pena impuesta al delincuente.

Garaud. Tomo 10. No. 706. Las circunstancias personales que agravan o atentan la responsabilidad, perjudican o benefician al autor o cómplice a que dichas circunstancias se refieren, pero la justicia exige que graviten sobre los copartícipes, que son extraños a ellas, bajo dos condiciones: que las haya conocido y que esas circunstancias hayan servido a facilitar el delito.

Código Italiano. — Art. 65. — Las circunstancias y

cualidades inherentes a la persona, permanentes o accidentales, que agravan la pena de algunos de los que han concurrido a ejecutar el delito, cuando han servido a facilitar, están a cargo aún de aquellos que los conocían en el momento en que han concurrido; pero la pena puede ser disminuida en una sexta parte, y la del "ergastolo" puede ser substituida por la reclusión de 25 a 30 años.

Preferimos el artículo italiano al artículo 42 del proyecto.

Artículo 49. — No se consideran partícipes de los delitos cometidos por la prensa los editores, impresores y demás personas que prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, impresión o venta.

52. — El art. 54 del proyecto de 1906 — igual al 49 — terminaba en esta forma: "... cooperación para su publicación, cuando el autor fuese conocido y se encontrare en el país.

53. — Varias provincias han legislado sobre los delitos cometidos por medio de la prensa entendiéndolo que de esa manera hacían aplicación del artículo 32 de la Constitución Nacional.

54. — Fundando el artículo, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados reproduce la exposición del proyecto del Código de 1891. "El artículo deroga aparentemente el principio según el cual se presumen responsables todos los que han cooperado a la realización de un delito.

A pesar de la apariencia, el artículo no será a menudo una derogación del principio. El editor, los copistas, cooperan, es verdad, a realizar el hecho; pero lo hacen ordinariamente sin propósito criminal. Sin embargo, aunque las personas nombradas presten sus servicios con intención criminal, el artículo debe mantenerse, porque la manera amplia que está redactado consagra la garantía de la libertad de imprenta. La Constitución Nacional ha desechado la censura previa y sería restablecerla responsabilizar a los editores, grabadores, etcétera, por los actos punibles cometidos mediante la prensa. En efecto, antes de imprimir cualquier trabajo, examinarían si es o no ofensivo y si a su juicio fuese susceptible de comprometer su responsabilidad, se rehusarían a imprimirlo.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados ha hecho una modificación al proyecto, pues ha suprimido la salvedad "de cuando el autor fuese conocido y se encontrara en el país." Con este requisito, según la Comisión, cualquier obrero de buena fe podría ser castigado.

54. — Doctor Herrera, 317. "En la generalidad de los casos, los repartidores y vendedores, no leen las publicaciones y no proceden con intención criminal. No así el editor o impresor. El delito de prensa tiene dos elementos esenciales: el escrito incriminado y su publicación. El escritor y el que publica el artículo (escritor o impresor) son autores del delito; y si la ley sólo castiga subsidiariamente a estos últimos, apartándose de los principios generales del derecho común, lo hace en homenaje de la libertad de la prensa y porque le basta a los fines de la represión, castigar sólo al escritor y, en su defecto, al editor o impresor, por su orden.

"El artículo 54 del proyecto de 1906, corrige de todos modos el error del artículo 77 del proyecto de 1891 y el artículo 40. de la ley 4183, según los cuales se libra de toda responsabilidad en el delito cometido por medio de la prensa el editor, impresor de la publicación; y, de consiguiente, se sanciona la impunidad de estos delitos y convierte el derecho de publicar sus ideas sin censura previa, en una verdadera licencia."

55. — Pensamos que el artículo 49 del proyecto, tal como está redactado, autoriza a cometer, sin respon-

sabilidad todas las agresiones contra el honor de la persona, todos los atentados contra el orden social, bajo pretexto de garantizar la libertad de la prensa. Por este motivo, redactaríamos el artículo 49 en la siguiente forma:

Art. ... Sólo serán responsables de los delitos cometidos por medio de la prensa los regentes, editores o administradores del establecimiento tipográfico o de artes gráficas que han impreso o grabado el trabajo incriminado, siempre que no declaren el nombre del autor o que éste sea persona que se encuentre en el país.

TITULO VIII

ARTICULO 50

NOCION JURIDICA DE LA REINCIDENCIA

56. — A los efectos de la reincidencia no se tomarán en cuenta los delitos esencialmente militares, ni los políticos, ni los amnistiados. Así lo establece el artículo 55 del proyecto de 1906.

57. — Como la reincidencia es una circunstancia agravante calificada, la generalidad de los Códigos imponen al reincidente una pena mayor que la que le corresponde por el delito cometido por primera vez.

De acuerdo con esa regla hemos modificado el artículo 51 del proyecto en la siguiente forma:

ARTICULO

Al condenado por primera vez como reincidente se le impondrá un aumento de pena no mayor de la tercera parte de la que le corresponde por el nuevo delito.

El reincidente por segunda vez condenado a pena privativa de la libertad que excediera de dos años, cumplirá su condena con relegación en un paraje de los territorios del Sud.

ARTICULO 52

PENAS DE LOS REINCIDENTES CONSIDERADOS INCORREGIBLES

58. — ¿Qué pena es la que se impone a los reincidentes de que trata el artículo? La relegación en un territorio del Sud — en Ushuaia. — La deportación. — dice la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. — debía consistir, según la reforma en 1906, en la relegación por tiempo indeterminado en un paraje que señale el P. E.

"Esta pena se cumple en el presidio de Ushuaia donde hay, no solamente deportados, sino condenados a presidio, no existiendo entre unos y otros ninguna diferencia de régimen. Es necesario crear una nueva pena, ya que la deportación es el presidio o la penitenciaría, la reclusión, usando nuestros términos genéricos, que se cumple en Ushuaia."

"Hemos creído, pues, que debíamos limitarnos a establecer que los reincidentes, en los términos en que el proyecto señala, y los delincuentes considerados incorregibles, cumplieran la pena de reclusión en la cárcel de Ushuaia o en las demás que se construyan al efecto."

59. — La gravedad de la pena impuesta al reincidente de que trata el artículo 52, reside, sobre todo, en que la relegación, es una verdadera pena, se impone por tiempo indeterminado.

En realidad, nosotros no nos explicamos el artículo 52.

El establece que la relegación es una "pena accesoria" de la última condena, cuando el reincidente se

encuentra comprendido en algunos de los incisos de ese artículo.

Si es pena accesoria, ¿cuál es, entonces, la pena principal?

La pena principal, tratándose de reincidentes, es la "reclusión" en un paraje de los territorios del Sud. es decir, la relegación. Si la reclusión o relegación temporal, es la pena principal impuesta al reincidente, no nos explicamos qué significado puede tener al imponer la relegación misma, la reclusión, como pena accesoria por tiempo indeterminado.

Nosotros imponemos la relegación a perpetuidad como pena única, al reincidente considerado incorregible.

60. — El último párrafo del artículo 52 establece: que se aplicará también como accesoria de la condena en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubiesen sido cinco por lo menos y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

61. — Doctor Herrera, 333. — Al reincidente no se le puede equiparar con el autor de concurso de delitos; el primero ha demostrado con su nuevo delito que la pena no le ha reformado ni intimidado; en el caso de concurso, la justicia no ha hecho ninguna advertencia al culpable; su impunidad pudo alentarle a delinquir de nuevo. La agravante de la reincidencia y la pena aplicable a causa de su incorregibilidad no puede aplicarse al autor de varios delitos que no ha probado que es incorregible.

62. — Según el doctor González Roura, el párrafo de que tratamos debiera, en todo caso, figurar como artículo aparte, a continuación del 58 — concurso de delitos — en esta forma:

Art. Se aplicará la relegación por tiempo indeterminado como accesoria de la condena, en los casos de concurso...

63. — Aceptaría por mi parte las ideas del doctor Herrera, pero en las condiciones que determinaré en el capítulo siguiente.

TITULO IX

CONCURSO DE DELITOS

Art. 55. — Cuando concurren varios hechos independientes reprimidos por una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso, tendrá como minimum el minimum de la pena mayor y como maximum la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del maximum legal de la especie de pena de que se trata.

64. — Respecto del concurso material o real de que trata el artículo, y con relación a la represión, en la legislación positiva, se encuentran tres sistemas:

1o. Acumulación material de las penas; 2o. absorción de las penas menores por las más graves; 3o. acumulación jurídica que consiste en pronunciar una pena más elevada que la más grave, sea aumentando la duración de ésta, sea agravando su régimen.

El proyecto ha adoptado el sistema de la acumulación material, cuando se trata de delitos castigados con la misma especie de pena, siempre que la acumulación no exceda del maximum legal de la especie de pena de que se trata.

65. — No obstante la severidad que parece caracterizar el sistema de la acumulación material, hay casos en que él parece insuficiente para la represión. Así, por ejemplo: un criminal comete dos homicidios, cuyos castigos acumulados exceden de varios años al maximum de la pena de reclusión. Ese delincuente podría cometer impunemente cualquier delito.

Para salvar esta situación, el artículo 52, párrafo último, establece: que se aplicará como accesorio de

la condena, en los casos de concurso de delitos, la relegación por tiempo indeterminado, siempre que los delitos juzgados hubiesen sido cinco por lo menos y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

Estamos de acuerdo con el doctor González Roura en que dicho párrafo del artículo 52 no debe figurar en el título de la reincidencia, desde el momento que no se trata de reincidentes sino de concurso de delitos; pero no nos parece adecuado el párrafo tal como se halla redactado.

Aunque el párrafo dice: "Siempre que los delitos juzgados..." debe entenderse que no se trata de "delitos juzgados," sino simplemente a juzgarse.

Lo principal es lo siguiente: aunque se trata de cinco delitos a juzgarse, de los cuales dos tengan pena mayor de tres años, reputamos que la pena podría ser muy severa, tratándose de simple concurso. Aunque se hubiesen consumado cinco o más delitos, dos de ellos castigados con prisión de más de tres años, podría ocurrir que la acumulación no alcanzase al máximo de la pena de prisión. Entonces, tratándose de un delincuente que no ha sido castigado ninguna vez, que no ha sufrido la advertencia que importa la pena sufrida y las consecuencias que para la reforma o la intimidación significa el castigo, no parece justo que se imponga una pena perpetua cuando no está agotado todavía el máximo de la pena temporal. Por esta razón nosotros impondríamos la relegación perpetua y como pena principal, sólo en el caso en que la represión temporal se encuentre agotada.

El párrafo final del artículo 52, lo redactaríamos en la siguiente forma, y como artículo a continuación del artículo 56. Art. ... Cuando el delincuente ha cometido más de dos delitos, dos de los cuales, por lo menos, llevan separadamente pena de reclusión superior a trece años, podrá imponérsele relegación o reclusión a perpetuidad.

ARTICULO 56

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de diferentes naturaleza, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor.

66.—Las penas divisibles de diferente naturaleza serían la reclusión, la prisión y la multa.

En este caso no se sigue el sistema de la acumulación, y sin razón por cuanto es posible convertir todas las penas a un común denominador, diremos así reduciendo las penas menos graves a las más graves, de acuerdo con las reglas del artículo 24.

Es el sistema seguido por el Código Italiano. — Artículo 69.

ARTICULO 58

Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso que, después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes, con violación de dichas reglas.

Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras.

Cuando por cualquier causa la justicia federal en autos en que ella ha intervenido, no puede aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional, o provincial que conoció en la infracción penal según el caso.

67. — Que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto.

El proyecto de 1906, decía: Art. 62. Las reglas precedentes se aplicarán también, en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona por "otro hecho cometido antes de dicha condenación".

El artículo 58 del proyecto no hace distinción. Debemos entender que las reglas que sienta el artículo 58 se refieren al caso de delitos consumados antes de la condena, como también al caso de delito perpetrado después de la sentencia, "mientras se sufre pena."

Por mi parte acepto esa interpretación, que es la que surge del artículo desde que él no distingue. Además, si el que comete un delito está sufriendo una pena de quince años de reclusión, por ejemplo, y mientras sufre el castigo comete un homicidio, ¿que debería hacerse?

Lo más humano, lo más razonable: lo que dispone el artículo 58 o lo que propongo en el artículo nuevo que debería seguir al artículo 56.

68. — Aplicación del artículo 58.

Primer caso: Mientras sufre la pena se descubre que el delincuente ha cometido otro delito anterior al fallo que le ha impuesto la pena que está sufriendo. El artículo dispone que se apliquen las reglas de la acumulación en caso de concurso.

No habrá dificultad mayor cuando el delito descubierto cae bajo la misma jurisdicción, sea del fuero común o del fuero federal; pero cuando el caso cae bajo distinta jurisdicción la situación varía. Por ejemplo: el delito por el cual se ha impuesto la pena que sufre el delincuente es del fuero federal, falsificación de moneda; después se descubre que ha cometido un homicidio, delito del fuero común. Este caso no ofrecería mayores inconvenientes cuando los delitos se han cometido en la Capital Federal, en la misma provincia o en el mismo territorio federal, pero la dificultad se presenta cuando los delitos se han cometido en distintas provincias.

¿Qué hará el juez en cuya jurisdicción cometió el delincuente el delito no juzgado? ¿Pedirá la entrega del delincuente para juzgarlo? ¿Lo entregará a la provincia requerida? ¿Se esperará que haya cumplido la pena para solicitar la entrega y juzgarlo?

Segundo caso: Cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de las reglas establecidas, corresponderá al juez que haya dictado la pena mayor, pronunciar una sentencia única, es decir, acumular las penas. No habría dificultad cuando se tratase de delitos de fuero federal, pero cuando fueren delitos de distinto fuero o cometidos en diferentes provincias, no encuentro que la regla sería fácilmente aplicable.

Tercer caso: Final del artículo. — Según este párrafo, cuando la justicia federal no puede aplicar la regla del segundo caso, es decir, no pueda dictar la sentencia única, por no pertenecer a su jurisdicción, lo hará la "justicia ordinaria nacional". Supongo que esta justicia es la ordinaria de la Capital Federal o la de los territorios. La disposición sería aplicable cuando las sentencias se han dictado en el territorio de la Capital, lo que sería casi extraordinario.

Pero supóngase que la justicia federal de Jujuy dicta una sentencia y la justicia ordinaria de San Juan dicta otra: ¿qué juez dictará la sentencia única? ¿la ordinaria de San Juan? Así parece. ¿La Nación entregará el condenado a la justicia ordinaria de San Juan?

Todas estas graves dificultades sólo podrían encontrar remedio mediante una ley especial, que por eso mismo no podría formar parte del Código Penal.

TITULO X

EXTINCION DE ACCIONES Y DE PENAS

ARTICULO 59

69. — El artículo 59 contiene cuatro incisos respecto de la extinción de la acción penal.

1.º Muerte del inculcado.

Pensamos que las disposiciones de una ley que no tiene aplicación práctica, no debe figurar en ella.

Lo que es de mera doctrina no corresponde, en rigor, a una ley positiva.

El inciso 1.º no llena ningún rol y debe, por ende, desaparecer. A nadie se le ha ocurrido que muerto el imputado pueda continuar existiendo la acción que se dedujo en vida contra él.

Si continuara existiendo, ¿contra quién se seguiría? ¿Contra los herederos para castigarlos, por el delito de su causa habiente? No. Es elemental que la pena se impone solamente al autor del hecho delictuoso. ¿Contra la memoria del muerto? ¿Contra el cadáver? Han pasado los tiempos que se podía formar proceso contra el cadáver del autor del delito, contra la memoria del difunto.

Y entonces, ¿a qué fin conduciría el inciso 1.º?

Si con los cuatro incisos del artículo 59 se quiere presentar un cuerno de doctrina diremos que eso sería propio de un libro didáctico, de un tratado científico, pero que ella no corresponde a una ley positiva.

70. — Inciso 2.º Amnistía. — Consideramos que este inciso es igualmente inútil. Desde luego, la amnistía se aplica no sólo a la acción penal sino también a la pena impuesta, como lo establece el artículo 61.

La amnistía es un acto excepcional del poder soberano, que cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta categoría, aboliendo las persecuciones iniciadas ya o a iniciarse, o las penas en ejecución en razón de esos delitos.

La amnistía se ordena por el Congreso, artículo 67, inciso 7.º "Corresponde al Congreso... conceder amnistías generales". La ley que la dicte determina su extensión y efectos.

Si la amnistía en cada caso se rige por la ley especial que le acuerda el artículo 58, inciso 2.º, no tiene objeto. Y tan cierto es esto, que una disposición igual a la de que nos ocupamos, no ha hecho falta jamás.

Y también es superfluo el artículo 61, que dice: la amnistía general extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Las amnistías generales que acuerdan las leyes del Congreso; luego, no tiene objeto que el Código Penal establezca lo que el Congreso resolverá en cada caso particular.

El artículo 61 dispone que la amnistía no se extiende a anular los efectos civiles, las indemnizaciones civiles y reparaciones de perjuicios debidas a terceros. Esto es obvio. Las indemnizaciones debidas a particulares se rigen por los principios del derecho civil: esas indemnizaciones pueden resultar de un hecho, que despojado del carácter criminal crea obligaciones civiles. La amnistía no tiene por fin despojar a nadie de un derecho que le acuerda la ley civil.

X

DE LA PRESCRIPCION

71. — Nosotros suprimiríamos los artículos 59, 60 y

el 61; y rubro del título X. Lo cambiaríamos por el que hemos propuesto: *De la prescripción.*

ARTICULO 62

72. — La acción penal se prescribe:

1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º iguales a los incisos del 1 al 5 del artículo 52 del proyecto; 6.º al año, cuando se trate de otras multas.

(Suprimir los incisos 6.º y 7.º del proyecto).

73. — Después del artículo 63 del proyecto colocar el siguiente:

ARTICULO

"Todo acto directo del procedimiento contra la persona del delincuente dentro del término de la prescripción de la acción, la interrumpe".

Es el artículo 53 del Código vigente, y que no hay razón para haberlo suprimido.

74. — Suprimido. — No comprendemos por qué causa haya de extinguirse la acción penal en el caso de que trata el artículo. Un particular no puede declararse delincuente por autoridad propia, el imponerse una pena. La pena es un acto que resulta de una resolución solemne del poder público. Se dirá que desde el momento que el imputado abona la multa que trae consigo el delito de que se trata, no hay objeto de continuar el proceso, pero debemos decir que el poder judicial, que el estado, no se dirige en ese caso a procurarse una suma de dinero sino a descubrir si hay o no un delincuente; no tiende a percibir una multa, a cobrarla, sino a reprimir una acción delictuosa, mediante prueba suficiente acumulada en el proceso.

El pago de las multas no es prueba ni nada. Aceptar el pago y dar por extinguida la acción, aparecería como un rasgo equívoco de codicia fiscal.

ARTICULO 65

75. — Las penas se prescriben:

- 1.º La de reclusión y relegación perpetua a los veinte años.
- 2.º La prisión perpetua a los quince años.
- 3.º La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de las condenas y una cuarta parte más.
- 4.º La de multa, mayor de 2.000 pesos, a los tres años.

ARTICULO

76. — La prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si ésta se estuviere cumpliendo. Sin embargo, si el quebrantamiento de la condena tuviese lugar después de cinco años de haberse empezado a cumplir una pena perpetua, privativa de la libertad, para computar en este caso el plazo de la prescripción, se descontará el tiempo de la pena sufrida, menos cinco años; y cuando la pena sea temporal se descontará el tiempo de pena sufrido menos dos años.

ARTICULO

77. — Si antes de vencido el término de prescripción de la pena, comete el delincuente otro delito, la prescripción queda interrumpida.

Artículo 76 del proyecto.
Aceptado.

ARTICULO

78. — La prescripción de la acción penal o de la pena se aplicarán de oficio y el procesado o condenado no puede renunciar a ella.

Artículo 65 del proyecto.

79. — Suprimido. — El indulto, como manera de extinguir la pena, es una facultad del Presidente de la República. Artículo 85, inciso 6o. de la Constitución Nacional, que la ejercerá exista o no exista el artículo 65. Está, pues, demás el artículo 65.

ARTICULO 69

80. — Lo llevaríamos al título siguiente:

Artículo 79.—Doctor González Roura.—Pensamos como el que este artículo debiera ir a continuación del artículo 33, pues en el presente título no tiene su propio sitio.

TITULO XI

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

ARTICULO 71

Deberán iniciarse de oficio todas las acciones, con excepción de las siguientes:

- 1.° Las que dependieran de instancia privada.
- 2.° Las acciones privadas.

81. — Doctor Herrera, par. 367. — "Son acciones que dependen de "instancia privada", aquellas en las cuales las denuncias o querellas del agraviado o de su representante es requisito indispensable para poder formar causa; pero que una vez llenado dicho requisito, es parte el ministerio público, pudiendo proseguir dicho ministerio aun contra la voluntad del denunciante o querellante".

La acción privada es aquella que corresponde únicamente al ofendido, que él solo puede ejercitarla y que de consiguiente, puede desistir de ella cuando quiera, sin que el ministerio público pueda continuarla.

Los términos de que se vale el artículo 61 y lo que disponen los siguientes no obligan a entenderlo así; pero la redacción del artículo 76 nos hace dudar de esta interpretación, pues refiriéndose a algunas de las acciones privadas consigna la misma disposición que la que trae el artículo 72, para las acciones dependientes de instancia privada, es decir, que basta la querrela o denuncia de agraviado o de su representante para seguir el juicio correspondiente.

La división de las acciones penales en tres grupos: 1o. acciones que se inician de oficio; 2o. acciones dependientes de instancia privada; 3o. acciones privadas, se encuentra en el proyecto de 1906; y no se halla en el proyecto de 1891. Este proyecto en su artículo 87 dispone:

Art. 87. — "Pueden iniciarse de oficio todas las acciones penales excepto las que nacen de los siguientes hechos punibles:

- 1.o Violación, estupro, rapto o ultraje al pudor de las personas púberes, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida.
- 2.o Calumnia o injuria.

3.o Violación de domicilio.

4.o

Los fundamentos que el doctor Herrera da para establecer la división consignada en el artículo 71 son muy plausibles, pero ello no aparece en el informe de la comisión y los efectos de esa división, que enuncia el doctor Herrera, no se nota en los artículos del título XI.

¿Cuáles son los efectos prácticos, no meramente doctrinarios, que se derivan de la división entre acciones dependientes de instancia privada y acciones privadas?

Las acciones dependientes de instancia privada que enumera el artículo 72 sólo puede iniciarse, esto es, sólo puede dar lugar a un proceso, mediante acusación o denuncia del agraviado . . . o representante legal.

En cuanto a los delitos de acción privada del artículo 73, el artículo 74 dispone que la acción por adulterio corresponde al cónyuge ofendido, inciso 1.o; que la acción por calumnias, inciso 2.o, sólo podrá ser ejercitada por el ofendido, artículo 75; y que, en los demás casos del artículo 73, se procederá únicamente por querrela, o denuncia del agraviado, artículo 76. Bajo el punto de vista de la iniciación de la causa, la acción dependiente de instancia privada y la acción privada se confunden.

Iniciada la acción, los diversos artículos del título ~~31~~ no establecen tampoco con claridad, diferencia alguna entre dichas acciones durante la marcha del proceso: no hay ninguna prescripción expresa según la cual el proceso continuará a cargo del Ministerio Fiscal, aún cuando el agraviado desista de la acción y quiera evitar la prosecución de la causa.

Las diferencias que se notan en el proyecto entre las acciones privadas y las dependientes de instancia privada, se originan de la naturaleza de cada delito. Así, cuando se trata de delitos de violación, estupro, rapto y ultraje al pudor, el artículo 72 dispone que se procederá de oficio, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tuviera padres y tutor y guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

Esta sola circunstancia no basta para fundar la diferencia establecida en el artículo 71, por cuanto ella implicaría una simple peculiaridad de la acción privada de que trata el artículo 72.

La acción de adulterio también tiene especialidad: ella está prevista por el artículo 74, y también la tiene la acción por calumnia, artículo 75. luego, no aparece en el proyecto, con efectos jurídicos positivos, la división que expresa el artículo 71.

82. — Corresponde dejar establecido de una manera expresa en la ley, los efectos de la división de las acciones dependientes de instancia privada y de las acciones privadas para evitar que esas acciones sean confundidas, como ha ocurrido en los Códigos de Procedimientos de algunas provincias.

La acción pública, en ciertos casos, dice el doctor Jofré, no puede deducirse si no se han cumplido determinados requisitos exigidos por la ley.

Esto ocurre en los delitos cometidos contra la honestidad, etc. Existe la acción que depende de denuncia del interesado, en los delitos contra la honestidad. En la violación, en el estupro, etcétera, no se puede proceder a formar causa si la interesada o la persona bajo cuyo poder se hubiese hallado cuando se cometió el delito no ha hecho la denuncia o promovido la querrela ante quien corresponda. Se ha

creído que era mayor el perjuicio que iba a experimentar la víctima con la divulgación del delito, que con la impunidad del delincuente. En cambio, cuando la interesada, su padre o guardador, jueces exclusivos para hacer la denuncia ponen ese hecho en conocimiento de la autoridad debe la sociedad reprimir ese delito. No es que se trata de una acción privada en esos casos, sino que es una acción que no puede iniciarse, sin simpatías de la interesada. Una vez puesta en movimiento la acción, ya no pertenece al damnificado, ya no se puede desistir, y no hay otra solución que dictar la sentencia.

"Lo único que priva el Código Penal es proceder de oficio; pero una vez iniciada la querrela, por parte legítima, no cabe más solución que la que acabamos de indicar. Doctor Tomás Jofré, Cód. de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires. Tomo 1o., páginas 120 y 121."

Doctor Rivarola. — Exposición y crítica del Código Penal, tomo 2o., números 411 al 615.

83.—Para evitar confusiones, para aclarar bien las nociones jurídicas y definir efectos, nosotros redactaríamos el segundo apartado del artículo 72 en la siguiente forma:

"En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representante legal. Producida la acusación o denuncia, interviene el Ministerio Fiscal y el proceso continuará su curso como en el caso de cualquier acción pública.

"Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padre, tutor ni guardador o que lo fuere por una de sus ascendientes, tutor o guardador.

84.—El artículo 73, inciso 4o. del proyecto, enumera como delito que da lugar a la acción privada la extorsión en el caso del artículo 170."

El doctor González Roura dice a este respecto: "Si la simple privación de la libertad (artículo 141 del proyecto) constituye un delito de acción pública, no puede constituir un delito de acción meramente privada, cuando tiene por fin cometer un atentado contra la propiedad. Artículo 170". Sufrirá prisión de tres a diez años el que retuviera en rehenes a una persona para sacar rescate.

Lo dispuesto en este artículo constituye un delito mucho más grave, según la misma doctrina del proyecto, que el determinado en el artículo 141. Por otra parte, detener la acción de la justicia a la espera de la denuncia de la víctima, valdría casi tanto como renunciar a obtener la prueba del delito en muchas casos.

Nosotros aceptamos las conclusiones del doctor González Roura y suprimimos el inciso 4o.

85.—Después del artículo 73, colocaríamos el artículo 69 del Proyecto.

86.—Artículo 74 del proyecto. — Aprobado.

87.—Artículo 75 del proyecto. — Aprobado, con la supresión de las palabras "difamación y ultraje", porque estas denominaciones específicas de delitos no existen en el proyecto aunque se encuentran en el proyecto de 1906.

Artículo 77 del proyecto.

88.—Doctor González Roura. — No legislando el Código sobre delitos contra la libertad política, el artículo está demás.

Informe de la comisión, página 114. — "Delitos contra la libertad política. Ha considerado la Comisión que es inconveniente mantener en el Código las sanciones de los delitos contra la libertad política y que

es preferible el sistema que se reduce a colocarlos en la ley general de elecciones. Conservamos, sin embargo, el artículo 77, que se refiere al ejercicio de las acciones, porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 3o. del proyecto, las reglas generales sobre aquéllos, lo mismo que sobre las orientaciones de las leyes represivas, corresponden al Código.

Pensamos que no hay razón para conservar dicho artículo, que se refiere a una clase especial de delitos.

Si lo prescripto en el artículo 77 es una disposición general relativa a los delitos políticos no debe figurar en el Código Penal, desde que éste no se ocupa de dichos delitos; si es una prescripción especial, claro está que tiene que encontrarse en la ley de elecciones. En cualquier caso, el artículo 77 es extraño al Código.

La ley nacional de elecciones se ocupa de las acciones que nacen de los delitos contra la libertad electoral y de la manera de ejercerlas, artículo 88, 91, inciso 5o.

Corresponde, pues, suprimir el artículo 77.

TITULO XII

SIGNIFICADO DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CÓDIGO

89.—Art. 78.—Las reglas que contiene el artículo 75 no son necesarias para la inteligencia del Código. Plazos señalados. — Este inciso es inútil desde el momento en que los artículos 23 al 29 del Código Civil, establecen que las disposiciones contenidas en ellos se aplican en todos los plazos señalados por las leyes.

Reglamento y ordenanzas. — Tienen estas voces un sentido legal y común conocido. Si se examina cada uno de los artículos del Código en que están usadas, se encontrará que su significado es perfectamente claro y que no necesita ser explicado o definido.

Funcionario público, empleado público. — El concepto de estas palabras es completamente claro y no requiere definición.

Banda. — El artículo 210 establece que la asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos es punible por el solo hecho de existir.

Artículo 166, inciso 2o. — Si el robo se cometiere en despoblado y en "banda". Artículo 167, inciso 2o. — Si el robo se cometiere en poblado y en "banda".

Artículo 184, inciso 4o. Daños. — Cometer el delito en despoblado y en "banda".

La significación que el artículo 78 del proyecto le da a la palabra "banda", no es igual a la del artículo 210.

La banda. — Según el artículo 78, es la asociación de dos o más individuos para cometer delitos determinados; la ley artículo 210 es la asociación de tres o más personas para cometer delitos determinados o indeterminados.

La banda cuya noción da el artículo 210, debe ser la misma de que tratan los artículos 166, 167 y 184, porque de no ser así, esa palabra tendría dos acepciones: la del artículo 78 y la del artículo 210. Conviene conservar una sola significación, la del artículo 210, y por consiguiente suprimiríamos la contenida en el artículo 78.

Mercaderías. — Palabra empleada en el artículo 300, cuyo significado no ofrece dudas.

Capitán. — Voz cuya acepción da el artículo 904 del Código de Comercio.

Tripulación. — Término empleado en el artículo 198, y que no hay objeto de definir.

LIBRO SEGUNDO

Clasificación de los delitos

10.— Aceptamos el orden de clasificación de los delitos que hace el proyecto del Código. Título I. — Delitos contra las personas. Título II. — Delitos contra el honor. Título III. — Delitos contra la honestidad, etc., etc.

PRIMERA PARTE

Clasificación de los delitos según la gravedad de la pena.—Penas paralelas.—Reclusión y prisión.

I

20.—“Reclusión perpetua, pudiendo ser relegados. — El delito previsto en el artículo 89 del proyecto es el más grave de los que prevé, y le impone, por ende, la pena más grave: “reclusión perpetua, pudiendo ser relegados”. — Esta pena se aplica: 1.º Al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. — 2.º Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, servicios graves, impulso de perversidad brutal, veneno, inundación... o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos...

30.—El artículo 80 omite el caso de homicidio “premeditado”. — El homicidio cometido con premeditación puede encontrarse fuera de los casos enumerados en los tres incisos del artículo 80 del proyecto y puede revestir caracteres tan graves como cualquiera de los homicidios de que tratan dichos incisos.

Por eso agregaríamos como inciso 20. del artículo 80, el siguiente: 20. “Al que matase a otro con premeditación”. Seguiríamos de esa manera especialmente al Código Italiano — artículo 366, inciso 2.º — el cual, aparte de todos los casos previstos en los tres incisos del artículo 80 del proyecto, coloca expresamente la “premeditación”. — Holandés, artículo 289. Noruego 233. — Si ha obrado con premeditación, el agente es culpable de asesinato, y se le castiga con reclusión perpetua o que no sea inferior a diez años. — Código Español, artículo 418, inciso 4.º — con premeditación conocida.

II

Reclusión o prisión perpetua

Art. 215. — “Traición”. — 10. Ejecutado con hecho dirigido a someter total o parcialmente a la Nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad. 20. Si se indujere a una potencia extranjera a hacer la guerra a la Nación.

Art. 227. — Contra los miembros del Congreso que concedieren al P. E. Nacional y contra los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, la suma del poder público, etc., artículo 29, Constitución Nacional.

“Penas paralelas”. — El proyecto adopta, casi sin reservas, el principio de las penas “paralelas”. Nosotros daríamos penas “alternativas”, a fin de dejar al Juez la obra práctica de individualizar la pena en cada caso, según el móvil del delito, según la naturaleza moral del agente. Pensamos que

se ha llevado este principio demasiado lejos. Ahora, vamos a examinarlo en cada caso que lo aplica el proyecto.

No concebimos que el más grave delito, el de traición a la patria, a cuyos autores, la Constitución llama “infames”, pueda, en ningún caso, ser reprimido con una pena distinta de la de reclusión. Si la pena de muerte existiera, se la impondría al traidor; suprimida esa pena, se le impone la que viene en su lugar: “la reclusión perpetua” dada la indignidad, lo odioso del crimen. En ningún caso podría imponerse la pena de “prisión”, que se destina para los delitos que no son deshonrosos, antisociales, que no revelan una conciencia pervertida.

Legislación comparada. — Código Italiano, artículo 104, pena de “ergastolo”; Código Holandés, artículo 93, prisión perpetua o temporal, no mayor de 20 años.

Por delito de traición del artículo 215 no se impone la “inhabilitación absoluta perpetua”, que lleva consigo el delito de traición de que trata el artículo 214. El delito del artículo 215 debe llevar aparejada la inhabilitación absoluta perpetua.

III

Reclusión o prisión perpetua o reclusión o prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta perpetua

Art. 214. — “Traición” cometida por argentino o por persona que deba obediencia a la Nación, tomando armas contra ella, uniéndose a sus enemigos o prestandoles cualquier ayuda o auxilio.

218. — Las penas de los artículos 214 a 216, cuando los hechos de que tratan fueron cometidos contra una potencia aliada a la República en guerra contra un enemigo común.

El traidor debe ser castigado con la pena más severa, sin que se permita la alternativa de sufrir prisión. La pena debe ser la reclusión perpetua o temporal. La infamia de la traición coloca al delincuente en su calidad propia de infame.

Por otra parte, creemos que no hay justa proporcionalidad de penas entre el delito de traición del Art. 214, y el de violación de que trata el Art. 124, reprimido con 15 a 25 años de reclusión o prisión.

Lo repugnante del crimen de traición reclama una pena no menos severa que la establecida por el Art. 124. Si la traición lleva hasta la reclusión perpetua, el minimum debería elevarse a 15 años, cuando el castigo es temporal.

Finalmente, como la traición es un delito de excepción, cometido en época de peligro nacional, debe reprimirse con gran energía, precisamente en razón de las circunstancias de excepcional gravedad por que atraviesa el país.

IV

Reclusión o prisión de 15 a 25 años

Art. 124. — En los casos de violación y estupro previstos en los artículos 119 y 120, cuando resultara “la muerte” de la víctima.

Art. 119. — Será reprimido con reclusión o prisión de 6 a 15 años el que tuviere acceso carnal con personas de uno u otro sexo en los casos siguientes:

1.º Cuando la víctima fuere menor de doce años.

2.º Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiese resistir.

3.º Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Art. 120. — Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 6 años cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las condiciones de los números 2 y 3 del artículo anterior.

El delito de que trata el Art. 124 es bestial y su consecuencia gravísima: no debe ser alternativa la pena. Impóngase sólo reclusión, pero opinamos que se reduzca el minimum a 10 años.

Legislación comparada. — Código Italiano, Art. 351; Cód. Alemán, Art. 178. Casa de fuerza temporal o perpetua. Cód. Holandés, prisión hasta 15 años.

V

RECLUSIÓN O PRISIÓN DE 10 A 25 AÑOS

Art. 182. — “Muerte”, a sabiendas, del ascendiente, descendiente, o cónyuge, cuando la víctima provocó el acto con ofensas o injurias ilícitas y graves; o cuando por causar daño en el cuerpo o salud, se le produjere la muerte, empleando un medio que no debía razonablemente causarla. Art. 81. inciso 1.º y 4.º.

Art. 190. — Si se produjere la muerte en un duelo, provocado o a que se diere causa por un interés pecuniario u otro objeto inmoral.

Art. 191. — “Muerte” en duelo, cuando, se faltare en daño de la víctima a las condiciones ajustadas.

Art. 166. — “Muerte”, causada con motivo u ocasión de un robo.

Art. 191, inciso 4.º — “Muerte”, causada con ocasión de emplear cualquier medio para detener, entorpecer o hacer descarrilar un tren.

Art. 194. — “Muerte” causada por la ejecución de cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante o a detener o entorpecer la navegación.

Art. 199. — “Muerte” causada por piratería, de una persona que se encontrase en el buque atacado.

Art. 200. — “Muerte” producida por envenenar o adulterar aguas potables, substancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad.

Art. 201. — Contra el que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, si del hecho resultare “muerte”.

Todos los delitos de que trataban los artículos anteriores son gravísimos, no solamente por la consecuencia de ellos, la muerte, sino también por la perversa intención, por la maldad intrínseca del agente. Si la pena de prisión es de distinto carácter que la de reclusión;—si ésta debe reservarse para castigar a los criminales que revelan con su hecho un ánimo depravado, antisocial,—creemos que en los delitos de que tratan los artículos precedentes no cabe la alternativa: debe imponerse la reclusión simplemente.

Acaso el delito que pueda merecer alguna atenuación, en cuanto al régimen de la pena, sea el

del Art. 2: delito antinatural, doloroso, profundamente doloroso, pero que a veces la crueldad incomprensible y tristísima de un padre, puede, hasta cierto punto explicar.

Los delitos de los artículos 100 y 101 son causados por la inmoralidad, por la deslealtad del agente.

Art. 165. — Se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años, si con motivo del robo resultare un homicidio.

Proyecto de 1906. — Presidio de 10 a 25 años. Art. 180.

“Código Penal vigente”. Art. 22. Robo... b) Se aplicará presidio de 10 a 15 años: 1.º si por las violencias ejercidas para consumir el robo se pusiere en peligro de muerte a una persona.

El Código Penal vigente no contiene una disposición análoga a la del Art. 180 del proyecto de 1906 y a la del Art. 165 del proyecto de Código en revisión. ¿Por qué causa?

¿Cómo se castigaría, de acuerdo con el Código Penal vigente, el caso previsto especialmente por los artículos 180 y 165 citados?

Entendemos que el caso se hallaría comprendido en el Art. 17, Capítulo I, 3 b), Igual al inciso 3, Art. 80, del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

El inciso 3, del Art. 80, del proyecto en revisión tiene como uno de sus antecedentes el inciso 6 del Art. 336, del Cód. Italiano, según el cual se aplica la pena de “ergastolo” al autor del delito de que trata nuestro inciso 3, Art. 80.

En los artículos 406 a 412 que trata “Della rapina” no se encuentra ninguna disposición semejante a la del Art. 165, del proyecto en revisión. El Art. 408, del Cód. Italiano dispone que: “Cuando algunos de los hechos previstos en los artículos precedentes se cometen con amenaza a mano armada contra la vida, se impondrá reclusión de 5 a 15 años.” No prevé especialmente el caso de muerte en el capítulo “Della rapina.” No estando previsto especialmente el caso de homicidio causado con ocasión de un robo, pensamos que ese delito cae, por la legislación italiana, dentro de los términos del inciso 6, del Art. 368, del Cód. Penal Italiano.

Código Alemán. — Art. 214. — Semejante al inciso 3, Art. 80, del proyecto en revisión. La pena del Cód. Alemán es “Cosa de fuerza no inferior a 10 años o cosa de fuerza de por vida”. El Art. 251, dispone lo siguiente: “Al autor de hurto (Furto violento, dice la traducción italiana), se le castiga con cosa de fuerza no menor de 10 años, o en cosa de fuerza vitalicia, cuando al cometer el hurto violento se ha martirizado a una persona, o por causa de las violencias usadas contra ella, se le han causado lesiones corporales graves o la muerte.”

“Código Holandés”. — Art. 288 análogo al inciso 2 del Art. 80 del proyecto en revisión. Pena: prisión vitalicia o no mayor de 20 años. Sin embargo, el párrafo final del Art. 213 castiga con prisión no mayor de 15 años, si el hurto acompañado o seguido de violencias ha causado la muerte a una persona.

Ninguno de los Códigos citados establece la pena paralela.

No creeríamos injusto suprimir el Art. 165 y dejar al ladrón que mata, sometido a la pena del Art. 80, inciso 30.

En ningún caso el delito del Art. 165 debía llevar pena de prisión.

Art. 191, inciso 10. Art. 80, inciso 20.—El caso previsto en el inciso 30. del Art. 80 tiene lugar cuan-

do con el designio de causar la muerte de una persona se usa del medio de hacer descarrilar un tren. El caso previsto en el Art. 191, inciso 4o, tiene lugar cuando al entorpecer la marcha de un tren, resulta una muerte sin ser el propósito que el agente se proponía.

Código Italiano. — Art. 327. La pena es la reclusión. No hay pena paralela en estos casos. Cód. Holandés, Art. 184. Prisión perpetua o temporal. Cód. Alemán, Art. 315. Casa de fuerza perpetua o temporal.

Se vé, pues, que no admiten esos Códigos las penas paralelas.

Art. 194. — Observaciones análogas a las expuestas respecto al Art. 191, inciso 4o.

Art. 200. — El delito de que trata este artículo es en sí mismo odioso, revela una intención perversa. Debe imponerse al agente la pena de reclusión, sin alternativa.

Código Italiano. — Art. 318 a 326. — No establecen penas paralelas. Cód. Holandés, Art. 172. Prisión perpetua o temporal.

Art. 201. — No se ve por qué puede dejarse de imponer la reclusión en el caso de que trata dicho artículo, cuando ha resultado la muerte de una persona.

El delito implica o un gran desprecio por la salud o la vida o una codicia condenable.

VI

RECLUSIÓN O PRISION DE 8 A 25 AÑOS

Art. 179. — Contra el que "matere" a otro siempre que en este Código no se impusiere otra pena.

Art. 98, inciso 1o. — "Muerte" causada en duelo sin intervención de padrinos que arreglen las condiciones del desafío.

Aceptamos la pena alternativa en los casos de los artículos anteriores. La muerte en las condiciones de los artículos, puede en muchas ocasiones no resultar de un ánimo depravado, de una intención perversa. El juez apreciará el ambiente en que el hecho se realizó: examinará el móvil del delito, la causa subjetiva que lo produjo, el elemento moral del agente, y determinará, en cada caso, la pena aplicable al sujeto, según su situación interna.

VII

RECLUSIÓN O PRISION DE 8 A 20 AÑOS

Art. 22. — Violación o estupro en los casos del Art. 119 cuando resultare grave daño a la salud de la víctima, o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guarda de aquélla o con el concurso de dos o más personas.

Art. 186. — El que causare incendio, explosión o inundación si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Art. 122. — El delito es repugnante y no debe imponerse sino la reclusión.

Art. 186. — No encontramos qué razón exista para imponer pena de 10 a 25 años en los casos de los artículos 191, Inc. 4o, y Art. 194 e imponer pena menor en el caso del Art. 186. El incendio, la explosión, la inundación, son atentados tan graves como los contemplados en los Arts. 190 y 194.

Proyecto Rivarola, Matienzo, Piñero. — Art. 226. —

El que causare incendio, explosión o inundación; será reprimido: 4o. Con presidio de 10 a 20 años si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de una persona. Art. 227. Incurrirán respectivamente en las penas señaladas en el artículo precedente el que causare estragos por medio de inmersión o varamiento de nave, derrumbe de edificio o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Art. 232. El que destruyere un ferrocarril o empleare algún otro medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar, será reprimido: 4o. con presidio de 10 a 20 años si resultare la muerte de una persona.

Código Holandés. Art. 157, Inc. 3o. Art. 166, Inc. 3o. Art. 168, Inc. 2o. Código Noruego, Art. 148, Cód. Español, Art. 572. Viada y Vilaseca. El que apela, para causar daño, a los medios que se mencionan en este artículo (inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o máquina de vapor, levantamiento de los rieles de una línea férrea) o a cualesquiera otros parecidos, es indudablemente tan culpable como el incendiario, pues que echa mano de agentes tan poderosos como el fuego mismo.

VIII

RECLUSIÓN O PRISION DE 10 A 15 AÑOS

Art. 125. — Será castigado con dicha pena el autor de corrupción y ultraje al pudor, cualquiera que fuere la edad de la víctima, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, intimidación, coerción, o si el autor fuere ascendiente, marido, hermano, tutor, encargado de la educación o guarda o hiciere con ella vida marital.

El delito de que trata el artículo es vergonzoso y brutal y debe ser reprimido con reclusión solamente.

IX

RECLUSIÓN O PRISION DE 6 A 15 AÑOS

Art. 119. — Contra el que tuviera acceso carnal en persona de uno u otro sexo: 1o. con menor de doce años; 2o. con persona privada de razón o sentido o con enferma que no pudiese resistir; 3o. cuando se emplea fuerza o intimidación.

Este delito se comete por fuerza de brutal consecuencia: delito repugnante que debe reprimirse aislando al agente del contacto de las personas condenadas a prisión. Debe, por lo tanto, sufrir la pena de reclusión.

X

RECLUSIÓN O PRISION DE 5 A 15 AÑOS

Art. 166. — Inciso 1o. — Si por la violencia para consumar el robo, hubiere peligro de muerte para una persona o se alterase permanentemente su salud o el robo se cometiere en despojado y en banda. Debe imponerse la pena de reclusión.

XI

RECLUSIÓN O PRISION DE 4 A 15 AÑOS

Art. 125. — El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado: 1o. con

reclusión o prisión de 4 a 15 años si la víctima fuese menor de doce años.

Se trata de un delito contra la honestidad consumado contra una menor de doce años. La edad de la víctima y lo vergonzoso del móvil deben imponer al agente la pena de reclusión y no de prisión.

XII

RECLUSIÓN O PRISION DE 3 A 15 AÑOS

Art. 92. — Si las lesiones muy graves del Art. 91 se produjeren con cualquiera de las circunstancias del Art. 80.

Art. 140. — Contra el que redujere a servidumbre a una persona o a otra condición análoga, y al que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.

Art. 186, Inc. 2o. y 3o. — Contra el que causare incendio, explosión o inundación, si hubiere peligro para archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora, pirotécnica militar, o parque de artillería, o hubiere peligro de muerte para una persona.

Art. 190. — Contra el que inutilizara o destruyera total o parcialmente vías u obras de comunicación pública, terrestre o por agua, o impidiera o estorbara la ejecución de las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas, si resultare la "muerte" de alguna persona.

Art. 194. — Contra el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante, o a detener o entorpecer la navegación, si el accidente causare lesión a alguna persona.

Art. 198. — Delito de piratería, cuando no ha resultado muerte.

Art. 102. — Contra el que propagare una enfermedad contagiosa y peligrosa para las personas.

Art. 219. — Contra el que por actos hostiles no aprobados por el Gobierno Nacional diere motivo a una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o bienes, a alterar las relaciones amistosas del Gobierno con un gobierno extranjero, si de dichas hostilidades resultare la guerra.

Art. 269, Inc. 2o. — Contra el juez que cometiera prevaricato dictando sentencia condenatoria en causa criminal e inhabilitación absoluta perpetua.

Art. 232. — Contra el que falsificare moneda legal en la República, la introdujere, expendiere o pusiere en circulación.

Art. 92. — Se trata de las lesiones muy graves previstas por el Art. 91. Además de esta circunstancia, esas lesiones graves se han cometido en alguna de las situaciones previstas por el Art. 80, lo que da al delito un carácter de perversidad calificada. ¿Cómo entonces hacer alternativa de pena? Debe imponerse reclusión.

Art. 186, Inc. 2o. y 3o. — Los delitos de que tratan estos incisos son muy graves y deben ser reprimidos con reclusión. Consideramos estos delitos tan graves, que no creemos que deban ser reprimidos con pena inferior a la que se aplica al autor del robo por el Art. 166, Inc. 1o. Impondríamos pena de 5 a 15 años.

Art. 190. — Si el previsto en el presente artículo ha causado la muerte de una persona, nos parece que no es meros grave que el robo de que trata el Art. 166, Inc. 1o. castigado con 5 a 15 años de reclusión o prisión. Impondríamos al delito previsto en el Art. 190 la pena de 5 a 15 años de reclusión.

Además, el Art. 194, al final castiga el delito de que

allí se trata con prisión o reclusión de 10 a 25 años. No hay una diferencia muy grande entre los delitos de los artículos 190 y 194 cuando ha resultado la muerte de una persona; sin embargo, la penalidad difiere en mucho.

En todo caso, debe aplicarse reclusión.

Arts. 194, 198 y 202. — Pena de reclusión solamente.

XIII

Reclusión o prisión de 3 a 12 años

Art. 194. — Inc. 2o. — Contra el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante o detener o entorpecer la navegación, si resultare naufragio, avería o varamiento.

Código Alemán. Art. 323. Pena. Casa de fuerza no mayor a cinco años.

Código Holandés. Art. 166, Inc. 2o. — El delito es reprimido con prisión no mayor de quince años. Art. 167. Cuando el delito se comete por imprudencia se impone prisión o detención. Inc. 2o.

Debe imponerse sólo pena de reclusión, dada la gravedad del delito.

XIV

Reclusión o prisión de 6 a 10 años

Art. 123. — Contra el autor de violación, cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en ninguna de las condiciones de los números 2 y 3 del artículo 199 y el delito fuere cometido en las condiciones del artículo 122.

Debe imponerse sólo pena de reclusión.

XV

Reclusión o prisión de 3 a 10 y hasta 15 años

Art. 85, Inc. 1o. — Contra el que causare un aborto, si obra sin el consentimiento de la mujer. Si el hecho fué seguido de la muerte de la mujer, puede llegar la pena hasta quince años.

Este delito puede cometerse bajo el delito perturbador de una dignidad mal entendida. El juez apreciará el caso. Encontramos aplicable la pena alternativa.

Art. 92. — Contra el autor de lesiones graves de las enumeradas en el Art. 90 si concurriese alguna de las circunstancias enumeradas en el Art. 80.

Se trata de lesiones que han producido una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, etc. Art. 90. Esto en cuanto a la materialidad del daño. En lo tocante a la criminalidad de la intención, téngase presente que las lesiones se han producido habiendo intervenido alguna de las circunstancias del Art. 80, esto es, que las lesiones se han inferido al ascendiente, descendiente, que se han producido con alevosía, ensañamiento, impulso de perversidad brutal, etc., etc., todo lo cual debe llevar consigo la pena de reclusión y no la de prisión.

XVI

RECLUSIÓN O PRISION DE 4 A 10 AÑOS

Art. 126. — Contra el que con ánimo de lucro, o por satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de menores de edad, me-

diente engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier medio de coacción, aunque hubiere consentimiento de la víctima.

El delito es vergonzoso: impóngase la pena de reclusión.

XVII

RECLUSIÓN O PRISIÓN DE 3 A 10 AÑOS

Art. 91. — Lesiones que produjeren enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, inutilidad permanente para el trabajo, pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra, de la capacidad de engendrar o concebir.

Art. 92. — Contra el autor de lesiones del Art. 90, si concurriere alguna de las circunstancias del artículo 80.

Art. 100. Inc. 2o. — Contra el que en duelo producir lesiones, siempre que el mismo hubiere provocado o dado causa al desafío proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral.

Art. 101. Inc. 1o. — Contra el que faltare en daño de su adversario a las condiciones ajustadas para el desafío y que causare lesiones a su adversario.

Art. 106. Inc. 2o. — Contra el que abandonare un menor de diez años o a una persona enferma que deba mantener o cuidar si ocurre la muerte.

Art. 125. — Contra el autor de corrupción y ultrajes al pudor si la víctima fuere mayor de doce años y menor de diez y ocho.

Art. 127. — Contra el que abusare deshonestamente de persona, concurriendo alguna de las circunstancias del Art. 122 sin que haya acceso carnal.

Art. 146. — Contra el autor de robo: 1o. en despojado y con armas; 2o. en poblado y en banda; 3o. con perforación, fractura de pared, cerco, puerta, ventana de lugar habitado o sus dependencias inmediatas; 4o. con alguna de las circunstancias del Art. 163.

Art. 186. — Contra el autor de incendio, explosión o inundación, si hubiere peligro común para los bienes.

Art. 191. Inc. 3o. — Contra el que emplease cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar, si resultare lesionada alguna persona.

Art. 200. — Contra el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Art. 225. — Contra el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial para la Nación, apartándose de sus instrucciones.

Art. 91. — Aceptamos la pena alternativa. El delito puede ser el resultado de un acto primo, no siendo el agente un ser antisocial. El Juez examinará el estado moral del agente y elegirá como pena la reclusión o la prisión.

Art. 92. — Las circunstancias del artículo 80 hacen odioso el delito, porque revelan la inmoralidad del agente. Las lesiones causadas, habiendo mediado cualquiera de las circunstancias del artículo 80, deben llevar la pena de reclusión, sin dejar la facultad alternativa.

Art. 100, inc. 2o. — Art. 101, inc. 1o. — El delito es el resultado de la inmoralidad, de la deslealtad del autor. Pena de reclusión.

Art. 106, inciso 3o. — El delito puede haberse cometido en circunstancias muy afligentes. El Juez apreciará el caso y designará una u otra pena.

Art. 125, inciso 2o. Art. 127. — Son delitos que acusan gran inmoralidad. Pena de reclusión solamente.

Art. 146. — Admitimos la pena paralela — pero pensamos que la pena es muy severa, así como la del artículo 147. — reduciríamos el minimum.

Art. 167. — "Robo." — Este delito, en las condiciones de que trata el artículo, está penado por el Código con mucha severidad: penitenciaría de 6 a 10 años. El proyecto de 1906 lo reprime con prisión de 3 a 10 años.

Código holandés. Art. 312. — Con prisión no mayor de 12 años. Código alemán. — Art. 250. — Casa o fuerza, no menor de cinco años.

Art. 106, inciso 2o. — Si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud del menor incapaz.

Admitimos la pena paralela.

XXII

RECLUSIÓN O PRISIÓN DE 1 A 6 AÑOS

Art. 222. — Contra el que revelare secretos políticos o militares, concernientes a la seguridad, medios de defensa o relaciones exteriores de la República y contra el que obtuviere la revelación de secretos.

Art. 237. — Contra el funcionario público y el director o administrador de un Banco o compañía que fabricare, emitiera o autorizare la fabricación o emisión de moneda con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos o cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.

Art. 238. — Contra el que fabricare sellos oficiales, papel sellado, sellos de correos o telégrafos u otra clase de efectos timbrados, cuya emisión pertenezca a la autoridad o tenga por objeto cobrar impuestos.

Art. 232. — Confección de documento falso, adulteración de uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, si se trata de documentos públicos.

Art. 293. — El que hiciere insertar o insertare en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que debe probar el instrumento, de modo que pueda resultar perjuicio.

Art. 90. — Lesión que produjere debilitación permanente de la salud, de un sentido, órgano, miembro o una dificultad permanente de la palabra o si ha puesto en peligro la vida, o hubiere causado inutilización del trabajo por más de un mes, o hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Todos los delitos de que tratan los artículos anteriores, menos el de lesiones del artículo 90, deberían ser castigados solamente con reclusión, aumentando el minimum.

Para el caso de lesiones puede dejarse la pena alternativa desde un año a seis años.

XXIII

RECLUSIÓN O PRISIÓN DE 1 A 5 AÑOS

Art. 233. — Contra el que cercenare o altere moneda de curso legal y contra el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada.

La pena que castiga este delito, por el artículo 2o, ley número 3972, es de presidio de tres a seis años y multa de pesos quinientos a pesos mil.

Debe aumentarse el minimum y fijarse sólo la pena de reclusión.

XXIV

RECLUSIÓN O PRISIÓN DE 1 MES A 5 AÑOS

Art. 210. — Contra el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas, destinada

cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

Estas asociaciones, por el hecho solo de existir, son un peligro social e infunden gran temor a la sociedad. Me parece que el minimum de un mes es demasiado bajo. La pena no debe ser alternativa. Reclusión de uno a cinco años.

A demás la pena de "reclusión" que es reformadora y de intimidación, no debe ser inferior a un año, para que se encuentre en condiciones de llenar su fin. Por esta razón, que es fundamental, aumentamos a un año de reclusión la pena de la primera parte del artículo 92.

XXV

RECLUSIÓN DE 1 A 4 Y HASTA 6 AÑOS

Art. 85, inciso 2o. — Aborto, con asentimiento de la mujer. Se elevará a seis años, si el aborto fuere seguido de la muerte de la mujer.

Admitimos la pena alternativa. El delito puede resultar de un propósito que no sea deshonesto.

XXVI

RECLUSIÓN O PRISIÓN DE 1 A 4 AÑOS

Art. 95. — Lesiones causadas en riña.

Art. 103. — Muerte en duelo, contra los padrinos que concertaren duelo a muerte o en condiciones que de ellos debiera resultar la muerte.

Puede admitirse la pena alternativa.

XXVII

RECLUSIÓN O PRISIÓN DE 6 MESES A 2 AÑOS

Art. 92. — Contra el que causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, que esté previsto en el artículo 89, siempre que concurriere alguna de las circunstancias del artículo 80.

Si la naturaleza de las lesiones no reclaman sino la pena de prisión, en razón de ser leves, — téngase presente que esas lesiones, desde el punto de vista de la intención del agente, — son, en realidad, graves, pues se han conservado con los caracteres odiosos que enumera el artículo 80. Por esto corresponde imponer pena de reclusión.

De conformidad con las observaciones que hemos hecho al ocuparnos de los delitos penados con reclusión o prisión de tres a diez años y de tres a quince, el artículo 92 quedaría redactado en la siguiente forma:

Art. . . . Si concurriese alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: — en el caso del artículo 89, de uno a dos años de reclusión; en el caso del artículo 90, de tres a diez años de reclusión, y en el caso del artículo 91, de tres a quince años de la misma pena.

XXVIII

PENAL DE PRISIÓN

La pena de prisión, según su gravedad determinada por su duración, se distribuye en el proyecto en la forma siguiente: De cuatro a doce años, de tres a diez años, de dos a seis años; de uno o seis, a cinco, a cuatro, a tres años; de un mes a cinco, de un mes a cinco, a cuatro años; de seis

meses a cuatro años; de tres meses a cuatro años; de un mes a cuatro años; de un mes a un año; de quince días a un año; de quince días a seis meses; de cuatro días a cuatro meses; de quince días a tres meses; de quince días a un mes.

Ocupándose el Código Penal de delitos, propiamente tales, por cuanto las infracciones de policía y municipales, las faltas, corresponden a la jurisdicción provincial, encontramos que, hacer descender el límite de la represión hasta quince días importa asignar un límite muy bajo a la penalidad de los delitos. Por eso establecemos que la pena mínima de los delitos debe ser de un mes.

SECCION SEGUNDA

1.º Esta sección la destinamos especialmente formular algunas observaciones de forma y de . . . sobre algunos artículos en particular, del libro II del proyecto, completando de esa manera los que hemos aducido anteriormente. Nos complacemos en manifestar que una gran parte de dichas observaciones han sido ya presentadas por los funcionarios del orden judicial, que con ilustración y patriotismo han intervenido en la encuesta llevada a cabo por el señor diputado Rodolfo Moreno (hijo) y la comisión especial.

2.º Art. 81, inciso 2.º — Al cónyuge, al ascendiente o al hermano . . . o al "cómplice".

En lugar de la palabra cómplice, de uso común, empleé el término "codeincente", que es la voz jurídica y la que se emplea en el artículo 18.

3.º Art. 93. — "Si concurriese la circunstancia enunciada en el inciso 1.º del artículo 81, la pena será: en el caso del artículo 89, de quince a seis meses; en el caso del artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años".

El artículo 93 trata de la pena que debe aplicarse al autor de lesiones, cuando hubo provocación por parte de la víctima, por medio de ofensas o injurias ilícitas y graves.

Además de esta circunstancia atenuante, del artículo 93, debe también hacer mérito de la circunstancia del inciso 3o. del artículo 81: de manera que el artículo 93 podría quedar redactado en la siguiente forma:

Art. . . . — Si concurriese alguna de las circunstancias enunciadas en los incisos 1.º y 3.º del artículo 89, de un mes a seis meses de prisión; en caso del artículo 90, de seis meses a tres años de prisión; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años de la misma pena, pudiendo los jueces, cuando concurra la atenuante del inciso 3.º, artículo 81, eximir de pena, según las circunstancias particulares del hecho.

4o. — Art. 26. — "Aunque hubiere consentido la víctima" — dice el artículo final. — Suprimase — es contradictorio afirmar que la víctima ha consentido cuando se ha empleado contra ella violencia, amenaza, engaño.

5o. — La ley de reformas No. 4189, suprimió del Código Penal los artículos 163 a 172, que legislaban sobre las amenazas y coacciones. El proyecto actual no contiene ninguna disposición que reprima

las simples amenazas de causar a otro un mal que constituya delito. Corresponde que se legisle sobre ese punto, a cuyo efecto proponemos el siguiente artículo, que iría después del artículo 149 del proyecto:

Art.... La simple amenaza de causar a otro o a un miembro de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituya delito, será castigada con prisión de uno a seis meses.

6o. — "Hurto". — "Robo". — Art. 163 y 164. — Impondríamos la pena alternativa: reclusión o prisión, pues el artículo 163 trata del hurto calificado y el artículo 164 del robo, que son delitos graves, reprimido severamente en razón de los medios empleados para ejecutarlos. Sus autores son seres peligrosos, que en la mayor parte de los casos procede someterlos al régimen de reforma de los establecimientos de reclusión. Téngase presente que la gravedad del delito no se funda precisamente en la cuantía del daño material causado, sino en la alarma social que produce, en virtud de los medios empleados para consumarlo y en las circunstancias que acompañan su realización.

7o. — Art. 166. — Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años: 1o. Si por las violencias ejercidas para consumir el robo se pusiese en peligro de muerte a una persona o se alterase permanentemente su salud.

El artículo 90 impone la pena de reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión causada produjere una debilitación permanente de la salud o se hubiese puesto en peligro la vida del ofendido. Estos dos casos son los que únicamente prevé el artículo 166, inciso 1.º; y como no se pueden aplicar penas por analogía, resultaría que los demás casos de lesiones que enumera el artículo 90 y aun los más graves del artículo 91, quedarían excluidos de la penalidad del artículo 166, sin que haya motivo alguno para ello. En esta situación legal, no habría una pena especial para el robo consumado con las violencias que han dado por resultado las lesiones de los artículos 90 y 91, no comprendidos en el inciso 1.º del artículo 166, y habría, entonces, que aplicar solamente la pena de los artículos 90 y 91, no obstante haberse cometido las lesiones para consumir el robo. Para evitar esa falta de lógica, que importa una injusticia, habría que seguir lo que aconseja el doctor González Roura, redactando el inciso 1.º del artículo 166, en la siguiente forma:

1.º Si por la violencia ejercida para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91.

8.º — Art. 167, inciso 3.º. — Intercalar "techo o piso" entre las palabras "cerco o puerta". — Doctor González Roura.

9.º — Art. 168. — Agregar al fin: o por los mismos medios le obligue a suscribir o destruir documentos de obligación.

10. — Art. 183. — Intercalar entre las palabras "ajeno y siempre", las siguientes: "o un inmueble hipotecado en perjuicio del acreedor".

11. — Art. 184. — Después de la palabra "muertos", poner "templos".

Art. 185. — Según el inciso 3.º del presente artículo, están exentos de responsabilidad penal, sin perjuicio de la civil por los hurtos, (agreguese "robo con fuerza en la cosa") defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren "los hermanos y cuñados si vivieren juntos".

"Luego, cuando ellos no viven juntos, los delitos enunciados son pasibles de castigo ordinario. Para este caso propondríamos a continuación del inciso 3.º, el final del artículo 433 del Código Penal Italiano, redactando el agregado en esta forma:

"Cuando los hermanos y cuñados no vivan juntos, se procederá solamente por querrela o denuncia del agraviado y la pena correspondiente podrá disminuirse hasta en una tercera parte".

El final del artículo 185 debe redactarse en esta forma:

Las excepciones establecidas en el presente artículo no son aplicables a los extraños que participan del delito.

Hemos modificado el artículo 303 del proyecto, en el que se fija la fecha cierta desde la cual empezará a regir el Código como ley de la Nación. Nos ha parecido más conducente determinar a ese efecto un plazo a contar desde la promulgación de la ley, vencido el cual el Código empezará a regir como ley nacional. De esa manera, en cualquier época que el Congreso sancione el Código, el decreto del poder ejecutivo fijará el día cierto desde el cual entrará en vigencia.

Al terminar este informe, vuestras comisiones de códigos de Justicia Militar, se complacen en hacer suyas las palabras con que la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados, concluía el que presentó a dicho cuerpo en julio 16 de 1917, diciendo que deseaba que su obra fuese eficiente para el bien del país y para su desenvolvimiento jurídico; y que la honorable cámara le prestara, en el momento oportuno, la atención que merecía una reforma tan reclamada y tan trascendental.

Sala de comisiones, septiembre de 1918.

J. V. González. — E. del Valle Iberlucea.—P. A. Garro.